



Leviatán

REVISTA DE HECHOS E IDEAS

Verano 1988

32

II Epoca

LA POLITICA ECONOMICA ESPAÑOLA

G. de la Dehesa, J. F. Martín Seco, J. Borrell

UN NUEVO
IMPULSO CULTURAL

Salvador Clotas

LAS NEGOCIACIONES
EE.UU. Y ESPAÑA

Gabriel Jackson

EL DERECHO
A LA INFELICIDAD

Ludolfo Paramio

LOS MOVIMIENTOS
DE LOS SESENTA

Cornelius Castoriadis

VEINTE
AÑOS DESPUES

Antonio Santesmases

EL CIELO
EN LLAMAS

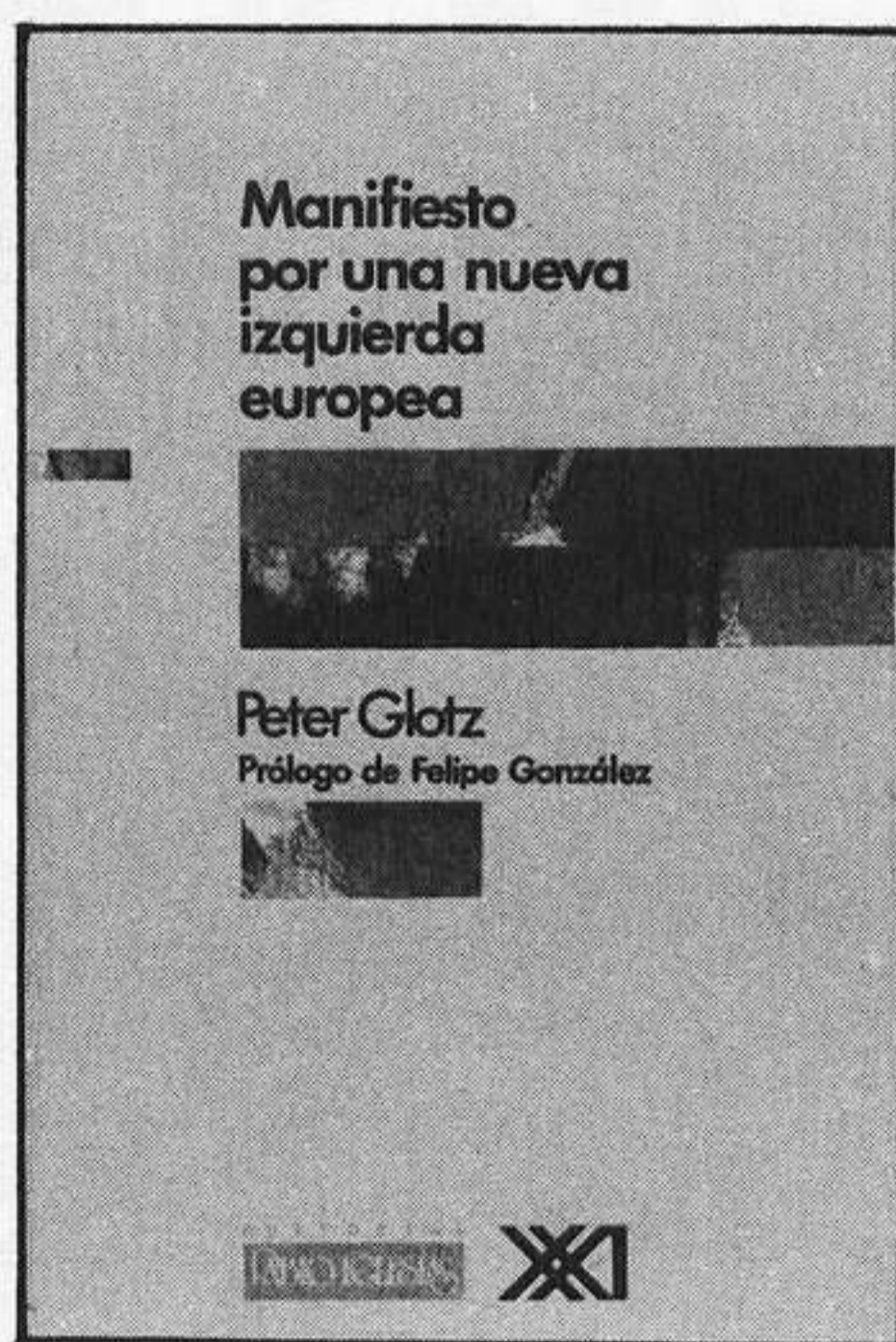
Daniel Cohn-Bendit

E D I T O R I A L

LABIO IGLESIAS



Siglo veintiuno
de España
Editores, sa



MANIFIESTO POR UNA NUEVA IZQUIERDA EUROPEA

Peter Glotz

Prólogo de Felipe González

91 págs.

540 ptas. (IVA)

«Este *Manifiesto* es un folleto publicístico que entronca bien con la vieja tradición de la agitación (de ideas) de la izquierda. No sería tan raro que con la perspectiva de algunos años descubriéramos que el pensamiento progresista, tras largos años de dogmatismo y parálisis, fue capaz de ponerse a la cabeza de la investigación y de las nuevas ideas en los años setenta, precisamente cuando se nos hacía creer que la ideología neoliberal (conservadora a secas, si hemos de ser precisos) estaba enterrando los valores de la izquierda en todo el mundo. Si así fuera, y yo creo que así es, con manifiestos como éste las ideas de progreso podrían comenzar a regresar del limbo de la investigación de vanguardia al mundo de la vida real. Y reconquistar la calle.»

FELIPE GONZALEZ

Pedidos:

**Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
Tels. 410 46 96 y 410 47 98**

**Forma de pago: talón bancario
o giro postal**



Leviatán

Revista de hechos e ideas

ACTUALIDAD

Un nuevo impulso cultural. <i>Salvador Clotas</i>	5
Igualdad y calidad en la reforma de la enseñanza. <i>Lázaro González</i>	13
Las negociaciones bilaterales entre EE.UU. y España. <i>Gabriel Jackson</i>	21
Los límites de la política económica española. <i>Guillermo de la Dehena</i>	27
Comentarios sobre la economía española. <i>Juan Francisco Martín Saco</i>	39
Igualdad, Libertad y Hacienda Pública. <i>José Berrell Fontelles</i>	51

ANÁLISIS Y DEBATE

La libertad, la igualdad y el derecho a la infelicidad. <i>Ludwig Ferrero</i>	71
Los movimientos de los años sesenta. <i>Cornelius Castoriadis</i>	81
Veinte años después. <i>Antonio O. Santamaria</i>	91
El ciclo en llamas. <i>David Lavin-Predá/Adam Michnik</i>	107
La posibilidad democrática en América Latina. <i>Henry Pease García</i>	121
Perú: el rechazo de la modernidad. <i>Alvaro Colman</i>	135

LIBROS

<i>Miguel Portu Ferrán, Víctor Manuel Puga, Álvaro Morán</i> <i>y José García Yruela</i>	157
---	-----

EDITORIAL

CRÍTICA SOCIAL



Solo vendedora
de España
Editorial, sa

Leviatán

Revista de teorías e ideas

MANIFIESTO POR UNA NUEVA IZQUIERDA EUROPEA

Peter Glotz

Prólogo de Felipe González

91 págs.

540 ptas. (IVA)

«Este Manifiesto es un folleto publicístico que entronca bien con la vieja tradición de la agitación (de ideas) de la izquierda. No sería tan raro que con la perspectiva de algunos años descubriéramos que el pensamiento progresista, tras largos años de dogmatismo y parálisis, fue capaz de ponerse a la cabeza de la investigación y de las nuevas ideas en los años sesenta, precisamente cuando se nos hacía creer que la ideología neoliberal (conservadora a veces, si hemos de ser precisos) estaba enterrando los valores de la izquierda en todo el mundo. Si así fuera, y yo creo que así es, con manifiestos como éste las ideas de progreso podrían comenzar a regresar del limbo de la investigación de vanguardia al mundo de la vida real. Y reconquistar la calle.»

FELIPE GONZALEZ

Distribución:
Plaza España, 30, 2.º dcha.
Tel: 410 43 30 y 410 47 30

Forma de pago: tanto bancario
e giro postal

ACTUALIDAD

Un nuevo impulso cultural. Salvador Clotas	5
Igualdad y calidad en la reforma de la enseñanza. Lázaro González	13
Las negociaciones bilaterales entre EE.UU. y España. Gabriel Jackson	21
Los límites de la política económica española. Guillermo de la Dehesa	27
Comentarios sobre la economía española. Juan Francisco Martín Seco	39
Igualdad, libertad y Hacienda Pública. José Borrell Fontelles	51

ANÁLISIS Y DEBATE

La libertad, la igualdad y el derecho a la infelicidad. Ludolfo Paramio	71
Los movimientos de los años sesenta. Cornelius Castoriadis	81
Veinte años después. Antonio G. Santesmases	91
El cielo en llamas. Daniel Cohn-Bendit/Adam Michnik	107
La posibilidad democrática en América Latina. Henry Pease García	121
Perú: el rechazo de la modernidad. Marco Calamai	135

LIBROS

Miguel Porta Perales, Víctor Fuentes Prosper, Reyes Mate, Jesús García Yruela	157
--	-----

Leviatán

REVISTA DE HECHOS E IDEAS

Fundada en 1934 por Luis Araquistain

Director:

Salvador Clotas

Coordinador:

Manuel Ortuño Armas

Comité de Dirección:

Antonio G. Santesmases
Ludolfo Paramio
M. Reyes Mate
Ramón Vargas-Machuca
Julio R. Aramberry
Santiago Roldán
Miguel Satrústegui

Comité Asesor:

Pedro Altares
Joaquín Arango
Carlos Barral
Carlota Bustelo
J. María Castellet
Fernando Claudín
Elías Díaz
M.A. Fernández Ordóñez
X. Rubert de Ventós
F. Fernández Santos
Salvador Giner
Enrique Gomáriz
J.A. González Casanova
E. Haro Tecglen
Francisco Laporta
Marta Mata
J. Martínez Reverte

Secretaria de Redacción:

Mary Carbone

Editada por la Fundación Pablo Iglesias.

Las ideas vertidas en cada artículo son responsabilidad de sus autores. LEVIATAN no se identifica necesariamente con sus contenidos. LEVIATAN no se compromete a devolver los artículos que no hayan sido solicitados, ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

Redacción y Administración: Monte Esquinza, 30.

28010 Madrid. Tel.: 410 46 96.

D. Legal: SE. 466-1978. I.S.S.N.: 0210-6337.

Distribuye: Siglo XXI de España, S.A. - C/. Plaza, 5 - 28043 Madrid.

Realización Gráfica: Carácter, S.A. - C/. Fernández de la Hoz, 60 - 28010 Madrid.

Esta Revista es miembro de ASEI.



ACTUALIDAD

1

UN NUEVO IMPULSO CULTURAL

Salvador CLOTAS

¿Estamos asistiendo al final de una etapa en la vida cultural española? Si se considera que generalmente una etapa se agota no tanto porque se hayan cumplido todos sus objetivos como por la aparición de nuevas demandas que exigen un cambio de planteamientos, parece que así es. Si se considera que una nueva etapa surge también de la necesidad de renovar un discurso que empieza a parecer retórico, podemos afirmar que hoy se dan en España estas circunstancias.

Es casi indiferente que el análisis se haga poniendo el acento en el alto grado de cumplimiento de una política cultural o en los cambios experimentados en la sociedad, porque ambas cosas se han producido en estos años y reclaman un esfuerzo reflexivo y un nuevo impulso en la vida cultural española. Lo que algunos llamarían transición cultural parece haber terminado. Por mi parte, prefiero decirlo de otra manera y, pese a

la ambigüedad semántica del término, referirme a la normalización de nuestra vida cultural. Porque de eso se trataba. Partíamos de una situación que es casi ocioso recordar: censura, exilio, desigualdad absoluta, divorcio entre lo oficial y lo real, escaso nivel de institucionalización, aislamiento... Normalizar nuestra vida cultural significaba en primer lugar devolverle la libertad. Profundizar y desarrollar el marco de libertades imprescindible para

la creación y desarrollo del espíritu crítico de la sociedad y el individuo, generar condiciones de igualdad entre los ciudadanos que según su procedencia y lugar de residencia podían disfrutar de una oferta cultural discreta o carecer en absoluto de ella. Se trataba, así mismo, del pleno reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística españolas y de desarrollar la autonomía en materia de Cultura en toda su plenitud. Había que defenderse del peligro de colonización cultural, realizar un esfuerzo para situar la cultura común de todos los españoles en el lugar que le corresponde. En líneas muy generales, con este Programa acudíamos a las elecciones generales de 1982.

No creo, sinceramente, que se haya logrado todo esto. No creo que ninguno de estos proyectos esté agotado al cien por cien y, probablemente, nunca se agotarán; sin embargo, estoy convencido de que en estos años hemos avanzado culturalmente como en ninguna otra etapa de nuestra historia contemporánea. No sé si son mejores los novelistas, los pintores o los cineastas. La creatividad logró vencer las circunstancias más adversas en la etapa anterior y, por otra parte, está por demostrar que los objetivos que generalmente nos proponemos los políticos produzcan grandes novelas o excelentes obras de arte. Lo cierto es que hay más españoles que leen, que visitan exposiciones, que asisten a representaciones teatrales y también que han aumentado extraordinariamente las posibilidades de creación y difusión.

Estoy convencido de que en estos años hemos avanzado culturalmente como en ninguna otra etapa de nuestra historia contemporánea

Encuestas realizadas por el Ministerio de Cultura sobre el comportamiento cultural de los españoles demuestran que, en paralelo al incremento de la infraestructura y la oferta, se han producido, como es lógico, cambios muy sustanciales en los hábitos culturales de los españoles. Excepto en lo que se refiere al cine, en todas las demás actividades los índices de prácticas culturales se han elevado de un modo significativo.

De 1978 a 1985 el índice de lectura pasó del 36 % al 46 % y sigue aumentando. En el mismo período, las visitas a exposiciones pasaron del 15 al 20 % y la asistencia a conciertos y bibliotecas se incrementó en 2 puntos. Lo que mayor incremento ha experimentado es la asistencia a espectáculos deportivos —del 20 % al 38 %—, lo que no deja de ser una característica de nuestro momento cultural.

Este cambio en el comportamiento cultural de los españoles no se produce únicamente por el incremento de la oferta material. Influye de un modo decisivo una reacción positiva del conjunto de la sociedad, a la que no es ajena la labor formativa desarrollada por los medios de comunicación, nuevas orientaciones educativas e, incluso, el estímulo provocado por el creciente protagonismo español en el terreno de la Cultura.

Los objetivos culturales que nos habíamos propuesto los socialistas han alcanzado, pues, un respetable nivel de cumplimiento. El desarrollo constitucional permite que la vida de los españoles se desenvuelva con los mismos niveles de libertad y aún superiores que los de cualquier sociedad avanzada europea y en un contexto que se caracteriza, cada día más, por su carácter abierto y tolerante. Existía una tarea urgente. En el mundo de la Cultura, como en tantos otros, la aparente normalidad del final del franquismo no podía ocultar situaciones personales terri-

blemente perjudicadas por la represión y el desprecio del régimen hacia lo cultural. Muchos artistas, intelectuales y escritores sufrieron daños morales y materiales que resultaba muy difícil reparar. Había que intentar ese esfuerzo. El gobierno socialista lo ha intentado, ha actuado con generosidad en la ayuda y en el acercamiento del mundo cultural al político. Que la primera vez que el ministro de Cultura socialista saliera de su despacho fuera para rendir homenaje a Vicente Aleixandre tenía ese sentido. Quizá en algunas ocasiones esa voluntad de la administración socialista de reparar intereses perjudicados moral o materialmente se ha prestado a malentendidos, a una injusta acusación de *pesebrismo*. A veces, todo hay que decirlo, las mismas personas que se han beneficiado legítimamente de esa política, han lanzado después acusaciones contra ella. Es posible que se hayan cometido errores —es difícil evitarlos— o se haya pecado a veces de ingenuidad, pero en la mayoría de los casos esa política ha servido para lo que pretendía: hacer justicia.

Otro elemento de normalidad lo ha constituido la elaboración de grandes leyes que por sí solas caracterizan una situación cultural: la Ley de Patrimonio Histórico Español (1985) y la Ley de Propiedad Intelectual (1987) que venían a sustituir leyes centenarias o completamente obsoletas. La amplitud dada a los derechos de autor, al reconocimiento del derecho moral, la extensión de los derechos a intérpretes y traductores, hacen de la norma española un modelo para las legislaciones europeas. Esa opinión la he recogido personalmente en distintos foros europeos y de una manera especial en el mundo audiovisual europeo, donde la ley española se reconoce como un ejemplo a seguir.

Sin embargo, donde reside el mayor cambio en la vida de los españoles es en la descentralización política y adminis-

trativa. Hoy la mayor parte de la política cultural que afecta a los españoles se decide en las Comunidades Autónomas y los Municipios. Seguramente el sistema adolece aún de muchas imperfecciones. No existe un diseño acabado y consensuado de cuál debería ser el papel de la Administración Central en materia de Cultura. Se producen solapamientos inútiles entre las Administraciones, lo que redundará en perjuicio y confusión de los ciudadanos. Pero el paso que se ha dado es histórico y procuraré no volver a emplear este adjetivo, sobre todo, no usarlo en vano. El incremento y conservación de nuestro Patrimonio, la presencia cultural en el exterior, han dado también pasos importantes. Aunque nuestro sector exterior precisa una profunda reforma, nadie que haya traspasado nuestras fronteras podrá negar que la presencia española y el interés que despierta ha crecido muchos enteros.

¿Hay motivos para el triunfalismo? Personalmente, siento más insatisfacción por lo que no se ha logrado, por los miles y miles de ciudadanos que aún tienen un difícil acceso a la vida cultural, que satisfacción por lo realizado, aún siendo esto mucho. Pero forzoso será reconocer, como lo hacen la mayoría de los encuestados en los sondeos, que es precisamente en el terreno de la Cultura donde el cambio experimentado es más importante y perceptible.

En la obra *Diez años en la vida de los españoles* (1) afirma Javier Tusell: «Lo que

Los objetivos culturales que nos habíamos propuesto los socialistas han alcanzado un respetable nivel de cumplimiento

No existe un diseño acabado y consensuado de cuál debería ser el papel de la Administración Central en materia de Cultura

sin embargo no puede ponerse en duda es un acontecimiento decisivo en la Historia contemporánea española que, por denominarlo de alguna manera, se podría definir como socialización de la Cultura. Tan evidente ésta se manifiesta que cualquier espectador de la vida española, sea nacional o extranjero, no duda en considerarlo como un rasgo evidente de la realidad actual. Son además muchos los datos objetivos y cuantificables que es posible aducir en abono de esta afirmación. Si tomamos, por ejemplo, las exposiciones celebradas en los últimos años, las cifras resultan verdaderamente impresionantes: unas trescientas mil personas asisten a la exposición de Picasso y medio millón a la de Dalí. Pero, aparte de estos autores contemporáneos, nada menos que trescientas mil personas acudieron a la exposición de los Iberos. El Museo del Prado ha multiplicado por dos el número de visitantes, al Arqueológico lo ha hecho por cinco y el de Arte Contemporáneo, por diez. Al comenzar la década se publicaban 24.000 títulos en España y en la actualidad se publican 31.000».

La cita es larga, pero me permite ahorrarme un párrafo, ya que me resultaría difícil ser más explícito. ¿Se trata de un milagro cultural? Más bien pienso que simplemente nuestra vida cultural se ha normalizado. En una frase algo oscura, Manuel Vázquez Montalbán emplea el mismo calificativo: «Desde la llegada de la democracia, es en el terreno de la recu-

peración de un patrimonio cultural de izquierdas o simplemente crítico donde se han obtenido mejores resultados. Y en cierto modo, esta recuperación del patrimonio cultural se ha normalizado» (2).

En el discurso inaugural de Arco 88, del que volveré a ocuparme, Alfonso Guerra manifestaba también que: «el desarrollo de la actividad cultural, el incremento de la infraestructura y el aumento casi espectacular de usuarios y espectadores han producido lo que podríamos llamar la normalización cultural de nuestro país». A continuación, hacía algunas afirmaciones que, por su trascendencia, me sorprende que pasaran relativamente desapercibidas: «... hemos de evitar la tentación de la comodidad en lo adquirido o la continuidad como proyecto de futuro. Hay que dar un nuevo impulso a la vida cultural española. No me cuesta afirmar que ello nos obligará, sin duda, a cambiar algunos aspectos de nuestra política cultural, a variar a veces el sentido de nuestro esfuerzo, a redoblarlo...». Estas afirmaciones me parecen realmente importantes y oportunas.

Se trataría, a mi entender, de considerar culminada una etapa, con sus logros e insuficiencias, analizar unas y otras y dar un nuevo impulso a un proyecto cultural redefinido en diálogo con los sectores interesados. Hay que insistir en la importancia de este diálogo, que debe tener un carácter lo más amplio posible para que se produzca realmente la incorporación de nuevas voces y nuevas actitudes. El camino abierto por el *Programa 2.000* del PSOE debe aprovecharse en ese sentido.

Me atreveré a avanzar algunas opiniones respecto a ese nuevo discurso que hoy creo necesario para la Cultura en España, sin ánimo alguno de agotar los temas, apuntando algunas direcciones en las que me parece más necesaria una reflexión

colectiva que haga posible ese nuevo impulso en la vida cultural española.

Coordinar las distintas administraciones

Quisiera situar la primera reflexión en el terreno de la coordinación y la colaboración entre las distintas Administraciones, no sólo porque resolver el problema de la intercomunicación entre las distintas culturas es un mandato constitucional, sino también porque el intercambio, el trabajo en común, es más rentable para el ciudadano que las denuncias al Tribunal Constitucional respecto a las competencias. Pienso que el objetivo que sigue siendo primordial para los socialistas, «*asegurar la igualdad cultural*», está íntimamente ligado a un mejor funcionamiento de las distintas Administraciones. Es necesario definir con precisión las competencias del Estado en materia de Cultura, dejando bien claro que para nada le interesa al Estado llevar a cabo actividades que corresponden más a otros ámbitos de la Administración. La protección del Patrimonio contra el expolio, la política exterior en materia de Cultura, apoyar y tutelar las grandes instituciones y asegurar la igualdad y la comunicación de todos los españoles ante el hecho cultural, son tareas que constitucional y funcionalmente corresponden a la Administración Central del Estado. Sin embargo, nada impide que se desarrollen en colaboración con el resto de las Administraciones, estableciendo sistemas de intercambio, circuitos culturales, redes de servicios, etc. No es lógico que se practiquen en España diecisiete políticas culturales, desconectadas entre sí, con la ambición de competir entre ellas y alcanzar reconocimiento internacional, como tampoco lo es que, en un Estado autonómico, continuara siendo Madrid sede de todas las nuevas instituciones culturales del Estado. Las grandes instituciones comunes a todos, la consolidación de los festivales y manifestaciones

No es lógico que se practiquen en España diecisiete políticas culturales con la ambición de competir entre ellas y alcanzar reconocimiento internacional

culturales realmente internacionales, la fuerza de nuestra proyección al exterior, reclaman una forma de actuar más coordinada entre las Administraciones. Los ejemplos son incontables: ¿Cuántos festivales de cine tenemos capacidad de desarrollar en condiciones? Teniendo en cuenta los especializados y locales, hoy existen en España 83 festivales, la mayoría con más o menos clara ambición de alcanzar o consolidar un rango internacional. De hecho, 35 llevan este calificativo en su denominación y otros aspirarían a llevarlo. ¿No sería más razonable y barato concentrarse en algunos, decididos entre todos, y gastar algún dinero en billetes de avión? No niego el derecho y la capacidad de las Comunidades Autónomas y los Municipios a desarrollar sus propios festivales, pero es evidente que hay que simplificar, relacionar y potenciar algunos en concreto si queremos obtener mayor eficacia. Si fijamos la atención en las publicaciones emanadas de las distintas Administraciones, forzoso será reconocer que existe un exceso que sólo la falta de coordinación y racionalización puede justificar.

En otro orden de cosas, es frecuente oír la queja de artistas y creadores en general que se sienten excesivamente constreñidos en unos ámbitos geográficos muy limitados. Un conocido y gran cantautor me decía una frase significativa en este sentido: «Yo antes podía cantar en Coruña y Tarifa, en Barcelona y Sevilla; ahora me resulta difícil salir de las fronteras de

Es necesario afirmar la primacía de lo creativo e introducir una mayor dosis de imaginación en las políticas culturales

un par de Comunidades Autónomas...». Este fenómeno no es una consecuencia del Estado de las Autonomías sino, simplemente, de un funcionamiento inadecuado que perfectamente podría subsanarse. Es necesario encontrar las vías de racionalización de este comportamiento en el más estricto respeto de los derechos y competencias que asisten a cada uno. Fomentar el diálogo y la cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas, tal como afirman las resoluciones del 31.º Congreso del PSOE, parece el camino más adecuado.

Capítulo aparte merece el apoyo a la difusión de la lengua española que debe constituir un elemento sustancial de ese nuevo impulso cultural, dejando de lado las timideces y reparos que a nadie sirven. No llevar a cabo una política ambiciosa y decidida respecto a la lengua española es hacer dejación de algo cuyas consecuencias pueden ser muy graves. Pensar que una tal política está en contradicción con otras políticas de apoyo y normalización de otras lenguas peninsulares sólo puede ser muestra de incapacidad o mala fe.

Aspecto fundamental de la política cultural hacia el exterior es también el que se refiere a la promoción de nuestros artistas y escritores. Hoy es posible llevar a cabo esa acción, siempre que se realice con criterios amplios y de futuro, contradictorios, desde luego, con una política que reduzca a unos pocos hombres el objeto de esa

promoción. Sólo una correcta colaboración con la iniciativa privada, asociaciones profesionales, etc., permitirá el éxito de este tipo de acciones.

Política cultural europea

El 31 de diciembre de 1992 la unidad europea dará un paso decisivo con la implantación del mercado único. Si deseamos que eso sea algo más que una zona de libre cambio, habrá que desarrollar nuevas políticas que se añadan a las que hoy monopolizan la actividad comunitaria: la pesca, la agricultura, el transporte, la moneda, etc. Entre esas nuevas políticas, hay que reclamar con fuerza el desarrollo de la que hoy es la más enana de todas, la política cultural europea. El papel de España puede ser decisivo y habrá que esperar a trabajar desde la ya muy próxima presidencia española de la Comunidad. No reclamo, como algunos más optimistas lo han hecho, el papel de motor europeo, pero es obvio que España tiene ya un protagonismo, o empieza a tenerlo, como justamente precisa Juan Cueto en un reciente artículo, en la construcción cultural de Europa y puede incrementarlo, potenciando a la vez un carácter de puente hacia otros continentes, especialmente hacia Iberoamérica.

La segunda reflexión debería dirigirse, por tanto, hacia la política exterior en materia de Cultura. España puede ocupar un lugar privilegiado en el mundo si aceptamos un reto que nos obligará, eso sí, a un cambio cualitativo en nuestra política exterior, a la reforma de un servicio que hoy funciona con escasa coordinación entre los distintos departamentos y sin un modelo claro de institución en el exterior, con la proliferación de Institutos, Casas, Colegios, poco atendidos. El incremento presupuestario, el decidido apoyo a la industria editorial, que necesita sobre todo esa coordinación departamental, y a las

otras industrias culturales y la participación en los grandes proyectos tecnológicos por donde pasará, sin duda, la hegemonía cultural del futuro, completarán una política realmente ambiciosa destinada a potenciar nuestro papel en el contexto internacional.

Incorporar a los jóvenes a la vida cultural

Finalmente, es necesario afirmar la primacía de lo creativo o, para expresarlo de otro modo, hay que introducir una mayor dosis de imaginación en las políticas culturales. En este sentido, es necesario vencer la absoluta prepotencia de las tendencias estilísticas e industriales y empezar a plantear de otro modo la relación entre los procesos creativos y el entorno social, o la incorporación de los jóvenes a la vida cultural, lo que nos permitirá a su vez abrir un panorama que hoy aparece algo entornado. Muchas voces jóvenes reclaman este cambio de orientación que Alfonso Guerra recogía en su citado discurso, con otras palabras, cuando se refería a «la aportación que pueden y deben hacer a la Cultura aquellas personas que están trabajando muchas veces en la incompreensión, la falta de interlocución y de medios o en la imposibilidad de expresarse de un modo distinto, a lo que tienen derecho».

¿Quiere esto decir que las Administraciones se han vuelto impermeables a ciertas actitudes innovadoras o emergentes? De alguna manera hay que reconocer que, en parte, sí. Es posible que entre las causas haya que contemplar la de un factor biológico, un cierto problema generacional que viene a sumarse a las dificultades que experimentan las nuevas formas expresivas para hacerse oír. «De casi todo hace veinte años», dice Jaime Gil de Biedma. Quizá diez años es ya un tiempo suficiente para plantearse la necesidad de abrir espacios que puedan ser ocupados por gente más joven. No se trata, desde luego,

de que no falte el escritor joven. No se trata de lo que algunos llamarían, con todos los respetos, «el síndrome Barceló». Más bien se trataría de un cambio de sensibilidad que debe producirse en todos aquellos que, desde la Administración o la sociedad, pueden incidir en la vida cultural. Cambios en la orientación, medidas concretas. En este sentido, es urgente abrir nuevos espacios. También espacios físicos. Me lo han comentado muchos artistas jóvenes y grupos que aspiran a hacer teatro o, simplemente, a aprender: no existen espacios para que los artistas puedan empezar a exponer al margen de los circuitos comerciales, como tampoco existe una red de espacios donde puedan trabajar los grupos que no tienen acceso al circuito de los grandes teatros, por cierto enriquecido con un buen programa de restauración. No son más que dos ejemplos concretos que un diálogo serio con grupos y jóvenes creadores debe enriquecer y precisar.

Sin duda habría que referirse a otros temas que requieren también un esfuerzo de reflexión y, desde luego, no habría que olvidar la política museística, cinematográfica, teatral y musical, debiéndose enfatizar también la necesidad de reformar y potenciar las enseñanzas artísticas. Pero este artículo no pretende agotar los temas ni plantear una nueva política cultural, sino más bien defender la oportunidad de introducir algunas modificaciones y dar un nuevo impulso para que realmente se inicie una nueva etapa.

Quizá diez años es ya un tiempo suficiente para plantearse la necesidad de abrir espacios que puedan ser ocupados por gente más joven

LETRA

INTERNACIONAL

NUMERO 9 (PRIMAVERA 1988)

Jürgen Habermas: Conciencia histórica e identidad postradicional.

Camilo José Cela: Pensamiento, literatura y libertad.

Gyorgy Konrad: Cartas privadas sobre la censura.

Lars Gustafsson: Observaciones sobre literatura y política.

Irwing Howe: Novela y política.

Ivete Byro: La ironía: nueva mirada.

I. F. Stone: Hogueras en la Antigua Atenas.

José M.ª Pérez Gay: Joseph Roth: Los restos del desastre.

Daniel Cohn Bendit/Adam Michnik: El cielo en llamas.

Miguel Cereceda: Masculino/femenino: el enigma de la Reina Alférez.

Roy Medvedev: La vida cultural en la Unión Soviética.

Ricardo San Vicente: Brodski, un nobel a la poesía rusa.

Juan Benet: La estrategia militar en la Guerra Civil.

Suscripción anual: 1.600 ptas.

Forma de pago: Talón bancario o giro postal.

Redacción y Administración: Monte Esquinza, 30, 2.º 28010 Madrid



IGUALDAD Y CALIDAD EN LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA

Lázaro GONZALEZ

Los trabajadores españoles han sufrido durante muchos años una situación de desventaja educativa frente a las clases acomodadas. Quienes tenían dinero podían escoger una escuela de calidad para sus hijos que luego les permitía acceder a una universidad semigratuita. Quienes no lo tenían habían de ir a una escuela pública abandonada por el Estado, que dejaban en su mayoría al terminar los estudios primarios, en muchos casos con un fuerte sentimiento de fracaso. Sólo un pequeño porcentaje de los hijos de los trabajadores llegaba a las puertas de la Universidad.

Por si esto fuera poco, quienes tenían el poder y la influencia se empeñaban en concebir los centros de enseñanza más como lugares de adoctrinamiento en la ideología establecida, que como espacios de apertura al conocimiento del mundo que les rodeaba y al pensamiento científico. A las fuerzas conserva-

doras que controlaban la escuela les interesaba más garantizar la transmisión de sus creencias y valores que acabar con el analfabetismo.

Las primeras luchas en favor de la democracia lo fueron también en favor de una escuela para todos, pluralista y de cali-

Las primeras luchas en favor de la democracia lo fueron también en favor de una escuela para todos.

dad. Los que defendían una enseñanza democrática, una libertad de cátedra o una universidad no elitista tenían a su favor el sentido de la historia, pero se enfrentaban a muros sólidamente contruidos durante muchas generaciones.

Hoy todas estas cosas pueden parecer escenas del pasado, no tanto porque hayan dejado de existir completamente, sino porque la fuerza de la razón y la dinámica de la vida democrática ha obligado a hacer transformismos a los que antes defendían situaciones de privilegio. Y esto porque la realidad ha cambiado de forma radical en pocos años a partir de la Constitución y de manera especial en los cinco últimos, con la puesta en marcha del proyecto socialista de reforma de la enseñanza. No hay que tener ningún pudor en reivindicar estos cambios. Quienes los quieren deslegitimar saben que son reales y que han entrado en una fase que la misma dinámica de la historia los hace irreversibles.

Los que hoy atacan de forma más airada la política educativa del Gobierno, y personalizan los ataques en el ministro de Educación, saben lo que hacen. No importa que hoy lo hagan en nombre de valores en que aparentemente defienden y antes no creían. La derecha sabe que hoy vende más invocar reformas imposibles que añorar el pasado. Por ello sería ingenuo no descubrir los intereses que hay en juego tras esa estrategia de desprestigio hacia las personas que encarnan las reformas. Sería

también un despropósito perder la perspectiva de lo que se viene haciendo ante la aparición de algunos conflictos puntuales. Lo que no quiere decir que no hayamos de analizar de forma crítica el proceso de las reformas, el cumplimiento de sus plazos y las estrategias de futuro. Esto es justamente lo que me gustaría hacer en lo que sigue.

Las batallas en favor de la igualdad educativa

Cuando los socialistas asumieron la gestión del Ministerio de Educación y Ciencia a finales de 1982, la principal prioridad de su programa de trabajo era garantizar el derecho constitucional a la educación a todos, sin discriminación. Existían raíces profundas de la desigualdad educativa que exigían medidas urgentes para conseguirla.

Hacia varios cursos que las estadísticas oficiales decían que toda la población estaba escolarizada de 6 a 13 años en EGB; pero el 34 % de los alumnos, la mayoría de familias humildes, no obtenían el título de graduado escolar, con lo que esto suponía de cierre en su horizonte futuro de estudios. Unos 150.000 alumnos no hacían educación preescolar e iniciaban ya tan temprano, en la mayoría de los casos, el largo camino de la selectividad social. Más de un millón de puestos escolares estaba en malas condiciones, porque para llegar al 100 % de la escolarización en EGB había sido necesario instalarlos en muchos edificios inaceptables para usos educativos. Más de 300.000 jóvenes de 14 y 15 años desescolarizados, con los riesgos sociales que esta situación implica al no tener la edad mínima laboral. Sólo el 16 % de los universitarios pertenecían a clases sociales modestas. Más de diez millones de adultos no utilizaban la lengua escrita como vehículo de comunicación, o en otras palabras, podían considerarse analfabetos

funcionales, limitación básica para el ejercicio de la ciudadanía activa en una democracia avanzada. Cuatro de cada cinco becas de estudios beneficiaban a familias acomodadas.

Son datos suficientes para ilustrar la lucha contra la desigualdad educativa. Era una prioridad que había que emprender con acciones urgentes, pero también con una perspectiva a largo plazo, pues las diferencias eran profundas y fuertemente relacionadas con una matriz más amplia de desigualdad.

Entre las medidas urgentes que se emprendieron estaba la de crear puestos escolares públicos en todos los niveles educativos. Más de 1.500.000 de puestos escolares han sido creados en nuestro país en los primeros cinco años de gobierno socialista. Hay que decir que tanto el Ministerio de Educación y Ciencia como las Comunidades Autónomas han puesto gran empeño en la tarea. Esto ha permitido mejorar muchas instalaciones educativas impresentables y aumentar el número de estudiantes de enseñanzas medias y universidad de forma espectacular. Los créditos para becas se han incrementado en un 600 %, variando previamente el sistema de concesión y persiguiendo el fraude, para que beneficien a quienes tienen que beneficiar. Se han puesto en marcha asimismo programas de educación compensatoria, que tienen un cierto carácter de emergencia, destinados a dar más a aquellos colectivos que sufren más agudamente las consecuencias de la desigualdad: las escuelas de zonas rurales dispersas, los gitanos y otras minorías étnicas, los jóvenes desescolarizados de 14 y 15 años y los analfabetos adultos.

Era necesario sobre todo cambiar el marco legal que había posibilitado esta situación secular de discriminación. De poco servía que el art. 27 de la Constitución reconociera el derecho a la educación para

La principal prioridad del programa de trabajo de los socialistas era garantizar el derecho constitucional a la educación para todos.

todos, si no teníamos herramientas jurídicas que impidiesen a los poderes públicos hacer omisión de sus responsabilidades en la garantía de los derechos y libertades educativas. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), promovida por la UCD, garantizaba estas libertades a medias y permitía que los colegios privados que atendían a más de la tercera parte de la población española siguieran manteniéndose con fondos públicos destinados a la gratuidad de la enseñanza sin tener obligaciones con los ciudadanos que no podían pagar, ni compromiso de prestar un servicio educativo sin discriminaciones.

Por ello el Gobierno socialista promovió una nueva legalidad que hiciera verdaderamente constitucional nuestro sistema de enseñanza. A los pocos meses de su mandato presentó el proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en las Cortes. Se trataba de crear un ámbito de ejercicio de libertades en la escuela, de hacer que nuestro sistema educativo fuera gestionado con la participación de los más directamente interesados y, sobre todo, de sentar las bases de la igualdad educativa para el futuro. El Gobierno tenía claro que eran objetivos de gran calado y por tanto a largo plazo. Que la LODE surtiría plenos efectos después de una generación.

Todo el mundo conoce la tempestad que la LODE desencadenó entre los sectores que siempre se habían beneficiado de pri-

***Las desigualdades sólo se
corrigen haciendo una
discriminación positiva en
favor del que sufre
desventajas.***

vilegios: batallas en la prensa, intento de bloqueo del proyecto en el Parlamento desempolvando hasta los métodos más peregrinos como el de proponer miles de enmiendas, basadas muchas de ellas en cambiar comas o letras. Manipulación de los niños y familias en los colegios diciéndoles que los socialistas les iban a quitar las subvenciones. Casi un millón de personas se manifestaron en Madrid, muchas de ellas traídas gratuitamente por empresarios del transporte escolar que temían ser perjudicados por la Ley. Viajes a París para copiar la estrategia exitosa de la derecha francesa para minar al Gobierno socialista...

La «libertad de enseñanza», tan invocada por los conservadores desde hace muchos años, se limitaba a reivindicar libertad del titular de los colegios privados para dirigirlos sin la participación de la comunidad escolar, para imponer un ideario y para seleccionar a los alumnos y al profesorado sin cortapisas.

Las libertades constitucionales estaban, sin embargo, plenamente garantizadas en la LODE según el Tribunal Constitucional. Tras la sentencia la Ley entró en vigor a principio del verano de 1985, y se desarrolló a partir del curso siguiente.

Hoy no podemos sentirnos completamente satisfechos con el hecho de que la batalla legal y política de la igualdad educativa haya sido ganada por los socialistas

y otros sectores progresistas, pues la desigualdad sigue presente. Siguen existiendo profundas desventajas, aunque menores, derivadas de las condiciones sociales. Tenemos más y mejores colegios. Hoy nadie se atrevería sin ruborizarse a atacar la participación en el sistema educativo. En muchas provincias se ha podido garantizar plaza escolar a todos los solicitantes en niveles no obligatorios como el preescolar o las enseñanzas medias. Hoy resultan mucho más difíciles que antes los despidos ideológicos del profesorado.

Pero se mantiene la desigualdad de resultados escolares muy relacionados con la calidad de la escuela y el tipo de apoyos educativos familiares de que uno puede disponer. La escuela pública tiene muchos más medios que antes. Y se ha prestigiado notablemente entre las familias, pero es aún un prestigio quebradizo que ponen en peligro los conflictos o cualquier abandono de las partes que intervienen en ella. El modelo de participación de la LODE necesita ser apoyado todavía durante bastante tiempo, pues la experiencia organizativa de los padres y alumnos es corta y subsisten resistencias importantes en parte del profesorado. La elección democrática del director del centro ha sido una apuesta ambiciosa. Es una figura que necesita, sin embargo, ser potenciada en los centros públicos para que atraiga a los profesores más preparados y luego la puedan ejercer con la plena autoridad que supone contar con la confianza de todos los sectores educativos. Los conciertos educativos han integrado a los centros privados de forma constructiva en la red mixta de centros que prestan el servicio público de educación. La gratuidad del servicio, con todo, aún no es completa en bastantes casos.

Hemos de ser conscientes, por tanto, que con la aprobación y aplicación de la LO-DE se ha abierto un camino y con él se ha avistado un horizonte. Quedan aún bastantes años para alcanzar las metas allí

propuestas. Los socialistas, junto con todas las fuerzas progresistas del país, no sólo debemos estar vigilantes para que no se desande el camino avanzado, sino que hemos de producir constantemente nuevas ideas que hagan socialmente irrenunciable dentro de unos años el principio que hemos defendido como eje de nuestra política educativa: que las desigualdades sólo se corrigen haciendo una discriminación positiva en favor del que sufre desventajas. La pretendida igualdad de oportunidades que consiste en dar a todos lo mismo, se llame financiación de la libertad de elección de centros o bono escolar, favorece únicamente a quienes están bien situados.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) ha completado el marco legislativo capaz de constitucionalizar nuestro sistema educativo. Como ha hecho la LODE en el ámbito de la enseñanza obligatoria y enseñanzas medias, la LRU ha definido la institución universitaria como un servicio público destinado a satisfacer las necesidades educativas, culturales y científicas de nuestra sociedad. Ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para democratizar la vida universitaria, dotando a cada universidad de autonomía y haciendo participar en su gestión al conjunto de la comunidad académica. Ha abierto vías para democratizar la composición social de los ciudadanos que acceden a ella.

Naturalmente esta reforma también ha tenido grandes dificultades, aunque las controversias que ha suscitado no han alcanzado el eco político y social que alcanzaron los de la LODE. En muchas ocasiones han surgido las tentaciones endogámicas de la comunidad académica. Los estamentos corporativos que hicieron imposibles varios proyectos de Ley en los primeros años de la democracia, han vuelto a atacar a la LRU.

Aquellos grupos que se han mostrado

incapaces de colaborar en una autorreforma que acabase con antiguos feudos académicos han sido diligentes a la hora de culpar al Gobierno promotor de la Ley de cualquier decisión endogámica que se producía. Por último, una universidad diseñada para élites sigue teniendo enormes problemas para absorber, con una dimensión redistributiva, la espectacular demanda de estudios universitarios que se ha producido en los últimos años. Desde el curso 1982-83 los estudiantes universitarios han aumentado en un 40 %, crecimiento difícil de asumir en tan corto tiempo sin que se dé una masificación en los centros, incompatible, sin duda, con criterios de calidad.

La primera legislatura socialista se cerró con una tercera gran ley marco: la del Fomento y Coordinación de la Investigación. En España investigar siempre fue llorar o por insuficiencia de recursos humanos y materiales dedicados a la investigación o por la ausencia de los más elementales mecanismos de planificación y coordinación de la misma. En cinco años se ha duplicado el porcentaje dedicado a investigación con relación al PIB, y por primera vez tenemos un Plan Nacional plurianual (1988-1991) que va a coordinar en torno a unos programas prioritarios de investigación científica y desarrollo tecnológico y otras acciones sectoriales, recursos tan impensables hace unos años como 634.000 millones de pesetas en un cuatrienio. No es necesario insistir en la

Los programas de modernización y reforma cualitativa del sistema educativo constituyen la gran prioridad educativa del Gobierno.

trascendencia que el buen aprovechamiento de estos programas puede representar a medio plazo para la economía y el bienestar de nuestro país.

El difícil empeño de la calidad educativa

Las políticas igualitarias en materia educativa suelen implicar esfuerzos cuantitativos importantes: más puestos escolares, más estudiantes, más becas, más dinero para la educación. Todo ello se consigue si hay unas metas redistributivas y una firme voluntad política como la ha habido en estos años. Será necesario mantener el esfuerzo económico creciente aún durante un cierto tiempo, tal vez siete u ocho años, pero al final los resultados estarán a la vista hasta para los enemigos de esta política.

El problema principal que ahora se plantea es la calidad de nuestro sistema educativo. Desde 1982 a 1986 el acento ha sido puesto en lo que era más apremiante: garantizar un marco jurídico y unos compromisos sólidos para el futuro de democratización de la enseñanza y garantía del derecho a la educación.

Se han producido también importantes mejoras cualitativas en la dignificación del profesorado, en los salarios y en la formación. Los centros públicos cuentan con más medios. Se han puesto en marcha numerosos programas experimentales, bien

a nivel curricular, bien en otros muchos aspectos como la integración educativa de los niños con minusvalías, la introducción de nuevas tecnologías en la enseñanza, la creación de servicios de apoyo, la formación profesional en alternancia, etc.

Pero los grandes programas de modernización y reforma cualitativa del sistema educativo están aún iniciándose o en proyecto. Estos programas de reforma constituyen la gran prioridad educativa del Gobierno en la segunda legislatura, como lo fueron los destinados a garantizar el derecho a la educación en la primera. En realidad son la segunda fase de un mismo proyecto global reformador que tiene como meta situar nuestro sistema educativo a la altura de los países europeos avanzados antes de fin de siglo.

El curso 1985-86 ha constituido el punto de arranque de estos proyectos. Dos grandes propuestas de reforma se presentaron a la discusión de todos los sectores sociales implicados: la de la educación infantil, primaria y secundaria, y la de las titulaciones y planes de estudios universitarios. Lo que ambas reformas persiguen fundamentalmente es vincular la educación y la sociedad y adaptar los estudios a los retos que plantea nuestra plena incorporación a Europa. El método elegido, la discusión y el debate previo, también tiene importancia dentro de un sistema que ha apostado por la participación de los sectores interesados.

Los objetivos de estas reformas son de gran trascendencia para el futuro de nuestra sociedad. Se trata ni más ni menos que de afrontar retos tales como éstos:

a) La consecución de una educación infantil de calidad que favorezca la maduración de todos los niños en la etapa anterior a los seis años y haga desaparecer las grandes diferencias de partida actualmente existentes.

El programa de reforma educativa elaborado por el Gobierno socialista era muy ambicioso en un país como el nuestro.

b) La ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años que ofrezca a todos los ciudadanos una formación cultural de base sólida para enfrentar con éxito tanto su pleno desarrollo personal, como su participación en la vida social o en el mundo económico.

c) La vinculación más estrecha entre las enseñanzas secundarias y el mundo laboral; de manera especial a través de una profunda transformación de la actual formación profesional que capacite mejor a nuestros jóvenes para el empleo y contribuya a nuestro desarrollo económico.

d) La actualización de las enseñanzas que se imparten en las universidades españolas, flexibilizándolas y adaptándolas a los requerimientos que plantea un espacio europeo en el que a partir de 1992 va a existir una libertad de movimiento de los trabajadores y también, por tanto, de titulados entre los distintos países miembros.

e) La oferta de formación continua a todos los adultos a lo largo de su vida, bien para facilitar su actualización profesional, bien para aumentar su nivel cultural o su preparación para participar en la vida política o social.

Estos son los grandes objetivos de las reformas que se están sometiendo a debate. Mejorar la calidad de la enseñanza implicará enfrentarse con ellos ineludiblemente a lo largo de una serie de años. La mayoría no se van a desarrollar plenamente antes de 1995 o 1996. El Gobierno únicamente se ha propuesto para esta legislatura ponerlos en marcha, pero necesitarán seguir siendo prioridades para cualquier Gobierno a partir de 1990. Su consecución es difícil y va a necesitar de concurso y la voluntad de muchos sectores sociales, aunque sea el Gobierno socialista el mejor situado para dirigirla.

***Es preciso potenciar
mucho más e implicar en
los cambios a los
movimientos de padres de
alumnos y estudiantes.***

Algunas reflexiones sobre la perspectiva de reforma en el pasado y en el futuro

Conviene tener presente, en primer lugar, que el programa de reforma educativa elaborado por el Gobierno socialista a partir de 1982 era muy ambicioso en un país como el nuestro. Que no se podía conseguir a corto plazo y que ofrecía múltiples flancos y puntos vulnerables. En muchos aspectos la apuesta consistía en pasar en unos años desde concepciones decimonónicas hasta el final del siglo XX, o hacer en pocos cursos lo que otros países vienen desarrollando a partir de final de la segunda guerra mundial.

La derecha política ha utilizado todo tipo de estrategias para desacreditar la reforma: primero oponerse a ella con argumentos del pasado, acudir a la difamación, una vez puestos en marcha incitando a su desobediencia y a la ilegalidad, volviéndose ácrata, e incluso exasperando las demandas en que antes no creía, pidiéndolas todas para aquí y ahora. Basta hacer un repaso de hemeroteca sobre los conflictos estudiantiles del curso pasado y los de profesores de este curso para encontrar abundantes ejemplos.

Para otros grupos políticos de izquierdas las reformas eran insuficientes, por lo que no contaron con un apoyo decidido cuando eran frontalmente atacadas.

También hay que tener en cuenta lo que

pueden significar las tendencias corporativas a la hora de los cambios. Los profesores de la enseñanza pública manifestaron una coincidencia con los preceptos más importantes de la LODE, pero sin embargo dos de cada tres se oponían, según una encuesta del CIDE en 1984, a que el Consejo Escolar asumiera funciones de gobierno de los colegios, que ellos creían que correspondían exclusivamente al claustro de profesores. Cuando han empezado a funcionar los consejos escolares, se ha visto claramente cómo algunos se sentían fiscalizados en su propio trabajo por los padres y los alumnos.

Una vez que haya pasado el tiempo suficiente para analizar con desapasionamiento la huelga de profesores de la escuela pública de este curso, podrá valorarse lo que sentimientos de este tipo pueden estar influyendo en el malestar docente. También otros hechos habrán de ser estudiados en el mismo sentido como la debilidad de los sindicatos progresistas frente a las posturas corporativas. Tal vez, finalmente, se ha infravalorado el peso que tiene una administración insuficientemente renovada a la hora de gestionar innovaciones educativas.

En los próximos años los socialistas tenemos la responsabilidad de mantener las mismas metas de una educación para todos, de calidad, que conecta con las necesidades sociales. Los objetivos de calidad dichos anteriormente necesitan ser mantenidos como prioridad durante dos legislaturas al menos. Esté el partido socialista o no esté en el gobierno, sin él hoy por hoy no pueden ser completados. Necesitará el concurso de todas las fuerzas progresistas, pero la dirección de este proyecto de modernización del sistema educativo habrá de pasar por los socialistas.

Lo que se ha hecho desde el 82 en algunos aspectos ha sido una labor histórica y ha llevado a conquistas que algunos países europeos tardaron mucho tiempo en alcanzar. Pero ha supuesto también un esfuerzo duro y la utopía de mucha gente que no podemos dilapidar, ni debemos permitir que se niegue.

En el futuro tenemos la responsabilidad de combinar utopía con recursos y apoyos sociales. Es fundamental que no perdamos en ningún momento la perspectiva temporal en que se producen los frutos de los cambios educativos.

Resulta imprescindible recuperar a todos los colectivos renovadores para esta tarea. A los sindicatos de enseñanza sin duda, pero no exclusivamente, pues se van a ver obligados a defender intereses concretos del colectivo a que representan, que son legítimos, pero no los únicos. Los profesores que promueven la renovación pedagógica siempre estarán de parte de esta reforma. Es preciso potenciar mucho más e implicar en los cambios a los movimientos de padres de alumnos y estudiantes, pues representan también intereses muy importantes en los centros educativos. Pero sobre todo resulta esencial que el partido socialista haga un esfuerzo constante de comunicación con los ciudadanos sobre lo que intenta hacer en educación. Ello permitirá evitar el acoso de los grupos de intereses que se oponen a las reformas e ilusionar a muchos con lo que se está llevando a cabo.

En algo más de cinco años se ha hecho una labor en educación que podemos considerar de largo alcance social, pero necesitamos mantener el mismo rumbo al menos durante otro tanto tiempo para que lo conseguido se consolide definitivamente.



LAS NEGOCIACIONES BILATERALES ENTRE EE.UU. Y ESPAÑA

Gabriel JACKSON

Cualquier persona que haya leído los periódicos en los últimos seis meses habrá observado las frecuentes referencias a desavenencias y agravios en relación con las negociaciones para la retirada de los aviones de combate F-16 de la base aérea de Torrejón y la renovación de los acuerdos bilaterales entre EE.UU. y España.

Por parte española, la sensación de que los norteamericanos daban por supuesto el consentimiento español, no reconocían las consecuencias de la nueva democracia española, menospreciaban la capacidad de la fuerza aérea española para desempeñar las misiones militares de los F-16 y no reconocían deliberadamente la importancia del referéndum de 1986, en el que el gobierno había pro-

metido una reducción sustancial de la presencia militar estadounidense en España como una de las diversas condiciones de la permanencia en la OTAN. Por parte norteamericana, las expresiones procedentes de numerosos periódicos, congresistas, militares y portavoces del Departamento de Estado (pero, lo que es digno de señalar, no de los diplomáticos norteamericanos) en el sentido de que Es-

El presidente Harry Truman expresó con frecuencia, entre 1945 y 1952, su disgusto personal por la dictadura del general Franco

paña mostraba un antiamericanismo visceral, descuidaba los intereses comunes de la defensa occidental y se mostraba «desagradecida» respecto del apoyo económico y militar que había recibido en el pasado.

La política militar no me interesa excesivamente salvo por mi convicción de la absoluta necesidad de lograr el desarme tanto nuclear como convencional, lo que obviaría la necesidad de la OTAN y del Pacto de Varsovia, así como de los acuerdos militares entre EE.UU. y España. Pero me preocupa sobremanera toda la gama de relaciones políticas-económicas-culturales entre EE.UU. y España, motivo por el cual agradezco la invitación para comentar las dificultades que concurren en las recientes negociaciones.

Antes de hablar de estas negociaciones, me gustaría llamar la atención sobre el libro, excelentemente documentado y titulado con brillantez, del joven historiador norteamericano Douglas Little, *La neutralidad malévola* (Cornell University Press, 1985). Little demuestra, con profusión de citas tomadas de informes de embajadores, cónsules, agregados comerciales y militares tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, que desde el momento de la revolución bolchevique de noviembre de 1917 las potencias anglosajonas han visto la mano de Moscú en todos los movimientos políticos reformistas que ha habido en España, Portugal y América Lati-

na. Entre esos movimientos de presunta obediencia comunista incluyen la coalición de Azaña de 1931-33 y, naturalmente, el gobierno del Frente Popular de 1936. El embajador estadounidense Claude Bowers, con su defensa del gobierno republicano legítimo en 1936-37, era con mucho una excepción a las actitudes dominantes de las diplomacias británica y estadounidense.

El presidente Harry Truman expresó con frecuencia, entre 1945 y 1952, su disgusto personal por la dictadura del general Franco. También es justo decir que, si en 1947-48 don Juan, José María Gil Robles e Indalecio Prieto hubieran logrado acuerdos firmes sobre el establecimiento de una monarquía parlamentaria con una economía capitalista, puede que Estados Unidos habría tratado de desplazar al dictador fuera del poder. Pero, en términos generales, tanto británicos como norteamericanos pensaban que los españoles eran demasiado «apasionados» para gobernarse a sí mismos, y el comienzo de la Guerra Fría fortaleció sus tendencias nacidas en 1917 a identificar todos los movimientos reformistas e izquierdistas con la «subvención comunista».

En 1953, el primer acuerdo bilateral proporcionó al general Franco, junto con el Concordato del mismo año, la respetabilidad internacional. En esa época los gobiernos democráticos europeos estaban aún aislándole como el último dictador que había llegado al poder con la ayuda masiva de los gobiernos fascistas italiano y alemán, y que había mostrado en reiteradas ocasiones sus simpatías por la causa del Eje hasta que quedó claro que Hitler y Mussolini iban a ser derrotados. A partir de 1953, y hasta su muerte en 1975, el dictador contó en todo momento con el apoyo económico, militar y diplomático norteamericano, y es, desde luego, este constante apoyo, que sustituyó a la «neutralidad malévola» de la década de 1930,

lo que creó el profundo sentimiento de desconfianza hacia los EE.UU. de la mayoría de los españoles que se oponían a la dictadura.

Desde el punto de vista de la mayoría de los diplomáticos y funcionarios militares norteamericanos destinados en España, no había en realidad nada que justificara esta desconfianza. Ellos consideraban que EE.UU. había rescatado a España casi de la muerte por inanición de la década de 1940; confiaban en ofrecer a España el tipo de ayuda económica que habían enviado a la Europa democrática a través del Plan Marshall, un programa del que se había excluido a España por la oposición de los gobiernos democráticos europeos; observaban que el régimen se había vuelto menos represivo con el paso de los años y consideraban que EE.UU. había aportado su grano de arena en la suavización de la dictadura; interpretaban la década de 1960 como un decenio en el que el *boom* turístico, el desarrollo industrial y urbano y el constante aumento de los programas de intercambio cultural suponían que España, a pesar de su gobierno autoritario, se estaba preparando para la sociedad pluralista y políticamente democrática que, de hecho, se logró tras la muerte del dictador.

También merece la pena señalar que la opinión pública norteamericana nunca se sintió cómoda con la «relación especial» que se mantenía con el régimen de Franco. La ayuda económica y militar adoptó la forma de «acuerdos» en lugar de «tratados» porque los tratados debían ser ratificados por el Senado, y siempre fue evidente que un «tratado» con la España de Franco no había recibido la sanción del Senado. En resumen, los factores históricos que provocaban la incomodidad en las relaciones entre EE.UU. y la España democrática eran, por parte de EE.UU., la desconfianza en la capacidad española de autogobierno y un temor constante y glo-

***La opinión pública norteamericana
nunca se sintió cómoda con
la «relación especial» que se
mantenía con el régimen de Franco***

bal al «comunismo»; y por parte española, el resentimiento por el constante apoyo a la dictadura de Franco y la sensación de que EE.UU. infravaloraba constantemente los intereses nacionales y la capacidad de autogobierno de España.

Además de estos factores de mutuo descontento, otro problema es que España, como nación, no ocupa un lugar muy importante en la conciencia norteamericana. Importantes semanarios como *Time*, *Newsweek*, *US News and World Report*, publican siempre unos cuantos párrafos de noticias de Inglaterra, Francia, Alemania Occidental e Italia. Sólo publican párrafos sobre España, Portugal, Grecia o Escandinavia cuando ocurre algo espectacular. Mi experiencia en la Universidad de California es testigo también de este conocimiento muy limitado. Yo impartía regularmente dos cursos optativos sobre historia europea moderna: uno sobre la España de los siglos XIX y XX, y otro sobre los judíos europeos desde 1750 hasta la actualidad. El número de inscritos en el curso sobre historia judía era siempre dos o tres veces mayor que el de matriculados en el curso sobre España. Tampoco era resultado de preferencias étnicas: había muchos más norteamericanos de origen mexicano que judíos en el alumnado de La Jolla.

Volviendo ahora a las recientes negociaciones para la renovación de los acuerdos bilaterales, hubo una causa muy clara del malentendido y la consecuente ten-

Los negociadores estadounidenses pensaron que la exigencia respecto de los F-16 era una pieza de regateo y no una firme determinación

sión. En el referéndum de la OTAN de 1986, cuando el gobierno pidió a los votantes que confirmaran la pertenencia española a la Alianza Atlántica, se comprometió a «reducir sustancialmente» la presencia militar estadounidense en España. En numerosas ocasiones antes del comienzo de hecho de las negociaciones para la renovación de los acuerdos sobre las bases, el gobierno especificó que la retirada de los 72 cazabombarderos F-16 de la base aérea de Torrejón sería un requisito *sine qua non* para el cumplimiento del compromiso del referéndum. Portavoces tanto del Pentágono como de la OTAN manifestaron su descontento, pero el motivo real de tensión fue el error de juicio psicológico de los negociadores estadounidenses que pensaron, evidentemente, que la exigencia respecto de los F-16 era una pieza de regateo en la negociación y no una firme determinación.

Numerosas cuestiones más se añadieron a este punto de controversia principal: el Pentágono rechazó la pretensión española de que los F-18A adquiridos a EE.UU. podrían cubrir las misiones asignadas hasta ahora a los F-16; portavoces militares de los EE.UU. y de la OTAN expresaron sus dudas acerca de la capacidad técnica de la fuerza aérea española: a EE.UU. le preocupaba el modo en que la exigencia española afectara posteriormente a las negociaciones con países como Grecia, Turquía y Filipinas; funcionarios de la OTAN se preguntaban sobre la

profundidad del compromiso español con la Alianza; en la medida en que los F-16 constituían un elemento esencial de los planes de guerra de la OTAN, su salida incumbía a la OTAN, no era sólo una cuestión entre EE.UU. y España.

En determinado momento, el embajador de EE.UU. solicitó una audiencia con el Rey, medida que fue interpretada de inmediato como un intento de establecer un puente con el gobierno de la nación democráticamente constituido. La prensa recordó automáticamente, con amargo sarcasmo, la manera en que el entonces secretario de Estado, general Haig, se había referido al golpe de Tejero como un «asunto interno». En realidad, estos dos incidentes no son comparables, pero la reacción de la prensa indicó la extrema sensibilidad de los españoles hacia la cuestión de si EE.UU. acepta realmente la democracia que ha sucedido a la dictadura del general Franco. Afortunadamente para el futuro de las relaciones entre España y EE.UU. la pretendida entrevista con el Rey fue cancelada rápidamente.

A mediados de enero de 1988, EE.UU. accedió a retirar los F-16 en un plazo de tres años. España accedió, a cambio, a renovar la plena utilización de la base aérea de Morón y de la naval de Rota, al traslado a Morón de cinco aviones cisterna estacionados en Zaragoza y a la permanencia en esta base, en virtud del nuevo acuerdo, de los aviones de entrenamiento que ya están en ella. España accedió también a que la propia base de Torrejón estuviera abierta a EE.UU. en época de «crisis», y se dispuso a solicitar la participación económica de la OTAN en los costes de mantenimiento de Torrejón.

Para el contexto de las futuras relaciones diplomáticas entre España y EE.UU. las negociaciones tuvieron, en mi opinión, tres consecuencias importantes:

1. EE.UU. reconoció la interpretación española de una obligación asumida democráticamente en los términos en que el gobierno español definió esa obligación.

2. EE.UU. reconoció, tal vez con más claridad que en el pasado reciente, que España es ahora una monarquía constitucional comparable a la de países como Gran Bretaña, los Países Bajos y los reinos escandinavos. Es decir, todas las negociaciones políticas han de realizarse con el presidente del Gobierno y sus ministros como representantes de la mayoría parlamentaria, y no con el Rey, cuyas funciones deben ser preservadas, desde luego, de tensiones políticas a corto plazo.

3. España descubrió que la cuestión de los F-16 no era simplemente una cuestión bilateral, sino que afectaba a los aliados de la OTAN, y que los ajustes políticos-estratégicos-económicos consiguientes a la decisión sobre los F-16 tendrían que negociarse tanto con EE.UU. como con la OTAN.

Me gustaría comentar también dos importantes afirmaciones aparecidas en la prensa española en el momento del acuerdo de «ruptura». En un artículo titulado «La salida de los F-16: ¿La honra de la deshonra?» (*EL PAIS*, 16 de enero de 1988), Rafael L. Bardají escribía lo siguiente: «En realidad, en toda democracia que funciona como tal, tanto la definición de la política exterior y la seguridad, así como la consecución de acuerdos internacionales, se encuentran ampliamente determinadas por la expresión de la opinión pública». ¡Ojalá que fuera verdad! Pero la realidad es, y esto constituye uno de los grandes problemas que le quedan por solucionar al gobierno democrático en todo el mundo, que la política exterior y la «seguridad nacional» siguen siendo competencia de élites restringidas que piensan que está perfectamente justificado (el presidente Reagan, la primera ministra That-

cher, el presidente Mitterrand, el presidente del Gobierno González, y un largo etcétera) el ocultar su auténtica política de la vista del público. La política de EE.UU. en América Central, la política nuclear francesa en el Pacífico, las licencias de armamentos y la política nuclear en España, son sólo una pequeña muestra de las políticas que podrían citarse y que, ciertamente, no han sido «ampliamente determinadas por la expresión de la opinión pública».

El editorial de *EL PAIS* de 16 de enero decía: «Para España, el acuerdo de ayer tiene un valor considerable, no sólo porque se va a poner fin a la existencia, en sí intolerable, de una base militar extranjera a pocos kilómetros de la capital, sino porque en cierto modo el carácter mismo de nuestras relaciones con EE.UU. cambia con la aceptación por éste de la demanda española». Creo que es correcta la afirmación del editorial acerca de las repercusiones para el futuro de las relaciones diplomáticas entre España y EE.UU., pero el nuevo acuerdo no ha puesto fin en modo alguno a la existencia de una base aérea extranjera en las cercanías de Madrid. Torrejón estará abierta en época de crisis, y su mantenimiento se convertirá en una responsabilidad conjunta de España y sus socios de la OTAN. Psicológicamente esto puede ser menos «intolerable» que la situación de los decenios anteriores, y tal vez reduzca ligeramente el grado de control de EE.UU. (y la cantidad de contami-

España descubrió que la cuestión de los F-16 no era simplemente una cuestión bilateral, sino que afectaba a los aliados de la OTAN

nación sonora para los habitantes de Torrejón), pero desde luego no pone fin a la presencia de una base extranjera en las proximidades de la capital de la nación.

En términos generales, creo que sería sensato que los españoles no se engañaran a sí mismos con una sensación de «victoria» en la cuestión de los F-16. A un nivel puramente pragmático, tenemos que ver todavía qué clase de sutiles represalias en contratos de armamentos y cooperación militar pueden tomar aún el Pentágono, el Congreso de EE.UU., las autoridades del mando de la OTAN, o Italia, como nuevo anfitrión de los aviones desplazados. Por lo que se refiere al hecho de ser blanco de los misiles soviéticos, Torrejón, y por consiguiente Madrid, no estarán más seguros con los nuevos acuerdos que con los antiguos. El hecho de que Torrejón ya no albergue de forma permanente a los 72 F-16 no va a cambiar la idea soviética de la base como objetivo militar en caso de guerra entre los bloques de la OTAN y el Pacto de Varsovia.

Para no sentirse decepcionados ni engañarse en ocasiones futuras, es fundamental mantener los aspectos político-psicológicos de las negociaciones sobre la base separados de los aspectos militares. Me inclino a creer, y sin duda en ello confío, que las recientes negociaciones habrán inaugurado un nuevo clima, una mejor cultura política, en las relaciones entre España y EE.UU. Esperemos que EE.UU. acepte sin reservas que España es una democracia parlamentaria que funciona según el modelo inglés o el escandinavo. Esperemos también que España sea menos sensible a errores de juicio, graves o leves, no intencionados. Estas son las consecuencias político-psicológicas claramente positivas que cabe esperar.

Sin embargo, por lo que se refiere a la política exterior y a la seguridad nacional, no se ha producido ningún cambio significativo, y creo que los dos artículos que he citado muestran una confusión peligrosa entre el progreso de las relaciones diplomáticas y la realidad de la situación militar española (y mundial). Es muy posible que los norteamericanos pensaran durante unos meses que España suavizaría su exigencia no negociable por la sencilla razón de que la salida de los F-16 no aumenta, de hecho, la seguridad española ni proporciona a España un mayor control de su propia suerte en época de amenaza de guerra o de devastación bélica.

Con la tecnología de que ahora disponen las naciones avanzadas, y de la que pronto dispondrán todas las naciones y todos los terroristas, el único modo de lograr la seguridad nacional será negociar el desarme nuclear total y reducir de modo significativo el armamento convencional a escala mundial. En mi opinión España tuvo en el referéndum una excelente oportunidad para contribuir a la causa de este necesario desarme. Como potencia neutral de tamaño intermedio, podría haber añadido su peso a los esfuerzos de Suecia, Yugoslavia, México, India, Tanzania, etc. Pero, por diversas razones, el gobierno del PSOE decidió recomendar la OTAN como mejor opción para España. Las consecuencias psicológicas de las recientes negociaciones bilaterales son causa de satisfacción, y podrían reportar importantes beneficios a la totalidad de las relaciones entre EE.UU. y España. Pero, en términos de compromisos y riesgos militares, la situación no es ni mejor ni peor que antes de las negociaciones.

Traducción de Fabián Chueca
y Bernadette Wang



LOS LIMITES DE LA POLITICA ECONOMICA ESPAÑOLA

Guillermo DE LA DEHESA

En líneas generales, los tres pilares básicos sobre los que se ha asentado la reciente política económica española han sido: reconocer la interdependencia creciente de nuestro sistema económico eliminando las barreras que aislaban nuestros mercados de bienes, servicios y factores de los mercados mundiales.

Aceptar que la apertura mencionada anteriormente implicaba una enorme reasignación de recursos productivos, cuyos costes económicos se podían aminorar apoyando decididamente políticas estructurales de eliminación de las rigideces en el funcionamiento de los mercados de trabajo y capital y de reconversión de sectores industriales.

Asumir que el vasto programa de liberalización que se proyectaba sólo podía tener garantías de éxito en el marco de una

política económica doméstica ortodoxa que restableciese la confianza de los agentes económicos y, en definitiva, las bases para un crecimiento sostenido y no inflacionario.

Los datos económicos del bienio 1986-1987 corroboran que el diagnóstico era correcto y que las políticas económicas de saneamiento, cuando son desarrolladas con coraje y persistencia, siempre acaban generando los resultados apetecidos. Procesos como la reconversión industrial, la re-

Las políticas económicas de saneamiento, cuando son desarrolladas con coraje y persistencia, siempre acaban generando los resultados apetecidos.

forma de los mercados financieros y de trabajo y la integración en Europa sin duda han tenido o pueden tener aún costes políticos y económicos en el corto plazo, pero haber mantenido las reformas en marcha y pretender seguir profundizándolas ha fortalecido la viabilidad del proyecto político democrático al dinamizar nuestro tejido económico y aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía.

La política económica desarrollada ha permitido, pues, iniciar un período de crecimiento sostenido al tiempo que se han ido reduciendo los desequilibrios macroeconómicos básicos: inflación, déficit público y déficit de balanza de pagos por cuenta corriente.

Lo que queda por hacer

Sin embargo, aún queda mucho por hacer en una economía con tanto potencial pero también con tantos retos a medio plazo, como tiene la española, especialmente aquellos derivados del proceso de aceleración de la integración europea.

Hay dos características de nuestra economía que muestran de una manera clara lo que queda por hacer y que contrastan negativamente cuando realizamos cualquier comparación con las del resto de los países europeos: nuestra alta tasa de paro y el deficiente desarrollo de nuestras infraestructuras y de algunos servicios bási-

cos que son, sin duda alguna, un freno a nuestro desarrollo económico.

Por tanto, nuestra política económica en los próximos años debe tener como objetivo prioritario la creación de empleo y la creación de infraestructuras y servicios, y como reto fundamental la consecución de estos objetivos con dos condiciones limitativas: continuar mejorando los niveles ya alcanzados de inflación, déficit público y saldo corriente de balanza de pagos, y continuar el proceso de apertura de la economía española y de su integración en la europea.

Para llevar a cabo una política de reducción del paro lo primero es saber cuáles son sus causas. De una manera muy sintética se puede decir que el paro en España tiene unos orígenes estructurales, que sólo tienen solución a largo plazo, como son los tecnológicos o los demográficos (el *baby boom* de los 60 y principios de los 70, el aumento de la tasa de actividad femenina, o el retorno de los trabajadores emigrados a Europa, etc.) y unos orígenes derivados de problemas de oferta y demanda.

Su origen en problemas de oferta ha sido debido, por un lado, al aumento sostenido de los salarios reales por encima de la productividad y a la existencia de rigideces y falta de flexibilidad en el mercado de trabajo, y por otro a la insuficiencia de un *stock* de capital productivo derivado de la falta de inversión durante los años de la crisis.

Su origen en problemas de demanda se debe a que la demanda agregada de consumo e inversión ha sido, durante la crisis, insuficiente para absorber la producción nacional de bienes y servicios.

En otras palabras más sencillas, para emplear a un nuevo trabajador y crear empleo son necesarias, al menos, tres condiciones: la primera es que el empleo sea físi-

camente posible, es decir que existan los medios, instrumentos y herramientas para poder desempeñarlo o, en otras palabras, que existan otros factores de producción disponibles (tierra, capital, tecnología, etc.) para que el nuevo trabajador produzca bienes o servicios. La segunda es que el nuevo empleo tenga un coste rentable para el empleador, rentabilidad que dependerá, a su vez, de las expectativas de venta y margen de beneficio de esa nueva producción. La tercera es que exista una demanda suficiente para adquirir los bienes y servicios que se vayan a producir y crear las expectativas favorables para que se mejoren las expectativas de venta. Ninguna de las tres condiciones se ha cumplido suficientemente durante los años de la crisis.

Los problemas de oferta indican, de acuerdo con la jerga ya acuñada, que el nivel de paro tiene un componente «clásico», los problemas de demanda indican que tiene un componente «keynesiano».

El doble enfoque

Aceptando este planteamiento del problema, la complementariedad de las políticas de oferta y demanda es evidente. Si expandemos solamente la demanda sin actuar con políticas de oferta sobre los mercados de capital y trabajo, para que la capacidad productiva dé respuesta a dicho aumento de demanda, el resultado será más inflación y menos renta. Y si por el contrario sólo utilizamos políticas de oferta la demanda será insuficiente y se producirán exclusivamente aumentos de existencias y reducciones del excedente de las empresas y, por tanto, de la inversión, que es la variable clave de crecimiento a largo plazo.

Por ello, para reducir el doble componente del paro sigue siendo necesario el llamado *doble enfoque*, de utilización conjunta de políticas de oferta y demanda.

***Nuestra política
económica en los
próximos años debe tener
como objetivo prioritario
la creación de empleo
y de infraestructuras y
servicios.***

Políticas de oferta encaminadas, por un lado, a dotar a nuestro factor trabajo de una mayor flexibilidad funcional espacial y horaria, perseverando en formas ágiles de contratación, integrando las viejas ordenanzas laborales en la negociación colectiva y flexibilizando al máximo la generalización de los convenios colectivos para tener en cuenta la situación de cada empresa; y, por otro, de un coste competitivo, no sólo moderando salarios sino también negociando salarios mínimos y costes de despido menores o más cercanos a los establecidos por el gobierno, así como reduciendo cargas sociales sobre el empleo, ya que existe aún una diferencia importante entre el salario como coste para la empresa y como ingreso para el trabajador.

Políticas de estímulo de la demanda interna de consumo e inversión tales como las que se vienen poniendo en práctica desde 1986 y que nuevamente se contemplan en el presupuesto de 1988, es decir, reducción de tarifas impositivas personales, para evitar los efectos de la inflación sobre los tipos impositivos. En particular son necesarias políticas que tengan un componente mixto de oferta y demanda, tales como el aumento de las inversiones públicas en infraestructura para mejorar la productividad del capital, y el incremento de los gastos en educación y formación profesional con el objetivo de aumentar la productividad del trabajo. Una mejor y más descentralizada formación profesional es un elemento clave si se quiere conseguir una

Para reducir el doble componente del paro sigue siendo necesario el «doble enfoque», de utilización conjunta de políticas de oferta y demanda.

mano de obra más productiva en el futuro.

Los límites

Aunque ambas políticas se refuercen mutuamente, su intensidad y límites respectivos están influenciados decisivamente por un conjunto de factores dispares.

Los límites de las políticas de oferta vienen impuestos por la percepción que los agentes públicos y privados tengan acerca de la deseabilidad de converger a las reglas de funcionamiento de los mercados competitivos. La existencia de externalidades, bienes públicos y monopolios naturales, entre otras razones, han justificado teóricamente la superioridad económica de diverger del libre juego del mercado. Consideraciones sobre el binomio eficiencia y equidad y la estabilidad de la estructura social son así mismo cruciales a la hora de diseñar una estrategia de intervención del sector público en la economía. En definitiva, los límites de las políticas de oferta se fijan básicamente por la interacción de las posiciones que defienden los agentes económicos, y en un sistema democrático tienden a reflejar los valores dominantes de la sociedad.

Por el contrario, los límites de las políticas de demanda vienen fundamentalmente impuestos por lo que técnicamente se denomina «restricción externa», en defini-

tiva la necesidad de mantener intertemporalmente un equilibrio en las cuentas externas. Dado que un país mediano y abierto como España no puede influir ni en los precios internacionales de los bienes y servicios ni en los tipos de interés vigentes en los mercados financieros mundiales, la severidad de la restricción externa viene determinada por el delicado equilibrio que se establece entre la política de demanda doméstica y la situación particular del contexto internacional.

La tozudez en este sentido de las relaciones algebraicas es posiblemente una de las proposiciones mejor fundadas de la teoría económica. Un país de las características de España que intente crecer apoyándose básicamente en la demanda interna, especialmente si ésta está sesgada hacia el consumo, se enfrentará en el medio plazo con problemas de balanza de pagos por cuenta corriente dado que la expansión tenderá a hacer aumentar las importaciones de bienes y servicios y a reducir las exportaciones, ya que una parte de la expansión se filtrará hacia la importación de productos que no se producen o son más caros en el interior, mientras que otra parte se filtrará hacia productos nacionales que se hubieran exportado de no existir esa demanda.

El resultado de este proceso es ciertamente insostenible en el largo plazo. Un déficit de balanza corriente significa que el país es incapaz de generar el ahorro necesario para financiar sus inversiones, bien porque produzca poco bien porque consume mucho, por lo que tiene que acudir a tomar préstamos del resto del mundo, bien en forma de endeudamiento externo, o alternativamente, financiar esa brecha desacumulando reservas exteriores. Dado que el préstamo que el resto del mundo está dispuesto a hacernos, al igual que las reservas externas disponibles, tienen un límite, y en cualquier caso un coste cre-

ciente, a la larga el país se verá enfrentado a reconducir su política expansiva y habitualmente a una reducción de su nivel de consumo e inversión desarrollando políticas fiscales, monetarias y de rentas restrictivas.

El problema con este tipo de estrategias de crecimiento es que no sólo incumplen el objetivo de acelerar el crecimiento, sino que al ser inconsistentes e insostenibles en el tiempo minan la credibilidad de las futuras políticas económicas, reforzando la dificultad y los costes de atajar los problemas de inflación, paro y desequilibrio fiscales que inevitablemente generan.

En síntesis, tenemos pues unos límites internos a la perseveración en el programa de reformas estructurales y unos límites exógenos al desarrollo de políticas de manejo de la demanda. Ambas restricciones se influyen y modifican mutuamente determinando la senda de crecimiento de la economía. Por ejemplo, la existencia de una elevada indiciación de la economía, producto de las reglas de funcionamiento vigentes en los mercados de trabajo y capital, acelerará la aparición de la restricción externa al apreciarse el tipo de cambio real y perder competitividad la economía. Además la devaluación no será una herramienta útil de política económica, puesto que sus efectos se evaporarán en pocos meses reactivando el proceso. Las autoridades se verán en definitiva forzadas a afrontar el desequilibrio externo vía reducción del gasto doméstico, con los consiguientes costes de *output* y empleo.

Por el contrario, economías más flexibles se ajustarán con mayor celeridad a través de cambios en los precios relativos de bienes y factores, sin generar presiones innecesarias sobre los mercados de bienes, de trabajo y el sistema financiero. Simétricamente, la existencia de una situación económica boyante permitirá acelerar las reformas puesto que la absorción

de los costes a corto plazo de la reasignación de recursos será más fácil.

La primera decisión es, pues, saber hasta donde estamos dispuestos a llegar en el proceso de convergencia hacia la norma europea en las reglas que regulan el funcionamiento de nuestros mercados. El segundo nivel de decisión sería la orientación de la política de demanda y la elección de las políticas monetarias, fiscales y de tipo de cambio que harían posible nuestro proyecto de crecimiento acelerado y sostenido. Como veremos a continuación, aquí también existen ciertos márgenes de libertad para escoger el camino que se considera más deseable.

Por tanto, el dilema fundamental por el lado de la demanda que se le plantea a nuestra economía a medio plazo es que, dada la existencia de paro keynesiano y que la tasa global de paro es muy superior a la de las economías de nuestro entorno, debemos intentar crecer más rápido que ellas. Esta situación se ha venido dando en estos dos últimos años, pero se nos plantea una incógnita de futuro: ¿hasta cuándo podremos mantener una tasa de crecimiento tan elevada basada en la demanda interna sin incurrir en problemas graves de balanzas de pagos por cuenta corriente?

Independientemente de que nuestro actual volumen de reservas nos da margen de maniobra durante varios años, la solu-

***Nos encontramos con una
oportunidad única y una
oportunidad histórica
para que Europa expanda
coordinadamente sus
economías.***

ción a este dilema dependerá de dos elementos de política económica: de cómo manejemos nuestra política monetaria y fiscal y de cómo las manejen los países de nuestro entorno, es decir, de la coordinación de la política macroeconómica española y europea. Todo ello bajo el supuesto de que nuestros costes de trabajo y capital tiendan a la moderación y a converger hacia la del resto de Europa perseverando en políticas de oferta adecuadas.

Las opciones

En cuanto al manejo interno de la política macroeconómica para conseguir una expansión de la demanda agregada, existen, simplificada y básicamente, dos *opciones*:

La primera es desarrollar una política fiscal expansiva y una política monetaria restrictiva. Esta es, sin duda, la solución más adecuada si nos encontráramos integrados en un sistema de tipos de cambios fijos o quisiéramos mantenerlos voluntariamente estabilizados. La política fiscal expansiva nos lleva, inexorablemente, a un déficit por cuenta corriente. Se evita así, a corto plazo al menos, una depreciación del tipo de cambio y, al mismo tiempo, se traslada el equilibrio externo desde la balanza corriente a la balanza de pagos. El Estado financia el déficit público en el interior y el sector privado fi-

nancia el déficit por cuenta corriente en el exterior.

El problema que plantea esta opción es que no puede mantenerse por mucho tiempo, ya que, al final, el déficit público y el déficit por cuenta corriente pueden llegar a ser tan altos que para poder financiarlos los tipos de interés tienen que ser desorbitadamente elevados, poniendo en peligro el consumo y la inversión privada y, en definitiva, el objetivo último de reducción del paro.

La segunda opción es la más adecuada, teóricamente, a una situación de tipos de cambios flexibles. La orientación expansiva se encomienda a la política monetaria, mientras que la política fiscal se hace más restrictiva. La política monetaria más expansiva estimula la inversión al reducir los tipos de interés y estimula la exportación al depreciar paulatinamente los tipos de cambio nominal y el real. La política fiscal, más contractiva, reduce la presión sobre los tipos de interés, ya que desaparece o se debilita el fenómeno del *crowding out* al disminuir las necesidades de financiación del sector público. Los menores tipos de interés, a su vez, facilitan la depreciación a corto plazo del tipo de cambio y reducen el déficit público al disminuir la carga de intereses de la deuda. Con esta mezcla de políticas se continúa reduciendo el déficit público y el déficit exterior por cuenta corriente. Es decir, se consiguen los equilibrios interno y externo y se estimulan las dos bases sobre las que debe discurrir un crecimiento estable a largo plazo de toda economía, abierta e integrada, como la española: la inversión y la exportación.

Esta segunda opción plantea, a su vez, dos problemas:

El primero es que para que esta opción tenga éxito la política fiscal tiene necesariamente que seguir reduciendo, de ver-

Sin duda alguna la expansión coordinada europea es una política mucho más eficaz que la basada en la teoría de la «locomotora».

dad, el déficit público a sabiendas de que no es fácil en un país que, como el nuestro, tiene también como prioridad atender al desarrollo de ciertos servicios básicos y, sobre todo, a la insuficiencia de infraestructuras que son condiciones necesarias para consolidar un crecimiento estable a largo plazo. De lo contrario, si acabamos haciendo una política fiscal también expansiva, el fracaso está asegurado. Terminaremos, al final, con más inflación, menos crecimiento y más paro.

De ahí que, independientemente de la ayuda que supondrá la disminución de la carga de intereses, la reducción del déficit público tenga que consistir en: una reducción del crecimiento del *stock* de deuda y del gasto a tasas inferiores a las del PIB, y una redistribución más racional y productiva del mismo, es decir reasignando recursos del consumo a la inversión y en no aumentar los ingresos fiscales con un incremento de los tipos impositivos, sino aflorando un mayor número de contribuyentes mediante la lucha contra el fraude.

A pesar de la reducción del déficit la inversión pública en infraestructuras puede afrontarse no sólo con estos mayores ingresos y una mejor asignación del gasto público, sino también con ayuda de los fondos estructurales de la Comunidad Económica Europea.

El segundo es que la depreciación del tipo de cambio lleva consigo un aumento de los precios internos a través de dos vías. Por un lado, eleva los precios en moneda nacional de las importaciones. Por otro lado, permite que puedan aumentar los precios de la producción nacional que se exporta o que compite con las importaciones. Este aumento de los precios induce una reducción de los salarios reales que puede compensar en parte las tensiones inflacionistas. Pero si hay indiciación de salarios y precios, los salarios pueden reaccionar también al alza y el resultado

La entrada de España en el acuerdo cambiario del Sistema Monetario Europeo es una decisión necesaria y conveniente.

final puede ser más inflación y un tipo de cambio depreciado, sin que nuestro crecimiento se acelere ni nuestro nivel de paro mejore. Es decir, se podría llegar a un círculo vicioso, inflación-depreciación, en el que no se cumpliera el objetivo de reducción no inflacionaria de paro.

La necesidad de una expansión europea

¿Cómo se puede resolver este dilema? Sólo existe una solución y no está, sino parcialmente, en nuestras manos. Si nuestros vecinos europeos expanden también sus economías coordinadamente (lo que no quiere decir sincrónicamente), entonces también ellos inducirán una cierta depreciación de sus tipos de cambio con lo que la depreciación de nuestra moneda frente a las suyas se verá, en todo o en parte, neutralizada. Se reducirán así los efectos negativos antes comentados de la depreciación sobre los precios y el empleo y se evitará caer en dicho círculo vicioso. Por otro lado, sus mercados internos crecerán más rápidamente permitiendo un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, mayoritariamente dirigidas a estos mercados solventes y seguros, compensando así el aumento de sus mercados la menor depreciación real de nuestro tipo de cambio.

Nos encontramos, pues, en estos momentos, con una condición necesaria para España pero también una ocasión úni-

ca y una oportunidad histórica para que Europa expanda coordinadamente sus economías. Varias razones avalan esta oportunidad.

En primer lugar, porque la necesaria política de reducción del déficit público americano va a tener un impacto deflacionista sobre Europa que hay que contrarrestar aumentando la demanda interna europea. Por otro lado, porque la solución recientemente acordada para atajar los desequilibrios americanos va a permitir una reducción de sus tipos de interés que va a hacer más fácil la reducción coordinada de los tipos europeos y, por consiguiente, el estímulo de la demanda europea de bienes de consumo duradero y de inversión.

En segundo lugar, porque la caída del dólar permite hoy a los bancos centrales europeos tener una política monetaria menos restrictiva. La apreciación del dólar en los últimos años ha provocado una depreciación de las monedas europeas y, con ello, unas mayores tensiones inflacionistas que ha obligado a las autoridades monetarias europeas a ser especialmente cautas.

En tercer lugar, porque la reducción de los desequilibrios macroeconómicos europeos en términos de déficit público y de inflación han sido notables, aunque dispares, en los últimos años, lo que permite un mayor margen de actuación expansiva

El funcionamiento del SME ha comenzado a introducir, hoy día, contradicciones con los objetivos obvios de la política económica europea.

para intentar reducir su mayor desequilibrio: una tasa de paro media del 11 %.

Por último, porque una política europea expansiva y una reducción de los tipos de interés, unida a una liberalización comercial en el marco de la nueva ronda Uruguay, puede permitir una mejora en la situación económica de los países en desarrollo más endeudados y crear nuevos mercados para el futuro en un momento en que el gran mercado americano está reduciéndose, y en que los países exportadores de petróleo agobiados por las caídas simultáneas del dólar y de los precios del barril siguen manteniendo un poder de compra muy exiguo.

Sin duda alguna la expansión coordinada europea es una política mucho más eficaz que la basada en la teoría de la «locomotora», que sólo es posible si son los Estados Unidos quienes desempeñan esta función, como lo ha hecho durante estos últimos años.

Dicha expansión coordinada es pues la única salida, no sólo para un crecimiento no inflacionista de la economía española, sino para conseguir una economía mundial en su conjunto más próspera y menos incierta en el futuro.

¿Qué puede ocurrir si, en contra de toda lógica, dicha expansión europea no se produce en los próximos años? Sin duda alguna nuestros márgenes de actuación, de seguir esta opción de política monetaria más expansiva y política fiscal más contractiva, serán más estrechos. Si queremos seguir manteniendo el alto crecimiento necesario para reducir el paro nos veremos obligados o a aceptar niveles de inflación más elevados, con el peligro de caer en una espiral inflacionista, o a tratar de evitarla aceptando crecimientos aún menores de los salarios y forzando mayores incrementos de la productividad con

políticas más audaces de flexibilización de la oferta de capital y de trabajo.

La entrada en el Sistema Monetario Europeo

En este contexto la integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo se convierte en una de las decisiones más importantes de política económica de los próximos años.

Acatar el compromiso de mantener el tipo de cambio nominal dentro de unas bandas toleradas de fluctuación supone convertir al tipo de cambio nominal en la variable intermedia de nuestra política monetaria, en lugar de la cantidad de dinero en sentido amplio o ALP, y exige la consecución en el medio y largo plazo de la tasa de inflación del país líder del acuerdo. Esta limitación de la política monetaria, y en general de la política económica, permite al país que se integra en el acuerdo cambiario reforzar la credibilidad de su compromiso anti-inflacionario al precio de perder parte de su autonomía en el diseño de su política macroeconómica.

La adopción del acuerdo tiene ventajas evidentes: en primer lugar, el acuerdo cambiario del SME supone, sin duda, para el país que lo asume, una ratificación de su compromiso comunitario, de reforzar y facilitar su proceso de integración en el área.

Por otro lado, la sustitución de la discrecionalidad por una norma clara y sencilla, como es el mantenimiento del tipo de cambio nominal dentro de las bandas, tiene un efecto beneficioso en el proceso de formación de expectativas de los agentes, quienes seguramente percibirán como más creíble la política económica global y, en particular, la política anti-inflacionista.

La elección del momento para incorporarnos al SME debe de estar condicionada por los factores internos de la economía española y del propio SME.

Por último, técnicamente esta opción sería igualmente decisiva para, de una vez por todas, disipar la errónea conceptualización del tipo de cambio como un instrumento independiente de política económica. El tipo de cambio, nominal o real, es una variable endógena del sistema, no siendo por tanto apropiado pensar que la autoridad económica puede influir, de forma sustancial y durable, en su valor.

Sopesando las anteriores ventajas, la entrada de España en el acuerdo cambiario del SME es una decisión necesaria y conveniente.

Ahora bien, el interrogante es «cuándo y cómo» nos debemos integrar, cuestiones de importancia crucial a las que no puede darse una respuesta apresurada sino que exigen evaluar los problemas e incertidumbres que rodean, de un lado, la situación económica española y, de otro, el funcionamiento del SME.

Desde el momento en que España decida la incorporación de la peseta al SME, será necesario descartar la opción de política económica de demanda comentada anteriormente, y que parecía adecuarse mejor al objetivo de una reducción no inflacionista del paro, es decir una política monetaria expansiva unida a una política fiscal contractiva. Una vez dentro del SME no es posible diverger de forma sostenida de la regla monetaria impuesta por el país con la moneda dominante, en este caso

***Somos una economía mediana,
abierta e integrada en la CEE y,
por tanto, con límites bastante
estrechos para nuestra
capacidad de actuar.***

Alemania, ya que nuestra política monetaria tiene que ser consistente con la alemana.

Una vez que el SME ha cumplido eficazmente su papel de instrumento clave para reducir la inflación en Europa gracias al peso relativo de la política económica alemana y a su filosofía económica, basada en la animadversión a la inflación, su funcionamiento ha comenzado a introducir, hoy día, contradicciones con los objetivos obvios de la política económica europea.

Hoy en Europa la estabilidad de precios está conseguida y, sin embargo, existen elevadas tasas de paro, lo que hace que los objetivos de política económica den ahora un mayor peso relativo a la lucha contra el paro que la mera persecución de una inflación cero. Para poder reducir la tasa de paro las economías europeas tienen que crecer más, pero no es posible puesto que sus políticas monetarias siguen determinadas por la política monetaria contractiva alemana que sigue manteniendo el objetivo de inflación cero.

Este problema de asimetría del SME podría aliviarse si Alemania, al crecer menos y tener una menor tasa de inflación que los restantes miembros, revaluase el marco, pero una vez más la asimetría ha calado también en el mecanismo de intervención del SME ya que se obliga a intervenir en los mercados de cambio funda-

mentalmente a los bancos centrales de las monedas más débiles y no al de la moneda más fuerte.

Independientemente de estos problemas internos del SME y que tanto pueden condicionar el momento de nuestra entrada, existe otro problema importante derivado del grado de apertura de la economía española frente al resto de la CEE. La existencia de un proceso de liberalización de la cuenta corriente y de la cuenta de capital, marcado por nuestro Tratado de Adhesión y la próxima liberalización total de los movimientos de capital a corto plazo, impiden calcular de momento el tipo de cambio real de equilibrio a largo plazo de la peseta frente a las monedas de los restantes países miembros. Difícilmente puede fijarse el tipo de cambio nominal de entrada en el Sistema si desconocemos el nivel de equilibrio a largo plazo de nuestro tipo de cambio real.

En definitiva, las ventajas a largo plazo de nuestra incorporación al SME son, sin duda alguna, claras y suficientes para que sea una opción aceptable y necesaria de política económica. Ahora bien, la elección del momento más oportuno para incorporarnos debe de estar condicionada tanto por factores internos de la economía española, que con nuestro grado de apertura y de situación diferencial de nuestros desequilibrios macroeconómicos respecto del resto de los países miembros de la CEE —especialmente la tasa de paro— nos impone una política de mayor expansión relativa de demanda interna, como por factores internos del SME que, hoy día, con su doble funcionamiento asimétrico, está imponiendo una serie de restricciones y límites a la expansión de la economía europea, condición necesaria para el éxito de nuestra política económica.

Mientras estos problemas no se encuentren resueltos o en vías de solución parece más prudente adoptar una posi-

ción de prudencia e intentar aprovechar los ligeramente mayores márgenes de actuación de política económica que nos permite no ser miembros pero estar en puertas.

Conclusión

Distintas alternativas y opciones se están manejando continuamente por diferentes grupos o facciones políticas respecto de la política económica actual y de la que hay que seguir en los próximos años, pero en su mayoría parten de concepciones erróneas sobre la economía española. Olvidan que somos una economía mediana, abierta e integrada en la CEE y que es-

tos hechos nos imponen unos límites bastante estrechos a nuestra capacidad de actuar, que, unidos a las restricciones políticas y sociales internas, hacen del manejo de la política económica una operación enormemente más complicada de lo que algunas simplificaciones políticas pretenden mostrar, y con unos márgenes de actuación cada vez más estrechos y predeterminados por variables exógenas que como tales son en buena parte ajenas a nuestra capacidad de influencia. En todo caso, la reforma del SME y la consiguiente neutralización de su asimetría son condiciones necesarias para que la economía europea crezca a un mayor ritmo permitiendo un mayor margen de actuación de nuestra política económica y una entrada menos costosa de la peseta en el mismo.

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS

**FUNDACION
PABLO
IGLESIAS**

**LA IZQUIERDA
Y EUROPA**

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS

Los días 29 y 30 de noviembre de 1986 tuvo lugar en Sigüenza un debate organizado por la Fundación Pablo Iglesias sobre el tema *La izquierda y Europa*. En la reunión participaron más de cuarenta intelectuales y políticos españoles y de otros países europeos. La discusión se desarrolló sobre la base de una ponencia presentada por la Fundación Pablo Iglesias y distribuida a los participantes con un mes de antelación. El presente volumen recoge íntegramente la ponencia y el debate (cada participante revisó la transcripción de sus intervenciones), así como las contribuciones presentadas antes o después de la discusión. El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Felipe González, tuvo un encuentro con los participantes en el debate.

J. Arango, D. Aranguren, M. Azcárate, J. Astelarra, E. Barón, J. Borja, M. Cabrera, F. Claudín, S. Clotas, J. M. Colomer, R. Debray, J. Elleinstein, M. Escudero, M. A. Fernández Ordóñez, R. Figueroa, T. Fichter, G. Fuchs, A. Gauron, K. Hansch, D. Koniecki, N. Lechner, J. Lerma, E. Lluch, J. Martínez Reverte, C. Miranda, I. Molas, J. A. Moreno, M. Muñiz, G. Napolitano, R. Obiols, M. Ortuño, L. Paramio, J. Pradera, J. R. Recalde, M. Rodríguez, M. Satrustegui, C. de la Serna, J. Solé Tura, I. Sotelo, G. Stedman Jones, J. F. Tezanos, P. Vilanova, A. Viñas, C. Virgili, C. A. Zaldívar.

LA IZQUIERDA Y EUROPA
Fundación Pablo Iglesias
Editorial Pablo Iglesias
312 págs. 1.500 ptas.

Pedidos:
EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
28010-Madrid - Tels. 410 46 96 y 410 47 98



COMENTARIOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Juan Francisco MARTÍN SECO

Ese arte de dulzón optimismo que va dando zapatetas de idiota y gritando: «La vida es alegre, todo está bien, todo es bueno», es arte de estancamiento, que sólo pretende dar a la putrefacción aspecto de conserva sazónada con sal de chistes y pimienta de sensualidad. Ese arte es la pornografía espiritual; todo está bien porque yo estoy contento, nada hay que mejorar porque yo estoy bien. Arte antisocial porque no sabe ahondar toda la pesadumbre del dolor humano. (J. Benavente).

Momentos de optimismo, auge económico. Existe un consenso generalizado sobre las brillantes perspectivas de la economía española en la actualidad. Después de muchos años de crisis continuada, los logros en la recuperación casi siempre tienden a magnificarse y, lo que es peor, a ligarse a determinadas políticas como causa-efecto. Decía Galbraith: «A propósito, es curioso cómo se enjuician las recesiones de nuestra época.

Nadie pretende atribuir la responsabilidad a las políticas monetaria y fiscal. La gente, antes al contrario, se resigna a ellas como si se tratase de un fenómeno natural provocado por el encadenamiento fatal de los ciclos económicos. Sólo el relanzamiento de la actividad económica se atribuye a la iniciativa y al esfuerzo consciente de los hombres. Los consejeros económicos del presidente Ford, los ya mencionados señores Simon, Greenspan y Burns,

En economía, y en general en las ciencias sociales, es imposible saber qué hubiera ocurrido si se hubieran aplicado políticas distintas.

frenaron la gran inflación de 1974-1975 precipitando al país a la recesión más severa después de la Gran Depresión. Pero esto se cargó en la cuenta de la curva descendente del ciclo productivo del momento. Más tarde, nuestros tres economistas se felicitaron por haber conseguido una recuperación notablemente rápida de la máquina económica. Disponiendo de un mínimo de aplomo, un economista jamás se equivoca».

En la etiología económica casi todo es posible. Los hechos son irrepetibles y es difícil, por tanto, probar las relaciones causales entre las distintas variables. Todos tienden a apropiarse de los éxitos para justificar determinadas medidas en consonancia con sus ideologías o posicionamiento político, y achacan los fracasos o bien a no haber aplicado suficientemente la teoría en toda su pureza o a fuerzas extrañas e imposibles de controlar. En Economía, y en general en las ciencias sociales, es imposible saber qué hubiera ocurrido si se hubieran aplicado políticas distintas. Por eso, y por mucho que se empeñen los economistas, en la mayoría de los casos las proposiciones económicas tienen poco de carácter científico en el sentido de causa-efecto, y mucho más de opinión, y opinión política.

Un economista chistoso afirmaba que uno de los principales indicadores del auge económico era la moda de la minifalda; aparte de la *boutade* que dicha afirmación

pueda significar se me ocurre que algún economista celoso hubiera encontrado un coeficiente de correlación cercano al cien entre ambas variables.

Si se desea hacer un análisis serio de la economía española, deberá ampliarse la visión más allá de lo que son los puros resultados coyunturales de uno o dos años, para incidir sobre la estructura y relaciones existentes en nuestra realidad y, desde luego, analizarla desde la perspectiva de la economía internacional. El alto nivel de dependencia de la economía española con respecto a la economía mundial supone que la evolución y resultados de la primera estén estrechamente condicionados por la segunda.

A partir de 1973-74, con el encarecimiento del petróleo y de otros productos primarios, se interrumpe en la economía internacional la tendencia de fuertes crecimientos que había caracterizado la década de los 60, invirtiéndose así el ciclo económico. Los distintos grupos socioeconómicos se negaron a aceptar una reducción de sus ingresos reales como consecuencia de las pérdidas impuestas por el empeoramiento de la relación real de intercambio. La consecuencia es un acelerado crecimiento de costes y de precios. La compatible permanencia de bajas tasas de crecimiento con incrementos acelerados de precios acuña en la ciencia económica un nuevo vocablo característico de este período: estanflación.

Los portavoces del conservadurismo económico se apresuraron a anunciar la inadecuación de la teoría keynesiana para solucionar los nuevos problemas que se le presentaban a la economía, y, lo que para ellos era más importante, se precipitaron a atacar la intromisión del sector público, su excesivo tamaño y su función redistributiva.

Los gobiernos se resistieron, sin embargo, durante varios años a adoptar políticas de demanda fuertemente restrictivas que quizá hubiesen podido paliar el proceso inflacionario pero a costa de generar incrementos rápidos en las tasas de paro y aumentos considerables de la marginación social. Muestra de ello es que para el período 74-79 el crecimiento medio acumulativo anual de la Comunidad Económica Europea se situó en el 2,4, inferior ciertamente al de la década anterior pero aún en niveles aceptables y desde luego superiores a los de los años siguientes. Es tan sólo a partir de 1979 con la segunda crisis del petróleo, y con la adopción por Estados Unidos de una política monetaria estrictamente anti-inflacionista, que coincidió con la existencia en casi todos los países de gobiernos conservadores o de coalición, cuando se produce un cambio profundo en las políticas económicas, que adoptan como objetivo primario la reducción de la tasa de inflación pensando que ésta era la mejor forma de poner los cimientos de un crecimiento sostenido.

Durante el período 80-83 la tasa de incremento medio anual de la CEE se situó en 0,9 %, presentándose en algunos países y en determinados años tasas negativas. La situación económica internacional de esta etapa parece que daba la razón a Paul Samuelson cuando afirmaba en *Newsweek* que la mayoría de las veces el remedio contra la inflación es peor que la propia enfermedad, «la inflación que asciende con lentitud es la malaria de la economía mixta moderna; como la malaria, es incómodo vivir con ella y es difícil quitársela de encima, pero a diferencia de lo que ocurre con la malaria, parece que para la inflación en aumento no se conoce ninguna cura que no sea peor que la enfermedad».

En 1983, a medida que los Estados Unidos superaron la recesión de los primeros años 80, se inicia una fase cíclica ascendente de la economía que terminó trasla-

En 1983 se inicia una fase cíclica ascendente de la economía que terminó trasladándose en 1984 a Europa y Japón.

dándose en 1984 a Europa y Japón. No obstante su larga duración, esta etapa se está caracterizando por modestos crecimientos en la producción y en la renta, y por la permanencia de ciertas incertidumbres que no llegan a despejarse, derivadas principalmente de los déficit estadounidenses y a la dudosa capacidad de Alemania y Japón para tomar el relevo de la demanda mundial.

La renta nacional española ha seguido una evolución parecida a la de los demás países europeos. Considerando períodos homogéneos, sus tasas de crecimiento presentan desviaciones reducidas con respecto a la media de la CEE. En el período anterior a la crisis, 61-73, la tasa media acumulativa del incremento del PIB en España es significativamente más elevada que la del Mercado Común, 7,3 % frente a 4,8 %. Durante la etapa de crisis económica, 74-83, el estancamiento es más acusado en España, siendo el crecimiento anual medio algo inferior al europeo. Por el contrario, a partir de la recuperación, para el período 84-87, la tasa media acumulativa del PIB español se sitúa en 2,7 %, mientras que la Comunidad Económica no llega a alcanzar el 2,5 %. Hay por tanto tres etapas bien definidas:

— *Etapa de auge (61-73)*. La economía española crece bastante más que la europea.

— *Período de crisis económica (74-83)*.

***La economía mundial
presenta interrogantes
importantes que hacen
dudar de la elevación de
sus tasas de crecimiento.***

Crecimiento español ligeramente inferior al del Mercado Común.

— *Etapas de moderada recuperación (83-87).*
Crecimiento español ligeramente superior al de la Comunidad.

Esta relativa uniformidad no ha permanecido en el interior de cada etapa, donde la evolución ha podido ser desigual. Por ejemplo, en el último período España ha tardado más en despegar, presentando en los primeros años tasas de incremento del PIB de 1,8 %, inferior a lo que crecían por término medio los países europeos; por el contrario, presenta en los años 86 y 87 un crecimiento mayor que la mayoría de los países occidentales, 3,3 % y 5,2 % respectivamente.

Estas tasas aceptables de crecimiento económico hay que unirles a los efectos de la mejora en la relación real de intercambio, a la incorporación al Mercado Común, a los buenos resultados agrícolas y al impulso de la demanda interna; ésta se ha visto estimulada por un incremento de los salarios reales, un aumento significativo del crédito al consumo y por las ganancias no esperadas tanto del sector inmobiliario como de la especulación bursátil.

Las incertidumbres persisten, no obstante, para el futuro, dado que no cabe esperar nuevos apoyos sustanciales de la relación real de intercambio, ni la permanencia de campañas agrícolas tan favora-

bles. La economía mundial presenta, por otra parte, interrogantes importantes, señalados ya con anterioridad, que hacen dudar de la elevación de sus tasas de crecimiento.

En este panorama de abulia económica mundial, donde parece haberse estancado la mayoría de los países occidentales, no puede olvidarse la diferente situación que España presenta en cuanto al nivel de paro existente. Lo que para otros países puede ser una perspectiva medianamente confortable, y desde luego soportable, para la economía española puede ser un horizonte muy poco halagüeño que condene durante mucho tiempo a la marginación a un sector importante de la población. España presenta una tasa de desempleo a finales de 1987 del 20,5 %, casi el doble que la media de la CEE y desde luego muy alejada de Japón, 2,9 %, EEUU, 6,0 %, Alemania, 8,1 %, Francia, 10,8 %, Inglaterra, 10,9 %. Las estrategias económicas de estos países no tienen por qué ser coincidentes con la nuestra.

Es cierto que en los últimos años se ha generado un número importante de empleos, 57.000 en 1985, 317.000 en 1986, 371.000 en 1987; pero ello no se ha traducido en una disminución sustancial de la tasa de paro, la media de 1987 está aún por encima de la de 1984, debido al incremento experimentado por la tasa de actividad. Esta, como es normal, había ido descendiendo en los años anteriores según se iban destruyendo empleos y se reactiva al originarse nuevas colocaciones. No obstante, el nivel alcanzado por la tasa de actividad en 1987, 49,4 %, no ha superado el que tenía en 1983, 49,5 %, a pesar de la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral.

El análisis de la evolución del empleo por sectores nos plantea algún interrogante sobre la permanencia del ritmo de creci-

miento de la población ocupada. Varios datos hacen dudar de ello:

1.º) tanto en el año 86 como en el 87 este crecimiento se ha generado fundamentalmente en el sector servicios,

2.º) a pesar de que en 1987 la tasa de incremento del PIB fue superior en casi todas las ramas a la de 1986, el empleo no agrario aumentó en 100.000 personas menos,

3.º) en el primer trimestre de 1988 el empleo no agrícola ha descendido en 14.000 personas.

Una de las características más importantes de la actual creación de empleo en la economía española es la sustitución con bastante velocidad del empleo fijo por temporal. En el segundo semestre de 1987 los asalariados con contrato indefinido y a tiempo completo descendieron en 78.000 personas.

El crecimiento económico, medido por el incremento anual de la renta nacional, es un objetivo deseable para la mayoría de los países; como ha dicho Haberler, los gobiernos y los políticos han tomado la costumbre de formular sus metas y medir el éxito de su política económica en términos de renta nacional. Pero no es menos cierto que no existe una identificación perfecta entre crecimiento económico y bienestar social, tendríamos que afirmar si no que la mejor política económica realizada en España hasta la fecha es la del franquismo en los años 60 y 70, con tasas de crecimiento reales del PIB de hasta el 9 %.

Las cifras macroeconómicas descubren parte de la realidad pero casi siempre ocultan bastante más de lo que descubren: dónde se da el crecimiento, con qué medios e instrumentos, qué estabilidad tiene y, sobre todo, qué sectores se ven beneficiados en el mismo son preguntas tan-

to más importantes que la cuantificación estricta de la tasa de incremento del PIB.

Hace 20 años la estructura económica estaba de moda entre los economistas, al menos en España, y en aquel entonces quizá en exceso. Hoy nos hemos olvidado prácticamente de ella, centrándonos en el puro análisis coyuntural de las cifras macroeconómicas; bucear debajo de las mismas sería un ejercicio bastante recomendable.

Es difícil calificar una política de progresista si se marginan de su atención los aspectos redistributivos de la riqueza y de la renta. Muy pocos son los datos disponibles para analizar cómo ha evolucionado la distribución de estas magnitudes. No existe ninguna información sobre las modificaciones y cambios en la distribución de la riqueza y patrimonio de los españoles. Tampoco se puede saber de manera fiable cómo ha evolucionado la distribución personal de la renta.

En defecto, por tanto, de la información anterior habrá que fijarse en la distribución funcional: qué parte de la renta retribuye a los asalariados y cuál queda como excedente empresarial puede ser un índice aceptable de cómo ha variado la concentración de la riqueza.

En los años anteriores a la crisis energética las retribuciones de los asalariados habían ido ganando participación relativa

Una de las características de la actual creación de empleo es la sustitución con bastante velocidad del empleo fijo por temporal.

va en la renta nacional, consiguiendo sobrepasar por primera vez en el año 1972 el excedente bruto de explotación. Esta tendencia ascendente continúa hasta el año 1977 en que las retribuciones de los asalariados alcanzan el 55,2 % de la renta nacional bruta. En este año se produce un punto de inflexión, a partir de entonces, con pequeñas excepciones como la del año 1981, las remuneraciones de los asalariados irán perdiendo importancia relativa. Esta pérdida es mucho más elevada en los últimos años. Mientras que desde el año 77 al 83 la reducción es de 2 puntos porcentuales, del 84 al 86 el descenso experimentado es de casi 4 puntos. En el año 1987 el incremento de los salarios por encima del coste de la vida detendrá esta tendencia incrementando inclusive en 2 décimas la participación salarial en la renta. Desde 1977, por tanto, la participación de las retribuciones de los asalariados se ha reducido en 6 puntos porcentuales en favor del excedente empresarial.

Este mismo fenómeno se observa analizando los datos de la Central de Balances del Banco de España. En todos los años para los que existen datos disponibles, las tasas de crecimiento de los gastos de personal son muy inferiores a los incrementos experimentados en el resultado neto de explotación.

Este deterioro en la distribución de la renta nacional no ha podido ser compensado por la política redistributiva del Es-

tado. El sistema fiscal, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue basándose esencialmente en la imposición indirecta y en las nóminas de los asalariados. Las rentas de capital permanecen casi exentas de tributación. El fraude de los profesionales y empresarios individuales, unido a la carencia de potencial recaudatorio del Impuesto de Sociedades, origina que la presión fiscal sobre las empresas españolas sea muy reducida. El Impuesto sobre el Patrimonio posee un mero carácter simbólico, sin virtualidad alguna a la hora de redistribuir la riqueza.

Por otra parte, la economía española presenta un gran déficit de servicios y prestaciones sociales. Estamos aún muy alejados de lo que son los niveles normales del Estado de bienestar de los países desarrollados. En 1987 la totalidad de los gastos de protección social (enfermedad, pensiones de vejez, seguro de desempleo, ayuda por maternidad, etc.) se eleva aproximadamente al 18 % del PIB, mientras que la media de la CEE se sitúa en torno al 27 %. En este mismo año las Administraciones Públicas gastan en educación alrededor del 3,3 % del PIB, mientras que los países de la OCDE están entre el 6 y el 7 %.

En la Contabilidad Nacional la partida de prestaciones sociales es la que mejor mide el esfuerzo redistributivo del Estado. Esta magnitud representaba en 1979 el 39,6 % de todos los gastos de las Administraciones Públicas, habiendo disminuido a lo largo de estos años su participación para situarse en 1987 en el 34,9 %. El porcentaje que representa del PIB ha permanecido prácticamente constante desde el año 1983, 14,6 %, lo cual choca con las cifras europeas que, además de ser en todos los países muy superiores a las españolas, han incrementado en la mayoría de ellas su participación en el PIB. Resalta el caso de Grecia que, desde el año 1979 al año

Es difícil calificar una política de progresista si se marginan de su atención los aspectos redistributivos de la riqueza y de la renta.

1987, ha experimentado un aumento de 5,6 puntos porcentuales.

Si la cantidad dedicada a las prestaciones sociales en porcentaje del PIB ha permanecido constante, no así el número de beneficiarios. El número de pensionistas se ha incrementado en casi un millón desde 1982 y en casi 2 millones desde 1977. Los desempleados pasan de 682.500 personas en 1977 a 2.942.500 en 1987, por citar tan sólo dos de los mayores colectivos sociales afectados.

Es lógico, por tanto, que las prestaciones individuales se hayan precarizado. En el período 82-87 sólo han ganado poder adquisitivo el 4,7 % de los pensionistas, unos 270.000 —los perceptores de pensión mínima con cónyuge a su cargo— perdiendo o manteniendo, en el mejor de los casos, poder adquisitivo el resto de las pensiones.

La tasa bruta de cobertura de desempleo ha pasado de ser el 46,68 % en 1978 a un 28,97 % en 1987, es decir, que mientras en 1978 casi la mitad de los parados tenía protección, en 1987 menos de la tercera parte de los mismos están cubiertos por las prestaciones de desempleo. No obstante, el número de personas protegidas asciende de 382.130 en 1978 a 847.024 en 1987. El número de beneficiarios se incrementa en un 122 %, en tanto que los que no perciben la protección se incrementan en un 376 %, pasando de 436.370 personas en 1978 a 2.077.076 en 1987.

Los gastos de sanidad en España representan aproximadamente un 3,6 % del PIB, mientras que podemos cifrar este mismo porcentaje en torno al 9,6 % para la media de la CEE. A pesar de que la población protegida se ha incrementado de manera sustancial, pasando del 85,5 % de la población total en el año 1982 al 95,5 % en 1987, las dotaciones dedicadas por las Administraciones Públicas a este gasto no

***En los momentos actuales
España está aún muy
lejos de los niveles de
bienestar de la mayoría
de los países occidentales.***

han variado desde 1982 en términos reales. Ello da idea del deterioro sufrido por esta prestación y del escaso monto de fondos dedicado a la misma.

Este ligero repaso a lo largo de los principales gastos de protección social indica bien a las claras que en los momentos actuales España está aún muy lejos de los niveles de bienestar de la mayoría de los países occidentales.

Quizá determinados países se puedan permitir no incrementar sus gastos de protección social pero caso muy distinto es el de España, teniendo en cuenta los bajos niveles existentes. Lo contrario sería condenar a amplias capas de la población a la marginación y a la miseria.

Dos tópicos están hoy muy extendidos y propagados en los ambientes conservadores, llegando a contagiar hasta a la misma izquierda. El primero de ellos consiste en afirmar que si el crecimiento no es suficiente por sí mismo, sí es totalmente necesario para poder realizar cualquier política redistributiva. «Es necesario agrandar la tarta antes de repartirla», «queremos repartir riqueza, no miseria», se dice en sus mejores formulaciones. El peligro es evidente. Se está presuponiendo que el reparto de la riqueza existente en la actualidad es óptimo y que, por lo tanto, la redistribución debe realizarse tan sólo de lo nuevo, del crecimiento: no hay crecimiento, no hay reparto. Con estos postulados,

el coste de cualquier crisis económica recaerá casi exclusivamente sobre las clases menos favorecidas. No se puede negar que una política redistributiva es más fácil de realizar en épocas de auge que en etapas de depresión; no en balde el Estado del bienestar surge en la mayoría de los países occidentales unido a la expansión económica posterior a la segunda guerra mundial. Redistribuir implica transferir, aumentar las rentas de determinados grupos sociales a costa de otros; eludir este segundo aspecto, ciertamente desagradable, es no querer en realidad la redistribución.

El segundo tópico, muy unido al anterior, es que el crecimiento pone límites a la política redistributiva; es decir, que son incompatibles, que hay que elegir entre ambos o al menos encontrar un equilibrio entre la redistribución de las rentas y las necesidades del aparato productivo como dos objetivos contrapuestos. La aceptación de este principio nos conduciría a afirmar que una sociedad es tanto más eficaz cuanto mayor es el grado de desigualdad existente en la misma. Ni la historia económica ni el análisis comparativo avalan esta tesis. Es verdad que el sistema capitalista se basa en la desigualdad, y que el afán de lucro es para los economistas clásicos el motor primero de progreso.

Al margen de lo cuestionable de la antropología subyacente en estos plantea-

La eficacia económica no puede presentarse como una razón válida, científica, para justificar las desigualdades hoy existentes.

mientos, nadie niega que una cierta desigualdad sea necesaria para el funcionamiento correcto del sistema. Ni siquiera los socialistas utópicos se atrevieron a hacerlo. Pero esta pequeña desigualdad necesaria nada, o muy poco, tiene que ver con los grandes desequilibrios económicos que están presentes hoy en nuestro país.

La eficacia económica no puede presentarse como una razón válida, científica, para justificar las desigualdades hoy existentes; en todo caso sería más bien la excusa que oculta el verdadero motivo: la resistencia de los grupos privilegiados económicamente a perder parte del *statu quo* conseguido.

L.C. Thurow ha puesto en evidencia desde el análisis empírico la absoluta falta de correlación entre el crecimiento real del PIB y el grado de desigualdad existente o la intensidad del esfuerzo redistributivo. En realidad, los diferentes Estados han ido más o menos lejos en sus medidas redistributivas, según políticamente era posible o deseable, pero la casi totalidad de los mismos, no digamos España, está muy lejos de alcanzar cualquier limitación cierta por sus posibilidades económicas.

Los que pretenden limitar una política económica redistributiva basándose en las supuestas dificultades que ocasionaría al crecimiento económico dirigen fundamentalmente sus dardos a la progresividad del sistema fiscal. Intentan resaltar los aspectos desincentivadores que ésta tiene frente al trabajo, el ahorro y la inversión. Se afirma que una política fiscal progresiva reducirá los incentivos al trabajo. Esta afirmación suena a burla grotesca en una sociedad donde el empleo tiende a convertirse en el bien más escaso. Ello sin aducir que las motivaciones laborales, sobre todo en los trabajos mejor pa-

gados, no están exclusivamente limitadas a los incentivos económicos.

Se afirma que un sistema fiscal progresivo actúa negativamente sobre el ahorro, ignorando que éste suele ser a corto plazo una función muy estable de la renta disponible y presenta, por tanto, una gran inelasticidad a las variables fiscales. Olvidan, también, que la tributación puede ser a nivel nacional una forma segura de ahorro forzoso. Es cierto que una política redistributiva puede alterar la función de ahorro nacional al transferir rentas de personas de baja propensión marginal a consumir a otras con propensión marginal más elevada. Pero habría que preguntarse si esta modificación sería relevante y si tal, como afirma Arrow, no «genera» una reorientación más eficaz del ahorro existente. En último término, el Estado siempre puede compensar con su propio ahorro el efecto negativo sobre el de las unidades privadas. Este último aspecto nos conduce a un planteamiento global de la actuación del sector público. Es totalmente inaceptable intentar medir los efectos aislados de la tributación sin relacionarlos automáticamente con el destino que el sector público da a los fondos recaudados; sólo analizando conjuntamente los impuestos con los distintos capítulos de gasto público, y con las variaciones en el ahorro y la inversión pública, se estará en condiciones de juzgar los efectos positivos o negativos de la actuación estatal sobre la economía, y solamente entonces se podrá hablar tal como dice Shoup de las limitaciones de la imposición. Tan sólo aquéllos que parten del apriorismo de considerar al sector público como mucho más ineficiente que el privado, podrán también apriorísticamente estar en contra de cualquier incremento de la actividad estatal.

Mal que bien hoy se acepta que el Estado debe asumir un cierto papel redistributivo en la sociedad. No es una concesión,

es quizá la certeza de que el resultado puro de las fuerzas del mercado generaría una situación insostenible a largo plazo. Muy distinto es aceptar que el sector público intervenga en las funciones de producción. Estas, se dice, deben reservarse fundamentalmente al sector privado de la economía.

La redistribución es una función refleja, secundaria. Antes de redistribuir, hay que distribuir. La distribución se da en el mismo proceso productivo. El «para quién se produce» está presente desde el primer momento del proceso e interrelacionado con las otras dos preguntas clásicas del «qué se produce» y el «cómo se produce». Las tres forman un todo. El qué y el cómo estarán dependiendo del para quién, y viceversa. Quién y cómo se deciden estas cuestiones sigue siendo el problema fundamental, no sólo económico sino también político. Los viejos manuales tenían razón.

Los economistas clásicos asumieron desde el primer momento que la decisión debería adoptarse de una forma natural, sin interferencias, por el libre juego del mercado. Cada persona, persiguiendo sólo su lucro, contribuye de la mejor forma posible al bien común. Una teoría tan extraña sólo podía defenderse coherentemente desde la aceptación de dos postulados. El primero teórico, el segundo práctico. El teórico radicaba en la aceptación de un optimismo filosófico que hundía

***Mal que bien hoy se
acepta que el Estado
debe asumir un cierto
papel redistributivo en la
sociedad.***

***La lucha contra el
desempleo y la inflación
se convierte en la
coartada intelectual para
oponerse a toda
distribución.***

sus raíces en el teísmo. Como Leibniz, pensaban que este mundo era el mejor de los posibles, que existía una armonía preestablecida, que el mundo estaba regido por leyes con un «telos» definido y claro. La transposición al campo social de esta concepción metafísica haría considerar como perniciosa cualquier injerencia que trastocase este orden natural y óptimo. El fundamento práctico era la constatación empírica del modo de comportarse los gobiernos contemporáneos, no había nada en su conducta que permitiese asegurar que su interferencia mejoraría el orden social existente.

Muchos han sido los cambios sociales y económicos acaecidos desde entonces. Hoy los defensores del *laissez-faire* no son deudos del mismo sistema filosófico; sin embargo, siguen afirmando, quizás ya tan sólo con carácter apologético, que persiguiendo cada uno el máximo beneficio se logrará el óptimo económico y social.

Este optimismo desaparece tan pronto como descendemos al plano práctico. Altos niveles de paro permanecen hoy como condicionantes necesarios del sistema económico, y la lucha contra el desempleo y la inflación se convierte en la coartada intelectual para oponerse a toda distribución más justa de la renta. La lógica es evidente si el Estado ha renunciado a actuar directamente en el proceso productivo, si éste ha quedado exclusivamente en manos de las empresas privadas. El creci-

miento económico, la creación de empleo depende entonces de que los beneficios empresariales sean suficientes. Toda la sociedad deberá tener un único fin, lograr que los empresarios obtengan más ganancias, que el excedente empresarial aumente. El Estado deberá rebajar los impuestos tanto como sea necesario, y asumir parte de los costes empresariales. Es el mensaje proclamado por los defensores de la teoría de la oferta: incentivemos por todos los medios posibles la actividad empresarial.

A su vez los asalariados, por un criterio de solidaridad con los desempleados, deberán renunciar a cualquier participación en el incremento de la productividad. Los sindicatos, si no aceptan esta lógica, serán los causantes del paro y de la inflación.

Incremento de los beneficios empresariales..., ¿hasta dónde? Hasta que lo consideren necesario las únicas que tienen la posibilidad de decidir: las empresas. El reparto de la renta ha dejado de ser ya una lucha entre grupos sociales con intereses diferentes. Se ha convertido en un «pierde-gana». Cuando las clases trabajadoras consideren que han incrementado su participación en el ingreso total por acuerdos salariales beneficiosos, pueden resultar en conjunto perjudicados, porque la abstención de los empresarios supone la recesión y el paro.

La entrega de la totalidad del poder económico al sector privado conduce ineludiblemente a un chantaje empresarial: las ganancias del empresario se convierten en una finalidad social.

Sólo un sector público fuerte puede romper este círculo «sisifiano». Es cierto que los dueños del capital, las empresas, sólo invertirán si obtienen un beneficio; pero cuál sea el nivel exigido del mismo dependerá fundamentalmente de las dife-



rentes alternativas de colocación que el sistema económico ofrezca a sus fondos disponibles. Es un tema relativo, no absoluto. La existencia de operaciones especulativas o altamente lucrativas, aunque no sean productivas en sí mismas, desanimará inversiones con más alta rentabilidad social, pero con menor beneficio privado. El tipo de interés juega también un papel esencial a la hora de decidir el nivel de beneficio al que se estará dispuesto a invertir.

La actuación y tamaño del sector público no vienen reclamados por ninguna manía nacionalizadora o estabilizadora, sino por la necesidad de contrapeso que

precisa el sector privado para que el crecimiento y la productividad redunden en beneficio de todos y no en apropiación de unos pocos. El sector público será necesario para romper monopolios y oligopolios, restablecer la competencia, romper las fuentes de ganancias especulativas y sustituir a la iniciativa privada cuando ésta no esté dispuesta a colaborar. Sin un sector público fuerte será difícil que el crecimiento se convierta en bienestar social, y que la riqueza se distribuya de forma más igualitaria. Sin un sector público fuerte será difícil democratizar el poder económico; sin democracia en el poder económico, puede ser que la política sea un mero fuego de artificio.

TRABAJOS Y CRISIS SOCIAL

LIBERTAD, IGUALDAD, JUSTICIA

Y FUNDACIÓN PÚBLICA

EDITORIAL

Desde esta misma tribuna, el Club Siglo XXI, y desde sus respectivas páginas personales y políticas, varios oradores han lanzado durante estos meses una serie de debates...

- J. G. de Miguel
- J. R. Lorente
- J. L. Pons
- J. A. Ruiz
- J. Sánchez Ferrer

El presente libro recoge las ponencias y los debates que se desarrollaron en el seminario de trabajo de la Fundación Pablo Iglesias en febrero y marzo de 1986. El seminario fue organizado por la Fundación Pablo Iglesias en febrero y marzo de 1986 con la colaboración y el apoyo de la Secretaría General de Economía y Planificación y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura.

ov de debates al que supusieron un momento de reflexión y debate social. En el seminario Pablo Iglesias se planteó el problema de la juventud y el futuro de la cultura. El seminario fue organizado por la Fundación Pablo Iglesias en febrero y marzo de 1986 con la colaboración y el apoyo de la Secretaría General de Economía y Planificación y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura.

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS

FUNDACION

PABLO

IGLESIAS

REPARTO DE

TRABAJO Y

CRISIS SOCIAL

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS

El presente libro recoge las ponencias y los debates que se desarrollaron en el seminario «Reparto de trabajo e integración social de los jóvenes», organizado por la Fundación Pablo Iglesias en febrero y marzo de 1985, con la colaboración y el apoyo de la Secretaría General de Economía y Planificación y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura.

Reparto de trabajo y crisis social
Fundación Pablo Iglesias
Editorial Pablo Iglesias
367 págs. 1.600 ptas.

¿Es urgente e imprescindible intervenir en el mercado de trabajo para repartir de otra forma el tiempo que cada persona dedica a trabajar? ¿Es al menos necesario? En caso de hacerlo, ¿cómo es más conveniente, flexibilizando el mercado, disminuyendo el período de vida activa o acortando la jornada? ¿Es éste el momento apropiado o conviene aguardar la bonanza económica? ¿Cuánto más pueden esperar los jóvenes?

La respuesta a estas preguntas depende en gran parte de la siguiente alternativa: o bien se considera que la llamada crisis es un efecto directo y único de la conjuntura económica, o bien se interpreta que la situación económica actual no es sino un factor más de la profunda transformación de la estructura social que se está produciendo en los últimos años.

Este libro aporta elementos para el debate sobre cuáles pueden ser los caminos que nos lleven de un modo más justo y eficaz a la mejora de la situación laboral en España.

J. Carabaña, I. Cruz, A. de Miguel,
A. Espina, Ll. Fina, A. García de Blas,
L. Garrido, E. Gil Calvo,
E. Lamo de Espinosa, J.R. Lorente,
J.L. Malo, E. Punset, G. Rodríguez Cabrero,
L.A. Rojo, S.M. Ruesga, F. Sáez Fernández,
J. Sánchez Fierro, J.M. Sánchez Molinero,
L. Toharia, J.M. Zufiaur.

Pedidos:

Editorial Pablo Iglesias

C/. Monte Esquinza, 30 - 28010 Madrid

Tels.: 410 46 96 - 410 47 98



IGUALDAD, LIBERTAD Y HACIENDA PÚBLICA

José BORRELL FONTELLES

Desde esta misma tribuna, el Club Siglo XXI, y desde sus respectivas posiciones personales y políticas, varios oradores han lanzado duros ataques contra nuestra Hacienda Pública (la Hacienda de todos, ellos incluidos). No estoy aquí para responderles. Pero sería necio ignorarles porque sus argumentos definen la naturaleza política del debate sobre la Hacienda Pública en el horizonte, ya mítico, de 1992.

Por muchos tecnicismos que incorpore, se trata de un debate político. La fiscalidad, entendida como el ingreso y gasto público, constituye el núcleo duro de la acción política. Limitar coactivamente las rentas individuales y arbitrar entre las utilidades personales y colectivas es política en estado puro. La fiscalidad refleja y provoca el emerger de

nuevos valores sociales y de nuevas formas de organización política.

Recordemos que fue la voluntad de votar el impuesto lo que hizo nacer en Inglaterra la democracia representativa. Fue el rechazo de pagar impuestos a la metrópoli lo que generó el movimiento de independencia de Estados Unidos. Fue el ad-

***Recordemos que fue la
voluntad de votar el
impuesto lo que hizo
nacer en Inglaterra
la democracia
representativa.***

venimiento de la democracia en España lo que hizo posible la primera reforma fiscal. Será la fiscalidad el principal instrumento de la construcción política europea, homogeneizando el espacio económico y poniendo en común los recursos y políticas que nos unirán en una comunidad de intereses.

Hoy, en todos los países democráticos, cada vez que se modifican los impuestos la opinión se agita y la agitan. Es normal y saludable que así sea, aunque el debate sea, a veces, duro y agrio. Menos polémico, en todo caso, que el que a principios de siglo agitó a Francia cuando Josef Cailiaux intentó introducir el impuesto sobre la renta. La abyecta campaña que se desató contra él provocó que su mujer matase a tiros al director del principal periódico de la época. Les aseguro que, por el momento, no he observado ninguna tendencia asesina en los miembros de mi familia.

Sin llegar a estos extremos, la polémica fiscal está justificada porque el debate sobre la Hacienda Pública es el debate sobre los límites de la acción colectiva.

Pero, para que este debate tenga sentido, debiera referirse simultáneamente al ingreso y el gasto público, porque sólo el gasto público justifica el ingreso público, y sólo su análisis conjunto permite valorarlos en términos de coste/eficacia. Los impuestos son medios para conseguir fines. No tienen sentido ni razón de ser por

sí mismos. Así, un impuesto sobre la renta puede ser muy progresivo en su concepción y en su aplicación práctica. Pero esta progresividad puede verse neutralizada e incluso invertida según el uso que se haga de los recursos así recaudados. A pesar de la evidencia de esta constatación, en España somos especialmente víctimas de la reducción de los mecanismos fiscales a su estricta componente tributaria. Para los españoles, Hacienda igual a impuestos.

En realidad, la disociación entre costes sin contrapartida inmediata y directa, y los beneficios difusos o diferidos que se reciben de forma gratuita, es consustancial con los mecanismos fiscales. El remedio contra la esquizofrenia del ciudadano-contribuyente, siempre dispuesto a reclamar más y mejores servicios y siempre tentado a rehuir su parte de carga, es más cultural que económico. Pasa por aumentar los niveles de información y la capacidad de comprensión de fenómenos inevitablemente complejos. Complejidad que sin duda ha aumentado con la estructura autonómica del Estado.

Esto es sólo posible en un régimen de libertades. En una dictadura el impuesto es una requisita que nos viene «Impuesto» por una voluntad arbitraria carente de legitimidad, cuyas contrapartidas aparecen como un elemento graciable o aleatorio fruto de esta misma voluntad arbitraria.

En ausencia de libertad el interés por el impuesto obedece al objetivo de evitarlo. Las contrapartidas, si existen, son gratuitas. Siendo tan corta nuestra andadura democrática, no es de extrañar que la mentalidad colectiva refleje todavía estas actitudes. Desde esta perspectiva, las justificaciones que dan algunos contribuyentes de su comportamiento fiscal aparecen como una versión ácrata del rechazo al sistema político, referido esta vez al Estado de Derecho. Pero seamos optimistas y pensemos que no hace muchos años no

solamente no hacía falta justificarse sino que se podía presumir públicamente de estas actitudes.

Hay otras razones que animan el actual debate sobre la Hacienda Pública en toda Europa:

a) *El rechazo del Estado y sus intervenciones*, como consecuencia de la dimensión alcanzada por el sector público, los problemas de eficacia en su gestión que se han puesto de manifiesto, la inadecuación de algunas políticas a la cambiante realidad social, y la contestación generada por el emerger de un nuevo individualismo.

b) *La perceptibilidad creciente del esfuerzo tributario, para ciertos grupos socioeconómicos*, como consecuencia de una mejor aplicación de los impuestos y el reforzamiento de los controles fiscales.

Estos fenómenos se han producido en España de forma rápida e intensa. Casi todo lo que le puede ocurrir a una Hacienda moderna nos ha ocurrido en apenas 10 años. Lo que otros países con mayores niveles de cohesión social, cultura y estabilidad política han ido construyendo en medio siglo, nosotros lo hemos deglutido a paso de carga. Esta intensidad y rapidez explica buena parte de nuestros problemas, pero no debiera desfigurar su dimensión relativa en comparación con los que se plantean en otros países.

El mundo occidental se divide hoy en tres grupos de Estados en función de la parte de su producto que se colectiviza a través de los mecanismos fiscales:

a) *Los países «liberales»*, de larga tradición de economía de mercado, como EE.UU. y Japón, cuyas Administraciones Públicas absorben, a través de contribuciones coactivas (cotizaciones sociales e

impuestos), en torno a 1/3 de su producto nacional.

b) *Los países centro-europeos*, que han vivido el desarrollo del denominado Estado de bienestar, cuya presión fiscal se sitúa entre el 40 y el 50 %.

c) *Los países de economía «socializada»*, del norte de Europa, en los que la relación cargas fiscales/producto supera el 50 %.

España pertenece claramente al primero de estos grupos. La relación impuestos/PIB, del conjunto de las Administraciones Públicas se cifra en torno al 33 % de la riqueza nacional, como Japón y EE.UU. No se trata de un juicio de valor discutible sino de un hecho empírico constatable. Los cambalaches estadísticos acerca del famoso «esfuerzo fiscal» no pueden tomarse en serio técnicamente. Si se quieren hacer comparaciones de este tipo habría que analizar la presión fiscal que tenían los países europeos cuando tenían los mismos niveles de riqueza que España tiene hoy. La respuesta es tremendamente significativa:

Año en el que alcanza el mismo PIB per cápita ponderado por un índice de paridad de poder adquisitivo que

País	Presión Fiscal	España en 1987
Francia	42	1980
RFA	38	1980
Inglaterra	36	1981
Bélgica	44	1981

La conclusión es evidente. El debate político sobre la dimensión del Estado no

La polémica fiscal está justificada porque el debate sobre la Hacienda Pública es el debate sobre los límites de la acción colectiva.

puede plantearse en los mismos términos al norte que al sur de los Pirineos. Lo cual no quiere decir que no tengamos que plantearlo.

En cambio, el incremento de la presión fiscal efectiva que perciben en España núcleos y sectores influyentes de la población es mayor que en Europa debido a:

a) La política tributaria claramente redistributiva del gobierno socialista, que sólo ha corregido de forma selectiva el efecto de la inflación.

b) El fin de la impunidad fiscal y de las endémicas situaciones de fraude.

Por estas y otras muchas razones, en el debate fiscal tendrá un papel determinante el arbitraje que efectuemos entre los valores, a veces contradictorios, de libertad e igualdad.

¿Es realmente la Hacienda Pública un enemigo de las libertades individuales? ¿Contribuye a dar contenido efectivo a las libertades formales? ¿En qué medida es un poderoso instrumento al servicio de la igualdad o acaba creando desigualdades nuevas y más poderosas que las que intenta corregir? Me temo que yo mismo tenga, junto con algunas convicciones, más interrogantes que compartir que incommovibles certezas que exponer acerca de algo tan complejo y pluriforme como el presuntuoso título de esta conferencia.

Igualdades

Menciono las igualdades, en plural, porque la igualdad es un concepto falsamente simple cuyas diversas manifestaciones no son todas igualmente positivas. Algunas igualdades constituyen una restricción demasiado fuerte para la libertad y comprometen la eficacia. La estricta igualdad ante la Ley no debe conducir a la exigencia igualmente estricta de otras igualdades. La desigualdad aparece como un problema moral y político cuando se convierte en injusticia. Aún con esta precaución, creo que la búsqueda de las igualdades sociales debe constituir un objetivo fundamental al que hay que estar dispuesto a sacrificar algunos de los componentes narcisistas de la libertad individual.

La izquierda no puede sentirse cómoda cuando existen excesivas diferencias entre los individuos, las regiones o las naciones. Ni siquiera la igualdad de oportunidades, objetivo prioritario e inmediato, debiera satisfacerlos. Una mayor igualdad (¿o sería mejor decir equidad?) debe ser un objetivo fundamental, al que no podemos dejar de contribuir fiscalmente so pretexto de que los sistemas redistributivos han alcanzado sus límites.

No neguemos los efectos perversos de algunas políticas redistributivas. Por arriba, desmotivando a personas cuya contribución al enriquecimiento común es decisiva para la prosperidad general. Por abajo, porque corremos el riesgo de inducir actitudes irresponsables que mantienen larvados los problemas en vez de resolverlos. Corrijamos estos excesos. Pero resistámonos a los hipócritas que pretenden justificar las desigualdades sociales a través de la desigualdad natural.

No todo el mundo está igualmente dotado para dirigir una empresa o componer una sinfonía. Pero la desigualdad social se manifiesta cuando un niño sufre

carencias alimenticias; cuando otro no puede seguir los estudios para los que estaba dotado; cuando otro hereda una empresa que no hubiera sido capaz de crear; cuando la inflación arruina a unos y enriquece a otros. Estas desigualdades nada tienen que ver con las desigualdades naturales. Al contrario, las enmascaran y las invierten. El resultado es la injusticia, pero también la ineficacia. La sociedad entera sale perdiendo.

Les propongo dos aproximaciones al análisis de la interacción entre igualdades y estructuras fiscales: *la igualdad ante el impuesto y la igualdad a través del impuesto.*

Igualdad ante el impuesto

La igualdad ante el impuesto es un viejo principio que se proclama ya en el artículo 13 de la Declaración de los derechos del hombre de 1789.

Una vez definida la norma fiscal, la igualdad ante el impuesto exige tres condiciones: que se aplique a todos los contribuyentes, por todas sus rentas, y que éstas se evalúen con el mismo rigor. Desde este punto de vista, la igualdad ante el impuesto conseguida después de la reforma de 1978 ha dejado mucho que desear, creando desigualdades que han comprometido gravemente la equidad de nuestro sistema tributario y que sólo ahora empezamos a corregir.

Permítanme explicar por qué en 10 razones concretas:

1. La reforma de la imposición directa de 1978 puso la carreta de la teoría fiscal varios kilómetros por delante de los bueyes de la realidad sociológica del país y de la capacidad de la Administración Tributaria para exigir su aplicación.

En una dictadura el impuesto es una requisa que nos viene

«Impuesto» por una voluntad arbitraria carente de legitimidad.

2. Su presentación social se basó casi exclusivamente en mensajes éticos, obviando las referencias represivas. Proclamamos que Hacienda éramos todos, pero poco se hizo para verificarlo ni para conseguirlo. A la vista del millón y medio de contribuyentes que han aflorado en los dos últimos años, parece que no éramos todos.

3. Las exigencias de información que requería la correcta aplicación de figuras tributarias como las diseñadas no fueron adecuadamente valoradas, ni se consiguieron imponer a los agentes económicos.

4. La supresión brusca del sistema de evaluación global permitió que muchos contribuyentes no se incorporasen al nuevo sistema.

5. Los sistemas de estimación objetiva singular determinaban rentas impositivas muy por debajo de las reales, especialmente para el sector agrario.

6. La tributación de las plusvalías ha significado una verdadera catástrofe para la equidad. Los contribuyentes con elevados patrimonios empezaron la nueva época fiscal con una reserva de impuestos que les ha permitido llegar hasta 1985 vírgenes de contribución alguna. Con la dictadura pagaban poco, pero con la democracia no pagaron nada.

7. La existencia de un tipo medio máxi-

mo convertía el impuesto en estrictamente proporcional para los altos niveles de renta, que no se vieron afectados por el incremento de progresividad producido por la inflación.

8. La inexistencia de un sistema de sanciones desincentivador y la inoperancia del delito fiscal ofrecía unos amplios márgenes de impunidad a los que optaron por hacer caso omiso del sistema.

9. El sistema de retenciones en nómina actuó como una poderosa anestesia sobre los asalariados, a quienes hizo poco perceptible, y por tanto más fácilmente aceptable, su carga fiscal.

10. La congelación de la reforma de la imposición indirecta cortocircuitó los sistemas de información que hubiesen permitido conocer los niveles de actividad de los sectores empresariales y profesionales.

El resultado es de sobra conocido: las rentas salariales, sin problemas de información asociados, con posibilidad de retención y declaradas por un tercero acabaron soportando la mayor parte de la carga. A la vista de los resultados, parece que el buen slogan de 1979 hubiese sido «Hacienda somos todos los asalariados más los que buenamente quieran».

Esta situación explica que la implantación del nuevo sistema tributario apenas presente conflictividad, porque sus defi-

***Casi todo lo que pueda
ocurrir a una Hacienda
moderna nos ha ocurrido
en apenas diez años.***

ciencias permitían a las rentas menos identificables y más elevadas permanecer al margen del mismo. El precio social pagado era la insostenible desigualdad ante el impuesto que se había generado. El precio de intentar corregirla es afrontar el conflicto con los sectores afectados, que ven cómo se corrigen las situaciones en las que se habían cómodamente instalado.

Igualdad a través del impuesto

Inagotable tema. Cada día más rico y complejo a medida que crecen y se diversifican las intervenciones públicas. Intervenciones permanentemente amenazadas por el riesgo de confundir las intenciones piadosas con las buenas políticas (solidaridad de la razón y solidaridad del corazón) o creer que quien más consigue es quien más exige (la cultura de la reivindicación, herencia histórica de la izquierda).

Reconociendo estas disfunciones, creo que es necesario defender una tesis básica en este terreno: la economía de mercado (antes llamado sistema de producción capitalista) es un generador autónomo de desigualdades; la fiscalidad es, y será cada vez más, el instrumento básico de su permanente corrección; pero cada vez más deberán tomarse en cuenta las consideraciones de coste y eficacia de las políticas públicas y la aportación del producto fiscal por los grupos organizados de una sociedad corporativa.

Permítanme avanzar algunas ideas en esta dirección:

— Es preciso definir las igualdades esenciales: aquellas que se establecen delante de la cultura, la enfermedad y la muerte. Están mejor servidas, con carácter general, desde la acción colectiva que desde las relaciones de oferta y demanda privada, aunque su consecución obliga a considerar los problemas de gestión que apare-

cen en la producción de estos bienes públicos.

— La desigualdad más importante, fuente de muchas otras, es la del paro. La lucha contra el desempleo debe ser una prioridad fiscal más importante que la reducción de otras desigualdades, porque es más grave para una persona verse excluido del sistema económico que vivir con una renta modesta. Ello obliga a considerar el coste, en términos de empleo, de los recursos que se drenan para atender otras políticas públicas y la eficacia de las actuaciones públicas generadoras de economías externas que incrementan la competitividad y favorecen el empleo.

— La consecución de niveles aceptables en las igualdades básicas exige el crecimiento. Redistribuir la actual riqueza, manteniéndola globalmente constante, no basta con corregir las desigualdades. Por tanto, las medidas redistributivas deben valorarse también en términos de su impacto sobre el crecimiento a medio plazo.

— Las formas de producción que protagonizarán este crecimiento incorporarán tecnologías que elevarán la productividad del trabajo, de forma que el sector «mercante» de la economía no absorberá la oferta de trabajo disponible. La fiscalidad deberá drenar la productividad acumulada en este sector para financiar las demandas que sólo el sector «no mercante» de la economía podrá satisfacer, generando a la vez los niveles de empleo complementarios. Ello exigirá que los activos del «sector mercante» acepten disminuir sus niveles de consumo privado con respecto a los que podrían obtener gracias a su posición en el sistema productivo. Es evidente que ello no se hará sin resistencias y que los poderes públicos, en su papel de árbitros, tendrán que enseñarle la tarjeta roja a más de un jugador recalcitrante, aunque éste sea el más genial delantero del equipo.

El debate político sobre la dimensión del Estado no puede plantearse en los mismos términos al norte que al sur de los Pirineos.

— La generación de recursos fiscales, y su circulación a través de los circuitos administrativos hasta su empleo final, constituye un gigantesco juego de suma nula de la sociedad consigo misma. Pero no parece así para los distintos sectores sociales, que intentan, todos, convertirlo en un juego de suma positiva para cada uno de ellos, intentando aportar lo menos posible al pastel común y retirar en su provecho la mayor de las tajadas. Algunos de los sectores más glotones y que mejor librados salen en el reparto tienen además la desfachatez de pasarse la vida gritando que todo irá mejor si el pastel fuese más pequeño. Este fenómeno, al que he llamado la «oligopolización de la sociedad», merece un análisis específico porque su impacto sobre la igualdad a través del impuesto es mucho mayor que el de todas las deficiencias de gestión del sector público juntas.

En efecto, los gobiernos están cada vez más sometidos, en todos los aspectos de su acción, a la influencia de múltiples grupos de presión. A través de ellos cada ciudadano tiende a privilegiar su actitud, como miembro de una coalición organizada que busca una ventaja específica, a su interés genérico como contribuyente.

De esta forma, en el viaje de ida y vuelta, desde la sociedad que los genera a la sociedad que los recibe, los recursos fiscales se ven asaltados por las presiones de los grupos organizados (desde los agricul-

El incremento de la presión fiscal efectiva que perciben en España núcleos y sectores influyentes de la población es menor que en Europa.

tores a los controladores aéreos, pasando por los maestros, las feministas, los médicos, etc.). Naturalmente, todos invocan el interés general o alguna altruista consideración, como la gratuidad de la justicia, para justificar sus reivindicaciones.

Este fenómeno constituye una grave amenaza para la equidad de los mecanismos fiscales, porque establece la regla del chantaje más fuerte como criterio de asignación de los recursos colectivos. Se trata de conseguir desviar los beneficios hacia minorías estructuradas, haciendo soportar su coste por la mayoría de los ciudadanos-contribuyentes, que lo soportan porque no son conscientes de que las concesiones que el Estado se ve obligado a hacer los paga con su dinero.

Sin embargo, algunos grupos organizados tienen una función positiva como transmisores de información, o incluso como mecanismo de articulación de preferencias sociales. La responsabilidad del Estado consiste, en todo caso, en no ceder al chantaje.

Infinidad de ejemplos podrían, y deberían, ser estudiados para analizar la progresividad real del destino de los recursos colectivizados por mecanismos fiscales. Irían desde los ejemplos micro, casi individuales, como las retribuciones absurdamente altas de algunos asalariados del sector financiero público, a las interven-

ciones de apoyo a sectores productivos afectados por la crisis.

En efecto:

— Las Haciendas Públicas europeas han destinado cuantiosos recursos para amortiguar el choque sobre las estructuras productivas de los cambios tecnológicos o de la demanda, cuando este choque ha sido demasiado brutal en términos sociales. La crisis industrial, el mantenimiento artificial del empleo y la inevitable reconversión han constituido un escenario donde las relaciones de fuerza entre los agentes económicos y sociales han generado manifiestas desigualdades en el acceso a esta función protectora. En general, las industrias poco concentradas, dispersas en el territorio y poco sindicalizadas, han recibido escasas ayudas públicas, a pesar de haber disminuido su empleo en cientos de miles de puestos de trabajo. Por el contrario, las industrias concentradas, con mano de obra especializada, a veces bien retribuida y fuertemente sindicalizadas, han sido sostenidas en todo los países. Las ayudas máximas se han producido cuando los sectores o industrias afectadas están insertas en un tejido regional (sea éste la Lorena, el Sarre o Asturias) o apoyadas por razones de seguridad nacional. Es decir, cuando se han conjugado las presiones sindicales, patronales, regionales y políticas para exigir la aplicación de una parte importante del producto fiscal. En España durante los años de crisis, se perdieron 800.000 puestos de trabajo en las pequeñas unidades de producción dispersas en el minifundio empresarial. Aquí y allá, uno a uno, sin hacer ruido, desapareció el empleo sin recibir grandes, por no decir ninguna, ayuda pública. El trato diferente, y el coste para la Hacienda Pública han tenido los procesos de reconversión de los grandes sectores navales y siderúrgicos, constituye sin duda una manifiesta desigualdad a través del impuesto.

— Estas desigualdades se enmarcarán a veces gracias al juego de las apariencias y de la percepción sociológica de los fenómenos productivos. Se aceptan así más fácilmente los apoyos concedidos, con cargo a los ingresos fiscales, a unos sectores que a otros. La minería está peor considerada que la agricultura, por ejemplo. Mantener artificialmente el empleo de los mineros del carbón está peor visto que hacerlo con los productores europeos de mantequilla, cuando en el fondo se trata del mismo fenómeno de desajuste estructural entre producción y demanda que se paga con el impuesto de todos. La política agrícola común no es sino una gigantesca Hunosa, pero no se percibe ni se considera como tal, generando una nueva clase de desigualdades a través del impuesto.

La capacidad de los mecanismos fiscales para contribuir eficazmente a la igualdad social dependerá de la eficacia de estas intervenciones y de la producción de bienes y servicios públicos, mucho más que de la perfección de las figuras tributarias.

Esta eficacia deberá analizarse en una doble perspectiva:

a) *Como la relación entre los resultados obtenidos y los objetivos perseguidos por las políticas de gasto público*, que cada contribuyente percibe a través de la calidad del servicio que él, personal e individualmente, recibe, sin considerar el número de beneficiarios que tienen acceso al mismo. Cada español sabe como le atienden en su hospital, el juzgado o su colegio. Cada jubilado conoce la cuantía de su pensión. En su percepción del fenómeno no entra en línea de cuenta el número de españoles que han accedido a la cobertura sanitaria pública, ni el número de plazas escolares nuevas o las variaciones en la relación activos/pasivos. Y, sin embargo, la búsqueda de la igualdad a través del impuesto quizá no debe consistir prioritariamente en elevar la calidad media restrin-

giendo el número de beneficiarios, sino en aumentar el número de éstos aunque sea a coste de una disminución en la calidad media.

Las ineficiencias en la gestión de los recursos fiscales los paga el ciudadano-contribuyente, desde luego. Como los paga el ciudadano-consumidor cuando estas ineficiencias no son corregidas por el efecto balsámico y purificador de la competencia. En este sentido, todos somos también algo contribuyentes cuando pagamos el recibo de la luz, porque su precio incluye el coste de los errores de gestión cometidos por el sector privado. La tarifa eléctrica, fijada por una disposición administrativa, incluye una componente tributaria adicional al IVA que figura explícitamente en el recibo.

Las ineficiencias de unos no justifican las de otros. Ciertamente. Pero a veces conviene recordar que el sector público no es la acumulación de todos los defectos de gestión y que el privado no siempre optimiza, en beneficio de todos, el uso de los recursos que consume. No puedo aventurarme a entrar a considerar las causas específicas de los problemas de la gestión de recursos públicos, entre los que desde luego citaría las dificultades para utilizar adecuadamente el factor humano. Pero sí estoy convencido de que el futuro de los mecanismos fiscales se jugará cada vez más en la calidad de gestión de los servicios públicos.

No podemos dejar de contribuir fiscalmente a una mayor igualdad so pretexto de que los sistemas redistributivos han alcanzado sus límites.

b) *Como el impacto en el sistema económico de la generación de los recursos fiscales.* El impuesto neutral no existe. Por mucho que teorizamos, en la práctica toda cuota tiene una base y por su propia existencia modifica los comportamientos de los agentes económicos. Uno de los mayores problemas de nuestros sistemas fiscales es el de transformar los costes fijos al nivel del Estado en costes proporcionales a los salarios al nivel de la empresa. Los arbitrajes que tendremos que diseñar entre las distintas figuras fiscales para modificar esta situación seguirán animando un debate con mil aristas. En todo caso, no parece que sustituir cotizaciones sociales por IVA sea eficiente en términos económicos. El «*trade-off*» debiera establecerse más bien con el impuesto sobre la renta, sobre los beneficios y sobre el patrimonio. ¿Está nuestra sociedad, especialmente los grupos más sensibles al impuesto, preparada para ello?

El problema es importante porque afecta a los niveles de empleo que el sector «mercante» genere en función de los costes relativos de los factores. Producir primero, con un número limitado de activos, y redistribuir después el resto, es una política que tiene sus límites. En realidad, producción y redistribución no pueden verse como fases secuenciales e independientes.

La experiencia empírica disponible en

La igualdad ante el impuesto se proclama ya en el art. 13 de la Declaración de los derechos del hombre de 1789.

Europa ya lo demuestra claramente (en España no existen estudios parecidos); en 1985, una familia francesa media recibía a través de las prestaciones sociales la *mitad* de lo que ganaba por su actividad propia. Esta relación era de 1/3 en 1965. Sin embargo, el efecto redistributivo de esta enorme masa de transferencias sociales es menos importante de lo que su propio volumen haría pensar: el abanico de las rentas sigue siendo sensiblemente el mismo en 1965 que en 1985. Si esto es cierto (y las evidencias estadísticas nunca son irrefutables), la estrategia de dejar que las fuerzas del mercado produzcan para que, después, las fiscales redistribuyan no parece ser el camino más idóneo para la búsqueda de la equidad. Esta debería buscarse también a través de la distribución por el mercado de las rentas iniciales, antes de que intervengan los procesos de redistribución.

Tendencias

Lo que no parece ofrecer ninguna duda es que las perspectivas que se perfilan para las distintas intervenciones públicas apuntan todas estructuralmente al alza:

— La democracia y el incremento de la esperanza de vida incrementarán el gasto en pensiones.

— El incremento en la escolaridad obligatoria y las necesidades de formación incrementarán el gasto en educación.

— La demanda social de salud crece más deprisa que la renta y generará un mayor gasto en sanidad.

— El retorno al pleno empleo será lento y exigirá mayores gastos en protección de los parados y fomento del empleo.

— El desarrollo económico exigirá suprimir los cuellos de botella que represen-

tan los déficits en infraestructuras de todo tipo.

— La competitividad de las empresas necesitará apoyos en actividades (investigación, educación, promoción de la exportación, etc.) que, por sus economías de escala, tenderán a ser administradas por los poderes públicos.

¡Buena les espera a los ministros de Hacienda!

Las libertades

¿Y las libertades? ¿Por qué en plural? ¿Es que hay categorías, clases o grados de libertad? En abstracto, no. Pero la Historia ha adjetivado la libertad, contraponiendo, fáctica y dialécticamente, libertades formales y libertades efectivas por un lado, libertades individuales y colectivas por otro.

Hoy, en el complejo contexto de nuestra sociedad, la organización de las manifestaciones de la libertad individual plantea delicados problemas políticos, derivados de la necesidad de definir restricciones a las actuaciones de cada ciudadano en los distintos roles que puede ejercer, sean éstos los de automovilista, contribuyente, padre de familia o policía.

Obvio. Pero, por las restricciones que impone, derivadas inevitablemente de las exigencias de información que requieren los sistemas fiscales modernos, la Hacienda Pública es, hoy, denunciada por ciertos sectores de la opinión como un enemigo de las libertades. Estos ataques responden a distintas actitudes o intereses.

En primer lugar, por la lógica dialéctica de crítica entre gobierno y oposición, en un tema especialmente sensible a la opinión pública. Están, en segundo lugar, las personas o sectores afectados en su impu-

nidad fiscal por las medidas de gestión tributaria, análogas a las que aplican países con honda tradición democrática, necesarias para garantizar la correcta aplicación de las leyes.

El primer fenómeno forma parte de las reglas del juego. Sus manifestaciones son saludables y necesarias, aunque sería de desear que las normas fiscales se criticasen por sus contenidos reales y no por los que se le atribuyen, a veces por ignorancia y a veces, supongo, por mala fe.

Para ello sería bueno, y quizá no fuese demasiado pedir, que los señores diputados en particular y los representantes de la famosa sociedad civil en general se leyesen las leyes antes de criticarlas. Evitaríamos así el bochornoso espectáculo del diputado que acusa al Gobierno de que su ilimitada voracidad fiscal grava con el IVA hasta la sangre (sí, señores, la sangre de la Cruz Roja, elemento simbólico de vida, muerte y solidaridad), cuando en realidad la sangre está exenta del IVA según establece con todas las letras la ley del Impuesto que su señoría votó.

Pero cuando un ciudadano, por notorio que sea socialmente y por mucho que destaque en su profesión, incumple sistemáticamente y por largo tiempo sus obligaciones fiscales, no debiera encontrar mucho eco su protesta contra las actuaciones sancionadoras de la Administración Tributaria ni sus críticas a los servicios pú-

***La presentación social
de la reforma de la
imposición directa de
1978 se basó casi
exclusivamente en
mensajes éticos.***

La inexistencia de un sistema de sanciones desincentivador y la inoperancia del delito fiscal ofrecía unos amplios márgenes de impunidad.

blicos que tan diligentemente había olvidado contribuir a financiar. Y, sin embargo, me temo que encuentra más eco del que debiera. Y ello como consecuencia del caldo de cultivo que está generando un tercer componente de esta actitud de denuncia de la Hacienda Pública como enemigo de las libertades.

Me estoy refiriendo a los representantes de un nuevo libertarismo, exponente radicalizado y egocéntrico de los nuevos valores de autonomía individual y del cultivo del yo que afloran en las sociedades occidentales desarrolladas. Son los nuevos ácratas. Los gauchistas del neoliberalismo. Su cultura económica y fiscal es muy escasa, pero no importa, la suplen con unas vagas referencias a Orwell, de cuyos libros posiblemente hayan leído la contracubierta. Su mensaje tiene una cierta seducción, como lo han tenido siempre los mensajes de liberación individual o colectiva. Algunos tienen además la pasión militante, el vigor, la insolencia y una pluma ágil, como la tenían los radicales europeos de hace 15 años.

Sus críticas al Estado y a la Hacienda Pública como elemento vertebrador de la acción colectiva van mucho más lejos de lo que justifican las ineficiencias y disfunciones de un sector público que no ha acabado de digerir su propio crecimiento. En realidad, son consecuentes con sus intereses económicos aunque no sean conscientes de ello. Una cosa es predicar las

ventajas redistributivas de un impuesto progresivo y otra es soportarlo cuando el éxito nos coloca en los tramos de tipos marginales altos.

Han caído en la trampa que nos acecha a todos: empezar a pensar cómo vivimos olvidando vivir como pensábamos. Y cuando echan sus cuentas y constatan, con razón, que, a sus niveles de renta, la Hacienda Pública les devuelve menos de lo que les exige, debieran entender que se trata precisamente de esto y que alguien, en el cuerpo social, recibe la diferencia. El problema se plantea en términos de igualdades y de eficacias, no en términos de una concepción cuasi narcisista de su libertad.

Pero podría ocurrir que el atractivo simbólico del mensaje, la notoriedad de quienes lo enuncian, la resonancia que adquiere y la elevada dosis de raciocinio que exige detectar su inconsistencia, minase el imprescindible reconocimiento social de la legitimidad de las actuaciones de la Hacienda Pública.

Con ello no quiero negar la necesidad de un debate permanente entre derechos individuales y necesidades colectivas. Al contrario, debiéramos debatir más cuestiones tan trascendentes. Pero el debate que necesitamos es un debate de calidad, desde la información, el conocimiento y la responsabilidad de plantear alternativas coherentes y viables. Sin estos requisitos es fácil gargarizarse pidiendo genéricamente la simplificación y racionalidad del sistema tributario, como grandes objetivos con los que resulta difícil discrepar pero que están vacíos de contenido si no se precisa en qué consisten y cómo se pretenden conseguir.

¿Quién está en contra de la simplificación? Todo el mundo prefiere un impuesto sencillo a un impuesto complejo, siempre que la mayor simplicidad no comprometa otros objetivos igualmente desea-

bles. Simplicidad y equidad suelen ser contradictorios en materia tributaria. Los incrementos en uno de estos objetivos se suelen conseguir a costa del otro.

En realidad no se puede evitar pensar que las llamadas a la simplificación (sinónimo de liberación fiscal) encierran peticiones de menor progresividad. Lo cual no me parece necesariamente negativo y de hecho hemos reducido la marginalidad máxima del impuesto desde el 66 al 56 %. Pero, en nombre de la simplificación, no se puede esperar de los socialistas políticas fiscales tan regresivas como la reciente reforma de Thatcher.

La interacción entre las libertades y los mecanismos de generación y empleo de recursos públicos puede abordarse desde múltiples puntos de vista. Permítanme seleccionar cinco de entre los posibles:

1. La contribución de la Hacienda Pública al ejercicio efectivo de los derechos individuales. Lo que podríamos denominar el paso de la libertad formal a las libertades efectivas.

2. Las restricciones que para la libertad individual exige la correcta y general aplicación de los impuestos.

3. El incremento de libertad colectiva derivada de la descentralización de las decisiones fiscales dentro del diseño autonómico del Estado.

4. El condicionante que la tributación de la familia significa para la elección de formas de conveniencia estable entre las personas.

5. La reducción de los grados de libertad que, representa para las futuras generaciones, la deuda pública acumulada por la financiación de los déficits.

***La economía de mercado
es un generador
autónomo de
desigualdades;
la fiscalidad es el
instrumento básico de su
permanente corrección.***

Déficit y libertad de las futuras generaciones

Los déficits fiscales han sido un fenómeno característico de las economías occidentales, como consecuencia de la aplicación por todos los gobiernos del amplio consenso keynesiano que dominaba el pensamiento económico hasta el fracaso de la política de expansión de la demanda llevada a cabo por los socialistas franceses. Keynesianos o no, keynesianos a conciencia, por error o por imposibilidad de evitarlo, todos los países han acumulado déficit durante la crisis. En España, no de forma más importante que en otros países, pero sí de manera más rápida e intensa, como ha ocurrido con casi todos los fenómenos de la Hacienda Pública desde 1975.

La financiación de estos déficits, la cancelación del recurso acumulado al Banco de España y la asunción de deudas de empresas y administraciones públicas ha generado un volumen de deuda pública que representa en 1987 un 42 % del PIB.

Esta deuda genera carga financiera. Los españoles estamos pagando con nuestros impuestos de hoy los bienes, servicios e intervenciones públicas que consumimos ayer, de la misma forma que lo seguirán haciendo mañana las sucesivas generaciones. Ello restringirá su libertad en términos fiscales, como sin duda lo está ya haciendo con la nuestra. Nos guste o no, 9

La lucha contra el desempleo debe ser una prioridad fiscal más importante que la reducción de otras desigualdades.

pesetas de cada 100 que pagamos de impuestos están comprometidas por los intereses de la deuda. ¿Cuán grave es esta restricción para la capacidad de decisión de las futuras generaciones? En otras palabras, ¿este 42 % es mucho o es poco? Es difícil, y además inútil intentar calificarlo. Este tipo de fenómenos sólo se pueden juzgar por comparación con otras situaciones.

Por ejemplo, con la situación de otros países de la CEE. Salvo Francia que tiene un 39 %, todos los demás tienen porcentajes más elevados, desde la saneada Alemania (44) a Inglaterra (57), Dinamarca (58), Italia (99), Bélgica (125), etc. La media de la CEE a 12 es del 67 %.

La muestra no es en absoluto una situación de bancarrota. Amenazó con poder llegar a serlo en 1982 cuando el déficit era galopante y el ahorro bruto de las Administraciones Públicas se convirtió en negativo, lo cual quiere decir que estábamos financiando gasto corriente con endeudamiento. No es el caso hoy. El ahorro bruto vuelve a ser positivo, y si en 1982 el déficit rozaba el 6, subiendo, en 1988 puede acercarse al 3 y bajando.

Lo único preocupante del endeudamiento de nuestra Hacienda Pública (nuestra salud financiera colectiva) ha sido su rápido crecimiento. Pero un escenario presupuestario que mantenga el nivel de deuda viva en el entorno del 45 % del PIB

constituye una política compatible con la futura libertad de decisión fiscal de los españoles.

Por otra parte, es compatible con el respeto a la libertad de elección de las futuras generaciones el trasladarles parte del coste de los bienes y servicios públicos de los que también disfrutarán, como son todas las obras de infraestructura y, en general, los procesos de inversión pública y saneamiento empresarial. Puede ser tan negativo, para la libertad colectiva de las sucesivas generaciones de españoles, financiar nuestro gasto corriente de hoy con los impuestos de mañana, como pretender financiar con los impuestos de hoy los bienes que serán utilizados mañana y durante mucho tiempo. La crítica al déficit público también tiene un límite.

Llegados a este punto, permítanme una observación acerca de la famosa distinción entre gasto corriente y gasto de inversión. La acuñación semántica de tópicos elevados a la categoría de verdades científicas gracias a su repetición mecánica por unos y otros ha creado un estado de opinión según la cual el gasto público corriente es malo porque se confunde con el despilfarro funcional y la inversión pública es buena porque crea empleo, es el motor de la expansión y de la generación de utilidad pública.

¿Por qué es bueno construir una escuela (inversión) y no lo es contratar un maestro (gasto corriente) o comprar una tiza? Ambas cosas pueden ser buenas o malas, depende de su necesidad como *inputs* combinados en la producción de un bien socialmente útil. Los ejemplos podrían multiplicarse en todos los campos del gasto público. Creo que es urgente dejar de confundir a la opinión pública con el manejo maniqueísta de metacategorías, porque el tópico restringe la libertad intelectual.

Finalmente, ustedes como yo habrán oído argumentar que los niveles de la deuda pública española son tales que cada niño español viene al mundo debiendo medio millón. Es un buen titular y peseta más, peseta menos, puede ser cierto. Basta con dividir. Pero siendo verdad, no es toda la verdad. Porque, ¿a quién se lo debe ese niño español? A otro niño español. Nuestra posición neta con respecto al exterior es acreedora, porque tenemos más reservas de divisas, bastantes más que deuda externa. Nuestras deudas nos las debemos a nosotros mismos y esta pequeña matización obliga a cambiar el tono del mensaje. Los intereses de la deuda que pagan los contribuyentes españoles los cobran otros españoles, con lo cual se trata más de un problema de circulación de renta en el interior de nuestra economía, con todas las implicaciones que se quiera sobre la redistribución y la eficacia, que de un problema de solvencia colectiva.

Familia y fiscalidad

Apasionante debate entre libertad e igualdad el representado por la tributación de la familia. Nuestras leyes tributarias definen la familia como el sujeto pasivo de los impuestos directos. Discutible decisión que significa un condicionante para la elección de las formas de convivencia estable entre las personas. Es una decisión sometida a debate en todo el mundo occidental. Con un impuesto fuertemente progresivo en su escala, como es el nuestro, y al compás de la creciente incorporación de la mujer al trabajo, los efectos fiscales de la acumulación de rentas son importantes.

Pasar por la sacristía (o por el juez) tiene un coste fiscal. Las uniones familiares de hecho están menos gravadas que las de derecho, o dicho en el tono tronante de algún procer de la derecha: «la familia está

En el viaje de ida y vuelta los recursos fiscales se ven asaltados por las presiones de los grupos organizados.

penalizada frente al concubinato». Tan cierto como que la capacidad económica de dos personas que conviven es mayor, por un fenómeno de economía de escala, que el de dos personas independientes de iguales características. Irresoluble dilema: para igualar el trato fiscal de las uniones de derecho con las de hecho, ¿hay que debilitar el principio de la capacidad económica como determinante de la deuda tributaria? Para no pagar tantos impuestos, ¿hay que divorciarse? Algunos, dicen, lo hacen. ¿Cuántos? No lo sé, pero lo que es cierto es que el número de matrimonios disminuye y el de uniones de hecho aumenta. ¿Es por culpa de la fiscalidad que condiciona la libertad individual, o es simplemente un reflejo del cambio social?

En España nos las hemos ingeniado para aplicar una fórmula intermedia. Tributación conjunta, pero con un término corrector acotado superiormente de forma que la corrección sea tanto mayor cuanto menor sea la renta familiar. De esta forma, para las familias de renta media y baja (el 90 % de los contribuyentes españoles) el resultado es prácticamente equivalente a la tributación separada. Se trata de la famosa y denostada fórmula polinómica, que obliga al contribuyente a efectuar dos multiplicaciones y una suma, gracias a las cuales puede ahorrarse hasta 400.000 pesetas. Sin duda, la aritmética mejor pagada de su vida.

Por cierto, ¿por qué dos multiplicacio-

***A veces conviene recordar
que el sector público
no es la acumulación
de todos los defectos de
gestión.***

nes y una suma es un mecanismo que merece todas las críticas y el sistema francés de cociente que obliga a una resta y una división, y además es regresivo, se nos presenta como una maravilla de la técnica fiscal?

El problema parece provisionalmente resuelto pero, en la perspectiva de la incorporación al espacio fiscal europeo, de la incorporación creciente de la mujer al trabajo y de la mayor libertad en las relaciones personales, la tendencia apunta hacia una elección entre una disminución explícita de la progresividad o la tributación separada.

Hacienda pública y descentralización

Se acostumbra a decir que «un buen sistema fiscal implica más descentralización y, por tanto, más libertad». En España, con el diseño autonómico del Estado, no solamente se ha producido el reencuentro con las libertades perdidas de las nacionalidades históricas, sino que se ha extendido el proceso de descentralización a todo el territorio.

La Hacienda Pública ha tenido que adaptarse a este proceso político con todas sus implicaciones sobre la eficacia del gasto público, la solidaridad, la igualdad y el desarrollo de las libertades. Las situaciones resultantes son muy heterogé-

neas. Desde la total descentralización del ingreso público para los regímenes forales vasco y navarro, que da lugar a una situación cuasi confederal, hasta una muy débil descentralización de la gestión de los ingresos en las Comunidades Autónomas de régimen común. La capacidad fiscal cedidas a todas las Comunidades Autónomas genera aproximadamente 2 de cada 10 pesetas que administran. Surge así lo que parece como una importante contradicción del sistema: la diferencia entre el volumen de gastos administrado y la capacidad fiscal gestionada. Diferencia muy grande en su conjunto, pero distinta para cada Comunidad Autónoma. De esta manera, puede argumentarse que el Estado central soporta el coste político de recaudar los impuestos y los Gobiernos Autónomos los beneficios de administrar las contrapartidas vía gasto público. A mi entender, esta contradicción no es tan simple como se enuncia, y es difícil de resolver sensatamente.

En primer lugar, porque nuestro sistema fiscal está formado por un reducido número de grandes impuestos cuya gestión puede difícilmente fragmentarse territorialmente. Pero además, aunque se pudiese descentralizar la gestión, la verdadera corresponsabilidad fiscal no proviene de la gestión sino de la capacidad normativa. Y es impensable que tuviésemos distintas leyes tributarias en distintas partes del territorio, sobre todo, en la perspectiva europea.

¿Alguien critica al Gobierno de Pujol por el impuesto de Sucesiones o del Patrimonio, que son gestionados por la Generalitat? Ciertamente no, y sería injusto que así fuese porque la ley que las regula es de competencia estatal. Nada puede hacer Pujol para cambiarla. Es cierto que esta situación permite a algunos Gobiernos Autónomos presentar los recursos que reciben como algo que arrancan a Madrid y que nadie paga y no como algo

que proviene del esfuerzo fiscal de su propia Comunidad.

El único camino que me parece viable tiene ya existencia legal, presenta el mínimo de complicaciones para la gestión y, sin embargo, no hemos sido capaces de aplicar: los recargos autonómicos sobre la renta. La única Comunidad que intentó aplicarlo, en plena coherencia con el sistema diseñado y dando muestras de un valor político cuasi suicida, fue la de Madrid. Todo el mundo estuvo en contra, y se pagó el precio que pagan los que se adelantan a su tiempo. Y, sin embargo, me parece que, con todos sus inconvenientes, es el mejor camino, si no el único, para permitir la descentralización de las decisiones colectivas sobre el ingreso y el gasto público. Posiblemente la acumulación de un recargo autonómico sobre la tarifa estatal es un hueso demasiado duro de roer para instituciones no consolidadas o para quienes prefieren trasladar los problemas en vez de resolverlos en su propio ámbito de responsabilidad.

Pero, cuando oigo a los líderes autonómicos de la derecha clamar contra el gasto público o contra la presión fiscal, se me ocurre un bonito experimento: ¿por qué no disminuir la tarifa estatal y dejar que decidan sobre el margen así creado los Gobiernos Autónomos, de forma que cada uno pueda ofrecer a sus votantes disminuir, restaurar o incrementar la presión fiscal individual preexistente, absorbiendo con cargo a sus políticas de gasto o de ahorro las consecuencias sobre su Hacienda? Veríamos así quién es capaz de predicar con el ejemplo.

La gestión tributaria. Hacienda y libertades individuales

Pagar los impuestos no puede ser voluntario ni depender exclusivamente de la mayor o menor conciencia fiscal de cada

cual. Como en todos los países, hace falta un sistema de información, gestión e inspección así como un sistema de sanciones administrativas y penales suficientemente desincentivadoras, homologables con los que tienen establecidos los países democráticos.

Cuando se habla de persecución y atemorizamiento del fraude fiscal hay que reivindicar el derecho del contribuyente que cumple sus obligaciones fiscales a que éstas sean también cumplidas por el resto de sus conciudadanos. ¿O es que acaso no se viola la libertad del contribuyente cuando un fedatario público extiende un documento público, registra un valor a efectos fiscales y gira sus honorarios sobre lo que estima el valor real, por supuesto superior? ¿O cuando un profesional se niega a extender una factura o exige un incremento de precio para hacerla? ¿O cuando un empleado bancario acepta truncar las fechas de presentación de una declaración fiscal para burlar la inspección? Sin duda se viola la libertad, porque se está desplazando la carga tributaria de forma injusta e injustificada. ¿Por qué no viola la intimidad de un asalariado el que su nómina sea conocida por Hacienda cada mes y en cambio se ha presentado como una inaceptable intromisión el pretender conocer los rendimientos individualizados del capital?

Para que los sistemas de gestión tributaria funcionen es necesario identificar a

*El futuro de los
mecanismos fiscales se
jugará cada vez más
en la calidad de gestión
de los servicios públicos.*

los contribuyentes. ¿A quién puede molestarle? No parece que les moleste a los daneses, ni a los americanos, a quien se les asigna un número de identificación (el mismo que para la de Seguridad Social) prácticamente desde que nacen y sin el cual no pueden efectuar ninguna transacción financiera. Pero aquí sí. Aquí se ha considerado como una amenaza intolerable para la libertad y la intimidad el pretender añadir un dígito de control (una simple letra generada por un algoritmo numérico) a los números del DNI de forma que se eviten y detecten los errores de identificación.

No quiero recordarles los amables adjetivos que la nueva arcadía pastoril nos ha dedicado ante tamaño atentado a la libertad. Ha habido pocas voces que se hayan levantado explicando la utilidad social de estas medidas, su necesidad, su perfecta homologación con las de otros países democráticos y la injusticia que resulta de su no aplicación. Sé que una regla de oro de la longevidad en política es mantener buenas relaciones con los medios y creadores de opinión. Pero creo que ha llegado el momento de pedirles una actitud responsable en materia de represión del fraude y libertades.

La Hacienda Pública, la Hacienda de todos, es un instrumento al servicio de la sociedad o no merece existir. Necesita la legitimidad que le confieren las leyes pero, más aún, el respaldo moral de la opi-

La competitividad de las empresas necesitarán apoyos en actividades que, por sus economías de escala, tenderán a ser administradas por los poderes públicos.

nión. No podemos caer en la incoherencia de establecer unas leyes fiscales que graven las rentas, los patrimonios y los consumos y negar a nuestras administraciones la información necesaria para verificar su aplicación. No podemos creer ni hacer creer que la innovación moral es garantía y estímulo suficiente. Si nuestra Hacienda Pública no encuentra el apoyo social en su lucha contra el fraude habremos perdido uno de los elementos más importantes que conforman una sociedad democrática.

No se puede admitir que se siga lamentando, sin argumentos, la pretendida indefensión del contribuyente. Ni que la identificación a efectos fiscales viola la intimidad. Ni que se persigue a los famosos porque lo son o para dar ejemplo o porque se atreven a resistirse a la arbitrariedad fiscal. Las opiniones son libres pero no gratuitas. Cada vez que se repiten estas falsedades se destruye un poco la convivencia. No quiero decir que todo sea perfecto. Nuestro sistema de sanciones es quizá demasiado rígido. La capacidad de apreciación dentro de límites reglados, de las especiales circunstancias de cada caso, es demasiado limitada.

Hay que dar más facilidades para los aplazamientos de pago, cuando las tensiones de liquidez así lo exijan, evitando que el contribuyente juegue a la ruleta rusa con la Hacienda Pública, esperando que la baja probabilidad de ser detectado le compense de la hipotética sanción.

También es preciso flexibilizar y agilizar los mecanismos de devolución de ingreso indebidos, y conectar mejor los sistemas de tributación local y estatal, para lo que serán ocasiones privilegiadas el proyecto de Ley de las Haciendas Locales y la nueva Ley General Tributaria, que será presentada en sociedad antes de final de este año.

Pero, aunque sea posible mejorarla, nuestra Hacienda Pública es una Hacienda Pública democrática. Forma parte de nuestro Estado de Derecho y no se contrapone a él.

Libertades formales y libertades efectivas

No es una distinción inútil. Es positivo que hayamos dejado de contraponerlas. Pero no olvidemos que las preciosas e irrenunciables libertades formales deben poder ser ejercidas por todo el cuerpo social para ser apreciadas por éste. No era una manía de nuestros abuelos pensar que de nada sirve la libertad de expresión a quién no sabe escribir, ni el derecho al voto en una situación de miseria. Aquí, las libertades se dan la mano con las igualdades, complementándose mutuamente. La eficacia de la Hacienda Pública es vital para la efectividad de este encuentro. Esta generación es, por ejemplo, la primera generación de españoles que habrá sido completamente escolarizada. La libertad de las futuras generaciones habrá aumentado radicalmente gracias a ello, que no hubiera sido posible, seguramente, sin el esfuerzo fiscal colectivo.

Resumen y conclusiones

Se ha acabado el tiempo en el que los debates políticos podían resumirse en algunas palabras que expresaban claramente el objetivo ambicionado. La aceptación de la complejidad es la clave del progreso de nuestras sociedades. La fiscalidad es un fenómeno complejo que requiere las mayores cotas posibles de lucidez social, sobre todo en un momento en el que se produce una fuerte presión de los gastos públicos en la renta nacional frente a una oposición activa o larvada de grupos sociales importantes.

Tendremos que aprender a considerar la Hacienda Pública no como un sistema

Sería de desear que las normas fiscales se criticasen por sus contenidos reales y no por los que se le atribuyen.

aislado, sino como un sistema que incide sobre el conjunto del sistema económico y es influenciado, a su vez, por éste. A utilizar la fiscalidad para que nadie quede excluido de las ventajas del crecimiento.

A expresar a través de ella los valores políticos que definen las sociedades democráticas y solidarias. Valores cuya definición es tan necesaria como insuficiente. Necesaria porque la fiscalidad, como parte de la acción política, debe tener objetivos y no solamente acumular instrumentos. Insuficiente porque la proclamación de los valores no garantiza la capacidad para servirlos.

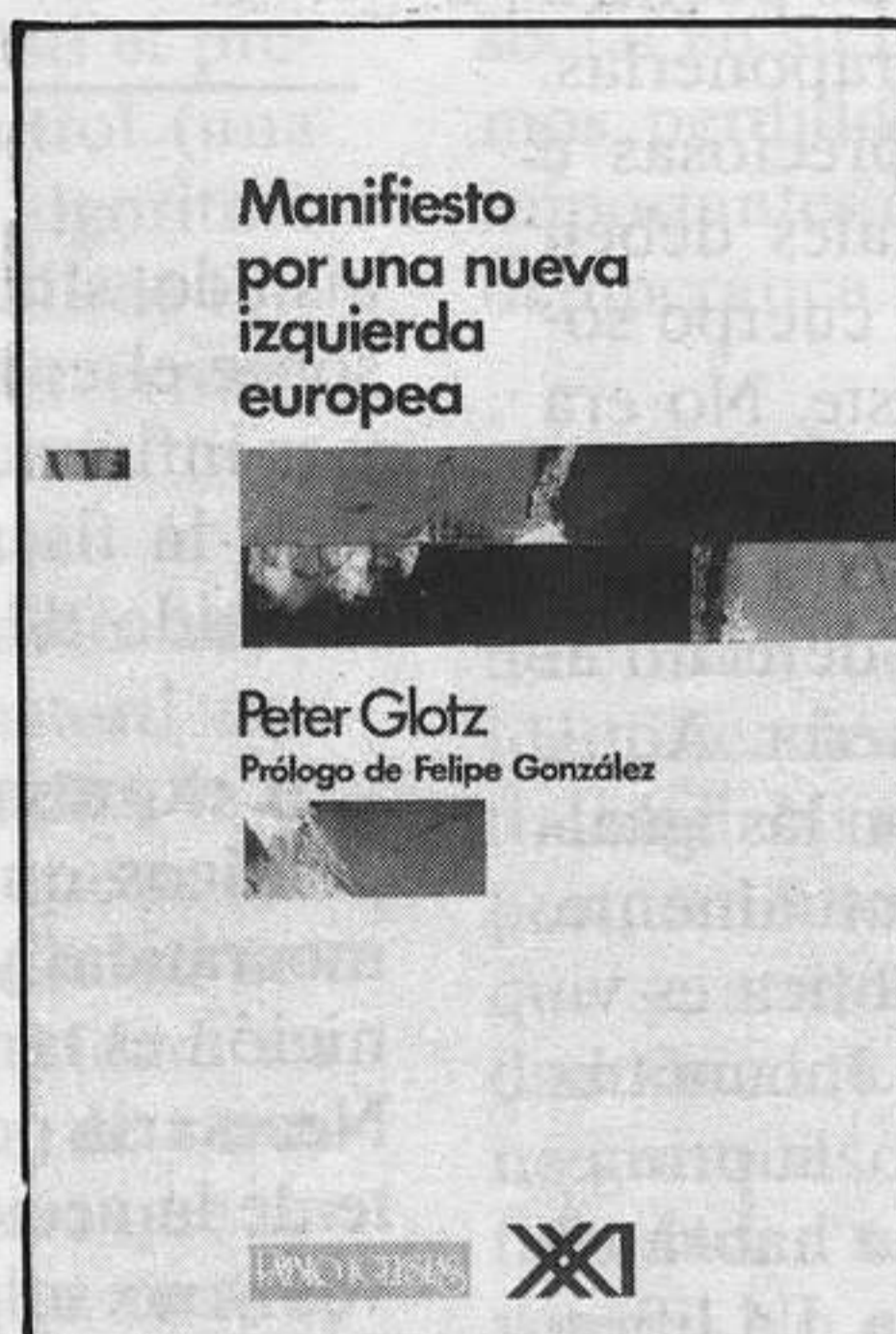
Yo he encontrado, al servicio de la Hacienda Pública, un puñado de hombres y mujeres que forman parte del mejor capital humano de este país. Su esfuerzo debería recibir el apoyo y la gratitud de sus conciudadanos, porque están prestando un decisivo servicio a las igualdades y las libertades de nuestra sociedad. Una sociedad que debe buscar su libertad en la fuerza y la razón de sus leyes y no en la inoperancia de la Administración que debe aplicarlas. Quisiera agradecerles la inestimable ayuda que me han prestado, tanto o, más si cabe, que a ustedes por su atención.

Conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, de Madrid, el 24 de marzo de 1988.

E D I T O R I A L

LABIO IGLESIAS

XXI
Siglo veintiuno
de España
Editores, sa



MANIFIESTO POR UNA NUEVA IZQUIERDA EUROPEA
Peter Glotz

Prólogo de Felipe González

91 págs.

540 ptas. (IVA)

«Este *Manifiesto* es un folleto publicístico que entronca bien con la vieja tradición de la agitación (de ideas) de la izquierda. No sería tan raro que con la perspectiva de algunos años descubriéramos que el pensamiento progresista, tras largos años de dogmatismo y parálisis, fue capaz de ponerse a la cabeza de la investigación y de las nuevas ideas en los años setenta, precisamente cuando se nos hacía creer que la ideología neoliberal (conservadora a secas, si hemos de ser precisos) estaba enterrando los valores de la izquierda en todo el mundo. Si así fuera, y yo creo que así es, con manifiestos como éste las ideas de progreso podrían comenzar a regresar del limbo de la investigación de vanguardia al mundo de la vida real. Y reconquistar la calle.»

FELIPE GONZALEZ

Pedidos:
Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
Tels. 410 46 96 y 410 47 98

**Forma de pago: talón bancario
o giro postal**



ANÁLISIS Y DEBATE

1

LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y EL DERECHO A LA INFELICIDAD

Ludolfo PARAMIO

La promesa

Siguiendo un rasgo general de la tradición ilustrada, el pensamiento feminista, desde sus precedentes decimonónicos hasta el estallido de los años 60, ha tendido a presentar la emancipación o liberación de la mujer en el marco de una promesa de mayor felicidad para el género humano en su conjunto. Para la mujer, la simple superación de la opresión, la conquista de la autonomía, de la libertad, significaban ya una posibilidad acrecentada de felicidad. Para el hombre, a su vez, la mejora vendría de dejar de tener en el hogar a una esclava para pasar a tener una compañera, algo que ningún varón ilustrado podría dejar de valorar.

En una idea aparentemente tan obvia se encerraban, sin embargo, demasiadas ilusiones. Se pueden comenzar por discutir las ventajas que un hombre podía hallar en tener por esposa, por pareja, a una verdadera compañera en vez de a una esclava, una subalterna. Conviene quizá subrayar de entrada que en el cambio de

siglo se introduce una importante modificación de esta idea, ya patentemente generalizada en los años 60-70 del nuestro. Para el feminismo precursor del siglo pasado, para los Mill o para las sufragistas, la posible igualdad a conquistar venía de los derechos civiles: tener una compañera en vez de una esclava significaba tener por pareja a una persona con derechos no inferiores a los propios en el plano civil, desde el acceso al sufragio hasta la toma de decisiones en cuestiones de compraventa o de potestad familiar.

El ascenso del socialismo en torno a la primera guerra mundial, y el auge de la nueva izquierda en los años 60, explican que el feminismo de nuestra época diera un paso más allá. No bastaba ya con la igualdad en los derechos *formales*, sino que era preciso ir a las raíces de la opresión, en especial la división sexual del trabajo y su mismo núcleo, la estructura familiar de orden patriarcal. Si, para no complicar las cosas, nos limitamos al primer aspecto (la necesidad de superar la división sexual del trabajo), eso ya quería decir que igualdad no era simple igualdad de derechos, sino igualdad de roles sociales.

Dicho de otra forma: ya no se aceptaba como mujer emancipada a la que sólo tuviera los mismos derechos, incluso la misma educación y oportunidades en principio iguales de empleo, sino que se exigía una cierta *simetría* en las actividades profesionales y en la división de tareas dentro de la familia. Eso hoy nos puede parecer natural, pero no lo era en tiempos anteriores. Que la señora Harriet Taylor Mill, por sí misma o a través de otras personas, previsiblemente asalariadas, se ocupara del *trabajo doméstico*, no era razón en su tiempo para considerarla oprimida si gozaba de libertad civil y de la cultura que socialmente la capacitaba para ejercer una posición adulta en el mundo de su tiempo. En los EEUU y en la Europa de los años 70, muy por el contrario, una mujer con la misma educación, los mismos derechos e igual o incluso mayor fortuna que la de su marido sería considerada como dominada por el marido si se ocupaba de la casa y no trabajaba fuera de ella.

No se trata de discutir la lógica del cambio de criterio, sino algunas de sus muy obvias consecuencias. La simetría de roles no se deriva de la misma lógica de la igualdad, sino de la forma que ésta adopta en el medio de los graduados universitarios, lo que a su vez tiene algo que ver, probablemente, con los orígenes sociales del feminismo de los años 60. Me debo apresurar a subrayar que éste no es un argumento contra la tesis de la simetría de los roles, y que sólo pretende introducir ciertas cautelas elementales a la hora de valorarla. Se pueden utilizar ejemplos un poquito caricaturescos para explicar lo que me gustaría decir.

Un cardiocirujano, casado con una colega, bien puede encontrar un indudable placer en discutir sus mutuas experiencias profesio-

nales, y la mujer estaría renunciando a su propia existencia personal, a su autonomía, si aceptara encargarse del trabajo doméstico, incluso en el simple plano de la gestión del personal asalariado, e incluyendo la atención a los hijos, en un grado que perjudicara a su propia carrera profesional. Pero este ejemplo, por desgracia, no es tan fácilmente aplicable si el hombre del que se parte es un picador de carbón o un obrero del metal. No se trata sólo de que pueda disminuir el placer de las discusiones sobre el ejercicio profesional, por la menor componente intelectual de éste, sino de que para la buena marcha de la casa (incluyendo los intereses materiales de la mujer) puede ser muy favorable una fuerte diferenciación de roles que permita a la mujer dejar más tiempo en la casa y complementar un salario superior del hombre.

Al llegar aquí surge inevitablemente la pregunta sobre las razones que deben justificar la prioridad laboral y salarial del hombre. Naturalmente, en este como en muchos casos, no cabe hablar de razones que *justifiquen*, sino sólo de razones que *explican* históricamente una situación de hecho: la gestación, la lactancia y todo lo demás. Ahora bien, partiendo de esta situación de hecho es preciso preguntarnos cómo podemos cambiarla, y me gustaría hacer hincapié, para no crear innecesarios malentendidos, en que este comentario pretendería contribuir a ese cambio.

Bien: mi argumentación es que la promesa de que los hombres y las mujeres serían más felices en un mundo *simétrico* ha tenido efectos indeseados en dos sentidos. Por una parte ha proyectado sobre la inmensa mayor parte de las mujeres un problema que sólo era real para una restringida minoría (las universitarias, profesionales o asalariadas); y, por otra parte, se trata de una promesa radicalmente falsa en la medida en que vincula una mayor libertad, autonomía, lucidez, con algo completamente distinto: ese incierto sentimiento que llamamos felicidad.

Mis propios puntos de partida son dos. En primer lugar, sólo una minoría de las mujeres puede beneficiarse (a corto plazo) en términos materiales de la construcción de una sociedad en que hombres y mujeres sean iguales en los términos de simetría de roles definidos por el feminismo de los años 60-70. (Esto debería lógicamente introducir una cierta periodización en el discurso feminista, para no proponer a la mayoría metas que sólo pueden ser ahora atractivas para una minoría). En segundo lugar, creo que la libertad y la igualdad no conllevan la felicidad, sino la lucidez y la autonomía, y que en tal sentido el feminismo debería dejar de promover la felicidad (dejar de ofrecer la utopía, como ya lo han debido hacer otras herencias del mismo pensamiento ilustrado, por ejemplo el socialismo), y aceptar que buscarla es un derecho pero garantizarla una falacia.

Para valorar los efectos indeseados de la promesa de felicidad que conlleva el feminismo hay que introducir varias diferenciaciones. Por un lado la ya introducida entre igualdad de derechos y simetría de roles: no es lo mismo decir que marido y mujer deben tener derechos civiles iguales (e incluso el mismo estatus social) que sostener que deben desempeñar roles sociales más o menos parangonables, fuera de la casa, y dividirse el trabajo doméstico de forma igual dentro de ella. Las dos propuestas deben examinarse en buena lógica por separado. Pero hay una segunda diferenciación, menos lógica y más histórica, que se refiere a la coyuntura en la que asciende, en los años 60, el feminismo moderno, y a la coyuntura en la que debe desenvolverse, en cuanto proyecto político y social, en los últimos años 70 y primeros 80. En otras y más comprensibles palabras, no es lo mismo predicar la igualdad de hombres y mujeres (en el mercado laboral y el contexto social) en un mundo económicamente en expansión que en un mundo en crisis, porque en el segundo no hay empleo para todos y hay que fijar prioridades que no son solamente individuales, sino que implican decisiones de grupo, incluyendo el viejo y desacreditado, pero muy significativo, grupo familiar.

El punto de partida debe ser el reconocimiento de que la entrada en escena de las ideas feministas corresponde necesariamente a un período de cambio, de transición, en las identidades sociales. Eso significa que las mujeres y los hombres que asistimos al ascenso del feminismo no lo hacemos desde la perspectiva de una identidad preestablecida, sino desde una identidad a su vez contradictoria, en transición. Para simplificar podemos decir que nos vemos forzosamente marcados por la añoranza de una familia tradicional, en buena medida mítica, pero en la que crecimos o creímos crecer, ya que era a ella a la que se remitían nuestros padres incluso si estaba ya muy distante de la vida real. Pero aspiramos a otro tipo de familia futura, armónica y feliz, en la que la simetría de roles entre hombres y mujeres sería la norma. Y, en medio, tratamos de compatibilizar las ilusiones de felicidad del modelo heredado con las promesas de felicidad del modelo futuro.

El problema, lógicamente, surge al buscar un modelo de transición, o por así decir, de compromiso, entre las añoranzas del pasado mítico y las promesas de un futuro imaginario. Entre la imagen de una madre garantía de seguridad, afecto y comodidad, y la apuesta por un futuro en que hombre y mujer estén en condiciones de cumplir *conjuntamente* las mismas funciones, hay un largo trecho de contradicciones, de tensiones, de sentimientos de culpabilidad o de frustración, tanto para el hombre como para la mujer, aunque por razones distintas. Para una pareja del tiempo de transición es imprescindible, pero muy difícil, hallar un punto de equilibrio razonable entre los viejos valores heredados y el horizonte futuro respecto al que se definen los valores que se supone dan

sentido a los proyectos vitales de las personas de hoy. Es en este marco de conflicto entre valores pasados y futuros, en este marco en el que se inscribe la vida de hombres y mujeres a finales del siglo XX, en el que debe entenderse la afirmación de que la mayor libertad e igualdad que conlleva el feminismo no suponen un avance simultáneo hacia una mayor felicidad.

Se podría pensar entonces que el problema del que se trata en esta nota es un puro problema coyuntural: durante la transición de la familia tradicional y patriarcal a una futura familia igualitaria, simétrica, el ascenso del nuevo modelo familiar crearía tensiones e inseguridades, pero a la larga hombres y mujeres serían más felices. Ahora bien, por un lado es posible que nunca llegue a existir esa futura familia igualitaria, como también es posible que nunca llegue a existir una sociedad socialista. No es legítimo, excepto en el discurso religioso, justificar una apuesta moral y social, y en particular una apuesta que implica sacrificios, sobre la base de una imaginaria e improbable felicidad futura: el feminismo, como parte de una moral secular de emancipación, no puede pretender que aceptemos una mayor infelicidad presente como precio a pagar por alcanzar, en un mal definido futuro, el paraíso prometido.

Por otro lado, y esto es lo más importante, la felicidad es un estado que sólo cabe definir en términos de existencias individuales, como resolución de tensiones o satisfacción de deseos anteriormente existentes. No tiene el menor sentido, por ejemplo, hablar de la mayor o menor felicidad de la mujer en el siglo XIV o en el siglo XX. Aunque por razones distintas, cabe imaginar que una mujer (o una persona) trasladada al pasado, o al futuro, se sentiría en cualquier caso infeliz al hallarse en un mundo cuyas reglas de juego no dominaba. Pero si sólo cabe hablar de felicidad dentro de la vida de una misma persona, resulta obvio que no tiene sentido pretender que los seres humanos actuales acepten los malos tragos implícitos en la liberación de la mujer, hoy, esperando que la humanidad futura sea más feliz. Si todo sale bien y llega a existir una sociedad humana igualitaria en términos de género/sexo, es de suponer que sus habitantes considerarán esta igualdad como algo natural, dado de antemano, como los hombres y mujeres de hoy ya consideran la igualdad de derecho al voto, y que buscarán, seguramente con éxito, sus propios motivos de infelicidad.

Dicho de otra forma, no cabe pedirle a nuestra generación (o al conjunto de generaciones que se vean afectadas por el cambio de modelo familiar) que acepten sus disgustos actuales sobre la base de que los hombres y mujeres del futuro serán más felices. Por una parte, porque todo futuro es sólo una hipótesis improbable. Por otra, porque la felicidad es una cuestión muy individual. Veamos entonces qué es lo que a corto plazo significa optar por la liberación de la mujer y la igualdad entre los sexos.

Los frutos amargos de la igualdad

Como habrá descubierto cualquier mujer que haya intentado establecer una relación de pareja basada en la igualdad, el intento conlleva inmediatas fricciones por el reequilibrio. Es muy poco imaginable la existencia de dos personas (del mismo o distinto sexo, conviene subrayarlo) que puedan llegar a convivir (más aún sobre la base de una relación afectiva, y en su caso sexual) inicialmente en términos de igualdad. Las expectativas relativas de poder son siempre asimétricas. En el caso de las parejas heterosexuales, es bien sabido que por diferentes razones sociales, que incluyen de forma muy significativa los roles reproductivos y la educación familiar tradicional, son los hombres quienes tienen superiores expectativas de poder dentro de la pareja.

Eso significa, como es obvio, que si la mujer quiere establecer una relación en pie de igualdad con el hombre debe reclamarla, cotidianamente, en una pelea casi interminable y por la que se paga a menudo un precio superior al resultado obtenido. Creo que el viejo artículo de Pat Mainardi en los años 60, cuando era una joven pintora de Nueva York que no se resignaba a tener que elegir entre fregar los platos o verlos apilarse en espera del impreciso momento en que su pareja se dignaría acercarse a la cocina, reflejaba muy bien «la política del trabajo doméstico», y la política del enfrentamiento cotidiano de la pareja.

Pero, aunque la pelea de la cocina ha sido y sigue siendo parte fundamental de las relaciones de cualquier pareja que no cuente con un *cuerpo de casa* suficientemente bien provisto, no conviene reducir los problemas a ella. El problema de la cocina surge cuando se comienza a tratar de disponer del mayor tiempo libre posible para el trabajo (o el ocio) propio. Eso implica una vida propia, diferenciada del simple proyecto de vida en común de la pareja, y ahí es donde se presenta el problema de la diferenciación de los roles. Si uno de los dos miembros de la pareja se ocupa de la casa, la pelea no tiene por qué llegar a plantearse. Si los dos tienen intereses personales propios (laborales, profesionales o artísticos), la pelea surge de forma inevitable a menos que una de las partes acepte sacrificarse graciosamente en interés de la otra.

Como señalé anteriormente, el problema es que el reparto del trabajo de la casa sólo tiene sentido en parejas que tienen cierta simetría profesional o laboral. Pedirle a un obrero manual que tras una jornada agotadora comparta el trabajo de la casa con una mujer que no tiene trabajo fuera de ella, o que sólo lo tiene a tiempo parcial, no es demasiado razonable. Peor aún: en un mercado laboral discriminatorio, como el que aún encontramos demasiado a menudo, puede ser una mala estrategia familiar que la mujer trabaje a tiempo completo fuera de la casa a cambio de un salario in-

ferior al del hombre. En un viejo artículo, que despertó reacciones airadas en su momento, ésa fue la explicación que Wally Secombe ofreció para la generalización del *salario familiar* (pagado, por supuesto, al trabajador varón) como estrategia de los sindicatos a finales del siglo pasado. Aunque hoy nos resulte evidente la fuerte componente de ideología patriarcal implícita en la idea de salario familiar, no hay que perder de vista su racionalidad en términos de pura sobrevivencia material. En un mercado salarial segmentado en contra de las mujeres, para la familia como unidad económica puede serle más conveniente que la mujer se encargue del trabajo doméstico y el marido dedique todo su tiempo productivo al trabajo asalariado.

Aun hoy, cuando la discriminación salarial se va reduciendo lentamente (más despacio en la realidad que en la letra de las leyes), optar como norma por el trabajo de la mujer fuera de la casa puede tener efectos indeseados. La escasa libertad real que proporciona un trabajo mal remunerado se ve en más de un caso contrapesada por un deterioro en la vida doméstica, una caída real de la calidad de vida que rara vez se puede resolver contratando a un trabajador doméstico (siempre o casi siempre otra mujer).

Es fácil pensar que estoy sugiriendo que la mujer de familia trabajadora debería quedarse en casa. No es así: lo que pretendo decir es que no se la debe presionar para que busque trabajo fuera de la casa como forma ideal de emancipación, ya que el precio a pagar puede llegar a ser excesivo para la familia y para ella misma. Lo que quiero decir, en suma, es que las clases medias profesionales no deberíamos predicar nuestros propios modelos ideales de vida a las mujeres de otras clases sociales sin tomar en cuenta su realidad objetiva. Y no sólo porque no es honesto, sino también porque el hacerlo puede tener consecuencias indeseadas, perceptibles por ejemplo en la resistencia que las ideas feministas han encontrado tradicionalmente en muy amplios sectores de la clase trabajadora.

Mi hipótesis es que las mujeres trabajadoras que no tienen cualificaciones culturales o de formación profesional suficientes para competir con cierta ventaja en el mercado de trabajo pueden ver en la llamada a trabajar fuera de la casa un agresivo dilema. Pues se les está diciendo que si se quedan en casa sólo son esclavas del marido, seres sin una personalidad propia. Pero saben bien que si trabajan fuera llevarán una vida más dura, y no necesariamente para vivir mejor. Sólo para una mujer radicalmente descontenta con su pareja comienza a tener sentido evidente la necesidad de contar con ingresos propios. Para una mujer semisatisfecha (o semidescontenta) con su marido, la exigencia, en nombre del feminismo o de la independencia personal, de trabajar fuera de la casa, sin una clara mejora de su calidad de vida, y con un previsible au-

mento de los conflictos personales, puede parecer una presión intolerable. Esas mujeres que tan a menudo aparecen en los medios de comunicación diciendo cosas como «yo no soy feminista, aunque creo que una mujer debe ganar lo mismo que un hombre si hace el mismo trabajo», seguramente proceden de ese amplio espectro social que comprende las reivindicaciones feministas pero no las acepta cuando se formulan en términos de la lógica de la clase media.

Las cosas se han hecho más complicadas aún con la crisis. Cuando, en los años 60, era una realidad el pleno empleo, una mujer semidescontenta con su pareja podía optar con posibilidades razonables de éxito por montarse una vida independiente, un trabajo propio, una habitación propia. En medio de la crisis de los años 80 todo esto resulta mucho más difícil, y es muy posible que una mujer semidescontenta prefiera considerarse semisatisfecha antes que admitir que sólo sigue viviendo con un hombre por la imposibilidad material de independizarse. Y si se la presiona para que reconozca que es infeliz, y que si tuviera la posibilidad preferiría vivir una vida distinta, sola, con sus hijos, con otro hombre o como fuera, el choque entre lo que se le pide y lo que sabe que puede lograr puede llevarla fácilmente a reaccionar con una cierta hostilidad: dejadme ser infeliz a mi manera en vez de proponerme una felicidad que no puedo alcanzar. La crisis económica ha provocado por tanto un proceso involutivo que es muy necesario tomar en cuenta al proponer a una mujer posibles salidas a una situación de conflicto.

Estoy tratando de decir dos cosas: en primer lugar, que proponer como forma ideal de vida en pareja la perfecta simetría supone proyectar sobre toda la sociedad un modelo de vida que hoy por hoy sólo puede ofrecer satisfacción inmediata a las parejas de profesionales; en segundo lugar, que exigir a una mujer que lleve hasta el fin la defensa de su autonomía, en tiempos como éstos de crisis económica, de carencia de oportunidades de empleo y brutal encarecimiento de la vivienda, equivale a ponerla entre la espada y la pared, y que es muy posible que prefiera enfrentarse a la espada y negar la evidencia de su infelicidad o de su opresión.

Tener en cuenta estas cuestiones no significa abandonar el proyecto de la emancipación del conjunto de las mujeres. Significa fijar plazos y ritmos al proyecto de tal emancipación, pasar de la política utópica a un reformismo realista, siempre exasperante en su lento avance, pero menos abierto a la posibilidad de derrotas frontales o de desencantamientos desmovilizadores. Me parece que el neoconservadurismo de los años 80 tiene mucho que ver, en el terreno de la moral familiar, con el descubrimiento por muchas mujeres de que había una gran distancia entre el precio a pagar por la autonomía personal y los resultados que se podían obtener. Obli-

gadas a elegir entre una mala familia y la pobreza, la soledad o, simplemente, una vida austera y de trabajo duro, muchas mujeres prefirieron quedarse con la mala relación familiar y racionalizaron esa decisión, *a posteriori*, como una recuperación de los valores tradicionales. Quizá es así como nació *la nueva mayoría moral* en los EEUU golpeados por la crisis, y en todo caso no sería raro que ese sentimiento de inseguridad de las mujeres más atrapadas entre su realidad personal y la realidad social hubiera contribuido al nuevo conservadurismo.

Aunque en cierta forma quede fuera de mi razonamiento, conviene introducir algo que ya he insinuado al hablar del riesgo de soledad. La pareja clásica es a la vez, paradójicamente, una relación de dominación y una relación de afecto. En muy pocos matrimonios el afecto ha desaparecido por completo, incluso tras largos años de conflictos y desacuerdo. Cuando se trabaja con mujeres que sufren malos tratos, o que tienen otros motivos objetivos para pensar en la separación, se descubre muy a menudo un momento de indecisión. Pese a todo no quieren romper. Se puede tratar de explicar esta incapacidad para dar el paso final por razones económicas como las apuntadas antes (salario, vivienda), pero me temo que también hay que tomar en cuenta una componente afectiva generalmente irracional. Una mujer puede seguir amando a un hombre al que en muchos aspectos odia, y generalmente con muy buenas razones. (El mismo fenómeno se da a la inversa, pero ésa es otra historia).

Esa combinación perversa de afectos contradictorios y dependencia económica hace especialmente conflictiva la relación entre autonomía y libertad, de un lado, y felicidad de otro. No creo que en ningún sentido se pueda decir que la libertad conduce a la felicidad. Me parece obvio, por el contrario, que la libertad (a su vez condición imprescindible para la igualdad) conlleva el riesgo, la inseguridad, la necesidad de optar. La infelicidad, en una sola palabra. Pero en el caso de las relaciones entre mujeres y hombres esto es especialmente evidente. Prometer a la mujer una vida más feliz si opta por una relación de pareja más igual, si opta por su autonomía y su libertad, es abocarla forzosamente al desencantamiento, lo que en buena lógica bien puede traducirse en un giro conservador. La inesperable conversión de Germaine Greer, en años recientes, hacia la familia extensa y la más incontrolada procreación, es sólo una anécdota, pero quizá una anécdota reveladora de cómo posiciones teóricas muy distantes de la vida real pueden conducir a resultados contradictorios. Y no ya en las mujeres que recibían el mensaje, sino en las mismas mujeres que lo emitían.

Mi propia intervención querría tener dos conclusiones. La primera es quizá muy conservadora. Debemos tener (las feministas deben tener) cierto cuidado al fijar las metas que una mujer debe

adoptar para llegar a ser libre. Si estas metas se ponen muy altas pueden tener un efecto negativo, conduciendo al desánimo y a la pasividad, incluso al conservadurismo, a mujeres que en otro caso habrían podido mantener posiciones propias en la pareja, haber defendido su autonomía personal, haber desarrollado una visión del mundo libre y emancipadora. Nada favorece tanto los hábitos pecaminosos como una visión demasiado estricta de la virtud. Quizá, en este sentido, no haya peor enemigo del feminismo que un feminismo demasiado radical *a corto plazo*. El problema no es cómo concebimos la sociedad ideal del futuro, la utopía en la que los sexos (géneros) sean socialmente iguales. El problema es qué metas inmediatas planteamos a las personas que compartan el sueño de esa utopía final.

La segunda conclusión es pesimista, pero no conservadora. La felicidad, ese estado obvio de armonía entre aspiraciones y logros al que todos querríamos llegar, no tiene nada que ver con la libertad ni la emancipación. Por algo los asociamos imaginariamente con la infancia, con la dependencia de unos padres idealizados que nos protegían. Cuando se apuesta por la libertad, por el contrario, es preciso tener una clara determinación de pagar el precio correspondiente, en términos de infelicidad e inseguridad, muchas veces en términos de soledad. Pero ésa no es una razón para dejar de lado, como un simple sueño, la aspiración a la libertad y la igualdad, también en las relaciones de pareja. Es, por el contrario, una razón para hacer esa apuesta con plena consciencia de su precio, para saber lo que somos capaces de exigirnos a nosotros y a otros (a otras). Sólo quien sabe lo que está en juego puede ser coherente hasta el fin, rehuendo tanto las euforias poco justificadas como los desencantamientos acomodaticios.

Hoy, cuando el aliento del neoconservadurismo parece estar llegando a su fin, cuando se hace palpable la necesidad de levantar de nuevo las viejas banderas de la igualdad y la libertad que son la mejor herencia que nos ha llegado desde la tradición ilustrada, conviene que asumamos con la mayor consciencia que con ellas reivindicamos y aceptamos el derecho a la propia infelicidad como rasgo esencial de una vida autónoma y adulta.

Ponencia presentada en las VII Jornadas de Investigación Interdisciplinaria del Seminario de Estudios de la Mujer (Universidad Autónoma de Madrid, 10-11 de marzo de 1988).



LOS MOVIMIENTOS DE LOS AÑOS SESENTA

Cornelius CASTORIADIS

La «interpretación» del Mayo del 68 en términos de preparación (o de aceleración) del «individualismo» contemporáneo constituye una de las tentativas más extremas que conozco —teniendo en cuenta la incontestable buena fe de los autores— para reescribir, a despecho de cualquier verosimilitud, una historia que la mayoría de nosotros hemos vivido, de alterar el sentido de los acontecimientos mientras todavía están, si puedo decirlo así, casi calientes. Todo lo que introdujo una formidable innovación —y cuyos efectos, a menudo, aún están presentes— en la vida de las sociedades contemporáneas, y muy especialmente de la sociedad francesa, queda, dentro de esta perspectiva, borrado. La verdad de las semanas de fraternización y de solidaridad activa, cuando le dirigíamos la palabra a cualquiera en la calle sin miedo a que nos tomaran por locos, cuando todos los conductores se paraban para recogerle a uno en *auto-stop*, habría sido el egoísmo hedonista. «Hable con sus vecinos», eslogan escrito en las paredes en Mayo del 68, preparaba solapadamente el aislamiento moderno de los individuos en su esfera privada. Los *sit-in* y *teach-in* de todas clases, en los que profesores y estudiantes, maestros y alumnos, médicos, enfermeras y personal auxiliar, obreros, ingenieros, contra maestres, directores comerciales y administrativos, discutían durante días y noches sobre su trabajo, sus relaciones, las posibilidades de transformar la organización y los fines de sus empresas, contenían en germen el ver a los demás como extravagantes «gadgets». Cuando en el gran anfiteatro de la Sorbona lleno hasta los topes, los

«delegados» de las más heteróclitas e improbables categorías de la población —desde jubilados a minusválidos— se levantaban para pedir que la sociedad les escuchara y entendiera por fin, no sabían, sin duda, ni lo que decían ni lo que hacían.

En y mediante el movimiento de Mayo tuvo lugar una importante resocialización, incluso si resultó ser pasajera. La gente no pedía sentir el calor y el olor de los demás, ni tan sólo «estar juntos». Les animaba la misma disposición: negativamente, un inmenso rechazo de la vacía futilidad y la pomposa tontería que caracterizaban tanto al régimen gaullista entonces como al miterrand-chiraquiano ahora; positivamente, el deseo de una mayor libertad para cada uno y para todos. La gente buscaba la verdad, la justicia, la libertad, la comunidad. No pudieron encontrar formas instituidas que encarnaran de forma duradera estos objetivos. Y —casi siempre lo olvidamos— eran una minoría en el país. Esta minoría pudo imponerse durante algunas semanas, sin terror ni violencia; simplemente porque la mayoría conservadora estaba avergonzada de sí misma y no se atrevía a presentarse en público. Quizás la minoría de Mayo podría haber llegado a ser mayoría si hubiese ido más allá de la proclamación y la manifestación. Pero esto implicaba una dinámica de otro tipo en la cual, evidentemente, ni quiso ni pudo entrar. Si queremos entender dónde estaba el «individualismo» en Mayo del 68, reflexionemos sobre lo que, después de la modificación de los acuerdos de Grenelle, selló el desmoronamiento del movimiento: el reaprovisionamiento de las bombas de gasolina. El orden se restableció definitivamente cuando el francés medio pudo viajar otra vez, en *su* coche y con *su* familia, hacia *su* residencia secundaria o *su* lugar de vacaciones. Esto le permitió, cuatro semanas más tarde, votar en un 60 % a favor del gobierno.

Tampoco podemos ignorar lisa y llanamente, siguiendo la moda actual, los «contenidos» del movimiento, es decir, la *sustancia* de las demandas y el *significado* de las formas y de los modos de actividad. La atmósfera ideológica de Mayo —como, en lo esencial, de los movimientos de los años sesenta— estaba hecha de una mezcla de ideas «revolucionarias tradicionales» y de crítica; o de superación —cierto que, a menudo, larvada y confusa— de las formas y contenidos tradicionales del «movimiento obrero» o «socialista». Esto se ve, incluso, en la confusión y las ilusiones de muchos participantes. Incluso las peores mistificaciones que tuvieron lugar antes, durante y después de Mayo se apoyaban en el deseo de ver realizado en alguna parte un estado de actividad colectiva autoorganizada y espontánea. La gente que era «pro-china» no lo era porque esperase que China llevase a bien una sociedad nazi o incluso «leninista», sino porque soñaban que una verdadera revolución estaba en curso, que las masas acababan con la burocracia, que los «expertos» habían vuelto a ocupar su lugar, etc. Que este deseo pudiera, en esa ocasión, engendrar ilusiones virtualmente crimina-

les, es *otro* asunto. Pero la «gran revolución cultural proletaria» era ensalzada *porque* habría significado (supuestamente) una liberación de la actividad y la creatividad del pueblo, no porque favoreciese la introducción del taylorismo o de la técnica industrial.

Ya he hablado de la crítica y el rechazo de las formas de organización tradicionales que caracterizaron el movimiento; complementariamente, habría que entender lo que significa, en tanto que *contenido* una *forma* tal como el *sit-in* o la asamblea abierta. Pero, sobre todo, habría que dejar de evacuar pura y simplemente, o de embarcar de contrabando en el carguero del individualismo, las considerables modificaciones en la realidad (y la institución) social introducidas por los movimientos de los años 60 y 70, y a las que éstos *apuntaban explícitamente*. ¿Acaso el que la sociedad evolucionara como lo hizo provocó que la libertad de aborto o contracepción se inclinaran desde el platillo de la autonomía de los sujetos hasta el del hedonismo sin principios? ¿Acaso los movimientos de los años 60 no tuvieron nada que ver con las modificaciones en las relaciones padres-hijos o entre los sexos? ¿O habría que ver en éstas, como dice Debray, la «victoria de la razón productivista», la de «la ley del objeto comercial» y de la «ideología capitalista»? ¿Es que no tiene interés desde el punto de vista de la autonomía individual y social que los negros de Estados Unidos hayan podido liberarse un poco de la discriminación racial que sufren? ¿Y por qué han pasado por alto, el hecho de haber puesto en tela de juicio los contenidos y formas tradicionales de la enseñanza y del tipo de relación tradicional profesor/alumno y los pocos de entre sus efectos que aún están inscritos en la realidad? ¿Se han alcanzado por completo las posiciones afirmadas por Althusser ya en 1964 frente a los primeros signos de descontento estudiantil, a saber, que nadie puede poner en tela de juicio el contenido de la enseñanza (o su estructura), puesto que ésta se encarga de transmitir un saber científico y objetivo? ¿Hemos olvidado que antes de 1968, tanto para los poderes establecidos como para las organizaciones «de izquierda», sólo había un problema válido relativo a la enseñanza, el de los plazos y las becas? El hecho de que hoy en día, gracias a la Restauración y a su instrumento en materia de educación, M. Chevènement, hayamos vuelto a prestar una gran atención a la «pedagogía» y que se hayan aprovechado las reacciones suscitadas por las demagogias y los extremismos ridículos y nefastos, aquí como en todas partes, para borrar las cuestiones de fondo, no cambia nada. Me gustaría que alguien discutiera por un momento, con argumentos racionales, el derecho de los alumnos a plantear, desde que son capaces de hacerlo, la pregunta: «¿Por qué y en qué es interesante o importante lo que nos enseñáis?» Me gustaría que alguien refutase la idea de que la verdadera educación consiste también en hacer que los alumnos tengan el valor y la capacidad de plantear este tipo de preguntas y de argumentarlas. Y me gustaría que alguien demostrara que no son los movimientos de los años 60, sino la «re-

forma Haby», la «reforma Chevènement» o la futura «reforma Monory» las que han llevado estas cuestiones a la conciencia de la sociedad.

Es curioso ver cómo actualmente llaman «Pensamiento 68» (1) a un conjunto de autores que se han ido poniendo de moda tras el fracaso del Mayo del 68 y de otros movimientos de la época, y que ni siquiera desempeñaron un papel en la más vaga preparación «sociológica» del movimiento, tanto porque sus ideas eran totalmente desconocidas de los participantes como porque eran diametralmente opuestas a sus aspiraciones implícitas y explícitas. Durante la noche de las barricadas del Barrio Latino, la distribución de una antología de los escritos de los autores analizados por Ferry y Renaut habría causado, como mucho, un ataque de risa inextinguible y la desbandada de los participantes y del movimiento. La famosa inscripción en los muros de la Sorbona, *Althusser à rien*, no necesita comentarios. Durante los años 60, nadie en París en su sano juicio, conociendo al personaje y sus escritos, habría soñado que Lacan pudiera tener algo que ver con un movimiento social y político. Foucault no ocultaba sus posiciones reaccionarias hasta 1968 (cierto que hablaba menos de cómo las había puesto en práctica durante una huelga de estudiantes en Clermont-Ferrand en 1965). La desaparición del sujeto, la muerte del hombre y las demás tonterías de lo que he llamado la «Ideología francesa» (2) ya circulaban desde hacía años. Su ineluctable corolario, la muerte de la política, podía ser explicitado sin esfuerzo (y lo fue por Foucault, un poco después del Mayo del 68: ya que toda política era una «estrategia» sólo podía llevar a establecer contra-poderes, y por lo tanto poderes); esto es evidentemente incompatible con las actividades mismas a las que se libraron los participantes de los movimientos de los años 60, Mayo del 68 incluido.

Alguien dirá que ahí se habla de «contenidos manifiestos» y que nada impedía a los participantes del Mayo del 68, valiéndose de la Astucia de la Razón, verse influidos por ideas radicalmente opuestas a las que profesaban y que intentaban llevar a cabo explícitamente. Esto sería llevar la paradoja un poco lejos, porque entonces habría que admitir que la verdadera motivación no consciente que llevaba a la gente de Mayo a actuar, era la idea de que no hay nada que hacer y que no se debe hacer nada. Pero la verdadera cuestión es otra. Todo el mundo sabe —y es sorprendente que los autores de *La Pensée 68* no se den cuenta— que las primeras esquelas de las distintas muertes —del sujeto, del hombre, del sentido o del significado, de la historia, etc.— habían sido redactadas mucho tiempo antes por los representantes de una ideología pseudocientífica, el estructuralismo: en orden cronológico, Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, Althusser. Y mucho tiempo antes del Mayo del 68 el estructuralismo había sido criticado, sobre todo por el autor de estas líneas, tanto en su contenido en cuanto tal como en sus implica-

ciones políticas (3). Los que vivieron este período pueden atestiguar lo que militar, a principios de los años 60 en contacto con ciertos medios estudiantiles o universitarios parisinos, implicaba en cuanto a tomar posición contra el estructuralismo en general y contra Althusser en particular; y éste, por otra parte y como ya he dicho, no esperó mucho tiempo para contraatacar y declarar, desde 1964, que los programas y estructuras de la enseñanza se sustraían por esencia a la «lucha de clases», es decir, a la cuestión política. Los demás autores de la «Ideología francesa» se situaban, muy explícitamente (como Foucault), o bien implícitamente, en la dependencia del feudo estructuralista. Todos habían dicho lo que tenían que decir mucho antes del Mayo del 68, y con bastante «éxito» (entre la *intelligentsia* parisina y desde el punto de vista de la edición) como para que sus ideas tuviesen tiempo de ejercer una «influencia» sobre los actores. Sin embargo, no hay huellas de semejante influencia. Consideremos, por ejemplo, la introducción del libro de Daniel y Gabriel Cohn-Bendit, *Le Gauchisme* (París, Le Seuil, 1968), el *Journal de la Commune étudiante* de Pierre Vidal-Naquet y Alan Schnapp (París, Le Seuil, 1969), o las diversas antologías de inscripciones murales (por ejemplo la de Julien Besançon, *Les murs ont la parole*, Tchou, junio de 1968); no encontraremos en ellos ni la menor huella de las «ideas» de los ideólogos (a no ser, rara vez, cuando se ven ridiculizadas o denunciadas en las paredes). Lo que sí aparece constantemente es la crítica del orden establecido, las célebres invocaciones a la imaginación (¿uno se pregunta qué relación podrían tener con Foucault, Derrida, Bourdieu o incluso Lacan!), apologías de la libertad y del «placer», desde luego, pero sobre todo del socialismo y de un nuevo orden social.

No podía ser de otra manera. Lacan, por ejemplo, hablaba del «desser» del sujeto tanto antes como después del 68. Y, tanto antes como después, nadie podría haber pensado (salvo, quizás, algunos valientes universitarios en el Oeste americano) que él era revolucionario o individualista. Era clara, estricta y abiertamente lacaniano y lacanista. Su tesis central siempre fue que el esquizo del sujeto equivale a alienación estructural y por lo tanto es insuperable. La cuestión central de toda actividad política, presente durante el Mayo del 68, es la cuestión de la institución. En el lacanismo se halla cuidadosamente oculta tras las confusas mistificaciones de la «Ley» y del «simbolismo», puestas en evidencia precisamene para hacer imposible cualquier distinción entre un «valor de hecho» y un «valor de derecho», y por lo tanto para detener en seco el cuestionamiento previo a toda acción política. A este respecto, es fácil ver que los demás autores discutidos por Ferry y Renault dependen esencialmente de Lacan y que todos comparten con él el mismo rodeo, a la vez astuto y vulgar, de la cuestión elemental: ¿qué pasa entonces con el estatuto del propio discurso?

Ahora bien, los «resultados» de Mayo del 68 en este microcosmos fueron dobles y en apariencia paradójicos, por no decir contradictorios. Por una parte, el «estructuralismo» se disolvió, puesto que ya nadie osaba invocarlo y los más hábiles, como Foucault, pretendieron que ya no eran estructuralistas y/o que jamás lo habían sido. Por otra parte, estos mismos autores (y sus diversos satélites, cabecillas de subclanes, etc.) fueron rápidamente propulsados a un grado de «éxito» y de notoriedad cualitativamente diferente. Para asentar las ideas, como se suele decir en matemáticas y simbólicamente: si los *Ecrits* de Lacan vendían 30.000 ejemplares antes del 68, después venderían 300.000. Esto se debe, ciertamente, a la habilidad mediadora y mercantil de los personajes en cuestión o de sus empresarios, y a la fuerte demanda del comercio al por mayor de ideas, nacional y de exportación. Pero también y sobre todo se debe al *fracaso* del Mayo del 68; y ahí está la colosal equivocación de Ferry y Renaut. Lo que los ideólogos aportaron a posteriori fue a la vez una legitimación de los *límites* (de las limitaciones, al fin y al cabo: de las debilidades históricas) del movimiento de Mayo; no habéis intentado tomar el poder, teníais razón, ni siquiera habéis intentado establecer contra-poderes, teníais razón otra vez, pues quien dice contra-poder dice poder, etc.; y una legitimación de la retirada, de la renuncia, del no compromiso o del compromiso puntual y medido; de todas formas, la Historia, el sujeto o la autonomía no son más que mitos occidentales. Por lo demás, esta legitimación fue rápidamente sustituida por la letanía de los nuevos filósofos a partir de mediados de los años 70; la política apunta al todo, por lo tanto es totalitaria, etc., (y así explica su éxito). Antes de replegarse hacia las «residencias secundarias» y la vida privada, y *para* lograrlo, la gente tuvo necesidad de un mínimo de justificación ideológica (ya que todo el mundo no tenía, por desgracia, la misma admirable libertad respecto a sus palabras y actos de ayer que éste o aquél, por ejemplo). Y esto es lo que los ideólogos siguieron proporcionando, modificando ligeramente la envoltura. Es sorprendente que Ferry y Renaut no hayan visto la estrecha relación existente entre la ideología de la muerte del sujeto, del hombre, de la verdad, de la política, etc., y el estado de las mentes, el humor, el *mood*, la *Stimmung* que siguieron al *fracaso* (es más, al *curioso* fracaso) de Mayo y a la descomposición del movimiento. Hubo, es verdad, entre los movilizados de Mayo, un cierto número que, durante meses o años, siguieron militando entre los trotskistas, los maoístas, etc. En total nunca fueron más de unos pocos miles, y su número decreció rápidamente después de 1972. Por lo demás, para las decenas o centenares de miles de personas que actuaron en mayo y junio pero que ya no creían en un movimiento real, que querían encontrar una justificación para el fracaso del movimiento y al mismo tiempo para su propia privatización principiante sin dejar de guardar una «sensibilidad radical», el nihilismo de los ideólogos, que se las habían arreglado a la vez para saltar al tren de una indefinida «subversión», era admirablemente

conveniente. El contrasentido de Ferry y Renaut es completo: el *Pensamiento 68* es el pensamiento anti 68, el pensamiento que edificó su éxito de masas sobre las ruinas del movimiento del 68 y en función de su fracaso. Los ideólogos discutidos por Ferry y Renaut son ideólogos de la impotencia del hombre ante sus propias creaciones; y vinieron a legitimar el sentimiento de impotencia, de desánimo, de cansancio.

En cuanto a las filiaciones ideológicas del movimiento de Mayo del 68, hasta donde se pueden proporcionar orígenes «concretos» y ello presenta cierto interés, P. Vidal-Naquet y A. Schnapp los describen en detalle en el *Journal de la Commune étudiante* ya citado, y Daniel y Gabriel Cohn-Bendit los resumen adecuadamente cuando escriben en *Le Gauchisme* que este libro se podría haber sustituido «por una antología de textos publicados en *Socialisme ou Barbarie*, *L'Internationale situationniste*, *Informations et Correspondance ouvrières*, *Noir et Rouge*, *Recherches Libertaires* y, en menor grado, en las revistas trotskistas».

Lo que el Mayo del 68 y los demás movimientos de los años 60 demostraron fue la persistencia y la fuerza de la ambición de autonomía, traducida al mismo tiempo por el rechazo del mundo capitalista-burocrático y por las nuevas ideas y prácticas inventadas o propagadas por esos movimientos. Pero lo que también han atestiguado es esa dimensión de *fracaso*, hasta ahora prácticamente indisociable de los movimientos políticos modernos; la inmensa dificultad de prolongar el orden de las cosas existentes, la imposibilidad de asumir la ambición de autonomía como autonomía individual y social a la vez, instaurando un autogobierno colectivo. (De ahí vienen, tras el derrumbamiento del movimiento, las múltiples y múltiplemente irrisorias derivaciones hacia las microburocracias trotskistas y maoístas, hacia la licuefacción mao-spontex o el nihilismo ideológico «pseudosubversivo»).

Pero este fracaso está ahí desde el comienzo de los tiempos modernos. Son los oficiales haciendo entrar finalmente en razón a la armada de los *Roundheads* y Cromwell llegando a ser Lord Protector. Es Nueva Inglaterra cayendo más acá, en lugar de ir más allá, de la línea jeffersoniana (la América de Tocqueville es una sociedad idealizada y caduca a la vez). Es Francia en retirada ante la prosecución de la inmensa obra emprendida entre 1789 y 1792 (y de ahí viene el campo libre dejado a los jacobinos, y luego el Terror). Es la Rusia de 1917, donde los bolcheviques se apoderan del poder por contumacia de la población e instauran el primer poder totalitario de los tiempos modernos.

No hace falta recordar que este fracaso rara vez es completo. La mayoría de las veces estos movimientos desembocan en la institución formal de ciertos derechos, libertades o garantías bajo las cua-

les seguimos viviendo. En otros casos, sin instituir nada en sentido formal, dejan profundas huellas en la mentalidad y la vida afectiva de las sociedades: tal fue, sin duda, el caso de la Comuna de París de 1871; y tal es ciertamente, como ya he recordado antes, el de los movimientos de los años 60.

Una situación evidentemente ligada al carácter antinómico del imaginario político moderno. Por una parte, éste se encuentra labrado por la ambición de autonomía y su sucesiva extensión a los diferentes campos de institución de lo social; por otra parte, sólo muy rara y brevemente llega a separarse de la representación de la política —y de la institución— como feudo exclusivo del Estado, y de este Estado (que sigue encarnando, incluso en las sociedades más modernas, la figura de un poder de derecho divino) como perteneciéndose únicamente a sí mismo. Es así como, en la modernidad, la política en tanto que actividad colectiva (y no profesión especializada) no ha podido estar presente hasta ahora más que como espasmo y paroxismo, acceso de fiebre, de entusiasmo y de rabia, reacción a los excesos de un Poder que, por añadidura, siempre es hostil e inevitable a la vez, enemigo y fatalidad; en resumen, la política sólo ha podido estar presente como «Revolución».

Puede parecer muy ingenioso demostrar que el «sentido» del Mayo del 68 fue, en definitiva, la expansión de las ventas de videocassettes porno. Puede resultar menos divertido, pero más fecundo, ver en Mayo y en los movimientos de los años 60 las enormes promesas que contiene, virtualmente, la época contemporánea, y la inmensa dificultad que la humanidad experimenta para salir del letargo, para politizarse, para decidir que ocuparse de sus asuntos (colectivos) podría ser su estado normal y corriente.

La disolución de los movimientos de los años 60 anunció el principio de la nueva fase de regresión de la vida política en las sociedades occidentales, a la cual asistimos desde hace unos quince años. Esta regresión va emparejada con (y es casi sinónimo de) un nuevo asalto de burocratización/privatización/mediatización y al mismo tiempo que casa, en un vocabulario más tradicional, con un regreso en masa de las tendencias políticas autoritarias en el régimen liberal/oligárquico. Tenemos derecho a pensar que estos fenómenos son provisionales o permanentes, que traducen un momento particular de la evolución de la sociedad moderna o son la expresión coyuntural de características insuperables de la sociedad humana. Lo que no está permitido es olvidar que gracias a y mediando ese tipo de movilización colectiva representada por los movimientos de los años 60, la historia occidental es lo que es, y las sociedades occidentales han sedimentado sus instituciones y los rasgos que, bien o mal, las vuelven viables y que harán de ellas, quizás, el punto de partida y el trampolín para otra cosa.

Aquí se encuentra la única división importante. Los hay que consideran —y éste es mi caso— que los márgenes de libertad que comporta el régimen contemporáneo no son más que subproductos sedimentados desde hace siglos de movimientos de este tipo; que sin esos movimientos el régimen no solamente no habría producido jamás esas libertades, sino que las habría recortado inexorablemente cada vez (como ya está ocurriendo); que, a fin de cuentas, la humanidad puede hacerlo ciertamente mejor. Y los hay que piensan —rara vez se atreven a decirlo salvo, evidentemente, en la «derecha», pero sus argumentos y razonamientos vienen a ser estos— que vivimos en la forma al fin hallada de la sociedad política libre y justa (quedan, es verdad, algunas reformas por hacer). La discusión no tiene más remedio que detenerse aquí, y cada cual elige o confirma su elección.

Pero incluso así, incluso si admitiéramos que vivimos el final de un período de ebriedad histórica, comenzado por segunda vez hace unos ocho siglos en las primeras comunas burguesas de Europa occidental, el final de un sueño de libertad y autogobierno, de verdad y responsabilidad. Incluso si admitiéramos que, al fin y al cabo, actualmente somos capaces de ver, fríamente, la forma al fin hallada de la sociedad política, la verdad definitiva de la condición humana bajo la forma de Pasqua y Fabius, Hernu y Léotard, *Playboy* y los videoclips, la popfilosofía y las macedonias «posmodernas». Incluso si tal fuera el caso, sería incongruente ver en ello el «sentido» de 1776 y 1789, 1871, 1917 y Mayo del 68, pues incluso en esta hipótesis de pesadilla, ese sentido habrá sido la tentativa de hacer aparecer otras posibilidades de la existencia humana.

Traducción: Encarnación Castejón.

(1) Por L. Ferry y A. Renaut, *La Pensée 68, Essai sur l'anti-humanisme contemporain*, Gallimard, 1985.

(2) Ver «La Psychanalyse: projet et élucidation» en *Topique*, 19 (abril de 1977), recogido en *Les Carrefours du Labyrinthe*, París, Le Seuil, 1978.

(3) Ver «Marxisme et théorie révolutionnaire» en 39 y 40 de *Socialisme ou Barbarie* (1965), recogido en *L'Institution imaginaire de la société*, París, Le Seuil, 1975. Y, retrospectivamente, mi artículo «Les divertisseurs», publicado primero en *Le Nouvel Observateur* y recogido en *La Société française*, París, «10/18», 1979.

LOS DEBATES DE *Jávea*

ALFONSO GUERRA
S.GINER·R.G. COTARELO
R.DORADO·J.F. TEZANOS
J.A. YAÑEZ·J.M. BENEGAS
M. ESCUDERO·M. CASTELLS

NUEVOS HORIZONTES TEORICOS
PARA EL SOCIALISMO

JAVEA II

ALFONSO
GUERRA
A. DE BLAS·V. ZAPATERO
M. ESCUDERO·J. F. TEZANOS
R.G. COTARELO
E. MENENDEZ·F. LAPORTA

EL FUTURO
DEL SOCIALISMO

EDITORIAL S

EDITORIAL SISTEMA

ALFONSO GUERRA
A. SCHAFF·R.G. COTARELO
J. GALTUNG·G. THERBORN
M. ESCUDERO·S. HOLLAND
J.M. BENEGAS·J.F. TEZANOS

EL NUEVO COMPROMISO EUROPEO

JAVEA III

EDITORIAL SISTEMA

EDITORIAL SISTEMA

Editorial Sistema, c/ Fuencarral, 127-1.º TEL. 448 73 19 - 28010 MADRID



ANÁLISIS Y DEBATE

3

VEINTE AÑOS DESPUES

Antonio G. SANTESMASES

Sólo dos años antes, en un debate celebrado en México, en febrero de 1966, Marcuse sostenía su conocida tesis acerca de la integración política de la clase trabajadora en la sociedad industrial avanzada. Gorz le objetaba que ese análisis era aplicable a los Estados Unidos pero no a Europa occidental, a lo que Marcuse, tras comentar la evolución del socialismo europeo posterior a la segunda guerra mundial, replicaba: ¿cuándo se ha producido la última huelga general políticamente efectiva en Francia? (1).

Mayo del 68 es un acontecimiento de tal magnitud que permite interpretaciones muy diferentes. Para unos nos encontramos ante una revuelta estudiantil, una conmoción cultural, un movimiento social que preludia el siglo XXI aunque se expresara confusamente en el lenguaje «arcaico» del siglo XIX. Esta lectura de los hechos (en la que ha insistido A. Touraine) no subraya la «novedad» del 68 francés en relación al movimiento estudiantil desarrollado en Estados Unidos o en Alemania. En Francia, además de contestar el carácter de la enseñanza universitaria o de «tomar la palabra», se produce un encuentro entre obreros y estudiantes que provoca una huelga general y produce una crisis política en todo el país. Para entender la importancia de esta huelga obrera y de esta crisis política parece conveniente remitirse a las tesis sociológicas de los sesenta que argumentaban la imposibilidad de una conmoción de estas características en las sociedades industriales avanzadas.

Lipset, Aron, Bell, desde un punto de vista liberal, Marcuse y W. Mills, desde una perspectiva de izquierda, habían insistido durante los años cincuenta y sesenta en la transformación del escenario político de las democracias occidentales. Para estos autores los problemas que separaban a la derecha y a la izquierda institucional habían disminuido hasta el punto de adquirir una relativa insignificancia. Como diría Lipset: «... nadie considera que el control de la política interna por un partido u otro revista excesiva importancia» (2). La lucha democrática de clases continuará, añadía Lipset, pero será una pugna desprovista de toda ideología, sin banderas rojas ni extremismos; la lucha de clases, en su sentido clásico, toca a su fin en Occidente.

La afirmación de Lipset según la cual la revolución no está en la agenda de los Estados industriales avanzados era compartida por Marcuse. Mientras para Lipset los socialistas de los países occidentales pueden desarrollar un «comportamiento responsable», aquéllos que deben desarrollar su acción política en el mundo subdesarrollado deben ser «extremistas». Recordemos sus propias palabras: «El socialista que ejerce el poder en un país subdesarrollado debe continuar, por lo tanto, conduciendo una lucha revolucionaria contra el capitalismo, los imperialistas occidentales, y cada vez más, contra la cristiandad... si acepta los argumentos de los socialistas occidentales de que el Occidente ha cambiado, de que el socialismo total es peligroso, de que el marxismo es una doctrina pasada de moda, se convierte en conservador frente a su propia sociedad, papel que no puede desempeñar reteniendo al mismo tiempo su arraigo popular» (3).

Para Marcuse la sociedad tecnológica lograr contener el cambio social al integrar a la clase trabajadora. La colaboración entre el sindicato y la empresa, el aumento del nivel de vida y la consolidación de un Estado de bienestar (coaligado con el Estado de guerra) bloquean el camino hacia la liberación. El debilitamiento del potencial revolucionario en estas sociedades va acompañado por el abandono del marxismo por parte de los partidos socialistas y por la reducción de la actividad sindical al campo de las reivindicaciones económicas inmediatas. El conflicto capital/trabajo no trasciende las reglas del sistema capitalista. La interrogante de Marcuse era y sigue siendo importante: ¿ha tenido lugar alguna revolución en los países tecnológicamente avanzados?; ¿la ausencia de revolución en estas sociedades es un puro «accidente histórico»? (4).

Para Marx, recuerda Marcuse, la revolución es una cuestión de vida o muerte. La clase obrera tiene, sin embargo, intereses creados en las sociedades tecnológicamente avanzadas; es, por ello, la población de los países atrasados la que puede producir una nega-

ción absoluta de las «bendiciones de la sociedad opulenta». Es ahí «... donde tenemos al proletariado marxista, a la clase potencialmente revolucionaria» (5).

El propio W. Mills, al dirigirse a la «nueva izquierda» en 1961 y plantear el problema de los factores de cambio social, afirmaba: «... lo que no entiendo muy bien de algunos escritores de la nueva izquierda es por qué se aferran tanto a la «clase trabajadora» de las sociedades capitalistas avanzadas como el factor histórico, o siquiera como el factor más importante, frente a la evidencia histórica realmente impresionante que ahora se opone a estas esperanzas... esta metafísica de la clase trabajadora, me parece, es un legado del marxismo victoriano que en nuestra época carece en absoluto de realismo. Es una esperanza históricamente específica que se ha convertido en una esperanza ahistórica y anti-específica» (6).

Mills situaba su esperanza en los movimientos que se producían en el ámbito de la «joven intelligentsia» dentro del aparato cultural como muestra de una insurgencia moral que combatía la apatía y la complacencia. Veinte años después podríamos valorar el desarrollo de ese desplazamiento del sujeto revolucionario clásico, tanto la evolución de los acontecimientos en el Tercer Mundo como las transformaciones habidas en el comportamiento de estudiantes e intelectuales en las sociedades capitalistas avanzadas. Al final de este artículo diremos algo a este respecto; baste por el momento con señalar que el marco donde se van a producir las conmociones del Mayo francés remitía a una ausencia de perspectivas revolucionarias en el Occidente capitalista, o dicho con palabras de Marcuse: ¿cuándo se había dado la última huelga general efectiva?

Huelga general y crisis política

En los últimos días hemos asistido a una recolección de textos, de documentos, de narraciones acerca de lo que ocurrió realmente en Francia aquellos días. El Mayo francés ha sido caracterizado como «psicodrama», «fiesta», «revuelta», «carnaval», pero lo que parece incuestionable es que, al menos durante los días 29 y 30 de mayo de 1968, hasta los crítico más feroces de los acontecimientos (Aron) temieron que «la rebelión se convirtiera en revolución».

Hace años, Ignacio Fernández de Castro publicó un relato (7) de lo acontecido que se ajusta certeramente a los hechos. Fernández de Castro recuerda cómo en Francia (al igual que en las democracias occidentales de posguerra) las manifestaciones se realizaban dentro de un orden, con itinerarios marcados, consignas conocidas y servicios de orden que garantizaban la normalidad. En unos días

Francia pasó de celebrar el tradicional Primero de Mayo, sin alaracas ni estridencias, a vivir ocupaciones de locales, asambleas permanentes y barricadas. ¿Pensaban los dirigentes que encabezaban la tradicional manifestación del día del trabajo en una huelga general de diez millones de personas?

El detonador de lo ocurrido fue la lucha estudiantil. Tras haber constituido un grupo muy minoritario (Movimiento 22 de Marzo) los estudiantes encuentran el apoyo de la opinión pública francesa en pos de un objetivo: «liberar la Sorbona ocupada por la policía». El 13 de mayo había un millón de manifestantes. Del 14 al 26 de mayo, diez millones entrarían en huelga. ¿Llegaron los obreros a tomar las «banderas rojas» de manos de los estudiantes?, ¿estuvo Francia al borde de una huelga insurreccional?

Los hechos se saldarían con un acuerdo con los sindicatos, aceptando algunas de las reivindicaciones obreras, y con una desmovilización de fuerzas al ser convocadas unas elecciones que ganaría la derecha. Entre «los acuerdos de Grenelle» y la victoria electoral media un período de indecisiones y vacilaciones por parte del poder político. De Gaulle desaparece unas horas y entra en contacto con las fuerzas militares y los gaullistas convocan a una gran manifestación a los partidarios del orden, a la Francia silenciosa.

El primer elemento a constatar es el «encuentro» entre obreros y estudiantes. El primer ministro Pompidou lo reflejaría admirablemente en una carta dirigida a R. Aron: «Cuando volví de Afganistán me encontré con una situación que me pareció desesperada. La opinión pública de París respaldaba totalmente a los estudiantes. Se había convocado la manifestación del 13 de mayo. Entonces pensé (y ahora estoy seguro) que si no devolvía la Sorbona, la manifestación quizá podría provocar la caída del gobierno (y del régimen) o quizá no, pero lo que sí era seguro era que se apoderarían de ella... ¿quién habría podido impedir a una muchedumbre de 500.000 personas penetrar en un local como la Sorbona? Ni siquiera el ejército habría bastado para ello y, además, ¿quién habría ordenado al ejército abrir fuego contra semejante multitud?» (8).

Frente a las acusaciones de la derecha de vacilaciones, marchas y contramarchas del gobierno, Pompidou, en esta carta de julio del 68 dirigida a R. Aron, insiste en el «dominio» que el gobierno tuvo de la situación: «En un asunto como éste no hay más que dos salidas: una, confiar desde el comienzo en la represión más brutal y decidida, cosa que ni me gustaba ni tenía medios de hacer. No los tenía porque, de haberlos empleado, la rebelión de la opinión pública habría obligado a echarlos atrás, es decir, a desaparecer. Una democracia no puede usar la fuerza si no es con el apoyo de la opinión pública y nosotros no lo teníamos. O dos: entonces hay que

ceder terreno, quedarse tranquilo y ganar tiempo. Los estudiantes podían cansarse y avenirse a un arreglo. También podían empeñarse que es lo que hicieron. En este caso serían cada vez menos numerosos y más impopulares. Es lo que pasó. Llegado el momento yo pasaba a la ofensiva sin dolor» (9).

Para evaluar lo ocurrido en Francia no podemos, únicamente, recordar la toma de espacios culturales, o recordar la fiesta en la calle; hay que preguntar si efectivamente las vacilaciones del gobierno permiten hablar de «vacío de poder», de «parálisis», de «incapacidad para mantener la situación». La carta de Pompidou a R. Aron refleja al menos dos cosas importantes: la batalla que se entabló a nivel de opinión pública y la «garantía» que tenía Pompidou de contar con el apoyo de las fuerzas armadas. Para resolver el primer envite Pompidou consideró indispensable «devolver la Sorbona a los estudiantes», para mantener el orden (ante cualquier intento revolucionario) contar con el apoyo del ejército: «No se llame a engaño; gané la partida política el 11 de mayo por la noche. Podría haber habido otra partida que ganar o perder si el partido comunista hubiese decidido pasar a la revolución violenta. Pero en este caso, contrariamente a lo que pasaba con los estudiantes, el gobierno tenía la posibilidad de usar de la fuerza, porque la opinión pública habría estado con él y el ejército le habría sido fiel sin vacilaciones. De todos modos el partido comunista se echó atrás frente a la aventura» (10).

El partido comunista no se lanzó a la aventura. Waldek Rochet, secretario general del PCF, lo explicaría diciendo: «La opción a tomar en mayo era la siguiente: o bien actuar de modo que la huelga permitiera satisfacer las reivindicaciones esenciales de los trabajadores y proseguir, al mismo tiempo, en el plano político la acción orientada a cambios necesarios en el marco de la legalidad. Esta era la posición de nuestro partido. O bien lanzarse decididamente a la prueba de fuerza, es decir, ir a la insurrección, recurriendo incluso a la lucha armada con objeto de derribar el poder por la fuerza. Esta era la posición aventurera de algunos grupos ultraizquierdistas. Pero como las fuerzas militares y represivas estaban del lado del poder establecido, y la inmensa masa del pueblo era absolutamente hostil a semejante aventura, es evidente que entrar por esa vía significaba, sencillamente, conducir a los trabajadores a la matanza y buscar el aplastamiento de la clase obrera y de su vanguardia, el partido comunista» (11).

«Las lecciones de Mayo del 68» (12) para el marxismo revolucionario estaban claras. El movimiento había demostrado la posibilidad de huelgas de masas que desbordaban los objetivos reivindicativos y los marcos institucionales de la sociedad y el Estado capitalista. La revolución no era «definitivamente» imposible en el Occidente capitalista, pero para lograr que esta «revolución» fuera

victoriosa era imprescindible aprender la «lección»: la imposibilidad de una vía «parlamentaria» al socialismo y la necesidad de formar políticamente una «vanguardia» que supiera aprovechar la siguiente oportunidad. Como diría Mandel, aceptar el criterio de que «mientras la burguesía fuera capaz de recurrir a la guerra civil, era preferible no abrir la boca» significaba asumir un estado de espíritu que hubiera impedido cualquier revolución en cualquier momento histórico: «Para conquistar el poder se necesita una vanguardia revolucionaria que haya convencido ya a la mayoría de los asalariados de la imposibilidad de ir al socialismo por vía parlamentaria, que sea ya capaz de movilizar a la mayoría del proletariado bajo su bandera» (13).

Veinte años después Krivine y Bensaid han analizado aquella experiencia señalando que la debilidad del 68 estuvo en que no tenía claro un proyecto de nueva sociedad, que no había articulado una estrategia para la toma del poder y que, por último, no existía un partido revolucionario capaz de ocupar ese poder. Estas debilidades del movimiento irían unidas a un análisis del poder político dominante en el que se afirma que las instituciones represivas «permanecieron al abrigo de la tormenta», el ejército apenas fue rozado y por tanto nadie se llegó a plantear que la conquista del poder político estuviese en juego (14).

Esta reflexión de Krivine es importante, pero el hecho es que la actitud del partido comunista y de los sindicatos obreros indujo a muchos a avalar la necesidad de crear «partidos revolucionarios» a su izquierda. Incluso un hombre como Sartre, tradicionalmente desgarrado por su fidelidad al partido comunista («el partido de la clase obrera») y la práctica del estalinismo, llegó a afirmar poco tiempo después: «Los comunistas siempre han afirmado —era verdad hasta ahora— que los movimientos revolucionarios que pretendían situarse a la izquierda del PC contribuían a dividir a la clase obrera, terminando siempre por estar «objetivamente» más a la derecha que aquél. Discutir hoy sobre este punto es, a mi criterio, plantear mal el problema. No hay que plantearse si se está a la derecha o a la izquierda del PC, sino si se está verdaderamente en la izquierda... en estas condiciones estoy convencido de que los dirigentes actuales de la izquierda no representarán ya nada dentro de diez años y no veo qué peligro habría en que se constituyera un movimiento revolucionario fuera del PC y a su izquierda. Incluso creo que es inevitable, y que es lo único que puede desbloquear la política del PC, permitiendo a los verdaderos revolucionarios que todavía permanecen en él hacer oír sus voces e imponer una nueva orientación del Partido» (15).

Diez años después el pronóstico de Sartre no se cumplió. Los grupos maoístas fueron desapareciendo, los grupos trotskistas sobrevivieron muy minoritariamente y la posibilidad de una «vía

parlamentaria al socialismo» siguió ocupando las mentes y las tareas de los dirigentes comunistas (abandonando incluso la «dictadura del proletariado»). El PCF siguió jugando un papel en la escena francesa pero la novedad vino de mano de los socialistas. Estos se recuperaron de sus cenizas y, tras sucesivas derrotas electorales (74, 78), lograron alcanzar en 1981 el triunfo. Veinte años después podemos preguntarnos quién tenía razón: si los que apostaban por una vía parlamentaria o los que dedicaban sus esfuerzos a formar una vanguardia revolucionaria que supiera aprovechar la siguiente oportunidad.

El hecho es que una nueva oportunidad por el momento no ha llegado. Las sociedades capitalistas avanzadas no han vuelto a sufrir una conmoción social y una crisis política de esa magnitud. Los que se han ido preparando para tal evento no han tenido ocasión de mostrar su destreza ni de practicar su audacia. La vía democrática al socialismo debe sin embargo mucho al 68. La renovación del discurso político tradicional, tanto en lo relativo a la constitución de un nuevo sujeto emancipatorio no reducible al proletariado como en la articulación de un diseño de sociedad en el que la autogestión, el control obrero y la recuperación de la soberanía tengan su lugar, son ideas que toman fuerza a partir de aquellos días de mayo.

Al final de este trabajo volveremos sobre este tema. Conviene ahora que nos detengamos en la interpretación de aquéllos que han insistido en analizar el 68 como un fenómeno más «cultural» que «político», más «social» que «estatal», más «festivo» que «revolucionario».

La revuelta antiautoritaria

La interpretación a la que nos referimos en este apartado no mira a Krivine sino a Cohn-Bendit. No le interesa saber si el proletariado es revolucionario o reformista, o decidir si es preferible una vía democrática o una vía revolucionaria para alcanzar el socialismo. Considera que todos estos temas sólo tienen sentido si se sigue creyendo en el «viejo discurso revolucionario». Para Cohn-Bendit, por ejemplo, Mayo pone en cuestión la ideología revolucionaria tradicional. No es la clase obrera la que estaba en vanguardia sino los nuevos actores sociales. La mayor huelga de la historia francesa se saldó normal, institucionalmente con los «Acuerdos de Grenelle», pero este encauzamiento del conflicto obrero no puede ocultar la importancia de un movimiento antiautoritario que logra crear zonas de vida autónomas, que logra articular una cultura política específica (16).

Frente a los que intentaron reconstruir un «auténtico partido revolucionario» (reproduciendo hábitos autoritarios y llegando a sentir, en algunos casos, la tentación de la lucha armada), Cohn-Bendit reivindica un nuevo estilo de vida que apareció con el 68 y que hoy sobrevive, a su juicio, en los Verdes alemanes.

Los núcleos comunitarios, libertarios, fraternales y el carácter antijerárquico del movimiento han sido ensalzados, entre otros, por Morin en un trabajo reciente (17). Desde la contracultura americana a la filosofía del deseo francesa hay un común sentimiento de repulsa a la política revolucionaria y a la reformista, a las organizaciones burocráticas y a los núcleos militantes. El desplazamiento del «sujeto» revolucionario sufre, en este ámbito, múltiples peripecias. Mientras para los marxistas críticos de la sociedad industrial avanzada y de la integración obrera el factor histórico de cambio había pasado a los estudiantes, los intelectuales y las minorías negras (dentro del capitalismo avanzado) y al proletariado en los países subdesarrollados, para los herederos de esta lectura antiautoritaria del 68 lo fundamental es ahondar en los espacios de poder que colonizan, domesticar y someten cuerpos y mentes. La prisión y el manicomio aparecen así como espacios de un poder que disciplina a los miembros de las sociedades democrático-representativas. Con tecnologías dulces o con sujeciones violentas el Panóptico está siempre presente.

Tras esta práctica hay una crítica a la función clásica del intelectual como monopolizador de un saber general y universal. La reivindicación de lo concreto, de lo específico, de la lucha puntual frente a toda estrategia omnicomprendensiva, va acompañada de una puesta en cuestión del carácter «racionalista» del movimiento obrero. Jesús Ibáñez lo decía con meridiana claridad recientemente: «el marxismo se resume en una frase, 'hay razón para rebelarse', la rebelión está fundada en razón, el marxismo es socialismo científico». Para Ibáñez, Marx creía encontrar potencia revolucionaria en el proletariado, pero *El Capital* designa ambos términos (propietario y proletario) como designando papeles complementarios. Y concluye Ibáñez: «sólo una revolución no fundada en razón, que no necesita justificarse, es revolucionaria... sólo una revolución no definida en sus objetivos es revolucionaria...» (18).

El planteamiento es justamente el antitético al señalado por Kri-vine. Si éste veía las «debilidades de Mayo» en la falta de estrategia, en la ausencia de un diseño claro de sociedad alternativa y en la inexistencia de un partido revolucionario que pudiese ocupar el poder... para Ibáñez la definición de esa sociedad o la jerarquización de los momentos de la lucha, la vieja alianza entre la ciencia y el movimiento obrero, son de por sí rechazables.

Sartre se irritaba cuando oía que el pensamiento de Cohn-

Bendit estaba cerca de Nietzsche. Para el gran filósofo francés esa afirmación era muestra de un profundo analfabetismo político. Si se trataba de buscar algún parentesco, Sartre lo encontraba en Rosa Luxemburgo: «Es claro que la concepción de Cohn-Bendit —aunque tenga horror a que se le asocie a una ‘escuela’ cualquiera— está más próxima a la de Rosa Luxemburgo que a la de Lenin o Blanqui. No piensa ni un instante en hombres superiores o superhombres que condujeran a las masas. Piensa que las masas engendran de cuando en cuando pequeños grupos de hombres que nunca llegan a ser ‘jefes’ pero que pueden desencadenar —en ciertos momentos privilegiados en que su acción corresponde a una exigencia popular profunda— un movimiento de masas que los sobrepasa y los envuelve enseguida. ¿Dónde está aquí Nietzsche?» (19).

Tiene razón Sartre al reivindicar la conexión con el luxemburguismo y el consejismo para los estudiantes antiautoritarios, pero no se puede dejar de constatar que a partir del 68 se produce una cierta «vuelta a Nietzsche». Y con ella una crítica al marxismo como «religión salvífica» ya que en el fondo la revolución o la liberación no son sino otras formas de hablar de la salvación y la redención cristiana (20). La contraposición nietzscheana entre el «fuerte» y el «débil» sirve para entablar una crítica a la dialéctica y una reivindicación de la diferencia. La dialéctica y la lucha de clases conducen al resentimiento, y sólo el placer de la diferencia permite la autoafirmativa valoración del fuerte. Es un nietzscheanismo sin «superhombre» y más centrado en la transvaloración y el eterno retorno.

Esta «vuelta a Nietzsche» tuvo importancia fundamentalmente en la filosofía francesa a través de Deleuze y en menor medida de Foucault. Es curioso que los herederos del 68 se dividan en este punto. Unos al reivindicar la «crítica fuerte» al humanismo abstracto y bien intencionado ven en Nietzsche un gran aliado para combatir el espiritualismo vacío y la «patraña» de los derechos humanos. Otros, como ha señalado acertadamente Aron, van a evolucionar estableciendo en el «culto a los derechos humanos» la posibilidad de cubrir la ausencia dejada por la crisis del comunismo. Para estos segundos la teoría de los derechos humanos es una manera de ser fieles a sí mismos, de combatir por una causa justa, de mantener el entusiasmo, sin vincularse a combates políticos dudosos, que harían más difícil mantener el idealismo y la pureza del 68 (21).

Más allá de la ironía de Aron el análisis es certero. Para muchos herederos del 68 los partidos comunistas no sólo habían «traicionado» a la revolución al aceptar la vuelta a la normalidad y la participación en la convocatoria electoral de junio del 68. Si sólo hubiesen cometido esta «falta» la acusación hubiese sido por parali-

zar un impulso revolucionario. Tras los acontecimientos de Praga y las revelaciones del Gulag los comunistas no eran sólo los funcionarios encasillados en organizaciones muertas, sino los verdugos de los hombres libres, los carceleros de un posible Gulag (22). Aquellos izquierdistas que no siguieron el camino de crear organizaciones revolucionarias de nuevo tipo y que tampoco perdonaron al Partido Comunista Francés su carácter prosoviético, encontraron en la «defensa de los derechos humanos» (allí donde fueran violados, en el Este o en el Oeste) un motivo de lucha y de persistencia en sus convicciones.

Si en el análisis de la huelga general y de la conmoción política han ido apareciendo todos los tópicos que preocupan a los autores marxistas (el carácter revolucionario o no del proletariado, la vía parlamentaria o insurreccional al socialismo) es evidente que al adentrarnos levemente en lo acaecido en el terreno sociocultural aparece el gran tema de los sesenta: el lugar de la moral, del individuo en un proceso emancipatorio. También aquí, sin embargo, las respuestas son bifrontes: o recuperar la «tradición humanista» ante la realidad inmoral de la política establecida en uno y otro bloque militar, o, por el contrario, reconstruir la subjetividad «más allá del bien y del mal». El asunto no es nada sencillo y remite al lugar de la ética en el marxismo y en todo proyecto emancipatorio. El peligro de abstracción, de angelismo, de cortina deformante de muchas proclamas humanistas no puede ocultar la necesidad de establecer una tensión entre ética y política. Por contra, la necesidad de reivindicar espacios no productivos de placer y autorrealización no puede hacer olvidar la «dificultad» (quizás insuperable) de aunar una tradición solidaria e igualitarista (como la que representa el movimiento socialista) con la crítica a todo gregarismo y la puesta en cuestión de toda «apuesta por el débil» (como la que defiende en muchas ocasiones el pensamiento de Nietzsche).

El debate sobre el humanismo y la moral, sobre el papel de la subjetividad, no comienza con el 68 pero sí encuentra un designio peculiar a partir de ese momento. No podía ser de otro modo, ya que lo más genuino culturalmente hablando del 68 es esa «efervescencia de la sociedad» que tanto indignó a R. Aron. Los discursos de aquellos días fueron mucho más allá de las reivindicaciones ordinarias: los obreros cuestionaron la estructura de la empresa, la forma de conducirla, la sociedad de consumo, la convivencia mercantilizada y, a la par, reivindicaron la autogestión para la vida cotidiana. El deseo ardiente de Aron como representante de la «mayoría silenciosa» era acabar con aquel tumulto, «en el cual los obreros no trabajaban, los funcionarios estaban de vacaciones y los estudiantes continuaban su parloteo». Ante tal crisis de las instituciones su deseo más ardiente fue contribuir a que Francia volviera a ser lo que era (23).

Los temas del 68 siguen ahí: ¿cuál es el lugar de la «subjetividad» en un proceso de cambio revolucionario? ¿Tiene algún puesto la ética en el marxismo? ¿Cómo ha evolucionado el proletariado occidental? ¿Se ha producido el desplazamiento del sujeto revolucionario de la clase trabajadora a los «nuevos actores sociales»?

La temática del 68 es obsoleta únicamente para los ideólogos de la complacencia que piensan que aquello fue un accidente histórico sin mayores consecuencias, un sarampión infantil, una utopía juvenil. Los que no participamos de ese discurso debemos volver a los hechos y reflexionar a partir de los mismos. Comencemos por el problema de la evolución del proletariado. Se puede constatar una primera evidencia: la diferencia radical en el papel jugado por los sindicatos en los años sesenta y en los ochenta.

La importancia del Mayo francés estriba en la unión entre obreros y estudiantes. Ni los sindicatos americanos apoyaron la lucha contra el Vietnam, ni los alemanes fueron aliados del movimiento estudiantil. Las reivindicaciones fueron más allá de lo ordinario: se cuestionó la estructura de la empresa y la alienación laboral y se reivindicó la autogestión generalizada y el control obrero. Veinte años después la ofensiva neoliberal ha sido tan dura que los jóvenes trabajadores no pretenden huir de un «trabajo alienado» sino penetrar, al precio que sea, en el mercado de trabajo. La realidad actual de la economía sumergida, la flexibilidad laboral, los trabajos precarios y la desregulación, no puede hacernos olvidar un hecho esencial (que puso encima de la mesa el 68): ¿podemos hablar de socialismo sin impugnar la división entre dirigentes y dirigidos, entre explotadores y explotados, entre dominantes y dominados? ¿Se puede hablar de socialismo sin impugnar la estructura autoritaria de la empresa, sin que la democracia penetre en la fábrica?

Si del pleno empleo hemos pasado a la economía sumergida habría que decir que de la impugnación de la «selectividad universitaria» y de la universidad como reproducción de élites hemos pasado a una situación donde la universidad pública cumple la función de aparcamiento de gran cantidad de jóvenes a la espera del paro. Mientras tanto los centros privados de élite fomentan saberes exquisitos, sofisticados, con vinculación inmediata al mercado de trabajo. La competitividad, el individualismo y la insolidaridad campan a sus anchas. Pero debemos igualmente preguntarnos: ¿sin cuestionar la autoridad del profesor, sin democratizar la escuela, sin devolver la palabra al estudiante, cabe hablar siquiera de democracia? Es Mayo del 68 el que refuta toda la problemática tecnocrática que reduce el problema de la enseñanza a una cuestión de extensión de la escolaridad o de fomento de la igualdad de oportunidades. La escuela como colosal mecanismo de reproduc-

ción de la desigualdad y como aparato de domesticación de cuerpos y mentes es impugnada por aquellos estudiantes del 68. Sin esa impugnación: ¿cómo construir un programa emancipatorio?

La relación entre obreros y estudiantes fue «relación», «encuentro», «confluencia», pero no «fusión». Es a partir del 68 cuando aparece cada vez más complejo construir un sujeto emancipatorio. Si los sindicatos americanos no lucharon contra la guerra del Vietnam, es evidente también la conexión entre el Estado del bienestar y el Estado de guerra. ¿No fueron los estudiantes los que plantearon frente a los «ideólogos de la complacencia» (W. Mills) la necesidad de volver a cuestionar la política de bloques? ¿No existe ninguna conexión entre ese planteamiento y la aparición en los setenta de movimientos antimilitaristas? Existen obviamente diferencias, ya que algunos representantes del 68 evolucionaron hacia posiciones cercanas a la lucha terrorista y otros, por el contrario, se convirtieron en «ideólogos de guerra fría». Pero es claro también que el espíritu sesentayochista, en su repudio de la sociedad existente, comenzó a plantear el problema de un modelo de sociedad no definible por la dicotomía capitalismo multinacional *versus* colectivismo burocrático. Su aspiración era un socialismo inédito.

La «autogestión», la complejidad del «frente de clases» y la «quiebra de la política de bloques» aparecen en los programas de los partidos socialistas del sur de Europa. La «filosofía» (o al menos la «retórica») del 68 fue asumida. ¿Se trataba de una pura asunción oportunista para captar votos? ¿Era una simple estrategia electoral para ampliar el nivel de apoyos y reproducir más tarde la lógica inexorable del poder? Al leer a algunos de los defensores del «realismo económico» (que dominan la dirección actual del socialismo francés) uno se inclinaría a contestar afirmativamente. Y, sin embargo, la magia del mercado y la retórica de guerra fría, la disuasión nuclear y el beneficio empresarial, están mucho más alejadas del proyecto socialista que la solidaridad de obreros y estudiantes de aquel mes de mayo de hace veinte años.

¿Quiere esto decir que la «vía democrática» no conduce al socialismo y que hay que esperar a una nueva conmoción que esta vez sí sea aprovechada adecuadamente por una minoría audaz?

El debate acerca de las vías al socialismo va emparejado con el «desplazamiento» del sujeto revolucionario de las metrópolis a los países subdesarrollados. Veinte años después, si es más complejo articular un sujeto emancipatorio (por la diferencia entre instalados y sumergidos, obreros con empleo y parados permanentes, profesionales y marginados) también lo es elaborar una estrategia victoriosa hacia el socialismo. La experiencia del gobierno de Allende y de la Unidad Popular es el hecho más importante acaecido durante estos años. Ante la derrota de la «vía chilena al socia-

lismo» cabe rechazar una estrategia de «revolución de las mayorías» e insistir en la necesidad de formar cuadros revolucionarios y constituir una nueva vanguardia. Personalmente pienso que ni las posiciones vanguardistas ni las electoralistas conducen al socialismo. Sólo una estrategia reformista revolucionaria que parta de la cultura política de las sociedades occidentales (y de la importancia en la misma de las instituciones democrático-representativas), y que a la vez sea capaz de establecer una relación con los nuevos movimientos sociales, es susceptible de conducir al socialismo. Este planteamiento que defendieron los eurocomunistas de izquierda y los socialistas mediterráneos apuesta por una «tercera vía» no socialdemócrata y no leninista. Con todas sus dificultades, me parece esta estrategia preferible a la repetición del modelo bolchevique o al «descubrimiento» que algunos han hecho de las bondades de la socialdemocracia atlantista y neocapitalista.

El partido de nuevo tipo y el modelo de un socialismo inédito sólo son posibles si, por último, recogemos algo esencial en la herencia del 68. Nos referimos al papel de la «cultura política de la izquierda». El 68 ha planteado con gran radicalidad la crítica a las estrategias políticas tradicionales y la defensa de la lucha desde abajo, desde focos de resistencia, sólo definibles por los propios implicados en la lucha. El enfoque sigue siendo importante y las últimas reflexiones sobre la sociedad de los tres tercios no hacen sino volver a insistir en la complejidad a la hora de definir las identidades y las distintas prácticas sociopolíticas. La experiencia de estos veinte años nos debe hacer, no obstante, conscientes de la necesidad de volver a replantear la relación entre lo particular y lo universal. La lucha del preso, del loco, del soldado, del homosexual, en sus respectivos espacios de poder, se dobla, trágicamente, en el capitalismo avanzado, en la reivindicación corporativa del médico, del piloto, del juez o del catedrático. El resistencialismo marginal y el corporativismo funcional amenazan con romper cualquier dinámica de agregación colectiva (y de ahí la dificultad para los sindicatos de mantener su antiguo rol de defensa de los trabajadores), pero amenazan también con imponer una cultura de los intereses inmediatos donde no quepa plantear ningún proyecto de solidaridad colectiva.

¿Sin una solidaridad colectiva es posible romper la actual dinámica Norte/Sur? Me parece que una de las herencias del 68 —su indudable lucha contra el imperialismo americano y su crítica al despotismo del Este— para ser mantenida hoy exige volver a replantear por parte de la izquierda las grandes palabras razón, paz, libertad, solidaridad, igualdad, seguridad. Sólo si la izquierda logra argumentar solventemente (por decirlo con palabras de Sartre) «por qué el hombre tiene razón para rebelarse» será posible evitar el «exterminismo». En este sentido creo que la herencia del 68 está mejor recogida en el movimiento pacifista que en lecturas posmo-

dernas. Su espíritu (por decirlo con nombres) queda mejor resguardado en un E. Thompson que en un G. Vattimo. La lucha contra la política de bloques será siempre preferible a un «pensamiento débil», complemento a menudo de un capitalismo fuerte.

(1) H. Marcuse, «Libertad y agresión en la sociedad tecnológica» en *La sociedad industrial contemporánea*. Siglo XXI, 1968. (Recopilación de las conferencias dadas en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México en febrero de 1966). Afirma Marcuse (pág. 63): «Los logros de la sociedad norteamericana pueden comprenderse en la frase «debilitamiento o retirada del potencial revolucionario en esta sociedad». Pregunto a André Gorz si él no está de acuerdo en que tal debilitamiento o retirada del potencial revolucionario no es también visible, aunque, en menor grado, en otros países capitalistas... No hablaré de Francia porque A. Gorz sabe mucho más que yo acerca de ella. Sólo quiero hacerle otra pregunta: «¿Cuándo presencié por última vez una huelga general políticamente efectiva?»

(2) S.M. Lipset, *El hombre político (las bases sociales de la política)*, Tecnos, Madrid, 1987 (edición revisada de 1981), pág. 358. Lipset se refiere en estas páginas a un congreso celebrado en Milán en 1955, acerca de «El futuro de la libertad», donde la presencia de intelectuales representativos del liberalismo, el socialismo y el conservadurismo no suscitó un debate político intenso. A partir de esta experiencia Lipset sostiene su conocida tesis acerca de «El fin de las ideologías».

(3) Lipset, op. cit., pág. 368.

(4) Marcuse, op. cit. nota n.º 1, pág. 70. «... el hecho de que revolución alguna haya tenido éxito en ningún país avanzado tecnológicamente no es un accidente histórico. ¿Por qué? Porque el concepto de revolución supone la existencia de la necesidad vital de revolución, la necesidad vital de cambio o abolición de un sistema social que se ha vuelto intolerable. No debemos subestimar la existencia de la necesidad vital de revolución y creo que por este motivo el concepto de depauperación es fundamental en la teoría marxista; concepto que no debe interpretarse sencillamente como depauperación cultural», «depauperación humana» o «depauperación relativa». Se puede tolerar la depauperación cultural si no se padece la material, o para decirlo de otra manera un poco distinta, la depauperación cultural o relativa no contribuye a la formación de fuerzas revolucionarias. Esta es a mi juicio, la razón básica de la retirada del potencial revolucionario de las sociedades superdesarrolladas».

(5) H. Marcuse, op. cit., pág. 81. «... la población subyacente de los países atrasados vive con la necesidad de cambio social radical. Esta población es la negación absoluta de las bendiciones de la sociedad opulenta y en la actualidad sólo experimenta las bendiciones en su forma más destructiva y brutal. Por lo tanto parece que en la población de dichos países tenemos al proletariado marxista con la única diferencia decisiva de que, por supuesto, no es un proletariado industrial. Pero si se recuerda que ayer

me aventuré a decir que el concepto de revolución puede convertirse en un concepto perteneciente a las etapas del desarrollo preindustrial y pretecnológico, no parece poco razonable presumir que la forma histórica en la cual existe actualmente la clase potencialmente revolucionaria, ya no es el proletariado industrial sino el proletariado rural de los países atrasados».

(6) C.W. Mills, «Carta a la nueva izquierda» en *Poder, política y pueblo*, FCE, 1964, pág. 195.

(7) I. Fernández de Castro, «El Mayo francés: recuerdo y vigencia» en *Cuadernos para el diálogo*, 22 de mayo de 1976, pág. 36 a 40.

(8) R. Aron, *Memorias*, Alianza, Madrid, 1985. Pág. 460-461.

(9) R. Aron, op. cit., pág. 461.

(10) R. Aron, op. cit., pág. 461.

(11) El texto de W. Rochet figura en el artículo de E. Mandel «Lecciones de Mayo del 68» en *Sobre la historia del movimiento obrero*, Fontamara, Barcelona, 1978, págs. 261-262.

(12) E. Mandel, op. cit. 11.

(13) E. Mandel, op. cit. 11, pág. 277.

(14) A. Krivine y D. Bensaid, «Mayo sí», *Imprecor*, mayo 1988, págs. 22-31. Todo el número está dedicado al tema con interesantes trabajos de Jaime Pastor, M. Gari, F. Fernández Buey y la reproducción del texto de Mandel al que hemos hecho referencia en las notas anteriores.

(15) J.P. Sartre, «Los comunistas tienen miedo a la revolución», *Escritos políticos*, Alianza, Madrid, 1987, pág. 165. En esta entrevista le preguntan a Sartre si está de acuerdo con Marcuse. «Algunos pretenden que durante la crisis de mayo el Partido Comunista no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho, porque los obreros han dejado ya de ser revolucionarios: estaban dispuestos a hacer la huelga por reivindicaciones puramente profesionales, pero no a seguir a los estudiantes en su impugnación total de la sociedad. Volvemos a encontrar aquí las tesis de Herbert Marcuse sobre la integración progresiva de la clase obrera en la sociedad de consumo. Marcuse habla de una «esclavitud confortable» y estima que las presiones revolucionarias sólo pueden venir de las capas marginales de la sociedad: los estudiantes, los desempleados, las minorías sociales, ¿es esa su opinión? Contesta Sartre: «Sobre este punto no estoy en absoluto de acuerdo con Marcuse. En principio es necesario definir qué se entiende por movimiento revolucionario. Esta expresión digna, en primer lugar, es evidente, un movimiento en el cual la gente tiene en común, si no una ideología, al menos una voluntad de ruptura con el sistema en que vive... pero esto supone que al menos dicho movimiento tenga la posibilidad siquiera teórica de hacer la revolución. Hay 700 estudiantes en Francia. No veo como podrían arrancar el poder a la burguesía si los trabajadores no se unen a ellos. Los estudiantes pueden ser un detonador, acaban de demostrarlo pero sólo eso... el arma del trabajador es la negativa a entregar su producto a la sociedad. Todo el sistema se detiene entonces. Pero esta ruptura sólo

aparece si el productor entra en la lucha. Decir que en las sociedades de consumo la clase obrera, que es la única productora, desaparece como fuerza revolucionaria, es decir que nunca más habrá revoluciones en estas sociedades. Sé que ésta es la conclusión de Marcuse. Pero creo justamente que dicha conclusión se ve desmentida por lo que acaba de suceder en Francia».

(16) D. Cohn-Bendit, «La marcha verde», *Cambio 16*, mayo de 1988.

(17) E. Morin, «Complejidad y ambigüedad», *Debats*, 21, sep. 1987.

(18) J. Ibáñez, «Contra la castración del padre», *EL PAIS*, 5 de mayo de 1988.

(19) J.P. Sartre, «Las batallas de R. Aron», *Escritos políticos*, TI, pág. 138. Para contrastar la opinión de Sartre acerca de la vuelta de Nietzsche se puede ver el artículo de J. Aranzadi «El espejismo de Mayo del 68» (diez años después) en *Tiempo de historia*, mayo de 1978.

(20) Ver el artículo de Aranzadi op. cit., y obviamente el *Nietzsche* de G. Deleuze, Anagrama.

(21) R. Aron, *El observador comprometido*, Emece, pág. 258.

(22) R. Aron, *Memorias*, pág. 467. «Después del Mayo los partidos o grupúsculos troskistas continuaron con su actividad, pero la mayoría de los intelectuales que en 1968 profesaban y vivían el izquierdismo se detuvieron por sí mismos ante la pendiente. Adquirieron conciencia del peligro: la acción directa, la intimidación en las asambleas generales, la guerrilla urbana, ¿eran la democracia hecha realidad o el principio del fascismo? Los testimonios de los disidentes soviéticos pronto impresionaron a la izquierda del «grupo en fusión». Durante las semanas de mayo los izquierdistas la emprendían con los comunistas que se plegaban a las «elecciones-traición» y que paralizaban el ímpetu revolucionario de las masas. Algunos años más tarde los comunistas ya no sólo les parecían funcionarios encasillados en organizaciones muertas, sino también carceleros de un posible Gulag, verdugos de los hombres libres: del izquierdismo a la defensa de los derechos humanos».

(23) R. Aron, *El observador comprometido*, pág. 231. «Era todo muy lindo pero no era una sociedad. Era una sociedad que dejaba de funcionar. Cuando el general De Gaulle pronunció su último discurso el 30 de mayo dijo: «Ya es hora de que los profesores enseñen, de que los alumnos aprendan, de que los obreros trabajen. Y así sucesivamente. Dicho de otro modo, que era necesario que la sociedad volviera a ser lo que era. Por consiguiente yo no preferí el Estado a la sociedad. Dije que el debilitamiento de la sociedad había alcanzado un punto en el que era razonable detenerse».



ANÁLISIS Y DEBATE

4

EL CIELO EN LLAMAS

Daniel COHN-BENDIT

Adam MICHNIK

Mientras íbamos por las calles manifestándonos contra la hipocresía y la amnesia de las democracias occidentales, intelectuales y trabajadores de Polonia y Checoslovaquia intentaban liberarse de la opresión de regímenes totalitarios. Su versión comunista de una rebelión antiautoritaria confirmó mi aversión y mi odio por el socialismo real y por sus epígonos occidentales.

En 1968, en el contexto de las protestas estudiantiles, Adam Michnik fue expulsado de la universidad de Varsovia y simultáneamente condenado a tres años de prisión. El partido —sobre todo el entonces ministro del Interior, Moczar— atribuyó la responsabilidad de las agitaciones estudiantiles a una «conjuración sionista». Algunos portavoces de esta rebelión —y entre ellos el mismo Adam Michnik— eran, en efecto, judíos. El objetivo de tal campaña, que se basaba en una latente pero profunda corriente antisemita existente en la población, era impedir que la protesta se extendiese a la sociedad entera. Innumerables intelectuales judíos, docentes, actores, médicos y funcionarios

del partido perdieron su trabajo. Sólo 30.000 judíos habían sobrevivido en Polonia al holocausto; en 1968, la mitad de ellos se vio literalmente forzada a emigrar.

Durante años, Adas —así lo llaman sus amigos— fue para el pueblo polaco un judío. Hasta 1983. Después del golpe del general Jaruzelski fue nuevamente arrestado y condenado a varios años de prisión. El entonces ministro de la Policía, Kiwczak, le ofreció la vía de la emigración. «Polonia me gusta tanto respondió Michnik en una carta que se hizo famosa—, aunque deba estar en prisión, que no pienso de ninguna manera exiliarme». Desde ese momento, Michnik ya no fue un judío para sus compatriotas, sino un «verdadero» polaco. Según la voz del pueblo, en efecto, un judío habría emigrado y jamás habría dado una respuesta tan «heroica».

Daniel Cohn-Bendit: Los tres años que van de 1965 a 1968, ¿fueron los más interesantes de tu vida, los más apasionantes?

Adam Michnik: Toda mi vida ha sido

interesante. Quizá el período más importante fue el de Solidaridad. Por nada del mundo renunciaré a esos dieciséis meses. Por ellos también valió la pena pasar seis años en la cárcel. No cederé siquiera uno de esos días. Pero los años entre 1965 y 1968 fueron sobre todo interesantes, porque fue un período durante el cual, con un par de amigos, desarrollé de hecho una actividad de oposición legal en un sistema en el que, en realidad, no había sitio para una oposición legal. Fue la universidad la que nos permitió existir como oposición. La situación de la universidad era muy complicada y ello se debía al hecho de que una gran parte del cuerpo docente profesaba ideas liberales, tanto profesores sin partido como profesores inscritos en el partido comunista. Naturalmente, estas personas nos consideraban unos perfectos idiotas, nosotros que nos definíamos como verdaderos comunistas. Para ellos, el comunismo de por sí, ya como definición, era una calamidad. Y nosotros, que queríamos ofrecer un comunismo mejor, debíamos estar en realidad completamente locos.

Para preservar su honor y su dignidad, a pesar de todo, era necesario que nos defendiesen. Nosotros los contestatarios éramos, en efecto, sus discípulos, la legitimación de su conformismo; éramos para ellos el billete de entrada en la historia, la justificación de su existencia. Por eso nos tomaron bajo su protección. De mala gana, pero lo hicieron.

En la universidad se realizaban debates organizados por la Federación juvenil comunista. Por ejemplo, sobre el tema «Cinuenta años de política exterior de paz de la Unión Soviética». Nuestra actividad consistía en lo siguiente: primero nos reuníamos, organizábamos un seminario durante el cual estudiábamos a fondo el argumento y por fin distribuíamos las partes. Era algo cómo: tú, Jacek, habla de la intervención en Hungría; tú, Józek, de

Katyn; tú, Stephan, de Finlandia; tú, de los procesos de Moscú, o de Yugoslavia. En el caso de la política exterior de la Unión Soviética se trató de una gran manifestación oficial en el aula magna de la Universidad de Varsovia, en la cual intervino también Walery Namiotkiewicz, el secretario de Gomulka. Fuimos y nos distribuimos en la sala. Él hizo una ponencia cuyo tema central era que la Unión Soviética había luchado por la paz durante cincuenta años. Luego mi amigo Józek se puso en pie y dijo: «Querría hacerle una pregunta al orador. ¿Esta paz (*pokoj*) consistía en una habitación (*pokoj*) con cocina?». El secretario dijo: «Esto es una provocación. ¡Sois incapaces de discutir los hechos de manera objetiva!». Entonces me levanté yo y dije: «Claro que somos capaces; la prueba está en que le seguimos escuchando». Y él: «El partido no le tiene miedo a las argumentaciones». Y yo: «Lo veremos». Y entonces estalló el escándalo. Jacek se levantó y habló de Hungría; Józek se levantó y habló de Finlandia. Stephan se levantó y habló de Yugoslavia. Por último me levanté yo y cité a Fidel Castro.

¿Y no te avergüenzas?

Claro que me avergüenzo. ¿Y tú, no tienes nada de que avergonzarte? ¿Eh, Dany? Me avergüenzo, pero ¿debo contar sólo cosas maravillosas o la verdad?

No, no...

¡Me avergüenzo! Entonces, me levanté...

Pero ahora lo sé, ahora he comprendido qué era el 68. Ahora puedo decírselo al mundo entero...

Me puse de pie y cité a Fidel Castro. «Fidel Castro ha dicho que la coexistencia pacífica por la cual lucha la Unión Soviética consiste en el hecho de que no deben caer bombas sobre Moscú ni sobre Washington. Pero sobre Vietnam pueden

caer. ¿Y cómo se siente usted, miembro del partido comunista, cuando todos los días caen bombas sobre Vietnam y usted no les presta auxilio, no quiere auxiliarlos? Y él no sabía si yo era filosoviético o anti-soviético. En su lugar, ni siquiera yo lo habría comprendido. Otra vez fue Rakowski, un liberal. Nos levantamos y le dirigimos una serie de preguntas. Le preguntamos si pensaba que el marxismo era una teoría crítica. Dijo: «Naturalmente». Si el marxismo creía en los dioses. «De ninguna manera». ¿Gomulka es un ser humano o un dios? «Un ser humano, naturalmente». Entonces, en cuanto ser humano, ¿puede ser infalible como un dios? «No, no puede serlo». ¿Por qué entonces usted, Rakowski, no ha encontrado jamás en Gomulka un error que criticar? Y así sucesivamente. ¿Debo seguir contando?

Era una rebelión antiautoritaria.

¡Pues, claro!

Y es una experiencia común a esta generación.

Sí, es verdad, eso es lo que ha marcado a esta generación.

En cualquier caso los contenidos son diferentes.

Esta generación ha aportado a la oposición polaca algo muy específico.

Y a todas las oposiciones sociales del mundo, aunque en parte los contenidos eran dramáticamente opuestos. O quizá no diametralmente, pero sí muy diferenciados.

Sí, sí, es así, Dany. Es verdad, no es casual que yo me haya identificado completamente con el mayo francés. Mi padre no. Mi padre decía: «Ese Cohn-Bendit y su horda son canalla fascista». Y yo decía: «No, son como yo». «Ese Krivine es una bestia stalinista». Y yo decía: «No, es co-

mo yo». El decía: «Ese Tariq Ali, ese paquistaní que vive en Inglaterra, es un agente de la KGB». Y yo decía: «No, es como yo». En este punto tenía con mi padre una disputa muy fuerte. En 1968, Dany, tú diste una entrevista en la que insultabas al Partido Comunista Francés, definiéndolo como «gentuza stalinista». Yo le decía a mi padre: «¿Esto no te convence?». El respondía: «Sí, en esto tiene razón, pero desde un punto de vista equivocado. Sí, porque tú eres un comunista y yo no. A ti te interesan los puntos de vista justos, a mí me interesa sólo si alguien tiene razón o no».

Bien, dejemos de lado las anécdotas. Ahora le toca la vez a la conmoción del 68.

Los años que van de 1965 a 1968 fueron un período en que se concentró, en la universidad, una serie de personas que buscaban el conflicto. Era sólo un grupo de personas, no una organización ilegal. Nos encontrábamos muy lejos de organizarnos como grupo ilegal. Pero nos movimos en esta dirección y, si las cosas hubiesen seguido adelante de la misma manera durante otros dos años, probablemente nos habríamos organizado. En aquel período buscábamos una fórmula que nos permitiese comprender nuestra realidad.

Este grupo buscaba contactos por dos vías: por un lado, los círculos intelectuales católicos; por el otro, los troskistas franceses. Y en última instancia, permanecí fiel a esta búsqueda. Hay una parte mía marcada por el pensamiento de la izquierda europea occidental, y otra influida por las corrientes humanísticas iluminadas, presentes en la Iglesia católica polaca, lo que significa que violo todos los preceptos de Kant, soy sumamente incoherente. Pero si un día tuviese que volverme coherente, creo que moriría enseguida. Mi maestro Leszek Kolakowski escribió un ensayo titulado *Elogio de la incoherencia*, al cual me adhiero. Pienso que el

mayor error en la historia de mi vida en este período fue oponerme, en 1966, a la iniciativa de los obispos polacos —y en particular del cardenal Wyszynski— en relación con los obispos alemanes.

¿La iniciativa con respecto a la frontera Oder-Neisse?

Yo era un adversario convencido de la propaganda nacionalista antialemana. Recibí una educación comunista e internacionalista. No existen pueblos mejores y pueblos peores. No existen pueblos malditos. Los responsables del nazismo no son los alemanes, sino los fascistas. En las Sagradas Escrituras se lee que son suficientes diez hombres justos para salvar una ciudad. Y diez alemanes como Thomas Mann, Viktor Klemperer, Hermann Rauschning, los hermanos Scholl, etc., han salvado a Alemania. Y la carta de los obispos polacos a los obispos alemanes debería haberme gustado. En cambio, no me gustó. Porque había sido educado para pensar que todo lo que viene del episcopado católico debe ser necesariamente reaccionario, nacionalista y pérfido. Ahora que lo pienso, me siento culpable por no haberlo entendido entonces. De este sentimiento de culpa nació mi libro *La izquierda polaca y la Iglesia*. Este es el primer argumento que me hace sentirme culpable; el segundo es la valoración de la guerra del Vietnam. Pero volvamos un momento a la carta. En aquella carta, los obispos polacos escribían a los obispos alemanes: «Perdone-mos y pidamos ser perdonados. Perdone-mos los crímenes nazis y pidamos perdón por el odio con que hemos castigado esos crímenes». Ahora pienso que fue un movimiento correcto, inteligente y clarividente. Pero entonces no lo comprendí. Una vez —me encontraba en Alemania— Heinrich Böll me contó que, leyendo la carta de los obispos alemanes, experimentó casi la sensación de que el Nazareno había resucitado por segunda vez. Hubo también una oposición católica a esta car-

ta, pero de ella son los católicos quienes deben justificarse: yo debo justificar mi punto de vista. Es una pésima costumbre polaca la de disculparse por los pecados ajenos. Pero yo soy un revisionista y me justifico sólo por los míos.

El segundo argumento es Vietnam. La primera octavilla ilegal que repartimos en la universidad se refería a Vietnam. Equiparábamos la intervención norteamericana en Vietnam con la intervención soviética en Hungría. En cambio, no se pueden equiparar. En Vietnam se trataba de una guerra contra el totalitarismo, en Hungría de una guerra contra la libertad. Así lo entendía yo.

¿Y Vietnam del Sur? ¿Qué era Ky? No es tan simple. Puede decirse que era una guerra entre dos totalitarismos.

Vietnam del Sur era un régimen corrupto y reaccionario, pero no un régimen totalitario.

¿Piensas que no era totalitario?

No. Hay que distinguir una dictadura militar muy desagradable de un campo de concentración. Si no entiendes esta diferencia, Dany, entonces no entiendes de comunismo. Tendrías que entenderlo.

Eres tú quien debe hablar. Yo no quiero hablar de ningún modo.

Sí, pero has dicho algo.

He preguntado algo.

Quien pregunta dice también algo.

Es demasiado simple. El problema es éste: tú, hoy —muchos franceses lo hacen—, si estuviese en discusión el tema, ¿apoyarías a los norteamericanos en Vietnam? ¿Los apoyarías, quiero decir, desde un punto de vista ideológico?

De un modo muy particular, sí.

¿Qué significa?

Estaría contra los *vietcong*, pero construiría una alternativa democrática en el Sur. Pero quiero decirte una cosa, Dany: si debo elegir entre Hitler y Stalin, elijo a Marlene Dietrich.

Vale, vale...

No, no «vale», porque vosotros elegiríais el mal menor. Y pensáis que Stalin es el mal menor.

Que no...

Y te digo: si Stalin hubiese perdido la guerra...

No digo eso; digo que desde el punto de vista de los vietnamitas la guerra del Vietnam era una guerra de liberación nacional.

Me atrevo a ponerlo en duda. Si hubiese sido así, hoy no habría *boat-people* en fuga.

Lo que el Frente de Liberación de Vietnam del Sur y la gente no comprendieron es que Vietnam del Norte tenía intereses completamente distintos.

¿Y tú, Dany, crees todavía que no lo habrían comprendido?

Hoy no hay un sólo representante del Frente de Liberación de Vietnam del Sur en el gobierno de Vietnam.

Se lo tienen merecido. Es eso lo que han logrado. Y le sucederá exactamente lo mismo a cualquiera que se líe con los comunistas. Te lo digo yo, que soy sangre de su sangre y carne de su carne.

Para ti ésta es una verdadera experiencia histórica; pero en este caso debes partir de

la conciencia de las cosas que tenían los vietnamitas.

Por lo que respeta a la conciencia de los vietnamitas, tú y yo nos encontramos en la misma situación: no tenemos de ella la más mínima idea.

He hablado con vietnamitas.

¡Y yo!

En Polonia no había. Quiero decir *boat-people*.

Pero hay estudiantes vietnamitas. Y cuando han bebido bastante dicen la verdad.

Pero no puedes proyectar en los vietnamitas, *a posteriori*, una experiencia válida para los polacos. Quiero decir que los vietnamitas han hecho su experiencia del comunismo después de la liberación. En el 68, la gran mayoría de los vietnamitas combatía contra los norteamericanos y...

Deja el tono electoral y dilo en dos palabras.

No estaban siquiera a favor de los comunistas; estaban contra los norteamericanos.

¿Y cómo lo sabes? Está bien, hay algo de verdad en ello. Los norteamericanos son también responsables.

Si te sirve de algo, te diré que en el 67 hicimos una octavilla y por esta octavilla nos hemos peleado con tus amigos troskistas de entonces...

No les disteis bastante...

En esa octavilla decíamos que la revolución vietnamita bajo la guía del estalinista Ho Chi Minh no tenía futuro, porque ya en 1947, con la ayuda del Partido Comunista Francés y del ejército francés, había sofoca-

do la rebelión de los campesinos. Para mí el problema siempre ha sido éste: cómo mantener la exigencia vietnamita de independencia sin mantener a los comunistas. Pero ésta, ahora, es otra historia.

Tengo todavía una pregunta que hacer-te. ¿Cuántas ventanas de la embajada estadounidense has roto para apoyar a los *vietcong* y cuántas para los *boat-people*?

En todos estos años, probablemente, me he manifestado más a menudo contra la Unión Soviética, rompiendo más cristales, que contra los norteamericanos.

No por Vietnam.

¿Ante la embajada soviética por Vietnam? No.

Para apoyar a los *boat-people* no se ha roto un solo cristal de las ventanas soviéticas y por Afganistán lo han hecho sólo los fascistas. Y ésta es nuestra mayor derrota, Dany, nuestra derrota común. En el aniversario de la intervención soviética en Hungría me encontraba en Roma. Era el año 1976. Los únicos manifiestos que la recordaban eran manifiestos fascistas. El único libro aparecido sobre Katyn en Italia fue publicado por una editorial fascista. Pero éste no es un éxito del fascismo; es una derrota nuestra.

Es verdad, la emoción por Vietnam era más fuerte. Eso es verdad, en eso te doy la razón.

¿Qué significa más fuerte? Había y ahora no hay...

Es un poco más complicado...

Sí, sí,... complicado.

Bueno, dejemos de lado Vietnam.

Está bien, basta de Vietnam. Dos acontecimientos fueron entonces sumamente

significativos para los polacos, uno nacional y el otro internacional. El nacional fue la puesta en escena de la obra teatral de Adam Mickiewicz *Dziady*; el internacional, Checoslovaquia. En conjunto, en los primeros dos meses de 1968 el problema total de Polonia lo expresó, en el escenario del Teatro Nacional de Varsovia, el ruso Bestuzev, un personaje de *Dziady*, con la famosa frase: «No me sorprende que nos maldigan. Durante toda una generación, hasta ahora, este país fue mancillado por un ejército de miserables venidos de Rusia». Simultáneamente comenzaba la primavera de Praga. Y nosotros gritábamos: «¡Los polacos esperan a su Dubcek!». Estos dos fueron los acontecimientos más importantes. Contábamos con una nueva oleada de democratización. Al mismo tiempo, lo ocurrido en el Teatro nos sensibilizó en relación con el sentimiento nacional polaco. Era un fenómeno puramente polaco. Nosotros éramos comunistas, Mickiewicz no. Pero no era siquiera un patrioter. Era profundamente antirruso, pero en el sentido antizarista. Escribió también el poema *A mis amigos moscovitas*, dirigido a los decembristas. Esto correspondía también a nuestro estado de ánimo.

Con la ayuda de Mickiewicz podíamos ser patriotas e internacionalistas al mismo tiempo. Antirrusos y filorrusos. Esto se lo debíamos a él. Y Checoslovaquia representaba para nosotros una nueva perspectiva. Cuando la censura prohibió *Dziady*, fuimos a la última función con una pancarta. En ella pedíamos que continuasen las representaciones y gritábamos la consigna «Independencia sin censura». Era una consigna ambigua, hipócrita. Se podía concluir de ella que Polonia no debería recurrir a la censura porque ya tenía la independencia. Esta era la versión para los comunistas en el gobierno. Para el pueblo, no obstante, la consigna tenía otro significado: que la independencia polaca

no debía ser censurada, que debía ser más completa. Y ahora vuelvo a lo que me preguntaste al principio. Si en Alemania no se pudiesen representar Goethe y Schiller, tú serías el primer nacionalista alemán.

Para mí es difícil, porque Goethe y Schiller me resultan indiferentes. Es siempre el problema de mi educación.

Está bien, tomemos a Beaumarchais o Voltaire. O Shakespeare. El que quieras. ¿Heine? ¿Börne? ¿Lessing? Estoy haciendo ahora alarde de mi cultura.

Fassbinder. En el caso de que no hubiesen sido los judíos —que estaban directamente comprometidos— quienes impidieran la puesta en escena de su obra, hubiera sido el Estado, con un procedimiento policial. Suponiendo que se prohibiese representar sin censura los trabajos de un *paria* como era Fassbinder.

Exactamente. Y de golpe no se puede hacer porque los rusos lo impiden. ¿No serías en este caso un patriota alemán?

Digamos un amante de la libertad, si quisiese poner en escena a Sartre en Alemania y los rusos lo impidieran.

Vale. En vista de que, en realidad, Mickiewicz era un lituano, yo me sentía un verdadero internacionalista. Fue precisamente en ese momento cuando el pequeño grupo de disidentes comunistas rebeldes tomó en sus manos la bandera nacional.

Y, de golpe, lo que hasta entonces había sido en cierta medida abstracto y teórico se llenó de sangre polaca. La mitología de la sangre polaca es completamente distinta de la «sangre-y-suelo». Los polacos han derramado su sangre sólo en las derrotas. No es una tradición patrioterica, sino una tradición del sacrificio, del martirio. Por primera vez me dije a mí mismo que soy un auténtico polaco. Y que sólo por el he-

cho de serlo puedo ser también un internacionalista. O universalista. En ese momento me di cuenta de que se me prohibía algo por ser polaco. Los comunistas lo han comprendido muy bien. Siempre sostuvieron que nosotros, los «paracaidistas», usábamos a Mickiewicz sólo para ocultar nuestro verdadero rostro (nos llamaban «paracaidistas» porque aterrizábamos en cada asamblea, precisamente, como una cuadrilla de paracaidistas. El partido organizaba una asamblea y caíamos allí como un comando de paracaidistas y llevábamos adelante nuestra causa). Fuimos acusados de usar cínicamente a Mickiewicz para ocultar nuestros intereses troskistas-sionistas. Sólo Mieczyslaw Moczar podía juntar troskismo y sionismo. Nosotros no. No puedo negar que teníamos algo en común con el troskismo. Con el sionismo, en cambio, no nos unía nada en absoluto.

Por lo que se refiere al troskismo, iba a menudo a Polonia gente de la SCR (la liga troskista). Yo mismo envié dos copias de la *Carta abierta* de Kuron y Modzelewski a Occidente; un ejemplar a París, a la revista en el exilio *Kultura*, y el segundo a la SCR. En esa época no era común mandar cosas a Occidente. La carta apareció simultáneamente en la revista *Kultura* y en las publicaciones troskistas. Teníamos contactos con los troskistas. Como decía antes, a menudo llegaban aquí jóvenes de la SCR que decían ser comunistas y rebelarse contra la ortodoxia estalinista del Partido Comunista Francés. De su pensamiento me atraía la posibilidad de ser —con la ayuda del troskismo— rebeldes antisoviéticos y, a la vez, seguir siendo marxistas y comunistas. Nos separaba, en cambio, su relación increíblemente doctrinaria con la realidad. Describían la realidad con el lenguaje de la doctrina, en vez de desarrollar su doctrina sobre la base de la observación de la realidad. Me acuerdo de una discusión que tuvimos con ellos: ¿la burocracia es una casta o

una clase? La tesis de Troski era que la burocracia constituía una casta; la otra tesis, según la cual la burocracia es una clase, era de Djilas. Los troskistas criticaban mucho esta tesis de Djilas. Nosotros éramos de la opinión de que la burocracia era una clase y no una casta. De la tesis troskista, en efecto, se deduce que el Estado comunista es un Estado proletario con fenómenos de degeneración burocrática. Partiendo de la otra tesis, se llega en cambio a sostener que se trata de un Estado totalitario y no de uno proletario. Otras diferencias existían con respecto a la cuestión nacional. Los troskistas, un poco como tú, Dany, no llegaban a comprender por qué nos aferrábamos a la idea nacional. Nos consideraban nacionalistas. Desde el momento en que los nacionalistas polacos nos consideraban cosmopolitas, sionistas, troskistas, internacionalistas, todo era, en conjunto, bastante divertido.

Ahora dejemos a los troskistas. Volvamos a marzo de 1988.

Como ya he dicho, en marzo coincidieron dos acontecimientos: la suspensión de las representaciones teatrales de *Dziady* y la primavera de Praga. La acción a favor de la obra teatral y de Mickiewicz me hizo entrar por primera vez en contacto, apasionadamente, con los sentimientos nacionales y antirrusos. Nosotros no éramos nacionalistas. Mickiewicz, no obstante, hizo que pudiésemos referirnos a sentimientos nacionales sin asumir una aproximación nacionalista de la realidad. Todo comenzó, pues, con *Dziady*. Se trata de un clásico drama nacional polaco. Probablemente no existe nada semejante en la literatura alemana o francesa. Cuando nos enteramos de que la censura lo prohibiría, hicimos una manifestación durante la última representación. Como consecuencia de ello me acusaron de alta traición. La alta traición consistía en haberme encontrado con un periodista francés y haberle contado que la censura había

prohibido la obra. Después de este episodio, un colega y yo fuimos expulsados de la universidad. Fue el ministro de Instrucción Pública en persona quien nos echó.

Según la ley de entonces, esa medida excedía las facultades de un ministro. Por lo tanto nuestra expulsión era ilegal. En consecuencia organizamos una manifestación de protesta, de solidaridad estudiantil. Esta demostración tuvo lugar el 8 de marzo. El 9 me arrestaron. No había tomado parte de la manifestación, porque se trataba de mí y, en estos casos, no se participa personalmente. Pero esto no tuvo ninguna importancia. Me arrestaron y recuperé la libertad sólo después de un año y medio. Mi temporada en la cárcel fue, sin embargo, sumamente instructiva. Cuando recibí por primera vez en prisión los periódicos, leí ciertas cosas que me hicieron pensar que la policía los había falsificado adrede para mí. Hasta 1968 no era habitual en la prensa comunista polaca utilizar la misma lengua de los *Stürmer*. Se dilataba la teoría del marxismo-leninismo hasta alcanzar un antisemitismo de tipo nazi. No podía dar crédito a mis ojos. El periódico decía que yo era un judío y que no había sitio para mí en Polonia. Entonces tenía veintiún años y jamás se me habría ocurrido que se pudiese escribir algo por el estilo en lengua polaca. En ese punto se me planteó la cuestión de quién era yo en realidad. Me pregunté si no era efectivamente un judío y si no debía abandonar Polonia. Pero finalmente me dije a mí mismo que no le correspondía al señor Mieczyslaw —que es un agente soviético— decidir si yo era polaco, judío o chino. Y entonces decidí que la cuestión no dependía de ellos y que no eran quienes para decidir sobre mi identidad nacional. Al mismo tiempo se me aclaró el asunto de mi identidad espiritual. El antisemitismo de los comunistas polacos quebró definitivamente y para siempre mi nexo espiritual con el comunismo. Ese fue el primer punto determinante. El otro

fue la invasión soviética de Checoslovaquia.

Fue el día más horrible de mi vida. El 21 de agosto de 1968 me enteré por los periódicos de que en Checoslovaquia habían intervenido militarmente cinco Estados —entre ellos, Polonia—. Por primera vez me sentí un nacionalista polaco, porque experimenté una gran vergüenza por la participación de las fuerzas armadas polacas en esta intervención. Pienso que la identidad nacional se revela precisamente cuando al comprobar los crímenes de cualquier pueblo se experimente vergüenza. Quien se avergüenza de los crímenes polacos es un polaco. Entonces experimenté por primera vez en mi vida algo similar al gusto amargo de la infamia nacional. Hay, en efecto, un *ethos* polaco, el mito polaco que se expresa en el lema: «Por la libertad nuestra y por la vuestra». Y los comunistas han hecho que se convirtiera en: «Por la esclavitud nuestra y por la vuestra». La tercera experiencia importante de ese período fueron los interrogatorios. Yo estoy entre aquellos que, como Kuron, no dijeron una palabra durante el sumario. Los oficiales encargados de la investigación repetían continuamente que era un judío y que debía abandonar Polonia. Señor Michnik, me preguntaban, ¿por qué no se va a Tel-Aviv? Yo respondía que me iría de buena gana, pero que antes debían irse ellos a Moscú. Un año después tuvo lugar el proceso. Hubo cuatro grandes procesos. La acusación principal estaba dirigida a Kuron y a Modzelewski; la segunda, a mí. Me condenaron a tres años de prisión. Era poco. Me esperaba una sentencia mucho más dura.

¿Era el año 1969?

Me acuerdo que de los funcionarios encargados de la investigación, en la época en que estaba en la cárcel, estaban furiosos sobre todo con Kuron, porque seguía

diciendo que era un judío, lo que les ponía hechos una furia. Su versión, en efecto, era que Kuron era un polaco convertido en títere de los judíos. Pero Jacek no podía soportar la idea de ser un muñeco, por lo que sostenía que también él era un judío y decía que ellos lo ignoraban porque la policía no sabía hacer bien su trabajo. Fue entonces cuando leí por primera vez tu nombre en los periódicos. Y, durante una visita, mi abogado me contó que en tu proceso habías declarado que cambiarías tu nombre por Kuron-Modzelewski.

No fue exactamente así. Jamás he dicho que quería cambiarme de nombre. El juez me preguntó cómo me llamaba —según el código de enjuiciamiento, los acusados deben declarar su propia identidad—, y yo respondí: «Kuron-Modzelewski». Entonces el juez me miró con los ojos desorbitados y dijo: «¿Cómo ha dicho?». «Me llamo Kuron-Modzelewski», repetí. «Pero usted se llama Cohn-Bendit», replicó. Y yo: «Entonces no me lo pregunte».

Lo que me impresionó fue el tono de la prensa polaca cuando escribía sobre el Mayo francés; era muy similar al usado para escribir sobre nosotros. Ignacy Krasicki, uno de los mayores cerdos del periodismo, un auténtico canalla, escribió en *Zycie Warszawy* un artículo sobre el Mayo francés, en el cual te definía como «ese imberbe y zafio judío». Escribió lo mismo de mí. En aquel período me identifiqué con el Mayo francés. Pensaba que estábamos luchando por las mismas cosas. Debieron pasar algunos años para comprender que era un error. Para mí lo más importante, entonces, era la intervención soviética en Checoslovaquia. Para los estudiantes occidentales en rebeldía era Vietnam. Eso constituía una diferencia esencial. Pero entonces no lo vi tan claramente. Sólo más tarde, cuando vi que Vietnam, después de la victoria de los *vietcong*, se transformaba en un campo de

concentración, sólo en ese momento comprendí lo profundas que eran las diferencias. Pero me ha quedado una simpatía sentimental. En tal sentido he discutido a menudo con mi maestro Leszek Kolakowski. El era de la opinión de que se trataba de un movimiento de carácter fascista. Yo lo veía de modo diferente.

¿Entendía el movimiento estudiantil en Occidente?

Sí. Cuando se le ofreció la cátedra de Adorno, los del SDS (la asociación de los estudiantes socialistas alemanes) le escribieron una carta abierta en la que lo exhortaban a no aceptarla, porque él era un científico burgués y ellos querían un marxista, un comunista. Kolakowski respondió con otra carta abierta en la cual declaraba que no tenía la intención de poner obstáculos a su lucha de clases contra los profesores. Creo que tenía razón, pero me ha quedado una simpatía emotiva por los estudiantes.

Estuve en prisión un año y medio, y ese período, para mí, fue una auténtica universidad de la cárcel. Allí aprendí mucho sobre el comunismo real. Lo vi en acción. Y no era muy divertido. Todo lo que antes sabía sólo en teoría, de golpe adquiría vida ante mis ojos. Pensaba continuamente en el chiste que contaban en Varsovia cuando se pasó la película antifascista *Mein Kampf*: Moczar y Gomulka están conversando. Gomulka le pregunta a Moczar: «¿Has visto *Main Kampf*?». Y Moczar responde: «El libro es mejor». Gomulka corrige: «La versión cinematográfica de un libro es casi siempre peor que el original».

Pasar un año y medio en prisión significa hacer una experiencia muy particular del comunismo. En tal situación, pensé a menudo que la referencia social fundamental del comunismo no es la lucha de

clases, o la lucha entre sectores sociales, sino la relación entre el prisionero y su carcelero. Los cargos de la acusación eran dos. El primero —pertenencia a una organización clandestina ilegal— era absolutamente falso. Jamás he formado parte de una organización semejante. Más tarde, en la época de Solidaridad, habría tenido un gran efecto si hubiese podido decir que ya había formado parte de una organización clandestina. Pero no era verdad, era una mentira. El segundo cargo de la acusación era: contactos con una organización extranjera antipolaca, con el fin de atentar contra el Estado polaco. La pena mínima prevista para tal delito era de cinco años. Y la organización extranjera era *Le Monde*, y su representante Bernard Margeritte. Por una conversación que había tenido con él, iba a recibir una condena de cinco años de cárcel. No me los dieron. No obstante, hoy se lo agradezco a la gente que lanzó esas acusaciones, porque de esa experiencia he aprendido algo.

Una cosa más llevé conmigo al salir de prisión: la capacidad de una obstinada resistencia emotiva en relación con los comunistas. En la cárcel me prometí a mí mismo que no dejaría jamás Polonia, que Polonia es mi país y mi patria, y que yo soy un patriota y no ellos, que cubren de vergüenza a este país mientras yo lo defiendo. No sé si lo he logrado, pero siempre he querido permanecer fiel a ese principio. En septiembre de 1969 fue liberado. En ese momento, reinaba una auténtica obsesión por exiliarse; muchos de mis amigos emigraron entonces. También mis padres eran partidarios de la idea de que me exiliase. Mi padre decía que los comunistas no me perdonarían jamás lo que había dicho durante el proceso.

Durante el proceso había declarado que no había protestado públicamente contra la intervención en Checoslovaquia sólo porque me encontraba en prisión. Y cuando el juez me preguntó por qué me había

negado a firmar una deposición durante el sumario, respondí que no se trataba de un sumario, sino de un intento de crear un expediente contra altos funcionarios del partido —me interrogaron, por ejemplo, sobre Ochab, no sobre Kuroń—; que conocía tal mecanismo por los procesos estalinistas y que, por esos motivos, me había negado a hacer una declaración. Conocía a la hija de Ochab desde los tiempos del colegio. Ochab era entonces presidente del Consejo de Estado, algo similar a un presidente. Ayudé a su hija a prepararse en historia para el examen de licenciatura. En marzo, en el transcurso de esta campaña organizada, en una reunión del partido, se le preguntó a Ochab si era verdad que Michnik le había dado clases particulares a su hija.

Ochab, antes de la guerra, había estado preso junto con mi padre, en la misma celda. La vida en común en prisión crea un vínculo particular. En ese momento, presa de la indignación, respondió: «Sí, Michnik ha ayudado a mi hija en historia y lo ha hecho muy bien». Poco tiempo después renunció a su cargo.

Mientras estaba en prisión leí en el periódico el discurso de Gomulka en el que me había atacado con nombre y apellido y pensé que después de eso me meterían por lo menos ocho años. Se puede decir que todo fue para mí una lección objetiva de comunismo real. Cuando más adelante leí el *Archipiélago Gulag*, allí donde Solzénitsin escribe: «Alabada sea la celda de la prisión, porque me ha formado», me identifiqué profundamente con esa afirmación. La cárcel me ha educado. Si entonces no hubiese acabado en prisión, tal vez ahora me habría convertido en un canalla como Rakowski o Urban. Por ello doy gracias a Dios. Un año y medio después fui a trabajar a una fábrica. Durante dos años fui obrero.

¿Y por qué? ¿Porque sí, o porque no había para ti ningún otro trabajo?

No tenía otra posibilidad. Para que me permitiesen estudiar de nuevo debía trabajar dos años en una fábrica. Trabajé como soldador en la fábrica «Rosa Luxemburgo», donde se hacen bombillas. Desde entonces circula la broma de que todas las bombillas que se funden muy fácilmente debo de haberlas hecho yo. Y yo decía que, puesto que en Polonia gobierna la clase obrera, había llegado finalmente al poder. También ésta fue una experiencia muy importante para mí. Provengo de una familia de intelectuales y aquél fue mi primer contacto prolongado, sincero y directo con los obreros.

Esa fue, pues, tu fase de maoísmo forzoso.

No, maoísmo no.

Maoísmo forzoso. Te mandaron a la fábrica como durante la revolución cultural.

Antes me contaste que estabas en cierto sentido reconciliado con Solidaridad después del 13 de diciembre. Tengo la impresión de que tú equiparas prácticamente tu identidad política en la oposición, tu actuar, tu irreductibilidad, a la —digamos— metáfora cristiana de un mártir. El mártir erguido, el camino directo a través del martirio. Tengo la impresión —por decirlo en términos un poco duros— de que esto, en última instancia, marca tu comportamiento después del 13 de diciembre.

No me gustan palabras tales como irreductibilidad y martirio. No me siento a mis anchas en ese papel. Si alguien intenta encasillarme en él por fuerza, me siento mal, porque me va estrecho. Pero hay algo de verdadero. Si luchas por algo, debes ser el primero en mostrar con tu comportamiento que crees en ello, debes dar testimonio con tu actitud. Kant ha dicho que se debe ser coherente y es necesario que tú lo seas. Yo no soy coherente cuando se trata de sistemas de valores, porque sólo existen valores conflictivos. Pero lo soy

cuando se trata de mí. Mi amigo y maestro Zbigniew Herbert, el gran poeta polaco, solía decir: «Cuando tienes sólo dos caminos para elegir, uno más fácil y otro más difícil, debes entrar siempre por el más difícil».

Ahora me toca a mí con un toque hebraico: «Cuando tienes sólo dos posibilidades, elige la tercera».

Yo elijo la segunda, el camino más difícil. Es decir, no sé si lo hago, pero sé que debería hacerlo. Y cuando elijo el más fácil cometo un error. En este sentido creo que mi deber era —en el momento en que, después del 13 de diciembre, proponía a Solidaridad una filosofía del compromiso político— comportarme de modo tal que fuese absolutamente claro que no lo hacía para salir de la cárcel. Porque sólo comportándome en el plano personal como un *kamikaze* —mientras al mismo tiempo proponía un compromiso— resultaría creíble. En esto está contenida una determinada filosofía política y también de vida. En verdad me parecía que un choque frontal habría sido una desventura para Polonia y quería que se creyese que lo pensaba desinteresadamente. Por ello elegí en el plano personal el choque frontal, mientras que en el político sostenía la necesidad de un compromiso.

En diciembre de 1983 el ministro Kiwczak, jefe de la policía, hizo llamar a Basia y le dijo que debía convencerme de que me fuera al extranjero. Podía elegir entre pasar las inminentes fiestas de Navidad en la Costa Azul o pasar muchos años más en la cárcel. En respuesta le escribí una carta, por la cual todo el pueblo polaco me quiere, a mí, que soy un intelectual esotérico. Le escribí desde la prisión: «Sé que usted, en mi lugar, elegiría la Costa Azul. Esta es, precisamente, la diferencia entre nosotros: que vosotros sois cerdos y nosotros no. A mí Polonia me gusta, aun desde una celda de prisión. No

tengo intención de dejarla. Puede, pues, quitarse de la cabeza ese tipo de ofrecimientos». Y la carta fue transmitida, la víspera de Navidad, por la radio occidental. Rodeados por una atmósfera de fiesta, los polacos pudieron escucharla por *Radio Europa Libre*. ¡Y desde entonces nadie afirma ya que soy un judío! Porque he salvado el honor polaco... Pero ahora ya no conviene que esto se publique.

¿No llega un momento en que precisamente esa actitud se convierte en una carga? ¿Cuántos años has pasado en chirona?

Seis.

No, digo desde el 13 de diciembre.

Muchos menos, naturalmente. Pues... dos años y ocho meses más otro año y medio, o sea otros dieciocho meses.

¿No experimentas jamás una sensación de cansancio? ¿No llegas nunca a ese límite personal tuyo, es decir lo que un individuo puede soportar en una situación como ésta?

Los tontos tienen suerte. En prisión escribí cinco libros. La cárcel ha hecho de mí un escritor apreciado en Polonia y traducido en Occidente. ¿Cómo podría lamentarse? ¿Y quién no está cansado alguna vez? Para estar cansados, no es necesario vivir en el comunismo. Yo estoy cansado, a veces.

¿Vives hoy con la perspectiva de ser arrestado mañana, o tienes ahora la sensación de poderte organizar por un tiempo en esta relativa —pero, en relación con la prisión, real— libertad?

Pienso que no se debe especular con el destino. Creo que he tenido suerte en la vida. Tengo una mujer guapa, he escrito unos libros, tengo la sensación de gustarles a las personas que estimo. ¿Por qué debería planificar mi futuro? Tengo un solo

plan para el porvenir: querría estar en mi sitio. Y del resto es responsable Dios.

¿Qué significa «estar en tu sitio»?

En mi sitio desde un punto de vista moral. El resto se lo dejo a Dios. Puede ser que se ocupe de ello.

¿Has comprado otro billete de lotería?

Sí, compro uno cada día. *C'est ma philosophie.*

La última pregunta.

No es necesario que sea la última. Cuanto más preguntas, más me estimulas. Porque me resulta difícil hablar de mí.

Ayer, hablando, dijiste que es extraño cómo esta gente del 68 —por ejemplo Franco Piperno, que estaba cerca de las Brigadas Rojas, Tom Hayden, que hoy forma parte del *establishment* del Partido Demócrata norteamericano y antes estaba en el SDS, a la reformista, Rudi Dutschke, yo, Peter Uhle en Checoslovaquia, Bukovskij en la Unión Soviética, que tienen posiciones políticas sumamente diferenciadas, a veces contrapuestas, permanece ligada por cierta simpatía, por cierta solidaridad. ¿Por qué? ¿Cómo te lo explicas?

¿Y tú cómo te lo explicas?

Te lo dije ayer. Me he reconocido en aquello que dijiste de vuestro comportamiento en la universidad, de los ensayos que hacíais de formas de conducta antiautoritarias.

Creo que, en este contexto, el término antiautoritario es un concepto clave. Las autoridades contra las cuales nos rebelábamos eran diferentes. Pero el sentimiento de la rebelión era común. Era lo que decía el Che Guevara: «Mientras el mundo sea como es no quiero morir en mi ca-

ma». Este es un problema. Esta generación, en efecto, tiene una determinada *chance* histórica. Pero las ocasiones pueden ser aprovechadas o perdidas. A menudo tengo la sensación de que nosotros no las disfrutamos. Somos nosotros, sin embargo, los que tienen la *chance* de explicar a los polacos quién es una persona como Dany, y son las personas como Dany las que tienen la *chance* de acercarse al mundo occidental a gente como Kuron. Explicar no significa simplemente experimentar simpatía. Significa intentar comprender. E intentar traducir la pasión del otro en la propia lengua, o en el lenguaje de la propia cultura. Si no llegamos a entendernos, en efecto, el totalitarismo tomará la delantera, tanto aquí como entre vosotros.

Por lo que a mí respecta —naturalmente no puedo hablar por todos— la lengua común o la pasión común nacen de los encuentros que hemos tenido en el curso de los años, aunque los hayamos encarado en planos completamente diferentes. Si ahora declaro en Occidente que tú eres el hombre de mi generación que más admiro, debo también decir, no obstante, que no sé si yo en Polonia, en un país totalitario, habría tenido la fuerza de llegar tan lejos. Soy demasiado amante de la vida como para ir tan lúcidamente al encuentro de la prisión. Creo, sin embargo, que lo que efectivamente nos une —sobre la base de nuestra experiencia de vida, desde la rebelión antiautoritaria de finales de los años sesenta hasta hoy—, es una sensibilidad antiautoritaria y un concepto amplio y apasionado de democracia.

Dany, yo no he ido jamás a la cárcel porque lo quería. Iba porque me mandaban. Creo que un *gentleman* debe seguir siendo un *gentleman* aun cuando termine en la mierda. Y yo me he mantenido como tal, no porque lo quisiese sino porque era necesario. Soy una persona honesta por necesidad, no por vocación. Amo la vida igual que tú. No soy nada apto para

hacer el mártir. Después del 13 de diciembre hubo un momento en que el gobierno nos propuso ir al extranjero y algunos de mis amigos querían partir, lo consideraron seriamente, mientras yo dije desde el comienzo que no me iría. Kuron, que tampoco quería irse pero opinaba que debía discutirse sobre ello, una vez —lo habían llevado a mi celda— me dijo: «Adas, ¿por qué no quieres considerar la posibilidad?». Le respondí: «Cuando ya te han montado en el caballo blanco, aquél en el cual debería llegar a Polonia el general Anders (1), y todo el país te mira, no puedes, sobre este caballo blanco, escabullirte, y no puedes hacerlo de ninguna manera si eres un judío».

La orientación antitotalitaria y antiautoritaria es una *chance* para esta generación. Ha sido el punto de partida de esta generación, ha ligado al Este con el Oeste. Franco Piperno me consideró un agente del totalitarismo porque hablé con Wyszynski. No llegaba a convencerse del hecho de que habíamos leído los mismos libros. Esto le ponía realmente nervioso.

Era el año 1976 ó 1977.

Sí. Yo era un claro adversario de las Brigadas Rojas. Independientemente de sus

intenciones creo que —desde el punto de vista de las consecuencias de sus acciones— nada las distinguía de los nazis. Lo que hicieron con Moro es repugnante. No consigo hablar de ello con serenidad: que se secuestre a un hombre, que se le calce una media en la cara, que se le obligue a firmar una declaración cualquiera y se defina todo como un acto de justicia revolucionaria, esto no se diferencia en nada de Stalin. El hizo lo mismo. Y a pesar de todo siento por Piperno cierta simpatía. Es un hombre de corazón puro, pero que se ha extraviado. Soy incoherente en este punto, lo sé. No debería hacer este tipo de diferenciaciones. Debería decir: Hitler, Stalin, Piperno son la misma cosa. Pero no lo consigo. Quizá sea una debilidad mía. Pero a veces hay que ser fieles también a las propias debilidades.

Traducción de Mario Merlino.

(1) El General Anders era el comandante del ejército formado después del acuerdo polaco-soviético de 1941 por los prisioneros de guerra polacos. Tal ejército dejó la Unión Soviética y participó en el desembarco aliado en Italia. El general Anders aparecía a menudo montado en un caballo blanco y así se lo imaginaba la fantasía popular como posible liberador de la dominación soviético-comunista.



LA POSIBILIDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA

Henry PEASE GARCIA

Como bien afirma Francisco Delich, las aperturas democráticas no son unilaterales (1) y habría que agregar que la pluralidad de América Latina nos obliga a ubicar, en el análisis de cada apertura, rasgos propios que corresponden no sólo a tiempos distintos sino a sociedades nacionales con grado diverso de heterogeneidad y de modernización. No podemos dejar de recordar que en la región está presente la realidad centroamericana, atravesada por la lógica de la guerra de «baja intensidad» que se impone desde el Imperio. Tampoco podemos descartar la hipótesis de que esta lógica termine por imponerse en sociedades que aparecen con signos más profundos de descomposición, donde por momentos puede uno preguntarse si la ciudadanía política y social llegó tarde y si la violencia hoy en desarrollo no logrará ganar la partida. Ciertamente, me refiero a Perú y a la guerrilla terrorista, pero no descarto su importancia en otros países andinos ni la presencia ya significativa de los ojos imperiales para introducir sus propias variables en este juego.

Quizá por esta perspectiva prefiero sostener la posibilidad democrática como acto de afirmación, como impulso de voluntad que afirma valores y rutas, escogiendo unas en vez de otras, acto volitivo que obviamente interesa analizar cuando proviene de uno

o varios sujetos colectivos, cuando la afirmación es significativa en función de la capacidad social y el poder de sus portadores. La afirmación inicial del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (2) sobre el resurgimiento de valores y prácticas democráticas en la región, hace referencia a un hecho real que proviene en unos casos de quienes experimentaron la dictadura en sus variantes más netas y a partir de tal experiencia retomaron y/o asumieron con fuerza la iniciativa democrática. Viene también de quienes alcanzaron en tiempo más reciente la condición de ciudadanía y aprendieron, desde sus organizaciones en la sociedad civil, que la apertura democrática les permitía algo mucho más cercano al orden de los fines que al de los meros instrumentos (3). Con una y otra perspectiva, con las muchas particularidades de cada experiencia social y con la ventaja inspiradora de una creciente comunicación intelectual e informativa entre gentes de distintas experiencias y países, la posibilidad democrática se afirma en la región y el debate, por su sentido y formas de afirmación, adquiere más importancia cuanto mayores son las dificultades por enfrentar.

CLACSO se pregunta por el valor que puede tener la recuperación del debate sobre Modernidad y Posmodernidad, debate que proviene del primer mundo pero que, por su fluidez de ideas y productos intelectuales, está presente en el nuestro como debieran estar presentes en tal debate las particularidades de las sociedades latinoamericanas. Las notas que escribimos constituyen una respuesta afirmativa a la vez que un intento de levantar lo propio y lo particular desde la experiencia peruana.

Sobre la realización de la modernidad en las actuales aperturas democráticas de la región

Ciertamente la tarea de construir órdenes políticos democráticos estables y progresivos es una realización de la Modernidad, bien definida en el documento de CLACSO como «la construcción de regímenes democráticos autofundamentados y de alcance cada vez más universal, prolongando la ciudadanía política en la ciudadanía social».

Pero aquí tendríamos que distinguir entre las diversas aperturas y remitirnos a los rasgos de las dictaduras precedentes. Argentina o Chile habían conquistado condiciones de ciudadanía bastante antes de que las dictaduras de los 70 (4). Si por ciudadanía social entendemos el peso de sujetos colectivos con capacidad de negociar y lograr conquistas dentro de la institucionalidad política, como lo señala N. Bobbio para Italia (5), es un hecho que estos países ya lo habían logrado en la década de los 60. Las dictaduras de los 70 significan un corte abrupto de derechos alcanzados en teoría y prácti-

ca aún cuando en la fundamentación del orden autoritario no se cuestionen estos elementos de la ideología democrática.

Para reflexionar sobre estas aperturas habría que hacernos algunas preguntas sobre las dictaduras precedentes, al menos para ubicarlas en el horizonte Modernidad-Posmodernidad, ¿no se trataba de dictaduras posmodernas? Esta pregunta es válida recordando las preocupaciones de Gino Germani sobre la democracia ante el avance de la modernidad (6), pero también lo es si recordamos el fuerte componente neoliberal que tuvieron en la economía y la demolidora crítica al Estado, ubicada dentro del horizonte neoconservador. ¿Cuánto de ese neoliberalismo está presente en el debate sobre la posmodernidad? ¿No corresponde acaso con la afirmación de los particularismos y la renuncia a apostar por cualquier totalidad en nombre de lo antitotalitario? El recuerdo que nos hace Bobbio de los engaños de esta crítica neoliberal al Estado de bienestar —realizador de la democracia y la modernidad en el primer mundo— conforma la experiencia local que muestra este liberalismo radical como incompatible con la democracia (7). Las dictaduras del Cono Sur tendieron a fragmentar el tejido social siguiendo el patrón económico neoliberal y fundando un orden autoritario a partir de la modernidad antes lograda y, en varios aspectos, por ellos cuestionada. Su estudio debería hacernos retornar sobre los límites del curso modernizador en cuanto a democracia se refiere.

En contraste con el Cono Sur, la apertura democrática en el Perú de los 80, y probablemente en Ecuador, corresponde más bien a una reciente realización de la modernidad. Aquí no podemos afirmar que antes de los 12 años de dictadura militar pudiéramos hablar de condiciones de ciudadanía política de forma generalizada. Más aún, siete de esos doce años pueden identificarse con un proceso de cambio social y democratización en la sociedad que creó las condiciones necesarias para afirmar la ciudadanía social y política en este país.

El hecho es que la apertura democrática está marcada en este caso por un proceso previo de democratización que afianzó la experiencia del movimiento popular, su capacidad de organización desde abajo y también su iniciativa para ocupar, luego en parte, los espacios abiertos con la apertura democrática. Si en el Cono Sur pesa más, incluso a nivel popular, la experiencia de dictadura —y su ferocidad, ciertamente mayor—, en nuestro caso pesa más la experiencia democratizante de un proceso que incluyó desde una reforma agraria que efectivamente eliminó al terrateniente y mucho de las relaciones semiserviles hasta la imposición del emigrante sobre la ciudad capital de rasgos aristocratizantes (8), el reconocimiento de la participación del analfabeto y del peruano de lengua autóctona o la organización obrera que alcanza en ese período conducción centralizada y nacional. Fue una dictadura militar

que impulsó y promovió solidaridades elementales, en vez de fragmentar más nuestro tejido social, que abrió espacios en los cuales se desarrolló el movimiento popular autonomizándose del Estado incluso en los casos en que éste lo había promovido. El derrotero de la crisis económica tiene también importantes diferencias.

Como parte de esta apertura no sólo ha desaparecido la exclusión política dentro del régimen democrático sino que desde el movimiento popular y la izquierda se han alcanzado significativos lugares en el Parlamento y los Municipios. A la inversa del Cono Sur la dictaduras no implicaron la derrota militar de los sectores progresistas e izquierdistas que, por otra parte, no se habían embarcado en una guerrilla urbana o rural. Esta, que aparece y crece desde el momento en que concluyó la dictadura militar, adquiere rasgos muy particulares, enmarcada en la tradición milenarista andina y sus formas de violencia junto con vertientes modernas, desarrollando el terror como línea central. En ese movimiento se agregan los varios sectores que no aceptan esta democracia y la combaten enfrentando a izquierdas y derechas.

¿Podemos hablar de realización de la Modernidad en el Perú? Ciertamente que sí, en un tiempo político distinto al Cono Sur, sin la experiencia de las precedentes dictaduras neoliberales. Si en lo político la realización de la Modernidad está marcada por la construcción de regímenes democráticos autofundamentados, prolongando la ciudadanía política en ciudadanía social, tendremos que afirmar que aquí, en el marco de una dictadura militar, se abrió un proceso que democratizó y modernizó. Pero, ¿hasta dónde es ésta la Modernidad de los europeos y norteamericanos? ¿Se basa acaso en el desarrollo del individualismo liberal frente al orden tradicional? ¿Ha incluido acaso el desarrollo capitalista previo al Estado de bienestar europeo o las formas utilizadas por esa clase obrera en su lucha frente al liberalismo? No parece que al hablar de modernidad nos referimos a proceso y resultantes similares. Vale, con todo, la comparación y el debate.

¿No hay, acaso, una cierta realización truncada de la Modernidad que estamos analizando en su dimensión cultural y política sin olvidar la superposición de retrasos históricos y fracasos sucesivos en la economía peruana? Si en general puede hablarse en el Cono Sur de heterogeneidad frente al primer mundo, la región andina ofrece una realidad mucho más heterogénea en la economía y mucho más diversa y compleja en la cultura. La experiencia reciente afirma sujetos colectivos heterogéneos —movimiento popular y no sólo clase obrera— en la sociedad y en la política (9), pero va mostrando que la profundidad de la crisis económica excluye aún ahora a significativos sectores ciudadanos cuya salida está encaminándose, sin alternativa real, en contra de la democracia.

¿Hasta dónde es posible afirmar la democracia en un cuadro que deteriora persistentemente toda nuestra realidad material? Este no es un fenómeno interno ni sólo de «mala administración» en un país que ve deteriorarse todo lo que produce para el exterior hasta constatar la inviabilidad del actual patrón de desarrollo; no sólo es la estructura de poder y las relaciones sociales básicas lo que ahora se cuestiona (10). La heterogeneidad del Perú ha invitado a muchos a renunciar a afirmar la posibilidad democrática o a quedarse en la forma y apostar en esencia al caudillismo cuya persistencia se explica en nuestra cultura política. Incluso en esfuerzos innovadores como el del gobierno actual, el peso populista se orienta a articular férreamente una relación con las organizaciones populares, pero desde arriba, desde el Estado y buscando no grandes interlocutores con los cuales concertar sino una sumatoria de grupos pequeños y aislados, para manejarlos mejor con dirección vertical. Y, sin embargo, se deshace con facilidad todo proyecto autoritario de centralización como ocurrió en el gobierno militar. También pueden hacerse preguntas políticas sobre lo que significa esta modernidad con democratización relativa, en particular preguntas hacia una institucionalidad democrática occidental que todavía es muy ajena al mundo andino y se superpone a sus instituciones.

Y aunque no creemos en determinismos tenemos que preguntarnos si no nos encaminamos a una dictadura brutal, liberal y posmoderna en economía, que pretenda restablecer el orden para, en todo caso, hablarnos de una «democracia autoritaria». Las preguntas hay que hacerlas no sólo a un caso particular sino a los países que ya vivieron las dictaduras posmodernas para encontrar la lógica que empuja a ellas.

La posmodernidad y la crisis de los paradigmas

«Estos últimos años se han caracterizado por un milenarismo invertido en el que, en vez de hacer premoniciones catastróficas o redentoras sobre el futuro, se emiten juicios sobre el fin de una u otra cosa; el fin de la ideología, del arte o de las ciencias sociales; la crisis del leninismo, de la socialdemocracia o del Estado del bienestar, etc. Todo esto, junto, podría constituir lo que se denomina, cada vez más, posmodernismo» (F. Jamenson) (11).

La aceptación de la crisis como fenómeno permanente y no como accidente momentáneo parece estar presente en el posmodernismo que para Jameson proviene del capitalismo tardío y sólo así podemos entenderlo. Esa crisis está también en el nivel de los paradigmas y anuncia rupturas que son un reto a la creación histórica y teórica porque, entre otras cosas, se ha aprendido que la crisis no prefigura un tránsito al lugar deseado, a la manera determinis-

ta, sino muchas veces todo lo contrario y algunas veces estancándose en un largo y complejo proceso.

Quizá desde el primer mundo el debate sobre el posmodernismo nos traiga incertidumbres de otra dimensión y problemas que aún aquí no se viven masivamente. Nos puede, sin embargo, hacer pensar más globalmente nuestra propia crisis en varias dimensiones. Para la región, preguntarse por la ingobernabilidad económica es volver la cara a la escena internacional y ver el manejo de nuestra deuda en el marco de las situaciones de dependencia, por ejemplo, para al fin entender que poco o nada influimos desde aquí en los grandes cambios que tendrían que haber para que países realmente muy desiguales puedan negociar en la misma mesa. Ver los procesos de concentración y centralización del poder económico no resulta muy diferente ni pueden examinarse sólo a nivel nacional. Más aún, el impulso ideológico y mucho de las iniciativas políticas de cada país las estamos viviendo en su momento de mayor transnacionalización y en el marco de una ofensiva neoconservadora de muy amplio alcance. ¿Cómo pensar nacionalmente, incluso nuestras pequeñas crisis, cuando sólo ayer el presidente Reagan, citando a un neoliberal peruano muy conocido, se refiere a nuestro lío local de la estatización de la Banca en un discurso en la ONU mostrando cómo para este pequeño y pobre país la campaña de estos días conlleva una verdadera articulación ideológica neoliberal a escala internacional?

En un mundo así de integrado y así de complejo la inseguridad que apreciamos en este debate —por pérdida de las diversas totalidades— contrasta con la firmeza de aquella corriente que corresponde al poder monopólico internacional, a ese neoliberalismo neoconservador que en América Latina empujó las peores dictaduras y donde se han dado los dogmatismos más firmes en política económica. No insinuamos ningún mecanismo sino la simple correspondencia entre poder material y expansión del pensamiento que le es funcional. Parte de la debilidad de las nuevas propuestas democráticas puede estar en que no afirman una totalidad y por lo mismo no responden a la necesidad de certidumbre que Lechner (12), en un brillante artículo, muestra como objetiva demanda hacia la democracia, «haciéndose cargo de los miedos a la incertidumbre». La pregunta que queda abierta es cómo y sobre qué elementos se constituye la certidumbre.

Aceptando que la democracia tiene que suponer un nivel de desencanto y el desmontaje de lo que Lechner llama «planificaciones globales» —que prescriptivamente se convertían en modelo a imponer, con mucho de dogma— es importante situar el debate en la capacidad de proponer un orden no sólo a partir de lo de siempre, es decir, instituciones y reglas de procedimiento, sino haciendo parte esencial de la propuesta de orden democrático un conjun-

to de seguridades elementales de inclusión material en la sociedad (servicios básicos, empleo,...), condiciones de inclusión jurídicas y políticas que no exceptúen a nadie, cualquiera que sea su posición sustantiva, obviamente si acepta las reglas del juego y un horizonte de autogobierno, condición de la igualdad. El debate sobre la democracia no puede pues limitarse a las instituciones clásicas, y a su vez tiene que plantearse de modo tal que queden incluidos los defensores de posiciones contrapuestas, antagónicas incluso, pero que se enfrentan dentro de esa propuesta de orden.

Comparto con Lechner la idea de que no se puede radicalizar el desencanto de modo tal que toda la atención se ponga en los procedimientos, sin resolver los problemas de fondo, y se derive a la dictadura para que ésta resuelva la demanda de certidumbre. Más aún, recordando la demanda de Mariátegui en torno al mito en su visión del Marxismo y recordando, al menos para el área andina, que la modernidad es reciente y en mucho truncada, que siendo cierto que hoy se ve más hacia el futuro que hacia el pasado y que —otro rasgo moderno— se ha asumido el cambio social como algo propio y natural más que como algo temido, ¿cómo pretender que sin una religión laica que ofrezca la totalidad de la que hablamos y la identifique con la democracia, ésta ofrezca las condiciones de certidumbre necesarias para afirmarse?

El modelo holista característico de Iberoamérica, donde el todo prima sobre las partes, a diferencia del modelo individualista, contractualista (13), tiene particular importancia en el área andina. Esta anterioridad de la comunidad está presente en los niveles de organización popular logrados en la reciente apertura democrática, en lo que es ya parte de la tradición del movimiento popular peruano. En la cultura y en la política, así como en ejemplos de la economía, como en el terreno informal urbano —que, por ejemplo, el neoliberalismo de De Soto (14) sólo ve fruto del individualismo, desconociendo el decidido soporte colectivo— el elemento comunitario y el valor de la organización popular son base definitoria del sujeto. *¿Cómo no hacer de la organización y la práctica popular componente fundamental de la propuesta de orden democrático?* El autogobierno en la perspectiva de la organización popular, constituyéndose en eje de la propuesta de orden, es el puente con la construcción propia del socialismo dentro de una propuesta democrática.

Esta perspectiva sirve también para replantear el debate sobre el Estado, el estatismo cuestionado y la falacia neoliberal de contraponer como esquema igualitario el mercado que dominan los monopolios. Porque desde la organización popular y el autogobierno no sólo se demandan niveles sustantivos de democracia local, sino la descentralización del Estado toma la forma de un efectivo ejercicio de participación que prefigura la limitación de las burocracias centrales y sus correlatos empresariales no autogestionados.

Retomando la pregunta final de CLACSO, el poder político no se basará simplemente en la racionalidad del cálculo, que termina siempre en tecnocráticas formas, sino en la participación de sujetos colectivos (fuente de poder) constituidos por individuos (fuente de derechos) que a partir de reglas democráticas pueden levantar un proyecto emancipatorio.

En la afirmación de la posibilidad democrática

La apuesta podría afirmarse así: politizar lo social y socializar lo político, pero desde abajo, no desde el Estado ni en la tentación populista. Las experiencias en nuestros países han sido amplias durante las dictaduras y claves en el tiempo de apertura. Pero ahora nos preocupa la continuidad.

Uno

La continuidad en el movimiento popular supone varias adaptaciones. Obviamente tras la instalación del régimen constitucional hay un cambio que hace que se readequen las entidades de la sociedad civil que antes vieron ampliado su papel. En dictadura los gremios, por ejemplo, ocupan parte del espacio partidario. Si no se enteran de que el contexto cambió aprenderán a golpes, como ocurrió con varios paros nacionales convocados en el Perú por rutina y fuera de tiempo y condiciones, ya en la apertura al comenzar el 80.

La preocupación por la continuidad va más en la dirección de una propuesta global que democratiza ampliando espacios y articulándolos a la escena propiamente política. Sin duda, uno de los mejores ejemplos se da en los niveles de democracia local en la medida que puedan ser penetrados desde la multiplicidad de organizaciones populares urbanas, abriéndose espacios de efectiva participación. Esto ha tenido un desarrollo importante en el Perú en un proceso que fue haciendo alcaldes y regidores a muchos dirigentes populares de base durante los momentos de apertura. Pero la continuidad supone desarrollo de instituciones propias en esos niveles y eso no sólo en esta parte local del Estado sino también en la organización popular que tiene que desarrollarse y reproducirse.

Dos

La tentación burocrática y populista coinciden en nuestra experiencia en potenciar una relación desde arriba con la organización popular, que privilegia la imagen y la articulación en la base y no la concertación con grandes organizaciones. Reunir a los presi-

dentes de Comunidades Campesinas con el Presidente de la República para recibir una serie de demandas resulta más cómodo a la alta burocracia que concertar con las Centrales Campesinas reunidas. Pero es desde este último nivel —y sus equivalentes en la Región o en la provincia— que la concertación puede ser más igualitaria y que la relación puede evolucionar de la lucha sindicalista tradicional a la dirección concertada.

Tres

La amplia gama de la sociedad civil puede desarrollar su institucionalidad en múltiples direcciones. Sus componentes nos parecen básicos en el proceso de democratización. El primero, recordado por Bobbio, para el primer mundo, es el ejercicio democrático en todas sus instituciones y no requiere fundamentación mayor porque es obvio su impacto en la cultura y las relaciones sociales. El segundo es lo que provisoriamente llamo politización y que es una dinámica de participación democrática, desde la sociedad civil y desde el ángulo que se representa, ejerciendo activamente influencia e iniciativa en la democratización del Estado y en la ampliación de la política desde las cúpulas hacia la sociedad.

Es cierto que esto se ve de manera distinta en el mundo popular, urbano o rural, que en las clases medias o acomodadas más enmarcadas en el individualismo de la modernidad clásica. Los distritos de Lima, por ejemplo, se dividen «clasistamente» en forma neta. Difícil es en los distritos populares gobernar para una suma de individuos ajenos al movimiento real de su municipio; una múltiple gama de organizaciones populares, que se cruzan, fuerza a una lógica de concertación y conflicto que en un distrito residencial apenas operaría y ello con gran esfuerzo. El autogobierno supone desarrollar instituciones de la sociedad civil e instancias de participación viva en la vida estatal capaces de dinamizar la democracia.

Cuatro

La pregunta sobre cuáles son las prácticas e instituciones democráticas que mejor se adaptan a un impulso democratizador —que supone un esfuerzo de desarrollo institucional— se abre así desde este escenario del campo popular, rico en experiencias puntuales, diverso y que muchas veces se ve encerrado en sí mismo, en la crítica que se hizo al «basismo», por no dar el salto desde allí a la política global. Siguen siendo lejanas instituciones como el Parlamento, además de ser difíciles de adaptar al ritmo de los tiempos actuales. En nuestro caso ni siquiera se ha incorporado bien en la legislación la tradicional Comunidad andina, con sus propias reglas que pesan ciertamente para sus miembros más que la Ley y

tienen importante tradición participativa. Sin otra pretensión que plantear temas y notas para el debate, dejamos en este caso planteada la pregunta más con intuiciones que con respuestas.

Cinco

La posibilidad democrática, vista como apuesta, conlleva siempre la pregunta sobre su perspectiva y lo que la amenaza. Afirmarla como apuesta nos releva de fundamentar si en estas condiciones resulta posible o constituye una utopía. Cuando, como en nuestro caso, la profundidad de la miseria va en aumento conforme pasa el tiempo, quedando ya descolocados respecto a otros países; cuando la violencia terrorista repite de forma creciente en la legión de excluidos, sin salida, que comienzan por ser los jóvenes entre 16 y 23 años; cuando las propuestas globales que se reclaman alternativa, desde el poder, apenas constituyen un esfuerzo más de expoliación que termina drenando recursos al exterior sin reinversión local, como acaba de demostrarse dramáticamente en el debate sobre la Banca; y cuando se examina lo que producimos y exportamos y cómo eso no tendrá salida, cuando estas líneas son apenas un pálido reflejo del drama que vive cualquier familia andina, hay razones para dudar de la posibilidad democrática. Y dudará más al escuchar a algunos conversadores clamar por el derecho a la insurgencia frente a la estatización de la Banca mientras los militares presionan para que no se sancione a los responsables del genocidio de los penales y no se dé amnistía a presos que no son terroristas, mientras que políticos del propio partido gobernante balbucean en vez de defender a su gobierno porque obviamente el Presidente se les disparó otra vez.

Y, sin embargo, miraremos más al fondo y una comunidad popular, como Villa El Salvador, gana el premio Príncipe de Asturias por su esfuerzo autogestionario y convierte el honor en poder al lograr que el gobierno le traspase el Parque Industrial, abocándose en el arenal a proyectos de desarrollo en serio, mientras otra comunidad en el este de Lima se prepara para imitarla y es invadida por el amenazante Sendero Luminoso que, a pesar de las armas, no logra convencer a los pobladores del Congreso de Huaycán para que abandonen tal empresa. Antes, un paro nacional había expresado la protesta popular porque el costo de vida sube, y fue contundente, y luego desde diversas organizaciones campesinas surgen propuestas que se oponen a aspectos importantes de la política del sector y buscan un espacio para negociar. Sus dirigentes, como tantos otros, serán amenazados pero optan por luchar en democracia, pero no sólo por sus reglas o por elecciones periódicas, sino por un proyecto de orden que, como lo aquí dicho, reclama más.

Hay evidentemente factores de equilibrio. Los conservadores que más gritan hoy contra el gobierno *aprista* por estatizar los ban-

cos de los monopolios tiene que optar por residir en Perú o seguir siendo aves de paso. Hace mucho tiempo que este país no les gusta para sus hijos y los tienen fuera; hace tiempo también que —al igual que su novelista de moda— viven más meses del año fuera de Perú. La bolsa, sin embargo, ha sido grande, entre 700.000 y 1.000.000 de dólares. En mes y medio se gastó en publicidad por lo menos lo que se invierte en una campaña presidencial, pero de todos los candidatos juntos.

Los militares saben que será difícil enfrentar al terrorismo siendo gobierno, y ellos al igual que otros propulsores de aventuras saben que es muy mala la situación económica y que eso, en cualquier experiencia autoritaria, es peor. ¿Son éstos los contrapesos que impiden un golpe? Sí, al igual que aspectos menos coyunturales como la voluntad expresa y aprendida por muchos. La clave está en imaginar cómo en este proceso pueden perderse las condiciones de gobernabilidad, cómo en un momento pueden impulsarse éstas desde fuera y cómo se afirma la posibilidad democrática sobre bases más sólidas.

Przeworski piensa en la lógica de las aperturas como negociación y propone que las instituciones tienen que garantizar que los intereses de todas las partes (¿también las de abajo?) no sean seriamente afectados. Retomando a Marx afirma que la democracia sigue siendo rara —porque requiere un compromiso de clase— e inestable, justamente porque se basa en tal compromiso (15). Si bien el momento de apertura ha pasado la cuestión vale y lleva a la pregunta simple y abierta: ¿es entonces imposible el cambio social en democracia?, porque ciertamente no es posible hacer tortillas sin romper huevos.

Y en este caso no hay respuestas hechas, hay más apuestas que respuestas, todo cambio sustantivo supone un nivel de exclusión aunque sólo en apariencia afecta a un sector grande de la población. Pero el peso de los poderes reales está fuera y dentro: ¿qué coloca si no, en un mismo saco y en público, a Vargas Llosa, De Soto, los banqueros expropiados y Reagan? Si la apertura no es unilateral tampoco lo será la dictadura; como otras veces, no podrá. Y hay que rescatar entonces la duración de la apuesta, porque si no parte de convicciones que se apoyan en la realidad, se regresará a ella hasta hacer de la duración continuidad y de la posibilidad una herencia que, enraizada en la cultura política, haga firme con los ciudadanos del futuro la apuesta tambaleante que hoy reiteramos.

(1) Delich, Francisco: «La Construcción Social de Legitimidad Política en procesos de transición a la Democracia», *Crítica y Utopía*, 32.

(2) He procurado hacerme directamente algunas de las preguntas que plantea el documento preliminar para la Conferencia Internacional sobre «Identidad Latinoamericana, Modernidad y Posmodernidad». En adelante citaré sólo como CLACSO.

(3) Me refiero a la clásica manera de ver la democracia sólo como instrumento, en el nivel táctico, mientras que acumula fuerzas para «hacer la revolución», o también a quienes la usan porque piensan que les permitirá conservar o afianzar mejor su cuota de poder material en la sociedad. Desde la práctica de la organización popular la democracia adquiere una valoración más sustantiva cuando se convierte en propuesta participatoria porque por medio de la participación democrática como el ejercicio de la ciudadanía adquiere capacidad de constituir parte de la personalidad y la realización de cada uno, concreción de las libertades, encarnando la forma jurídica en institucionalidad real. Se aprende en esa práctica, que es personal en tanto que es colectiva, que la utopía liberadora es economía y es política, es cambio material y orden social que se expresa democráticamente en instituciones o no es nada. Se valora entonces de otra manera la institucionalidad y las formas.

(4) Landi, O.: «Crisis y Lenguaje Políticos». *Estudios CEDES* 4, Vol. 4. Bs. As. 1982 pp. 17-18.

(5) Bobbio N.: *El Futuro de la Democracia*, FCE, México, 1986.

(6) Germani, Gino: «Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna» en CLACSO, *Los Límites de la democracia*, Biblioteca de CCSS. Vol. 1, Buenos Aires, 185.

(7) Bobbio N.: op. cit., pág. 99.

(8) Cualquiera que haya visitado Lima décadas atrás y regrese hoy, encontrará un cambio básico: la ciudad de blancos, conservadores y aristócratas quedó atrás. Lima expresa hoy a «todas las sangres» de Perú. En sus calles, con mucho desorden, los vendedores ambulantes, por miles, han impuesto sus reglas de juego a alcaldes civiles y militares, elegidos o nombrados a dedo. Son los ricos los que han tenido que emigrar, primero desde el área central de San Isidro y Miraflores y luego a la Molina o Monterrico, porque con ardua lucha el poblador emigrante autoconstruyó la parte más significativa de la ciudad, a pesar de todos los palos, la muerte y la miseria que impuso el poder que enfrentaban.

(9) Me refiero al éxito del APRA e Izquierda Unida o antes de Acción Popular, frente al fracaso de partidos ortodoxos como el Partido Popular Cristiano, la Democracia Cristiana y hasta cada partido de izquierda visto individualmente antes de la Alianza.

(10) Ver para este punto: González de Olarte, Efraín: «Crisis y Democracia: el Perú en busca de un nuevo paradigma de desarrollo», IEP. *Doc. de trabajo* 21, 1987.

(11) Jameson, Frederic: «Posmodernismo: Lógica cultural del Capitalismo tardío» *Zona Abierta* 38 (enero-marzo 86).

(12) Lechner, Norbert: «¿Responde la democracia a la búsqueda de certidumbre?». *Zona Abierta*, 39-40 (abril-septiembre 86).

Henry Pease

(13) Lechner cita a Richard Morse en *El Espejo de Próspero*, Siglo XXI, 1982, y las obras de Louis Dumont.

(14) De Soto, Hernando: *El otro sendero*, Lima, 1986.

(15) Przeworski, Adam: «La democracia como resultado contingente de los conflictos». *Zona Abierta*, 39-40 (abril-septiembre 86).

CUADERNOS DE ALZATE

Cuadernos de 8 Alzate

Enero-Abril 88

Revista vasca de la cultura y las ideas

REVISTA
VASCA
DE LA
CULTURA
Y LAS
IDEAS

El número ocho de CUADERNOS DE ALZATE se inicia con un artículo de **Koeme Barañano** y **Javier González de Du-epilogo**, en torno a la existencia o no de dicho arte como entidad diferenciada, y su vinculación al proyecto político nacionalista. **Sira García Casado**, en «La cultura de la crisis: un comentario a las tesis de A. Fin-kielkraut», escribe acerca de la crisis de la cultura y el debate sobre la posmodernidad.

Fernando Savater, «Felicitación a Schopenhauer en su doscientos aniversario», co-

menta la situación e influencia de este filósofo en el pensamiento y el arte actuales. En su artículo «Breve comentario a una reducida parte del Congreso Mundial Vasco», **Ramón García Cotarelo** se refiere al contenido del congreso sobre Derecho público de la economía, además de ofrecer su interesante visión de este acontecimiento. **Ignacio Medrano**, en «El Museo de Bellas Artes de Bilbao, centro cultural de Euskadi», pone de relieve el papel y los objetivos de esta importante y poco conocida institución.

En la sección Verlos Venir contamos con un ensayo de **Mikel Azurmendi**, «El fuego de los símbolos», acerca del significado simbólico de los colores en la lengua vasca.

Manuel Montero presenta un estudio histórico sobre «El gobierno vasco 1936-37: un gobierno para el nacionalismo», de indudable interés.

Finalmente, contamos con un artículo de **Milagros García Crespo**, «Hacia la superación del declive industrial de Euskadi», en el que expone el estado actual de la situación y la política económica a seguir. Y, además, publicamos las opiniones sobre «El Futuro Económico de Euskadi» de **Luis Atienza**, **Jaime del Castillo**, **Javier García Egocheaga**, **Alberto Pérez García** y **José María Vizcaíno** quienes se reunieron en Mesa Redonda con **Manuel Escudero**, director de esta revista.

Este número lo ilustran obras de **Jorge Oteiza**.

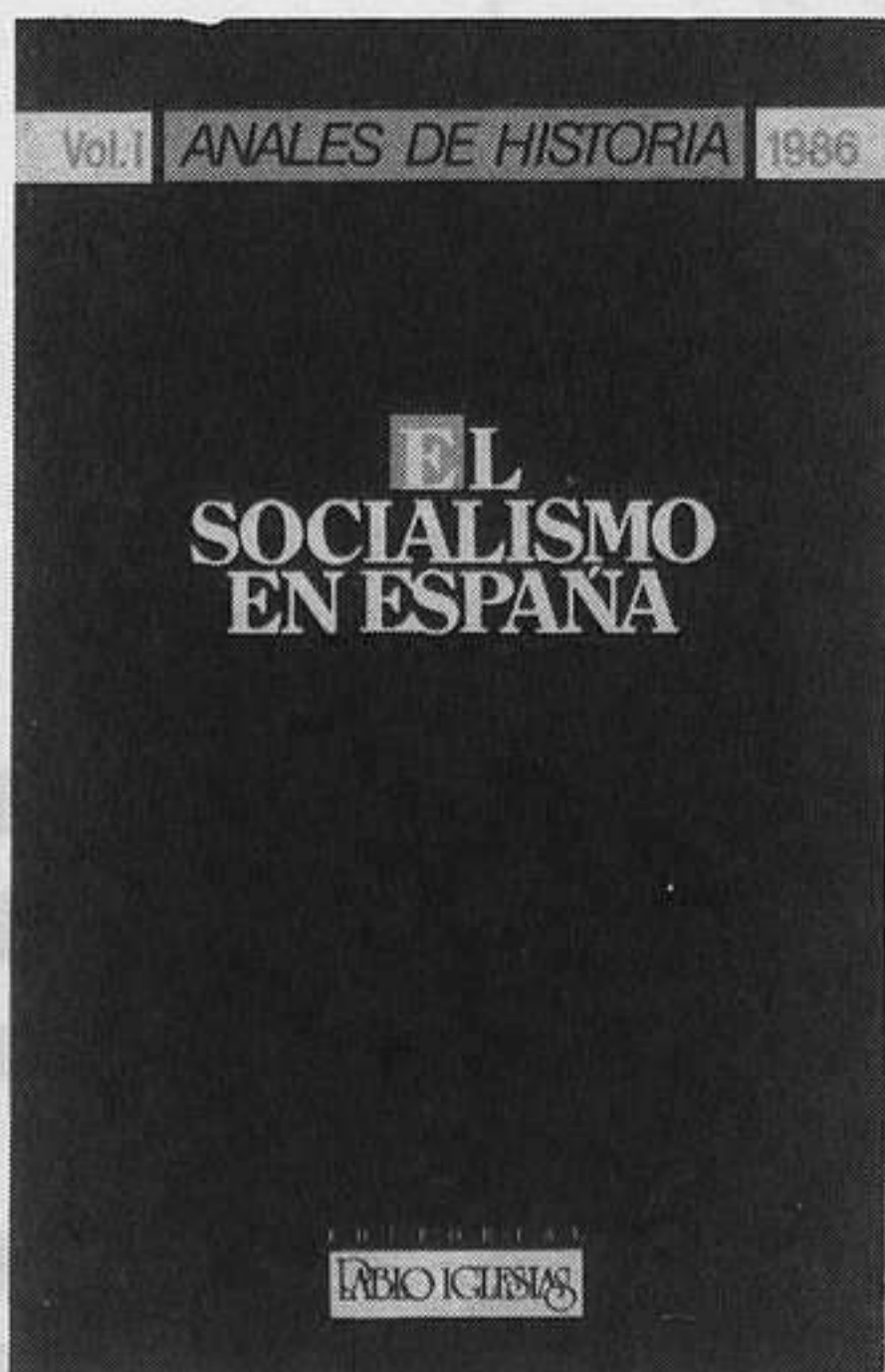


EDITORIAL PABLO IGLESIAS
CUADERNOS DE ALZATE

BARBARADE BRAGANZA, 10, 3.º - 28004 MADRID - Tels.: 241 35 41 - 241 52 86

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS



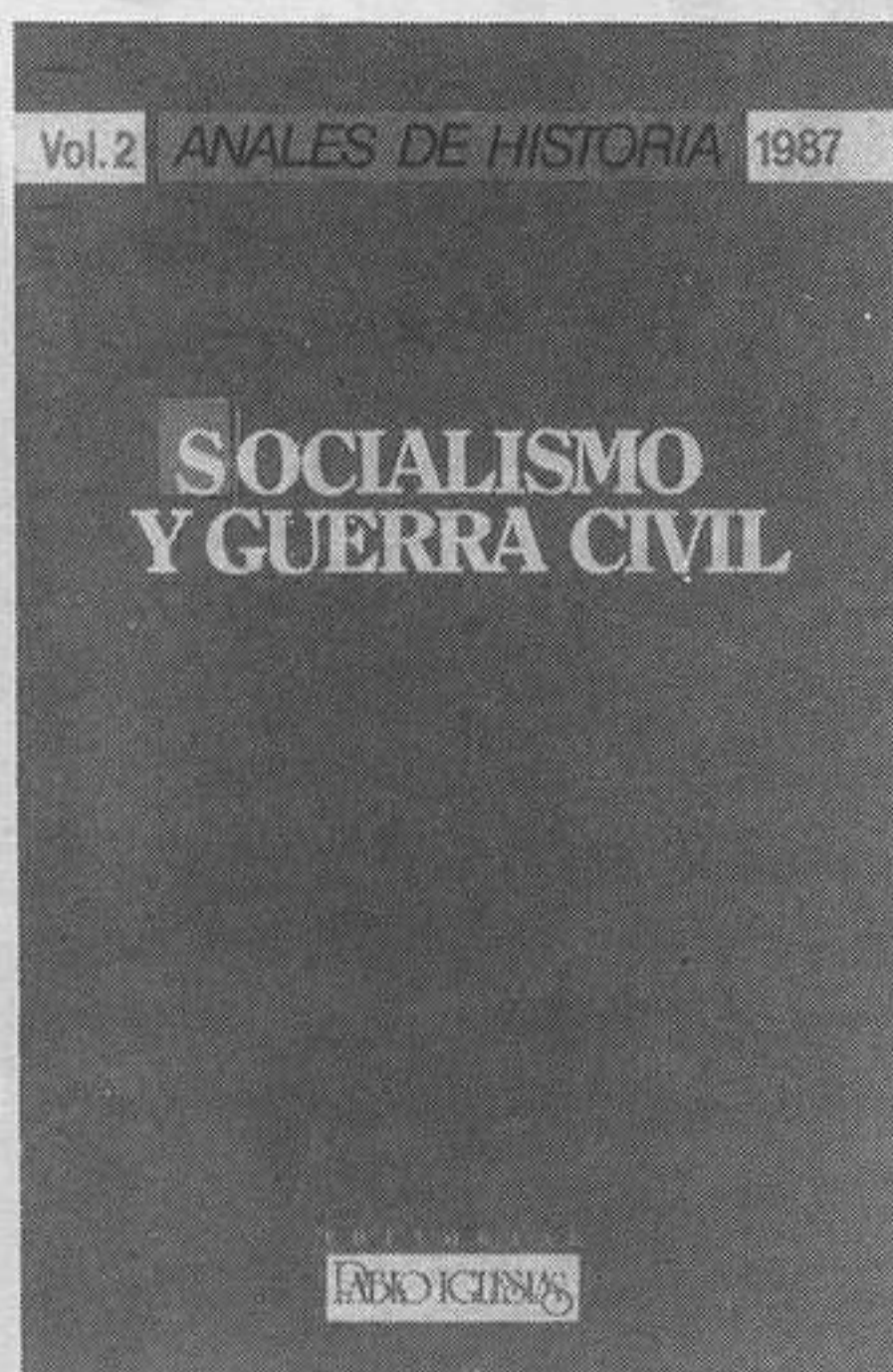
ANALES DE HISTORIA
(Vol. 1 - 1986)
EL SOCIALISMO EN ESPAÑA
Editorial Pablo Iglesias
466 págs. 1.850 ptas.

El socialismo en España Desde la fundación del PSOE hasta 1975

S. Castillo, P. Ribas, M. Ralle, M. Esteban de Vega,
A. Robles Egea, F. Castro de Isidro, M. Suárez Cortina,
L. Arranz Notario, E. Moral Sandoval, M. Pérez Ledesma,
S. Juliá, M. Bizcarrondo, M. Tuñón de Lara,
H. Heine, A. Mateos López, P. Preston, E. Díaz,
A. Martín Nájera, M. Vázquez Cea, R. Casado González

Coordinado por
Santos Juliá

Estos Anales de Historia recogerán las ponencias que se presenten cada año en el Seminario de Historia organizado, con carácter permanente, por la Fundación Pablo Iglesias. En el primer volumen, dedicado a la historia política y los debates ideológicos del socialismo español, colaboran investigadores procedentes de diversos horizontes teóricos y metodológicos y pertenecientes a varias generaciones universitarias. El resultado es un volumen que ofrece, por vez primera, una historia crítica y rigurosa del socialismo español desde los orígenes del Partido Obrero hasta el fin de la dictadura franquista.



ANALES DE HISTORIA
(Vol. 2 - 1987)
SOCIALISMO Y GUERRA CIVIL
Editorial Pablo Iglesias
395 págs. 1.700 ptas.

Socialismo y guerra civil

F. Claudín, G. Cardona, R. Salas,
F. Fernández Bastarreche, J. Casanova, A. Elorza,
G. Jackson, A. Viñas, M. Tuñón de Lara,
F. García de Cortázar, Manuel Montero, J. Tusell,
A. de Miguel, J.-C. Mainer, J. Marichal, S. Juliá,
L. Garrido, E. Ucelay da Cal, H. Graham, M. Ortuño

Coordinado por
Santos Juliá

Este segundo volumen de los Anales de Historia está dedicado monográficamente a la guerra civil y los socialistas. Que se haya podido reflexionar sobre la guerra civil con vigor histórico y en presencia de un público que en su mayoría no la conoció, es signo de que la sociedad española de hoy está lejos de los conflictos de toda índole que determinaron aquella lucha por las armas. Discutir políticamente de ellas será la mejor manera de que quede definitivamente asentada en esa serena forma de la presencia del pasado que es el recuerdo.

PEDIDOS: EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30, 2.º
28010 MADRID

FORMA DE PAGO: Talón bancario
o giro postal



PERU: EL RECHAZO DE LA MODERNIDAD

Marco CALAMAI

¿La violencia política que con intensidad creciente agita a la sociedad peruana puede transformarse en una convulsión social de tipo revolucionario? ¿Hasta qué punto las frágiles instituciones democráticas del país están en condiciones de resistir el choque conjunto de la gravísima crisis social nacional y el ataque terrorista de extrema izquierda? Estas preguntas, más actuales que nunca después de los recientes acontecimientos traumáticos (la matanza de cerca de trescientos senderistas en las cárceles de Lima y la sucesiva ola de atentados terroristas) pudieran quedar sin respuesta por la falta de un análisis atento de las razones que han provocado la pavorosa crisis económica, social y moral que, desde hace algunos años, caracteriza la realidad cotidiana del Perú. Se trata de razones diversas y complejas. Algunas son antiguas y de carácter estructural (las características étnicas del país, su peculiar fisionomía geográfico-climática, las formas de la dominación española primero y de la independencia después, la situación geopolítica, etc.). En cambio, otras son más coyunturales pero igualmente importantes (crisis del modelo económico tradicional, dinámica político-institucional de los años cincuenta en adelante, ideología de los partidos, etc.). Por razones de espacio, este breve ensayo se limita al examen de dos factores considerados emblemáticos para una primera aproximación a la realidad actual del Perú: las características y las consecuencias de la singular experiencia puesta en marcha con el golpe militar de 1968 y el peso determinante del componente racial en las relaciones sociales.

Del Estado oligárgico al Estado populista

En 1967, un año antes del golpe militar, un historiador americano describía así la situación peruana (1): «El Perú es un anacronismo del siglo XX porque se empeña con obstinación en seguir siendo la sociedad más feudal de toda América... En la cima de la escala social hay cuarenta familias (un modo de decir, no una estadística) que oponen una resistencia granítica a cualquier cambio en semejante estructura social. Esas familias están constituidas por ricos que poseen las plantaciones de azúcar y de algodón en la costa, las grandes *haciendas* en la Sierra, los bancos, fábricas y empresas comerciales. En su mayoría son blancos de origen español y dominan la nación, como lo hicieron sus padres antes que ellos; continúan ignorando a los trabajadores de los campos y de las minas. Le sigue, en cuanto al bienestar, la clase media. Como mucho, tal vez el 15 % de la población pertenece a este estrato... Y después vienen los pobres, más o menos nueve millones en total. Entre éstos hay que contar a los *peones* sin tierra de las grandes haciendas de la sierra, vinculados tradicionalmente, si no legalmente, a la tierra del *patrón*: cada familia está obligada a suministrar al *patrón* un trabajador durante tres días a la semana y se le asigna un trocito de tierra para uso familiar. Figuran a continuación los agricultores independientes que viven en los caseríos de la Sierra, la mayoría de los cuales tienen pedazos de tierra tan pequeños que sacar algo de ellos para alimentar a la familia representa un problema. Otro grupo lo constituyen los que no dependen de la tierra y trabajan en de ellos para alimentar a la familia representa un problema. Otro cuarto grupo de pobres se encuentra en los *slums* urbanos, las *barriadas*, donde se hacían los fugitivos de la miseria de la Sierra...».

El general Velasco Alvarado, con su «revolución desde arriba», con sus reformas (liquidación de los latifundios, nacionalización de los principales recursos mineros, industrialización protegida por el Estado, rígidos controles sobre los capitales internacionales, etc.) trató de modificar en sentido más igualitario la estructura semifeudal de la sociedad peruana. El ambicioso objetivo perseguido por el nuevo régimen militar en su primera fase progresista (1968-75) fue liquidar las dos caras fundamentales (2) de la «herencia colonial» (poderosamente condicionantes todavía en la sociedad peruana de los años sesenta): el carácter «dependiente» del desarrollo capitalista, concentrado en la costa y dominado por multinacionales americanas; la supervivencia en gran medida (sobre todo en la Sierra andina) de las relaciones coloniales y serviles de explotación de la población campesina (en especial, la indígena). De acuerdo con la estrategia estructuralista de los militares reformistas (anti-imperialistas y anti-comunistas al mismo tiempo), la única manera de eliminar las formas precapitalistas imperantes en la Sierra era la acción del Estado encaminada a superar los límites históricos del capitalismo peruano y su dependencia de las multi-

nacionales y su sustancial extranjería respecto del mercado interior. De aquí el apremio en realizar las reformas enunciadas más arriba, las mismas que los grupos dominantes (la clase de los latifundistas, en particular) habían ido aplazando. Los militares, además, consideraban tales reformas como absolutamente necesarias si se quería evitar que la miseria y el atraso de tanta parte de la población se transformase en protesta revolucionaria (en aquellos años, Fidel Castro hablaba todavía de la necesidad de transformar la sierra andina en una nueva Sierra Maestra), como estaba ya sucediendo en parte (los focos guerrilleros en los Andes fueron duramente aplastados por las fuerzas armadas antes del *golpe*). Ampliar la base del Estado; superar, o al menos reducir, la histórica diferencia entre costa y sierra, entre ciudad y campo; mejorar las condiciones de vida de millones de campesinos *indios* con una renta media de las más bajas del mundo, integrándoles en la sociedad; devolver al país el control y la gestión de los propios recursos... Esos fueron los principales objetivos perseguidos por el régimen nacional-populista del general Velasco Alvarado.

¿Hasta qué punto y con cuáles resultados se realizaron estos objetivos? Sin duda, los mayores éxitos del experimento velasquista fueron la reducción, si bien relativa, del peso de las multinacionales en la economía peruana y, sobre todo, la liquidación de los latifundios. Se ha señalado, a este respecto, que (3) «el esfuerzo de modificar uno de los sistemas de propiedad de la tierra más desiguales del mundo se vio coronado por el éxito». Y, probablemente, es justo afirmar que en 1980, cuando el poder volvió a manos de los civiles, «la situación en el campo se había alterado de manera sustancial y permanente» (4). Por primera vez, desde la conquista, las formas de explotación de tipo servil y semifeudal que imperaban en el agro (en los años sesenta todavía muchos *campesinos* no se presentaban con su propio apellido sino con el del *patrón*) habían recibido un golpe decisivo. En los vértices de la pirámide social no figuraba ya la vieja aristocracia de origen español, sino que dominaban la escena nuevos grupos (provenientes con frecuencia de otros países y llegados al Perú a finales del siglo pasado o en los últimos decenios), y desarrollados en buena parte gracias a la política de sustitución de las importaciones seguidas por el velasquismo. Una parte importante de las exportaciones «tradicionales» (petróleo, cobre, plaza, etc.) ya no estaban en manos de las *corporaciones* americanas (el poder de las que habían quedado fue redimensionado de manera parcial mediante la fórmula de las *joint ventures*). Ahora, era frecuente encontrar en la «nueva clase empresarial» a los de origen mestizo y a gentes procedentes de la clase media. Esta representaba un embrión de «burguesía nacional» en ascenso, que hasta aquel momento había faltado en Perú. Sin vínculos con la tradicional aristocracia de las «cuarenta familias», su peso objetivo se había demostrado en la creciente participación de la industria en la economía (22 % en 1964, 26 % en 1975) y por la mayor ca-

pacidad incisiva de las exportaciones «no tradicionales» (productos elaborados o semielaborados) en la balanza comercial (3 % en 1970, 22 % en 1980). Desde el punto de vista de la dislocación del poder, el Perú posvelasquista (y esto no se modifica fundamentalmente por el giro moderado del general Morales Bermúdez ni por el gobierno civil del conservador Belaúnde Terry) había alcanzado un equilibrio análogo en muchos aspectos al de otros países latinoamericanos, en los que determinadas fórmulas populistas habían incidido profundamente en las relaciones sociales. Gracias a los militares se había pasado del Estado oligárquico al Estado empresarial. En pocos años la Administración pública se había convertido en una de las más fuertes del continente (aunque predominasen la ineficacia y, a menudo, la corrupción), mientras que el peso del Estado en la economía aumentaba en un 246 % entre 1970 y 1976. A los trabajadores de las fábricas, de los servicios y de las nuevas unidades productivas que habían sustituido a los latifundios se les reconocía, por fin, los derechos por los que a habían luchado sin resultados a lo largo de decenios el movimiento popular y las organizaciones de izquierda.

Y, sin embargo, han permanecido prácticamente inalteradas las características de fondo del Perú: extremado atraso de cerca del 60 % de la población, la distancia abismal entre costa «moderna» y Sierra «arcaica», etc. La misma redistribución de la renta realizada con las reformas de Velasco Alvarado se redujo a cerca de un cuarto de la población, la que correspondía a los niveles medio-altos (la revolución de la alta favoreció preferentemente a los estratos medios, especialmente a los urbanos). Los latifundios desaparecieron, pero los campesinos siguieron todavía sin tierra, marginados como antes. Las condiciones de vida de millones de indigentes (fenómeno acelerado por una reforma agraria realizada sólo en parte) permanecieron en la frontera de la supervivencia.

Desde el punto de vista del desarrollo económico global, las reformas velasquistas fueron un clamoroso fracaso. Los errores cometidos con la reforma agraria (burocratización de las empresas estatales y de las cooperativas que sustituyeron a los antiguos latifundios; falta de créditos y de asistencia técnica a los campesinos marginados del minifundio andino, etc.) provocaron no sólo la fuga de los campos, a la que nos referíamos antes, sino también una caída en vertical de la productividad (con una disminución significativa de la superficie agrícola no cultivada y un aumento progresivo de las importaciones de géneros alimenticios).

El propio desarrollo industrial se revela muy pronto frágil y provisional. Muchas de las industrias protegidas por el Estado no pueden resistir el choque de la competencia internacional, cuando Belaúnde Terry (1980-85) reabre las fronteras económicas del país. El índice de crecimiento desciende en el decenio de los setenta y no

vuelve a recuperar los niveles precedentes. El sistema tributario se ha hecho más regresivo todavía, al tiempo que algunos indicadores significativos, como son el consumo de calorías y las condiciones sanitarias ponen de manifiesto que «al final del régimen militar los pobres del Perú eran más pobres que antes» (5).

Racismo y violencia

Desde siempre, pobreza y riqueza, desarrollo y marginación están estrechamente entrelazados en Perú con el nudo no resuelto de la convivencia entre las diversas razas que ocupan el mismo espacio geopolítico. En efecto, cuestión social y cuestión racial son las dos caras de una misma dramática contradicción, cuyo origen coincide con la llegada de Pizarro y la rendición de Atahualpa. A partir de aquel momento, dos tradiciones, dos culturas, dos visiones del mundo, la hispánica de los vencedores y la andina de los vencidos, han convivido forzosamente sin fundirse jamás en una sola nación. El Estado peruano, desde la conquista hasta hoy, ha sido siempre el Estado de los pocos, de los blancos y de los mestizos integrados en el sistema de poder dominante. Los otros, la mayoría, los *indios* y los mestizos pobres han permanecido excluidos, inexorablemente extraños.

Hasta hace pocos años, estos dos universos, el blanco de la costa y el indio de la sierra, han vivido bajo el mismo régimen, pero, sin embargo, lejanos físicamente el uno del otro. Terminada la época del oro y de la plata, los dominadores blancos se han retirado a los centros urbanos ocupándose del comercio y de otras actividades, mientras que los *quechuas* y los *aymaras* de las montañas y de los altiplanos andinos han permanecido aislados en sus aldeas, lejanas entre sí, prácticamente inaccesibles desde la costa y desde las ciudades, por falta de medios de comunicación y por la extrema aspereza del terreno. De este modo, generaciones y generaciones de *indios* se han mantenido totalmente separadas del mundo «moderno» y de los «valores occidentales». Para la gran mayoría de estos hombres y mujeres, miserables y analfabetos, «ocultos» en las montañas, aislados en pequeñísimos centros a alturas inhabitables para los blancos (hasta los 4.000 metros y más), el único contacto con las pequeñas minorías llegadas de lejos se limitó a lo largo de siglos a la relación servil y violenta con los que dirigían el trabajo en el campo por cuenta de los *hacendados*, los proletarios latifundistas. Contactos episódicos y a menudo inexistentes ya que los *campesinos* de los poblados indígenas siguieron produciendo y viviendo dentro de un esquema precapitalista de pura supervivencia, excluidos de todo contacto con el mercado nacional. Los *indios* no hablaban español (salvo los siervos en las dependencias de los españoles) y su dimensión ético-cultural no cambió durante siglos desde el tiempo de los *incas*, a pesar de que los misioneros que re-

corrían la sierra les obligasen a venerar a un dios y a unos santos completamente distintos de los que imperaban en las creencias incaicas. El fin de la colonia y el nacimiento de la república independiente no modificaron esta situación. Los *criollos* sustituyeron a los españoles, pero mantuvieron intactos valores y tradiciones. Permanecieron en la costa y dieron vida a instituciones no sólo dudosas sino totalmente extrañas a la realidad indígena. La república criolla, aristocrática y feudal, ignoró al profundo Perú y, realmente, no salió jamás de las pocas ciudades y de las zonas cultivadas de la costa.

Esta estructura social, desde luego no inmóvil, pero sí fundamentalmente estática en sus características de fondo, sólo sufrió los primeros cambios en los años cuarenta y cincuenta de este siglo, cuando, por un conjunto de razones concernientes en particular a las vicisitudes de las materias primas en los mercados mundiales, el Perú emprende, aunque lentamente, una parcial reconversión de la economía con el nacimiento de un tejido industrial ligado al mercado interior (según la fórmula, típica de aquellos años, de la sustitución de las importaciones). La explosión demográfica y el éxodo bíblico de la sierra —acelerado, como se ha visto, por las reformas militares a finales de los años sesenta— cambian radicalmente la faz del país. En las postrimerías del ochocientos, los peruanos, diezmados por el hambre y por las enfermedades, apenas llegaban a los dos millones. En 1940 eran seis millones, más o menos el mismo número de *indios* que vivían en Perú cuando llegaron los *conquistadores*. En 1980 se habían triplicado (actualmente, los censados en Perú son cerca de 19 millones). Más de la mitad de la población actual vive en las ciudades. Lima es, sin lugar a dudas, la expresión más visible y dramática de estas mutaciones. 600.000 habitantes en 1940, un millón en 1950, tres millones en 1970, cinco o quizá seis millones en 1986. En 1984, el 30 %, aproximadamente, de la población peruana ya se concentraba en la capital. Esta impresionante transformación cuantitativa se corresponde con una perturbadora transformación cualitativa. Lima no sólo se ha extendido, sino que ha «cambiado de color». Cerca del 40 % de la población lo componen *indios* que han bajado desde los Andes en los últimos decenios y que viven en los *pueblos jóvenes*, miserables *bidonvilles* crecidas como hongos en el desierto, y en general carentes de luz y de las más elementales estructuras higiénico-sanitarias. Otro 40 %, de procedencia más antigua, ha ocupado el antiguo centro histórico, abandonado por los ricos y por la media burguesía en los años cincuenta y sesenta e invadido ahora por millares de vagabundos. El 20 % restante se divide entre un estrato medio mestizo, que vive en barrios modestos pero decorosos, y un pequeño porcentaje de blancos y de mestizos ricos que reside en los chalets y en los pisos lujosos de los pocos barrios residenciales de estilo europeo o norteamericano, aislados del resto de

la ciudad y protegidos por las fuerzas del orden y por *gorilas* privados.

Marco Calamai

Las nuevas dimensiones de la realidad socio-racial del Perú actual se pueden concretar en pocas cifras que no precisan muchos comentarios. Por un lado, alrededor de un millón de blancos y mestizos ricos o acomodados; por el otro, en el extremo opuesto, más o menos siete millones de *indios*. Los primeros, concentrados en los barrios residenciales de las ciudades; los segundos, divididos entre la sierra (cerca de tres millones son miembros de los poblados indígenas de los Andes) y de los *pueblos jóvenes* de los centros urbanos. A una renta media de casi setecientos dólares reales al año, le corresponden 50 ó 60 dólares de renta media *per cápita* en la sierra andina. La aguda polarización de la sociedad peruana es evidente. Para millones de personas, las condiciones de pobreza y de atraso, de salud y de alimentación no han cambiado sustancialmente desde los tiempos de la *conquista*. Los Andes peruanos representan todavía una de las zonas más miserables del mundo, sólo comparable a ciertos países africanos o asiáticos. Además, todas las estadísticas indican que la concentración de la riqueza en un sector minoritario de la sociedad se verifica de un modo más acentuado en Perú que en otros países latinoamericanos. Pero grandes discriminaciones sociales (y de perspectiva) dividen a su vez a los diez u ocho millones de mestizos que componen la «franja intermedia» de la sociedad peruana. Por un lado, cuatro o tal vez cinco millones de mestizos clasificables como clase media y, en cualquier caso, fuertemente integrados en la jerarquía social tradicional (y en sus valores); por el otro, entre cinco o seis millones de mestizos pobres que viven en condiciones de extrema precariedad y de frustración en cuanto que no logran elevar su *status* en una sociedad de la que se sienten marginados y excluidos. Entre estos grupos y subgrupos, así como en el interior de cada uno de ellos, las tensiones sociales y psicológicas son agudísimas. El racismo y el resentimiento social se entrelazan profundamente en una sociedad que, por lo demás, ha rechazado desde tiempos remotos —en el plano jurídico e institucional— cualquier forma de *apartheid*. En Perú, como se ha señalado desde muchos puntos, las clases altas y medias están invadidas de una profunda indiofobia.

Esta patología social se ha transformado en los últimos años, como consecuencia de los procesos descritos más arriba (crisis económica y expectativas frustradas del experimento velasquista), en una especie de esquizofrenia que impregna todas las relaciones interpersonales, individuales y colectivas.

En este sentido, cabría destacar que en otros países de América Latina nos tropezamos con problemas análogos e igualmente marcados por las desigualdades sociales y por los problemas no resueltos de identidad étnico-social. En Ecuador, Bolivia, Guatemala y México los indigentes representan también un porcentaje muy al-

to, en algunos casos mayoritario, de la población. Si excluimos a Guatemala, que no por casualidad vive una situación de violencia semejante en muchos aspectos a la peruana, los otros países han acertado, sin embargo, a encontrar una respuesta al problema de los indios y de su ubicación en las sociedades nacionales. En México y en Bolivia, dos importantes revoluciones campesinas (en 1910 la mexicana, y en 1952 la boliviana) han facilitado la integración política y cultural de los *indios*, acercándoles al Estado. En Ecuador, una dinámica capitalista más vivaz, junto a las dimensiones menores del país, así como una situación decididamente menos dura que la de la sierra en el plano ecológico, han impedido que las tensiones raciales y sociales se desencadenaran de forma aguda como en el Perú. Aquí, en cambio, no ha habido ni una revolución campesina, una movilización desde abajo de las masas indígenas que facilitase su integración, ni una dinámica económica susceptible de absorber siquiera fuese una parte significativa de sus reivindicaciones. Hubo, como se ha visto, la reforma agraria de los militares progresistas, pero esta reforma fue vivida por los campesinos pobres de los Andes y por las propias organizaciones sindicales y políticas de la izquierda como una imposición desde arriba; medidas burocrático-militares que sí han liquidado el latifundio, pero sin resolver con esto el problema secular de la tierra y sin mejorar las condiciones de vida y de renta de los *indios*. Según el esquema interpretativo de Ortega y Gasset (6), particularmente útil para explicar la problemática de la violencia en Perú, puede afirmarse que las reformas de Velasco Alvarado han roto, sin duda, el muro que separaba históricamente la «sociedad cerrada y absorbida» de los *indios* de la sierra de la sociedad «abierta y moderna» de Lima; pero este ruptura, precisamente por el sustancial fracaso de las reformas militares y a causa del agravamiento sucesivo de la crisis económica (expectativas frustradas), ha provocado un «auténtico *shock* cultural» (7), un trauma colectivo que constituye uno de los fundamentos de la violencia actual. La secular pasividad de las masas indígenas ha empezado a transformarse en una protesta cada vez más radical, en rebelión contra el orden existente. Así, en los años setenta, la sociedad peruana ha comenzado a expresar de manera abierta «pulsiones agresivas» que durante siglos, si se excluyen episódicas explosiones campesinas, han estado contenidas en el interior de un especie de resistencia pasiva con respecto a los procesos de modernización.

Desde luego, estas pulsiones agresivas tienen un fuerte contenido racial que muchos observadores, incluso de izquierdas, tienden a apartar o en cualquier caso a infravalorar, reduciendo su análisis a los orígenes de tipo estructural de la violencia peruana y perdiendo así de vista su especificidad. El gran escritor peruano José María Arguedas ha explicado, acaso mejor que otros, el peso de los factores raciales en la psicología individual y en las relaciones sociales. En sus libros se describe cómo el hastío, el desprecio y has-

ta el sadismo no sólo caracterizan la actitud de los ricos (blancos o mestizos) hacia los *indios* de los Andes y de la costa, sino también la relación entre mestizos de clase media y mestizos pobres. Los enemigos, los otros, no son —para los indios y los mestizos miserables del Perú— no sólo los herederos de los conquistadores y de los criollos que hegemonizaron la independencia en función de sus intereses. En *Todas las sangres*, en *Zorro de arriba y zorro de abajo* y en otras obras, Arguedas cuenta con extraordinaria intensidad literaria cómo, para los *campesinos*, los *runas* (término *quechua* para identificar a los indios pobres), han salido de la miseria extrema subiendo un peldaño, si bien modesto, en la escala social. En *todas las sangres*, en *Zorro de arriba y zorro de abajo* y en otras obras, Arguedas cuenta con extraordinaria intensidad literaria cómo, para los *campesinos*, los *runas* (término *quechua* para identificar a los indios pobres), el poder, la arrogancia y la prepotencia no se identifican solamente en los propietarios de tierras, sino también y acaso en primer lugar, en todos aquellos, en particular los mestizos (los *mistis*), que ejecutan las órdenes de los ricos o bien de un Estado odiado desde siempre y temido, en cuanto que es totalmente extraño a los propios intereses. Los *mistis*, a su vez, odian a los *runas* porque, en realidad, se avergüenzan de sus orígenes étnicos y porque, en cualquier caso, advierten y temen la amenaza potencial a su *status* tan duramente conquistado.

La indiofobia, pues, es un sentimiento ampliamente difundido en la población peruana. Ella explica la terrible violencia no sólo de Sendero —como se verá mejor más adelante—, sino de los militares y de las fuerzas del orden. La extrema crueldad con que las fuerzas armadas han reanudado la destrucción en las denominadas zonas de emergencia de los Andes de 1980 en adelante (los millares de muertos, entre los que se encuentran tanto ancianos, mujeres y niños; la devastación y el saqueo de poblados enteros; la ferocidad de las torturas) se explica únicamente por el racismo del que está penetrada la sociedad peruana. Y resulta sintomático, a este respecto, que los oficiales de las fuerzas armadas sean en general blancos o mestizos provenientes de las clases medio-altas (más medio que altas), mientras que, por el contrario, los soldados, los ejecutores materiales de las matanzas, sean en gran medida *cholos*, los que, por el simple hecho de llevar el uniforme, se sienten integrados en el sistema de poder y, en consecuencia, ejercitan su cometido represivo con inaudita crueldad. No cabe explicar de otro modo el hecho, incomprensible para tantos observadores occidentales, de que el genocidio que ha segado miles de vidas humanas en los Andes en estos años no haya suscitado, salvo casos aislados (casi siempre intelectuales de formación cosmopolita), un serio movimiento de protesta contra los excesos y en defensa de los derechos humanos. Para los blancos de Lima y para los mestizos que han conquistado posiciones de prestigio y de poder en la pirámide social, la vida de un *runa*, de un *cholo*, carece en absoluto de

valor: la muerte de miles de indios no representa para aquéllos ningún problema ético-político.

La problemática racial, agudizada por las profundas transformaciones económico-sociales de los últimos años, es, por tanto, un factor de primera importancia para comprender las tensiones y las manifestaciones de violencia, cada vez más extendidas y más acentuadas, que se producen en el país. La urbanización salvaje de los últimos decenios, el desarrollo del sistema de transportes, la difusión a escala de las masas de los modernos sistemas de comunicaciones (radio y televisión), han puesto en contacto, con caracteres dramáticos, a las dos culturas: la «occidental y moderna» y la «andina y arcaica». Las mismas culturas que durante siglos, ignorándose recíprocamente merced a la distancia y a la separación de los Andes de la costa, habían cohabitado bajo el mismo Estado. En las comunidades indígenas de la sierra los blancos representaban una realidad tan lejana que, probablemente, no creaban problemas de identidad. Y, viceversa, los *indios*, y los *cholos*, eran ignorados por ricos de Lima y de las ciudades: el único contacto solía ser el cotidiano con los siervos que trabajaban en las casas o en las fincas del campo.

En los últimos años, por el contrario, el choque entre las «dos culturas» se ha convertido en un hecho traumático que involucra a millones de personas. Racismo y crisis económico-social impiden la integración entre estos dos universos de valores, costumbres y expectativas, y crean un clima de creciente incertidumbre, a la vez que alimentan la delincuencia y la violencia política. Se puede objetar nuevamente que los mismos problemas se encuentran en tantas otras megápolis del Tercer Mundo latinoamericano. Ciertamente, violencia y delincuencia son fenómenos cotidianos en Bogotá, en Caracas, en Ciudad de México... El problema estriba en que, en Lima, esta fenomenología está cargada de una intensidad particularmente inquietante a causa de los efectos culturales «catastróficos» inducidos por la temática racial y por el impacto entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad. Más o menos conscientemente, la explotación y la injusticia se atribuyen a las diferencias de color, al racismo de la minería occidental. Seguramente esto facilita el paso de la violencia individual a la destrucción. El crecimiento de Sendero, su reciente «bajada desde las montañas hasta la ciudad» se estudian e integran en este contexto singular. Lo que sorprende, si acaso, es que hasta este momento casi cinco siglos de injusticia social y de marginación racial hayan sido aceptados o sufridos por millones de personas sin rebeliones políticas preocupantes para los grupos dominantes. En realidad, la aparente pasividad de los *indios* escondía un profundo resentimiento que sólo ahora, por las complejas razones apuntadas más arriba, comienza a transformarse en protesta violenta y organizada.

El cuadro descrito más arriba, a pesar de su necesaria parcialidad, ayuda a aclarar el fondo en el que ha nacido y crecido el grupo extremista conocido como Sendero Luminoso. ¿Se trata de un grupo compuesto por unos cuantos rebeldes fanáticos y primitivos, como pretenden algunos? ¿O bien estamos ante una fuerza destructiva orientada por una coherente estrategia revolucionaria, sostenida por un creciente apoyo popular, como afirman otros? En realidad, ni una ni otra de estas dos hipótesis parece adecuada para explicar la complejidad del fenómeno. Pero estudiémoslo mejor.

Sendero Luminoso nació hacia la mitad de los años setenta de una escisión del Partido Comunista peruano, fuerza política de escasa implantación electoral, que actúa en Perú desde los años treinta y que siempre ha mantenido una posición ideológica rígidamente pro-soviética, como todos los partidos comunistas latinoamericanos. Los fundadores de Sendero, un núcleo de intelectuales ligados a la Universidad de Ayacucho (ciudad de origen colonial de los Andes peruanos) están guiados por un dirigente considerado carismático: el profesor de filosofía Abimael Guzmán, más conocido desde hace algunos años como el «camarada Gonzalo». En la segunda mitad de los años setenta, en el clima de tensión provocado por el contra-informe del general Morales Bermúdez, Sendero madura la opción de la lucha armada (que empieza en 1980, en el momento en que los militares pasan el testigo a los civiles, después de 12 años de régimen autoritario).

El comienzo de la guerrilla (precedido a su vez por el paso a la clandestinidad del grupo dirigente) se verifica al cabo de un intenso trabajo de proselitismo en la región de Ayacucho, una de las más pobres del país. El proyecto (como se declara en los documentos de Sendero), típicamente maoísta, es el del cerco campesino de los centros urbanos. Este objetivo, pensado como resultado final de un largo proceso, prevé, en una primera fase, «acciones de sabotaje» y «acciones ejemplares, concentradas en las áreas rurales, contra los «enemigos del pueblo» (los que, de un modo u otro, explotan el trabajo campesino, así como los representantes locales del poder estatal). Tales acciones persiguen el objetivo de crear una base de coincidencia sobre la cual construir a continuación las «bases de apoyo» del futuro «ejército revolucionario». En una segunda fase está prevista la extensión de la lucha armada a otras zonas del país (ya no sólo las andinas) con el fin de «destruir a las fuerzas enemigas» y «desestabilizar progresivamente el poder de los grupos dominantes». La tercera fase es la de la «expansión de la guerra de guerrillas» hasta el momento en que esté maduro el principio del «gran salto». ¿Cómo ha calado este rígido esquema propagandístico en la realidad peruana? Al principio de los ochenta, como es sabido, la acción de Sendero se ha concentrado en los

poblados andinos de Ayacucho y de los departamentos vecinos (Huancavelica y Apurímac). La táctica seguida siempre es la misma: instrumentar todas las tensiones sociales, antiguas y nuevas, en particular la secular de la propiedad de la tierra, que las reformas velasquistas sólo ha resuelto en parte, a fin de crear un clima de conflictividad cada vez más aguda, de enfrentamiento abierto entre campesinos *indios* e instituciones estatales. Las acciones armadas se planifican desde las células de Sendero y se ejecutan por los militantes del grupo, reclutados entre los campesinos pobres ganados por la propaganda destructiva (con frecuencia, extorsiones y amenazas de muerte) o bien entre estudiantes de orígenes humildes o jóvenes en paro, frustrados por la carencia de perspectivas. El esquema que pone en movimiento la espiral de la violencia es elemental: primero una acción aislada (por ejemplo, el asesinato de un notable local o la emboscada a una patrulla del ejército); por tanto, la inevitable respuesta represiva. La intervención de los militares o de las fuerzas del orden (como se ha probado ampliamente, a menudo reviste las características de un genocidio) sirve de base para nuevas acciones (el mecanismo de la venganza) como respuesta de mayor alcance. De esta manera, los campesinos, pillados entre dos fuegos, se ven obligados a defenderse y a armarse, a tomar posturas por una de las dos partes. El enfrentamiento se polariza, las fuerzas políticas y los sindicatos tradicionales (casi siempre muy débiles en las regiones andinas) se ven expulsadas de la escena. Quedan sobre el terreno solamente dos protagonistas: los senderistas y las fuerzas armadas.

La extremada crueldad con la que ha actuado Sendero (y continúa haciéndolo) en los poblados indígenas de la sierra (matanza de campesinos inermes por la sola razón de no haberse adherido a los dictados senderistas, amputación de los dedos de los indios que han acudido a votar, etc.) han sacudido la conciencia de la opinión pública, sobre todo la occidental, suscitando no pocos interrogantes acerca de la naturaleza del grupo terrorista. La pregunta más extendida es: ¿por qué tanto encarnizamiento contra hombres y mujeres que viven en condiciones de extrema miseria, que son casi siempre analfabetos y que, como lo demuestran infinidad de testimonios, manifiestan una esencial incomprensión tanto del mensaje de Sendero como del Estado? Para algunos estudiosos del fenómeno, esta crueldad sería, aparte del reflejo del «delirio ideológico» del maoísmo senderista, una de las muchas manifestaciones aberrantes del «sadismo racista» que caracteriza a la sociedad peruana. Los senderistas suelen ser en su mayoría mestizos o *indios* escolarizados (cholos). La crueldad que con tanta frecuencia caracteriza su acción sería un reflejo del desprecio por los *indios*, los campesinos de la sierra, típico de quienes apenas han salido de una situación de total marginación y aspiran, por consiguiente, a conquistar una posición de prestigio y de poder en la sociedad. De aquí la brutalidad con la que los senderistas tratan a los poblados indíge-

nas, un fenómeno —se ha señalado por algunos— que recuerda al de los *conquistadores* españoles (pero también de los incas). En la «lógica senderista» el indio (al que se considera, aunque no declaradamente, perteneciente a una raza inferior) sólo puede ser despertado del prolongado letargo que lo ha vuelto inmóvil y pasivo mediante la «práctica del terror revolucionario» y a través del «sufrimiento de la represión».

En cambio, para otros, Sendero no haría más que adaptarse a la dimensión sociocultural de la sociedad andina, tradicionalmente marcada, como hemos visto, por profundas contradicciones y por una antigua historia de rivalidades entre las distintas comunidades (y también dentro de cada comunidad en concreto). Según esta tesis, Sendero —a diferencia de otros grupos marxistas más o menos radicales que jamás han comprendido la especificidad sociocultural de los *indios*— demostraría un profundo conocimiento de esta realidad y asumiría, en consecuencia, en su elaboración estratégica, fuertes elementos de esa tradición indigenista, que siempre ha sobrevivido en la historia peruana. En este sentido, Sendero se remitiría al mensaje de Mariátegui, el intelectual peruano muerto joven en 1930, que tanto influjo ha ejercido, y continúa ejerciendo, sobre la izquierda marxista en este país. Mariátegui siempre otorgó una importancia crucial al problema racial y dedicó algunos escritos de notable lucidez al nexo entre perspectiva revolucionaria y cuestión indígena. Según un conocido antropólogo peruano, Abimael Guzmán (8) habría «descubierto a Mariátegui a través de Mao». El de Mariátegui fue siempre un indigenismo ásperamente polémico con la visión (9) «liberal, ochocentista, humanitaria e iluminista» de los intelectuales que lucharon por la liberación de los *indios*, sin plantearse el problema central de la alianza entre éstos y la vanguardia del proletariado urbano.

No obstante, la acción senderista no se limita tan sólo a las regiones más pobres y desoladas de la sierra andina. En 1984, y sobre todo entre 1985 y 1986 (últimos meses del gobierno conservador de Belaúnde Terry y primer año del gobierno reformista y nacionalista de Alan García), el terrorismo aparece en otras zonas del país, en los territorios centrales lindantes con la selva amazónica y en algunos centros urbanos. La iniciativa senderista se concentra sobre todo en Lima, donde se multiplican los castigos ejemplares contra policías y miembros del ejército (muchos de éstos han participado con anterioridad en acciones militares en las zonas conflictivas andinas) y manifestaciones de sabotaje de alto valor simbólico como los *black out* (los *apagones*) que, acaso, expresan mejor que otras iniciativas terroristas el «furor antioccidental» que anima al «milenarismo marxista» del grupo. Al mismo tiempo, Sendero se desplaza de las zonas más afectadas por la represalia militar a otras provincias de la sierra (Cuzco y Puno, en particular). A principios de 1986, también Lima se declara «zona de emergencia» y el

gobierno de Alan García decreta el toque de queda en las horas nocturnas. De esta manera, Sendero se ha transformado en poco tiempo, de un fenómeno local, limitado a algunos puntos en los Andes, en un fenómeno nacional (el Perú, recordémoslo, tiene una superficie cuatro veces mayor que la de Italia). Sendero, pues, no limita su acción a las masas campesinas desheredadas. Ciertamente, el desplazamiento sobre Lima no sólo es la consecuencia de un repliegue táctico desde las zonas más expuestas al control militar (donde, por lo demás, el terrorismo ha seguido actuando de modo sistemático), sino al fruto de una opción estratégica (anticipada, por otra parte, por los escasos documentos senderistas que se han podido conocer) dictada por la conciencia de que las grandes periferias urbanas representan un terreno igualmente fértil para la iniciativa terrorista. Un politólogo francés, Henri Faure (10), sostiene que Sendero pretende dirigirse a «gran parte de la población peruana, compuesta por campesinos sin tierra y por grupos sociales sin trabajo fijo». Sendero ofrecería a esta masa, privada de (11) «una identidad social y cultural y que vive a la deriva en la anomía», un conjunto de (12) «nuevas normas y de nuevos valores», como alternativa a las propuestas políticas tradicionales (reformistas o marxistas). Dicho de otro modo, la sociedad peruana se nos muestra como una de las más expuestas al virus del «milenarismo marxista» que caracteriza a todos los movimientos revolucionarios de tipo igualitario, en especial en el Tercer Mundo, y, por lo tanto, no hay que infravalorar en absoluto la potencialidad de un fenómeno como Sendero.

Cualquiera que sea el ángulo desde el que se quiera observar la compleja realidad peruana, resulta evidente que, por una serie de razones, ésta no ha supuesto todavía el trauma de la modernización que ha conmocionado esquemas existenciales seculares y formas económicas, sin que haya ofrecido en contrapartida una salida positiva a las expectativas de millones de personas, a causa de la crisis económica de los últimos años. Además, como hemos podido ver, el trauma de la modernidad se ha agudizado dramáticamente (de ahí la peculiaridad del caso peruano respecto de las condiciones igualmente críticas de otros países del continente) con el *shock* provocado por el impacto entre las dos culturas, la «arcaica y cerrada» del mundo andino y la «moderna y abierta» de la costa y de la capital. Lo que explica la emergencia de brotes agresivos reprimidos durante siglos y la explosión de la violencia extremista. Como se ha subrayado (13): «En un mundo sacudido por una atroz intrusión —la revolución permanente capitalista que hace tambalearse a instituciones, creencias y valores y que lleva a la disociación del cuerpo social—» es lógico que pueda responder con virulencia «el mito mesiánico de la guerra purificadora y que este mito vaya acompañado por la revitalización de la esperanza de la Tierra sin Mal prometida por todas las religiones de salvación». En el caso del Perú sigue siendo particularmente válida la refle-

xión de Ortega acerca de la modernización (14): «En las épocas de transición, de interregno, entre las sociedades absortas, tradicionales, y las sociedades modernas, abiertas, cuando el proceso es especialmente traumático, puede emerger una nueva forma de vida, el extremismo, o la época de la no-razón».

Como queda apuntado, el proceso de modernización de la sociedad peruana se ha limitado, durante siglos, a la parte «blanca y *criolla*» de la población, favoreciendo solamente a las minorías privilegiadas de Lima y de la costa. La sociedad andina, semifeudal y precapitalista, ha permanecido al margen, privada de contactos, que no fueran puramente episódicos, con la «dimensión occidental».

Así, pues, durante un largo período el mundo campesino e indígena de la sierra ha estado dominado por mitos y por creencias típicos de un universo arcaico, en el cual (15) «cada penalidad es imputable a una voluntad divina». Al analizar los momentos iniciales de la dominación española, un sociólogo peruano (16) ha tratado de explicar el enigma histórico del encuentro entre el *conquistador* Pizarro y el Inca Atahualpa como la consecuencia coherente de una religiosidad arcaica. Los indios «no fueron vencidos por los españoles, sino por la fatalidad de su destino. Los españoles eran instrumento de un dios que venía a castigarlos por sus culpas». Por esta razón, durante el período de la (17) «dominación total» y después, durante la independencia, los *indios* continuaron sufriendo, sin reaccionar, la violencia sistemática de los poderosos. Todo empezó en Cajamarca, el 15 de noviembre de 1532, cuando millares de indios se dejan matar sin oponer resistencia por unos pocos centenares de españoles». Todavía hoy, analizando el mundo de imágenes de los indígenas de la sierra (y también el de los miserables de los suburbios urbanos) aparece la fantasía arcaica de «un castigo sin culpa, es decir, de la fatalidad, de un destino adverso y no merecido que se impone sin considerar los pecados ni los méritos» (18). De aquí la pasividad, la actitud negativa de los *indios* frente a las destrucciones y a las injusticias de la dominación española y de la república «criolla y aristocrática». De aquí, también, la esperanza, típica de la antigua doctrina de la «regeneración periódica de la historia» (19), de una redención final, fantástica, como retorno a la época del imperio incaico, que se habría transformado con el tiempo, en la imaginación de los indios, en una especie de (20) «ciudad ideal», en una (21) «alternativa al presente».

Es muy probable que esta fatalidad haya marcado la historia de la resignación andina hasta hoy. Y ello a pesar de los conatos revolucionarios que han jalonado esta peripecia en los últimos siglos (22).

Sólo ahora, en el marco de las transformaciones trumáticas que han agitado al Perú en los últimos decenios, aproximándolo al

«mundo moderno» de Lima y de la costa capitalista, la pasividad del mundo andino ha empezado a convertirse en protesta y en rebelión. Sendero irrumpe en escena como respuesta exasperada y extremista a los fracasos de los intentos reformistas con los que el Estado peruano (del velasquismo en adelante) ha tratado de afrontar la cuestión andina y, en un sentido más general, el nudo de la disgregación social y de la extremada miseria en la que vive una gran parte de la población peruana. Pero la de Sendero es una aparición destinada con mucha probabilidad a transformarse en un dato estructural de la confrontación social y política, precisamente porque está en estrecha relación con pulsiones muy profundas que recorren la cultura y la psicología del más hondo Perú. No cabe duda, pues, de que tanto la respuesta represiva, o el reformismo genérico o bien el entrelazamiento entre estas dos fórmulas (que en Perú se realiza históricamente con acuerdos más o menos formales entre civiles y militares) ya no están en condiciones de resolver el nudo de la violencia y de la rebelión.

Las incógnitas del experimento aprista

La designación de un dirigente aprista (por primera vez en la historia del Perú) a la presidencia de la República (28 de julio de 1985) ha abierto una nueva fase en la tumultuosa peripecia peruana de los últimos decenios. Las iniciativas que han delineado desde el principio las acciones del joven y dinámico Alan García parecen, en verdad, con las típicas de un populismo fuertemente reformista y nacionalista (y, por lo tanto, tendencialmente autárquico). Las primeras medidas económicas adoptadas por el gobierno del APRA (congelación del cambio con el dólar, de las cuentas y depósitos en moneda extranjera; tajante limitación de las importaciones, control rígido de los precios, drástica reducción de los intereses bancarios, en especial para los campesinos pobres, etc.) se han visto sustancialmente reafirmadas a lo largo de 1986. La estrategia del nuevo gobierno ha sido, desde el principio, la de un radical desmantelamiento de la logia neoliberal y aperturista que había sostenido la línea de acción del gobierno precedente de centro-derecha presidido por Belaúnde Terry. En agosto de 1986, al concluir el primer año de la presidencia de Alan García, el gobierno aprista podía jactarse de haber conseguido tres resultados muy significativos en el plano económico: una fuerte reducción del índice de la inflación oficial (del 184 % al 67 %, aproximadamente); un aumento, contenido pero significativo, del poder de compra de las clases populares (trabajadores dependientes y autónomos); una ligera recuperación de los niveles de ocupación gracias al dinamismo de los sectores industriales ligados a la producción de bienes de consumo «protegidos». En el frente exterior, la opción más significativa fue la de reducir al 10 % de las exportaciones el pago de la deuda exterior (justificada por la gravedad de la crisis y acompaña-

da por declaraciones cargadas de acusaciones al imperialismo y al Fondo Monetario Internacional). En efecto, la política económica de Alan García ha estado marcada desde el principio por la voluntad de alcanzar algunos objetivos de fondo en el plano interior: mejorar las condiciones de vida de las capas populares más pobres (*campesinos* andinos y subproletarios urbanos, en particular); combatir el terrorismo poniendo el acento más en las reformas sociales que en la represión indiscriminada; ensanchar las bases del viejo Estado centralista y limeño mediante la descentralización de la Administración pública. En política exterior, en fin, Alan García ha perseguido abiertamente una ubicación tercermundista y antiamericana (evitando, sin embargo, caer en el prosovietismo) con la aspiración de ganarse un papel de protagonista en América Latina y, más en general, entre los países no-alineados.

Seguramente es pronto para emitir un juicio sereno y global de esta enésima experiencia política peruana. De todos modos, por el momento, un dato aparece claro: la sustancial continuidad entre la estrategia aprista y el modelo reformador que caracterizó al velasquismo. Después del claro fracaso del proyecto modernizante y aperturista de Belaúnde Terry y de las fuerzas económicas dominantes, el país, estancado y desilusionado, ha recuperado la ilusión en la receta populista (de aquí la aplastante victoria electoral de Alan García, así como la sustancial obtenida por la izquierda marxista). Desde luego, Alan García no es Velasco Alvarado y el régimen aprista se atiene al respeto de las libertades y de las garantías parlamentarias, al contrario que el autoritarismo militar de los primeros años setenta. Y, sin embargo, los puntos de semejanza implican una visión común del desarrollo y del futuro del país. Entre éstos, un rechazo sustancial del capitalismo como posibilidad de crecimiento y de justicia en Perú. El antimodernismo, que fue típico de los generales reformistas y de la revolución desde arriba, reaparece en la fraseología aprista y en los discursos del nuevo dirigente. Una vez más, los «males» del Perú se atribuyen a la «extorsión» imperialista y a la alianza entre el capital internacional y los grupos de la derecha económica. En ambos casos, además, anticapitalismo y anti-imperialismo no consiguen enmascarar un profundo anticomunismo, un explícito rechazo del modelo soviético.

Así, pues, ¿adónde va ahora el Perú de Alan García? En la situación actual cabe expresar algunas primeras consideraciones. En el plano económico, los éxitos recordados más arriba aparecen contrarrestados por algunos datos preocupantes: la huelga de inversiones productivas por parte de una clase empresarial que observa la evolución del experimento aprista con una actitud que oscila entre el escepticismo y el miedo (excluidos los industriales beneficiados momentáneamente por las medidas proteccionistas, pero que no obstante se cuidan muy bien de realizar una auténtica reconversión de las instalaciones en sentido competitivo); el creciente ais-

lamiento del país en el plano de los intercambios comerciales (la caída de las exportaciones, tanto las tradicionales como las otras); los peligros de nuevos tirones inflacionistas provocados por la presión siempre creciente de los precios interiores. Además, caída de los créditos internacionales (casi agotados después de la ruptura con el FMI) y, por tanto, enormes problemas para llevar adelante una política de intervención estructural del Estado en la economía. En el terreno de la política interior se registra un evidente fracaso, a pesar del amplio *consenso* popular que sigue sosteniendo la figura del presidente. En este sentido, la originaria voluntad pacificadora del nuevo gobierno en el frente de la subversión se ha visto redimensionada progresivamente en beneficio de la filosofía represiva de los vértices militares. Las fuerzas armadas continúan representando una especie de «contrapoder» frente al poder civil, y si por ahora no parecen deseosas de volver a tomar en primera persona el control del país, esto se debe a que un *golpe* no se vislumbra como favorito ni por la situación económica ni, menos todavía, por la situación internacional (los Estados Unidos se muestran en esta fase decididamente contrarios a la hipótesis militar en América Latina). La matanza de junio de 1986 (cerca de trescientos senderistas, o presuntos senderistas, fueron asesinados por los militares en las cárceles de Lima, mientras estaban preparándose los trabajos de la Internacional Socialista) se produjo en el preciso momento en que Alan García busca una clara consolidación de su imagen internacional, y representó sin duda un *non return point* en la estrategia antiterrorista de la actual fórmula populista. Desde aquel momento, el poder de «vigilancia» y de «control» de las fuerzas armadas en la política interna se ha consolidado decididamente y la actitud de Alan García con relación a éstas se ha vuelto más cauta y moderada.

Con dos consecuencias cuya dinámica ya está suscitando inquietantes interrogaciones: un deterioro de las relaciones de buena vecindad entre Alan García y la izquierda marxista (la coalición Izquierda Unida está dividida más que nunca entre moderados y radicales; entre sostenedores de la necesidad del diálogo con el gobierno y los defensores de una oposición dura en el Parlamento y en el país) y una creciente militarización interna del país.

La sociedad peruana, por otra parte, aparece más lacerada que nunca por la violencia y por el terrorismo. Pese a la ampliación del estado de emergencia de las zonas tradicionales de Sendero Luminoso a Lima (decidida a principios de 1986), el fenómeno senderista se mantiene como uno de los factores dominantes de la vida política. Tampoco se vislumbra cómo el gobierno actual pueda modificar una dirección de marcha en cuyo origen se hallan los nudos de fondo no resueltos de la sociedad peruana. Una vez más, como ya sucediera con el velasquismo, la fórmula reformista se revela impotente ante los nudos estructurales de la crisis económica y so-

cial. Así, el Perú sigue oscilando entre dos polos: la hipótesis fallida de un desarrollo confiado a los ciclos del mercado internacional y a las «exportaciones fáciles»; la ilusión de una mayor igualdad mediante la fórmula, muy desgastada, del proteccionismo dirigido desde el Estado. Tampoco el aperturismo a ultranza del molde neoliberal (confiado a una burguesía nacional que permanece culturalmente anclada en la antigua lógica colonial de la economía de rapiña), ni la autarquía típica de todos los intentos populistas que han venido alternándose en América Latina (administrados por un Estado emprendedor ineficaz y burocrático) logran superar la vieja lógica de un crecimiento interno confiado en definitiva a algunas exportaciones (petróleo, cobre, café, algodón, etc., en el caso peruano) cuyo peso específico tiende de manera inexorable a reducirse (las exportaciones peruanas quedan por debajo de los 2.000 millones de dólares al año) e impidiendo por lo tanto una acumulación de recursos adecuados a las inversiones sociales y productivas que serían necesarias para un crecimiento sostenido y una ampliación del Estado social. Así, pues, la eliminación de la vieja oligarquía no ha entrañado una verdadera modernización de la economía nacional, sino que, por el contrario, ha facilitado el crecimiento de una burguesía de Estado subalterna a los grupos de poder político y carente de una cultura empresarial moderna y eficiente. Del mismo modo, el voluntarismo redistributivo de las diversas variantes del reformismo popular (de izquierda y de derecha, poco importa) no consigue modificar las profundas distorsiones sociales que continúan dominando el escenario político interno.

A este respecto, hay quien sostiene que el caso peruano, en definitiva, es muy similar al de otras realidades latinoamericanas. Esto seguramente es verdad, pero la peculiaridad de este país andino reside en la particular estratificación social y racial que recordábamos más arriba. Ello explica por qué la variable subversiva permanece como el dato dominante de la situación política. Y, por consiguiente, tienen razón los que afirman, desde la izquierda y desde la derecha, que la última «playa» de la democracia peruana podría estar representada precisamente por el experimento aprista. Pero también llevan razón quienes, sin ocultar un profundo pesimismo, afirman que cualquiera que sea la capacidad de Alan García el fenómeno del extremismo está destinado muy probablemente a crecer con la quiebra progresiva e inevitable del viejo hierro de la pasividad y de la resignación andinas.

Por lo tanto, el Perú se presenta como uno de los países del Tercer Mundo en los que la «modernidad occidental» no logra vencer el choque *epocal* contra las fuerzas «arcaicas y primitivas» de la sociedad.

La incapacidad para efectuar una ampliación y una reconversión competitiva del débil aparato productivo nacional torna cada

vez más difícil la tentativa de satisfacer las expectativas crecientes de las capas populares.

Aumentan, de este modo, las posibilidades de una reacción violenta de vastas capas sociales. Se trata, sin embargo, de un proceso bastante lento por ahora, además de contradictorio. La reacción destructiva, la disponibilidad para la respuesta ideológicamente extremista, se mantienen por el momento como patrimonio de significativas pero siempre reducidas minorías. La actual «vocación» parlamentaria de Izquierda Unida (más del 20 % del electorado la mayoría relativa en algunas ciudades, entre ellas Lima) confirma esta situación. La protesta, aunque a veces se presente con las características típicas de la exasperación, todavía no se ha expresado en términos tales como para suponer una auténtica y real amenaza al sistema. En efecto, ciertos análisis atentos de las actuales luchas populares en Perú demuestran que tanto las manifestaciones de revuelta campesina (luchas por la tierra), como las de los sectores marginados urbanos (luchas por la mejora de las más elementales condiciones de vida: luz, agua, transportes, vivienda, etc.) no superan, excepto casos episódicos, los límites de una acción reivindicativa que acaba en sí misma. En los Andes, por ejemplo, los *campesinos* reivindican con creciente intensidad la tierra ocupada actualmente por las cooperativas y por las SAIS (Sociedades agrícolas de interés social), o bien el desmantelamiento de las estructuras impuestas por el velasquismo como alternativa a los tradicionales latifundios. Con una metodología típica de los grupos de matriz marxista-maoísta, Sendero trata por todos los medios de participar en estas luchas con el objetivo de radicalizarlas hasta llegar al choque armado con las fuerzas del orden (en contraposición al «moderantismo» de los grupos y de los sindicatos de Izquierda Unida). Recientes acontecimientos en algunas regiones de los Andes indican que Sendero logra con frecuencia —demostrando una capacidad de adecuación táctica que desmiente fáciles acusaciones de «delirio político»— explotar en su beneficio estas contradicciones. Y, sin embargo, la hipótesis estratégica de la revolución armada sigue siendo por el momento un objetivo absolutamente irreal. La utopía revolucionaria, la hipótesis de una transformación social radical (el comunismo agrario-militar de Sendero Luminoso), no dejan de ser el objeto de una minoría resuelta que, empero, todavía no se ha fundido con la mayoría de la población. Este es el motivo por el cual el proyecto estratégico de Sendero puede ser fácilmente controlado (aunque no liquidado) por la respuesta militar. No obstante, la polarización social se agudiza y el espacio democrático tiende a restringirse inexorablemente. En estas condiciones, el tiempo trabaja a favor de Sendero y la hipótesis autoritaria (que, después de todo, es el objetivo intermedio que trata de realizar el extremismo de izquierdas).

No está escrito, por supuesto, que este proceso esté destinado fa-

talmente a ser hegemonizado por Sendero. La acción de este grupo, en verdad, parece anticipar un fenómeno más amplio y, seguramente, más complejo de radicalización social y política, cuyos tiempos y cadencias todavía son difícilmente previsibles. Mucho dependerá, sin duda, de la «capacidad» del proyecto aprista y de la aptitud del sistema democrático para soportar la doble presión de Sendero y de las fuerzas armadas. Si las dificultades actuales de Alan García y de su partido (hoy unido, si bien erosionado en su interior por tensiones contradictorias) se transformasen en un fracaso análogo al que quemó en poco tiempo al velasquismo, entonces las posibilidades de una explosión social se tornarían más realistas que nunca. En parte porque, en este caso, la polarización política (la emergencia irrefrenable de dos protagonistas: el militar y la extrema izquierda) provocaría una dislocación radical de todas las fuerzas en presencia, incluidas las fuerzas «ocultas», en primer lugar, el resentimiento racial, que hasta ahora han estado inhibidas por factores (pasividad, resignación, ignorancia, religiosidad arcaica, etc.) que hemos recordado más arriba.

La derecha, que vive ya «con un pie en Lima y otro pie en Miami», volvería a ligar su supervivencia a una enésima hipótesis autoritaria. La izquierda, hoy desorientada y confusa, se vería arrastrada, a su vez, más allá de su real vocación democrático-parlamentaria, hacia posiciones mucho más radicales que las actuales. Y la unidad del APRA (garantizada hoy por el carisma de su líder) difícilmente podría resistir los reflejos de la polarización social y política sobre las diversas alas del partido, tradicionalmente indeciso entre una ubicación autoritaria y subalterna al poder militar y una tendencia más marcadamente clasista y anticapitalista. Cualquiera que sea el posible desarrollo del confuso y complejo escenario político peruano, no puede infravalorarse de ningún modo la eventualidad de una creciente adhesión (y de una súbita aceleración de ésta) a la hipótesis extremista por una parte de las fuerzas que, en la actualidad, se encuentran divididas, en un plano técnico e ideológico, pero unidas, sin embargo, en el rechazo común de la «modernidad occidental».

Traducción de Juan Antonio Matesanz

(1) Hubert Herring, *Storia dell'America Latina*, Rizzoli, Milán, 1972, pp. 861-862.

(2) Julio Cotler, *Clases, Estado y Nación en el Perú*, Institutos de Estudios Peruanos, Lima, 1978, pp. 385-386.

(3) Abraham F. Lowenthal, *El gobierno militar*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1985, p. 439.

- (4) *Ibidem*, p. 439.
- (5) Abraham F. Lowenthal, *El gobierno militar*, Instituto de Estudios Peruanos, *cit.*, p. 437.
- (6) Luciano Pellicani, «Ortega y Gasset, sociolog. della modernità», *Mondo Operario*, 3, Roma, 1985, pp. 78-87. [«Ortega, sociólogo de la modernidad», *Leviatán* 21, otoño de 1985].
- (7) *Ibidem*, p. 81.
- (8) Desco, *Qué hacer*, 42, Industria Gráfica, Lima, 1986, pp. 42-43.
- (9) José Carlos Mariátegui, *En sus textos*, Biblioteca Peruana, Lima, 1973, p. 28.
- (10) Desco, *Qué hacer*, 42, *cit.*, pp. 45-46.
- (11) *Ibidem*, p. 46.
- (12) *Ibidem*, p. 48.
- (13) Luciano Pellicani, «La legittimazione del potere nella città secolare», *Mondo Operario* 10, Roma, p. 130.
- (14) Luciano Pellicani, «Ortega y Gasset, sociologo della modernità», *Mondo Operario*, 3, Roma, 1985, p. 85 [«Ortega, sociólogo de la modernidad», *Leviatán* 21, otoño de 1985].
- (15) Mircea Eliade, *El mito del eterno retorno*, Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 94.
- (16) Gonzalo Portocarrero, *Castigo sin culpa, culpa sin castigo*, Debates en sociología II, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, pp. 53-99.
- (17) *Ibidem*, p. 53.
- (18) Gonzalo Portocarrero, *Castigo sin culpa, culpa sin castigo*, *cit.*, p. 83.
- (19) Mircea Eliade, *El mito del eterno retorno*, *cit.*, p. 121.
- (20) Alberto Flores Galindo, *Europa y el país de los Incas: La utopía andina*, Instituto de apoyo agrario, Lima, 1986, p. 50.
- (21) *Ibidem*, p. 50.
- (22) A este respecto, es interesante destacar el hecho de que los estudiosos de escatologías arcaicas en general no han tomado en consideración el mundo andino. Esta infravaloración explica también los límites que siempre han caracterizado los diversos análisis de la problemática campesina e indígena en Perú; así como la dificultad para justificar el *humus* histórico en el que se encuadra la resignación andina.



LIBROS

EL TORBELLINO EUROPEO

Miguel PORTA PERALES

Edgar MORIN

Pensar Europa

Gedisa

Barcelona, 1988

La idea de Europa —la idea de una Europa unida, para ser más exactos— siempre ha tenido sus detractores. Así, y por citar algunos ejemplos, ha habido (y todavía hay) quien se opone a un proyecto europeo común argumentado cosas como las siguientes: que lo que hay que unir o federar no es Europa, sino el universo entero; que una Europa unida no sería otra cosa que una Europa de mercaderes y monopolios preocupada únicamente por los excedentes de mantequilla u hortalizas; que una Europa unida acabaría con la soberanía y las especificidades nacionales en beneficio de vaya usted a saber qué o quién; que a fin de cuentas Europa no existe, que es sólo un invento de unos señores que allá por los años cuarenta o cincuenta fundaron organismos como el Consejo Europeo o la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, etc. Edgar Morin, en su juventud, fue uno de los numerosos ciudadanos del Viejo Continente que no creía en la virtualidad de un proyecto europeo común. Y no sólo no creía en la virtualidad de ese proyecto, sino que lo

consideraba francamente inaceptable. ¿Por qué? Sencillamente, porque en los años cuarenta mucha gente asociaba el término «Europa» ya al imperialismo, ya a la barbarie nazi que había assolado el continente durante seis trágicos años. Tan escasa era la fe europea (o europeísta, si se quiere), del joven Morin, que éste llegó a escribir un artículo titulado *Europa ya no existe* en el que se autocalificaba de «antieuropeo».

Pero los años cuarenta y cincuenta pasaron, y el nazismo y el imperialismo europeos desaparecieron (o casi), y Europa se fue convirtiendo en una suerte de rehén y presa de los dos imperialismos hoy reinantes: el norteamericano y el soviético. Y Edgar Morin —experiencia y conocimiento de la realidad obligan— se transformó paulatinamente en un «neoeuropeo» porque, con muy buen criterio, vio que «Europa había pasado a ser un trasto viejo, pobre y querido» que corría el riesgo de desaparecer tras el «ensayo general de agonía» que se percibía. *Pensar Europa* —libro con el que Morin percibía. *Pensar Europa*

—libro con el que Morin ha obtenido el Premio Europeo al Mejor Ensayo 1987, otorgado por la Fundación Charles Veillon— es un auténtico manifiesto en donde el pensador francés lanza a los cuatro vientos su deseo (que es un auténtico grito neoeuropeo): la necesidad de construir una Europa unida.

Una Europa unida, ese es el proyecto por el que apuesta Edgar Morin. Pero hay que matizar, ya que la Europa unida de nuestro autor no es sinónimo de férreo unitarismo. Morin, tras ofrecer un breve e interesante repaso de aquello que ha caracterizado la historia, el pensamiento y la cultura europea, llega a la conclusión de que Europa no es sino un «complejo» que históricamente se define por «reunir, sin confundirlas» sus mayores diversidades y asociar sus contrarios de manera inseparable». Asociación de contrarios que excluye la idea de una «esencia o sustancia europea primera» y confirma que Europa es un «enredo» y un «hervidero» que tiene —afirma el galo— una particularidad ciertamente curiosa: cuando el «hervidero» (es decir, Europa) alcanza el «calor crítico», el desorden y el enredo se asocian con potencias ordenadas y organizadoras para crear un «torbellino histórico» euroorganizador. Y la posibilidad de Europa (de

una Europa unida se entiende) reside precisamente en este «torbellino» que ininterrumpidamente, y un tanto anárquicamente, genera autoorganización (es decir, euroorganización).

¿Cuál puede ser hoy —se pregunta Morin— el torbellino que euroorganice el Viejo Continente? La pregunta no es baladí porque hoy Europa —como muy bien ve Morin— aparece como un «universo de pequeños compartimentos culturales locales, regionales, provinciales, nacionales». El torbellino que hoy puede generar una conciencia europea, viene a decirnos Morin, no es otro que la necesidad vital que Europa tiene de salvar su identidad. Dicho en otros términos, el peligro «americano» y «asiático» (la «amenaza extraeuropea», en palabras de nuestro autor), y la fragilidad (demográfica, económica, energética, militar, etc.) que hoy se palpa en Europa, obligan a que este apéndice de tierra llamado Europa tome conciencia de que es una «comunidad de destino» en peligro de desaparición o de fagocitación. Pero, y por supuesto, la «comunidad de destino» no hay que entenderla en términos metafísicos (como tampoco hay que entenderla al estilo de la «unidad de destino en lo universal» de triste recuerdo entre nosotros), sino que hay que entenderla como el

intento de llegar a una «unidad metanacional, no sólo confederativa sino incluso federativa, que tendría su identidad, su unidad, su voluntad de vivir a pesar y a causa de todas las diversidades étnicas y nacionales que pueda contener». Y esta «*unitas multiplex*», concluye Morin, quizá sea la única manera de «no morir, no sólo desde el punto de vista zoológico, sino tampoco política, cultural, intelectualmente».

Lo más apreciable del proyecto que se desliza a lo largo de *Pensar Europa* es su carácter laico. Morin, en efecto, no se anda por las nubes, no busca supuestas esencias «fundantes» ni «filosofa» sobre conceptos etéreos e inefables como «espíritu europeo» o similares. Incluso cuando habla de compartir un destino común, el trabajo de Morin tiene la virtud de bajar del cielo de las grandes abstracciones a la tierra de la realidad concreta. Y a esto le podemos llamar sentido de la realidad y sensibilidad política, un sentido de la realidad y una sensibilidad política que empapa *Pensar Europa*. Morin, en efecto, sabe muy bien dónde vive y qué continente habita: un continente amenazado por el águila americana y el oso soviético, un continente que sólo puede «salvarse» (sobrevivir con dignidad) si entiende (si entienden sus habitantes) la

necesidad de apostar por un proyecto común. Y nosotros, habitantes de un Estado como el español, que no se cuenta entre los más poderosos del continente, encontramos en el libro de Morin un valor añadido: su policentrismo, que se traduce en el escrupuloso respeto de las especificidades de las regiones y naciones que constituyen Europa.

Alguien objetará que el proyecto de Morin peca de

LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS

Víctor FUENTES PROSPER

Benito SANZ DIAZ

*Los socialistas en el País Valenciano:
1939-1978,*

Edicions Alfons El Magnanim,
Valencia, 1988

cierta indefinición, que nuestro autor habla metafóricamente de la necesidad de construir un «sistema cerebral» europeo, pero que uno no sabe con exactitud la manera y el modo de construir esta Europa unida por la que aboga el francés. Esta crítica creo que es injusta, porque al fin y al cabo Edgar Morin sólo pretende «predicar» (en el sentido no peyorativo del término) la absoluta necesidad de alcanzar una conciencia eu-

Era menester que se escribiese algo así. El autor, Benito Sanz, anuncia en la Introducción del libro que «es una primera aportación global a la historia del socialismo en el País Valenciano bajo el franquismo y los inicios de la transición democrática». Y no yerra en su afirmación, ya que su contenido, aportación documental, y gran número de fuentes utilizadas convierten esta obra en una de las primeras publicadas en España.

El libro consta de cuatro partes fundamentales, recogidas cronológicamente desde el final de la guerra civil, pasando por el inicio de la transición política a la democracia, las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, y culmina con el proceso de uni-

ropea capaz de construir a corto, medio o largo plazo una Europa unida. Edgar Morin, en fin, no es profeta ni es adivino. Para acabar este breve comentario señalar que *Pensar Europa* tiene una virtud nada despreciable en un libro político o de ensayo: está muy bien escrito. La palabra, ahora, la tenemos nosotros. ¿Sabremos euroorganizar el torbellino que ya hierve entre nosotros? La cosa parece necesaria. Y urgente.

dad de los socialistas valencianos en la primavera de 1978. Pero en cada una de esas partes se van a tratar una serie de cuestiones importantes:

— La articulación del socialismo valenciano respecto al resto de los socialistas españoles.

— Las diversas vías programáticas y organizativas del socialismo en el País Valenciano.

— La evolución de las distintas organizaciones socialistas que culminará en el proceso de unidad.

La tarea del autor no ha sido fácil. En primer lugar reconstituir orígenes, enlazar con la corriente socialista de la primera posguerra, ha significado un gran

esfuerzo documental y de contactos con aquellas personas protagonistas de esa época, cuyo número decrece inexorablemente a marchas forzadas. En ese período se refleja el devenir del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT) fundamentalmente.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que no se trata de la historia, lineal o discontinua, de un partido y sus principales dirigentes, sino de un proceso que se inicia a partir de un solo partido, el PSOE, con el surgimiento posterior de otras organizaciones socialistas, cada una de ellas con sus propios antecedentes, su evolución interna, las relaciones mutuas entre todas ellas, y la configuración final del Partido Socialista del País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español (PSPV-PSOE) desde 1978.

Ese proceso (y su estudio aún más) no va a ser fácil. Primero, no lo va a ser la reorganización del PSOE en el ámbito del País Valenciano, su dinámica interna entre el exilio y la militancia interior, las dificultades para coordinar entre sí las respectivas organizaciones provinciales, y el propio papel que jugará la UGT en este período.

Segundo, no va a ser fácil el proceso de convergencia

del socialismo nacionalista en cuanto organización, ya desde los sesenta, pero en particular en los primeros años setenta hasta culminar en el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). El debate sobre su organización interna y, quizás más aún, su articulación con respecto al resto del Estado, será un elemento importante en el fenómeno de escisión del PSPV, un sector en la línea de apoyo a la Federación de Partidos Socialistas (FPS), que después pasaría a denominarse Unidad Socialista del País Valenciano (USPV), y otro que apoyaría pactos solamente valencianos, integrándose ambas organizaciones en el PSOE, en 1978.

Tercero, también el Partido Socialista Popular del País Valenciano (PSP del PV), su carácter de Federación, le hará partícipe no sólo de la evolución política valenciana en los años de la transición que es cuando surge y se organiza en el País Valenciano, sino también de los avatares del PSP en su ámbito más general.

En definitiva, que el proclamado deseo de unidad de todos los Partidos Socialistas (PSOE, PSPV, USPV y PSP.PV) llevó a todos ellos a un importante debate interno sobre el papel a jugar y la mejor articulación de los socialistas valencianos antes de las elec-

ciones del 15 de junio de 1977, debate que continuó, más aceleradamente, tras las mismas, y que culminaría en la confluencia de todos ellos en el tronco común del PSOE.PV renovado.

El libro contiene unos anexos documentales muy importantes, e incorpora por parte del autor más opiniones y valoraciones sobre la historia reciente del socialismo valenciano de lo que en una primera lectura se pudiera apreciar, y no sólo en el capítulo 6.º («Algunas cuestiones organizativas del socialismo en el País Valenciano»). Y eso es bueno como elemento propicio para una profundización del análisis y, si se quiere, por qué no, para la polémica. Aporta materiales para todos: para el historiador, el ensayista y para los propios militantes y simpatizantes... para todos aquéllos que quieran conocer más a fondo ese «instrumento» para el cambio de la sociedad.

Está escrito desde el País Valenciano. No sólo el sur; la periferia también existe. Quizás haya que recordar que para disponer de una explicación más cabal de los hechos —y no sólo los valencianos— que hoy ya son historia, el disponer de unas fuentes de información como la que representa este libro sea un material de primera mano imprescindible.

Alguien podría temer, sin que le falte razón histórica, que una vez publicado un libro como éste y conocidas las iniciales gacetillas periodísticas que de él se hayan hecho eco, pase rápidamente al olvido. Espero que esta vez no suceda, al menos por dos razones. La primera, porque el propio autor declara su compromiso de continuar desve-

LA PASION LIBRE DEL INTELECTUAL

Reyes MATE

Walter BENJAMIN,
Diario de Moscú
Taurus,
Madrid, 1988

lando nuestra historia política más reciente: la socialista valenciana, pero por extensión, la historia política más general, ya que el libro que comentamos es la primera parte de una trilogía.

La segunda, porque la publicación de este libro debe constituir un reto para todos aquéllos —y son

Todo diario que se precie es un relato de amor. Benjamin llega a Berlín en diciembre de 1926 para experimentarse en un complejo enamoramiento con la actriz Asia Lacis, pero también para pulsar la Rusia revolucionaria y para aclarar su relación en el Partido Comunista. Bajo el brazo lleva además un artículo sobre Goethe para la *Enciclopedia Literaria* que quiere entregar a los dirigentes soviéticos. Lo que nos ha dejado en un apasionante relato lleno de la pequeña filosofía benjaminiana.

El observador de la realidad rusa no tarda en descubrir que la nueva Rusia ha acabado con la vida privada. Todo está politizado y ello, paradójicamente, está minando el espíritu revolucionario. La revolución se ha estereotipado en consignas con lo que se impide a

muchos potencialmente— que pueden y deben ampliar y matizar muchos aspectos que el autor analiza, en buena medida por haber vivido en primera línea, personalmente, los hechos que Benito Sanz describe y estudia. Quizá también así el autor pueda ofrecer a la luz pública una gran parte del material recopilado y no publicado.

la juventud hacer la experiencia revolucionaria. Valor supremo es la paz social y la modernización del país, con lo que todo discurso político crítico es sospechoso. Hay miedo y mal gusto, como toda la liturgia en torno a Lenin, que en nada desdice al celo de los paganos convertidos al cristianismo, colocando sobre altares paganos la cruz del nuevo Dios. Benjamin da vueltas a la posibilidad de afiliarse al Partido. Ve ventajas materiales pero intuye la asfixia. Al final prefiere la libertad, consciente de que «al margen del Partido tiene muy poco futuro y no menos dificultades».

La ocasión no es mala, sin embargo, para reflexionar sobre cuál sería el papel del intelectual. Su lugar propio es el que les corresponde en lo que llama «la historia de la incultura». El intelectual debería ser la

avanzadilla de la incultura. La cultura, otrora monopolio de clérigos y burgueses, ha transferido su energía revolucionaria a las capas incultas. La Modernidad ha acabado con la autoridad espiritual de aquellos mandarines. El nuevo intelectual tiene que ubicarse donde late la energía crítica, en los «incultos».

La diferencia entre un intelectual mediano y uno grande es el éxito. Para el mediocre el éxito es la medida de su calidad. El escritor grande, sin embargo, influye discreta pero poderosamente en la historia.

Entre los breves encuentros con Asia Lacis, que son siempre episodios de desencuentro, Benjamin deambula por Moscú a la caza de ejemplares de muñecas, juegos de bazar y cuanto apacigüe su desmesurada

LOS TELEDIARIOS, A JUICIO

Jesús GARCIA YRUELA

Pedro ORIVE RIVA,
Los españoles ante los telediaros
A.E.C.A.S.,
Madrid, 1988

pasión de coleccionista, mientras se maravilla del inmenso cielo moscovita, el más generoso de los imaginables.

Su desazón amorosa descansa cuando por fin descubre el secreto de la soledad. No se está solo cuando nadie acompaña a uno sino cuando el ser querido está acompañado. Ahí se reconcilia con su amante, tan sola como él, aunque esa reconciliación es prenda de que nunca se encontrarán definitivamente. El tímido Benjamin, dispuesto a morir de hambre por no preguntar por la comida, extrae de su ser íntimo la explicación de lo que le rodea.

Este «incógnito ilegal entre autores burgueses», como él se describe a sí mismo, no puede renunciar a su libertad. Ahora bien, como «ser comunista en un

Los estudios actuales, acerca de la realidad compleja de la comunicación social, o de la producción informativa y de su repercusión en el desarrollo cultural de las sociedades modernas, comienzan a diferenciar con nitidez los distintos objetos de estudio. También es cada vez más usual entre los investigadores que se ocupan de estos campos que

Estado bajo el dominio del proletariado supone renunciar completamente a la independencia personal», no le queda más remedio que asumir su destino de pensador consecuente, inasimilable por la burguesía, la revolución triunfante, y la propia academia. Eso lo vio bien claro el Comisario del Pueblo de Instrucción, A. Lunacarski, constituido en censor de su artículo sobre Goethe. No es merecido que alguien escriba que «los revolucionarios alemanes no eran ilustradores; los ilustradores alemanes no eran revolucionarios». Eso minaba la convicción de estos marxistas rusos para quienes la revolución era santo y seña de todo lo que en la historia haya habido de emancipación. «Vuelvo a aconsejar que no se imprima el artículo de Benjamin». Le sustituyó un tal B.I. Purisev.

sus reflexiones y trabajos comienzan a someterse a ordenados esquemas de investigación.

Por lo que respecta a un aspecto concreto del mundo de la comunicación social como es la televisión, será necesario aceptar de entrada que se trata de una de las realidades del mundo social que más preocupa en la actualidad, aun-

que bien es cierto que esta preocupación no sólo anida en los estudiosos y científicos. Así, la realidad compleja de la televisión se ha convertido en un punto de observación privilegiada para quienes reflexionan sobre el hecho social de la comunicación de información. Y, ciertamente, un elemento fundamental en el desarrollo comunicativo de la televisión es, sin duda, su producción informativa, que en el caso de TVE coincide, en su mayor parte, con la información distribuida en los telediarios.

El profesor Pedro Orive Riva, Catedrático y Director del departamento de Estructura y Tecnologías de la Información, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, reflexiona, en el libro que comentamos, sobre preguntas y respuestas fundamentales para entender el desarrollo informativo de TVE en el período 1982-1986. El libro ofrece un fondo documental estadístico que sintetiza el caudal de datos recogidos —más de medio millón— y que reflejan la real actitud de los ciudadanos españoles habitantes de las comunidades autónomas de Madrid, Asturias y las dos Castillas, ante la información realizada por los telediarios de TVE en el período mencionado.

Pero hay que decir que la reflexión del profesor Orive huye de modelar un libro de estadística fría. Desde su interés por la realidad total del proceso de comunicación que se establece en cada hecho informativo, las 285 páginas contienen un friso de interrelaciones, que le convierten en un fiable diseño de lo que piensan los españoles sobre los telediarios, y un paseo sosegado y maduro, durante el que se señalan algunos goznes y puntos vitales para entender los problemas teórico-prácticos que siempre plantea la información producida por TVE.

El libro, que no abandona nunca la posición reflexiva sobre el cúmulo de datos ofrecido, logra, desde luego, saber lo que piensan los españoles de cuatro autonomías sobre los telediarios; pero, más aún, averigua también las deficiencias en la relación de comunicación que mantiene TVE con los ciudadanos y de éstos con aquélla; estudia además el desarrollo y fiabilidad de los telediarios regionales, a la vez que observa el grado de exactitud o imparcialidad a que llega habitualmente TVE en la representación informativa de la realidad española; por último, permite conocer, sobre datos contrastados, el real nivel de influencia que puede atribuirse a la información televisiva entre televidentes españoles.

El libro pretende mantener un esfuerzo intelectual continuo por analizar los niveles de comprensión de los mensajes informativos recibidos por los telespectadores y los niveles de credibilidad que estos mensajes merecen para ellos.

Orientado por el camino de la diferenciación por comunidades autónomas, el libro huye de la globalidad uniforme e insiste en un método de integración de ámbitos; así, son tenidos en cuenta, para la evaluación final y el dictamen sobre los niveles de comprensión y credibilidad de los telediarios, elementos como la dificultad mayor o menor en la comprensión del lenguaje empleado, el índice de comprensión de los contenidos informativos, los cambios operados en el sujeto telespectador, las influencias a través de los acontecimientos sociales y políticos, la repercusión de la introducción de innovaciones tecnológicas, el índice de libertad de los profesionales del medio.

El trabajo de reflexión del autor se traduce en un esfuerzo por envolver los objetos de estudio y dotarlos de racionalidad desde distintos puntos de vista, quizá con la intención de respetar su complejidad y huir de la fácil simplificación. En efecto, no son pocos los temas que, surgidos de los puros datos, son to-

mados como caso paradigmático y se constituyen en estudios de casos en profundidad. Puede afirmarse que las plataformas de método y análisis propuestas para las cuestiones abordadas por el libro se concretan como un modelo donde se tienen en cuenta la relación entre significado y significante, entre mensaje y medio de producción informativa, entre mensaje y significante, entre mensaje y significado.

Conviene aludir, por último, para una correcta visión del contenido del libro, a dos ámbitos —el hecho autonómico y la presencia ineludible y creadora de las nuevas tecnologías— que son justamente

tenidas en cuenta en el transcurso de toda la reflexión y que le confieren un indudable sentido de realismo. En efecto, el hecho regional incorpora un elemento diferenciador cultural y geográfico, cuya importancia ya no debe pasar inadvertida a los estudiosos de la comunicación social. De hecho, no es posible observar como idénticos los distintos elementos que conforman a cada actor concreto del proceso de comunicación, cuando se habla de relaciones de comunicación informativa; tanto en el terreno político, como en el cultural, social y económico existen elementos autonómicos diferenciadores, que pueden permitir distintas observaciones sobre una

misma producción informativa.

Por lo que respecta a la introducción de las nuevas tecnologías, el libro tiene en cuenta la realidad actual y futura de la pluritelevisión, de la multiinformación y del hecho de los lenguajes compatibles en el interior de una sociedad interactiva.

El libro del profesor Orive es consciente de que los hechos que analiza ocurren en una sociedad donde la información no es sólo una necesidad social de primer orden, sino donde ya existen los signos iniciales de que la nueva moneda —en sentido no sólo figurado— será la información.



Leviatán

Revista de hechos e ideas

NUMERO 28 (Verano 1987)

Felipe González: *Por una nueva izquierda europea.* **José Ramón Montero:** *Diez años de elecciones en España.* **Fernando Morán:** *Las elecciones al Parlamento Europeo.* **Robin Munro:** *China: ¿contradicciones constructivas?* **J. García Yruela:** *Los canales autonómicos de televisión.* **Ludolfo Paramio:** *La izquierda ante el fin de siglo.* **Fernando Claudín:** *Los intelectuales y la historia.* **Ferenc Feher:** *El paradigma de la redención.* **Vicent Garcés:** *La crisis de la izquierda.* **Reyes Mate:** *El destino político del catolicismo liberal.* **Miguel Porta:** *Los movimientos sociales.*

NUMERO 29/30 (Otoño/Invierno 1987)

Felipe González: *La Europa que queremos.* **José Félix Tezanos:** *El sindicalismo ante la sociedad industrial avanzada.* **José M.ª Zufiaur:** *El sindicalismo en el siglo XXI.* **Alvaro Espina:** *El mercado de trabajo en los años 90.* **Inés Alberdi, Isabel Alberdi:** *La participación política de las mujeres.* **Ludolfo Paramio:** *Tras el diluvio: un ensayo de posmarxismo.* **Reyes Mate:** *Democracia, moral y poder en el debate socialista.* **Peter Glotz:** *Gramsci y la izquierda europea.* **Adam Schaff:** *La crisis de la civilización industrial.* **Claus Offe:** *Razón y política: el poder de las instituciones.*

NUMERO 31 (Primavera 1981)

Ramón Vargas-Machuca: *De la mala conciencia a la conciencia posible: el 31 Congreso del PSOE.* **Julio Rodríguez:** *La ponencia económica del 31 Congreso del PSOE.* **Antoni Castells:** *El socialismo español, en la senda del federalismo.* **M. Dolores Renau:** *Socialismo y feminismo: una relación abierta.* **Pascual Maragall:** *El futuro de Cataluña y los caminos de la izquierda.* **Stuart Holland:** *Cooperación frente a empobrecimiento.* **Torcuato S. di Tella:** *Hacia una estrategia de la socialdemocracia en Argentina.* **Andrés de Blas:** *La izquierda española y el nacionalismo.* **José Ramón Recaldo:** *Fidelidad nacional y fidelidad estatal.* **Luciano Pellicani:** *El espectro del nacionalismo.* Entrevista con **Hans-Jochen Vogel.**

Suscripción anual: 1.400 ptas. Forma de pago: Talón bancario o giro postal.

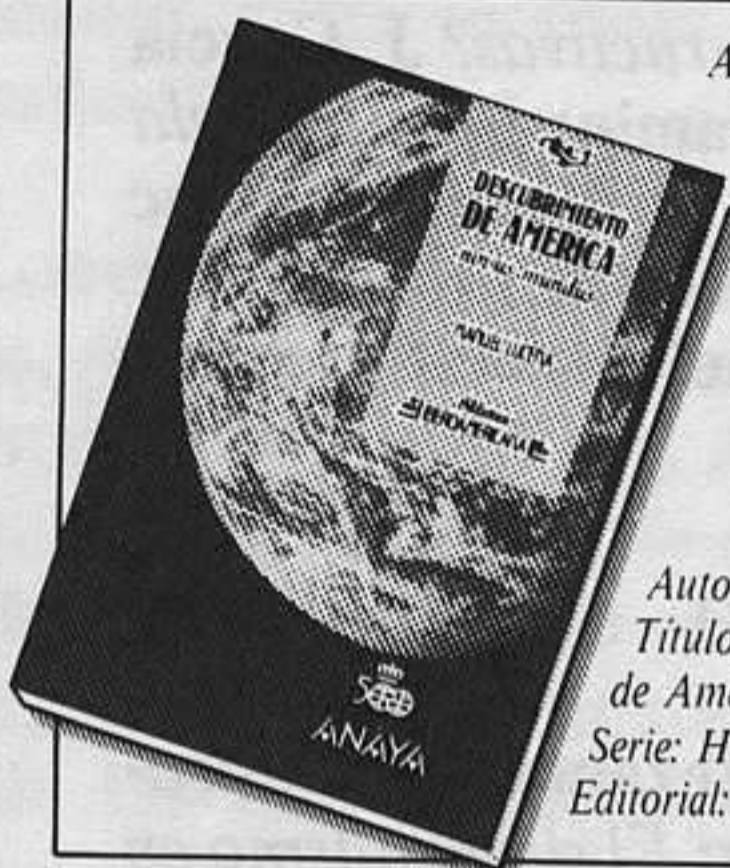
Redacción y Administración: C/ Monte Esquinza, 30. 28010 Madrid.

BIBLIOTECA QUINTO CENTENARIO

En nuestro programa de colaboraciones con el sector editorial, queremos servirnos del libro como un elemento que invite a la experiencia y a la reflexión compartida, un instrumento que fomente solidaridad e ilusión de futuro.

Desde distintos planteamientos y formatos la Biblioteca Quinto Centenario quiere fomentar un análisis rico y plural sobre la realidad americana.

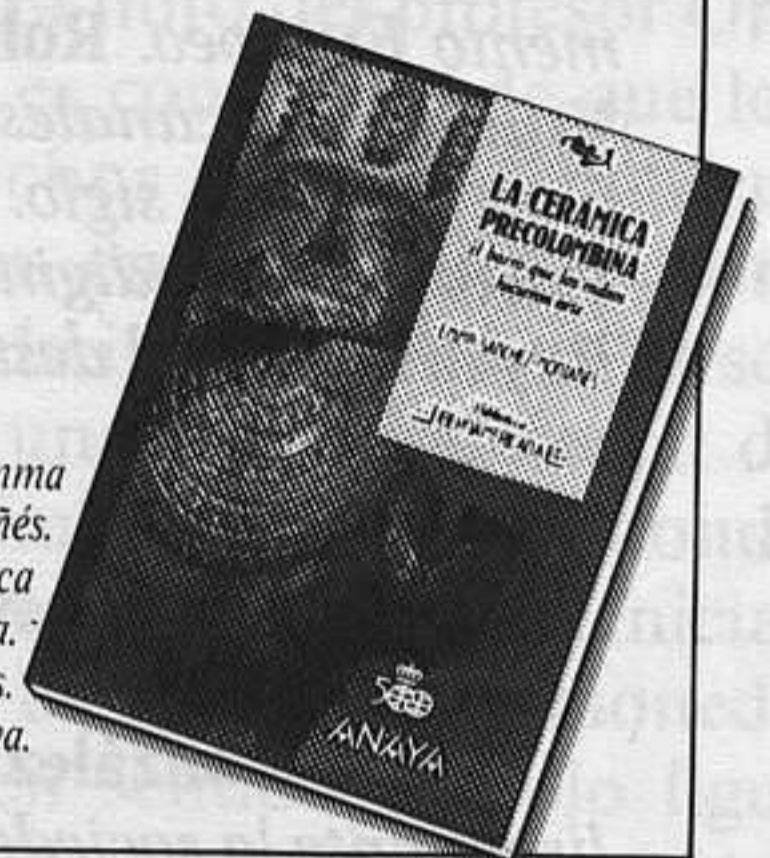
Colección Biblioteca Iberoamericana



Autor: Manuel Lucena.
Título: Descubrimiento de América.
Serie: Historia.
Editorial: Anaya.

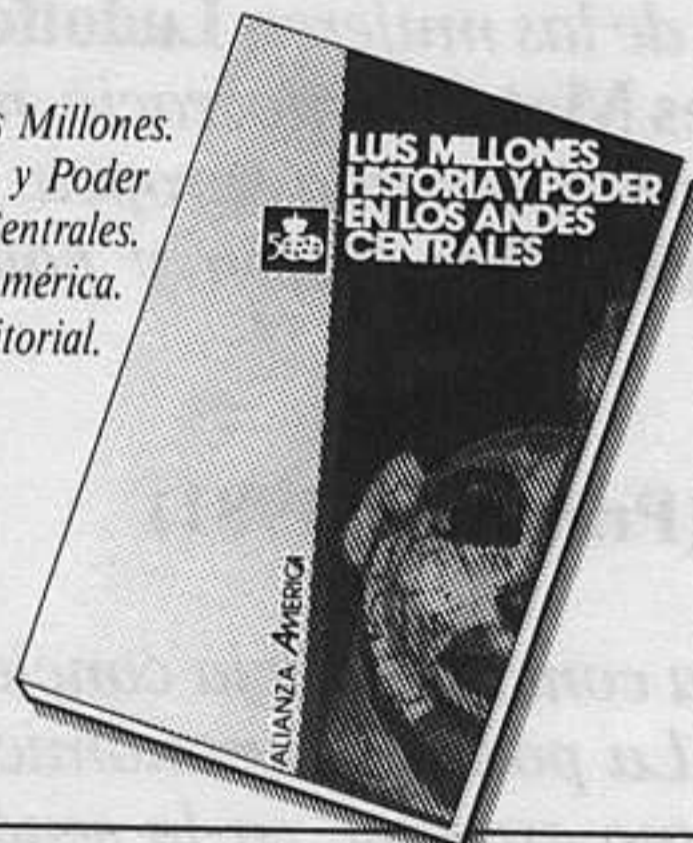


Autor: Guillermo Céspedes.
Título: La Independencia de Iberoamérica.
Serie: Historia.
Editorial: Anaya.



Autor: Emma Sánchez Montañés.
Título: La Cerámica Precolombina.
Serie: Civilizaciones.
Editorial: Anaya.

Autor: Luis Millones.
Título: Historia y Poder en los Andes Centrales.
Colección: Alianza América.
Editorial: Alianza Editorial.



Autor: Alonso de Sandoval.
Título: Un Tratado sobre la Esclavitud.
Edición: Enriqueta Vila Vilar.
Colección: Alianza Universidad.
Editorial: Alianza Editorial.

Autor: Damián Bayón
Título: 3.º siglos XIX y XX
Colección: Historia del Arte Hispanoamericano
Editorial: Alhambra



Biblioteca Quinto Centenario,
un diálogo abierto con nuestro futuro.



1492-1992
QUINTO CENTENARIO

BULEVAR, S.A.



Leviatán

Revista de hechos e ideas

C/. Monte Esquinza, 30
28010-MADRID

TARIFA 4 NUMEROS:

España	1.400 ptas.
*Europa	2.100 ptas.
*América	3.100 ptas. (\$20.00)

* Por correo aéreo.

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ D. P. _____

Provincia _____

Suscripción a LEVIATAN números

FORMA DE PAGO: Adjunto talón.

Giro postal n.º

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ D. P. _____

Provincia _____

Suscripción a LEVIATAN números

Adjunto talón.

FORMA DE PAGO:

Giro postal n.º



Leviatán

Revista de hechos e ideas

C/. Monte Esquinza, 30
28010-MADRID

TARIFA 4 NUMEROS:

España	1.400 ptas.
*Europa	2.100 ptas.
*América	3.100 ptas. (\$20.00)

* Por correo aéreo.

E D I T O R I A L

LABIO IGLESIAS



Siglo veintiuno
de España
Editores, sa

GERALD A.
COHEN

LA TEORIA DE
LA HISTORIA
DE KARL MARX
UNA DEFENSA

EDITORIAL
LABIO IGLESIAS



LA TEORIA DE LA HISTORIA DE KARL MARX
Gerald A. Cohen

405 págs.

2.000 ptas. (IVA)

La teoría de la historia de Karl Marx es un libro fundamental en la historia del pensamiento marxista y uno de los pocos textos absolutamente imprescindibles para el estudio de la obra de Marx. En primer lugar, supone una brusca ruptura con la tendencia dominante en lo que Perry Anderson llama el «marxismo occidental». Lejos de reinterpretar a Marx en términos próximos al idealismo, lejos de hacer hincapié en cuestiones de metodología o filosofía, Cohen trata de subrayar el aspecto esencialmente materialista de la obra de Marx, su creencia en el papel determinante del desarrollo de las fuerzas productivas y, subsiguientemente, del carácter de las relaciones de producción. Junto a esta vigorosa reafirmación del materialismo, su análisis se aleja de lo tradicional por desarrollarse en términos de extrema claridad, más próximos a la tradición de la filosofía analítica que a las habituales oscuridades de las posibles variantes de la dialéctica hegeliana. Y, por último, la justificación del razonamiento de Marx en términos de explicación funcional ha dado origen a una compleja y saludable polémica en las ciencias sociales y en el marxismo contemporáneo.

Pedidos:

Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
Tels. 410 46 96 y 410 47 98

Forma de pago: talón bancario
o giro postal



Precio de este ejemplar: 400 Ptas.